

ÍCONOS | 81

Revista de Ciencias Sociales • FLACSO Ecuador • cuatrimestral • ISSN: 1390-1249 • enero-abril 2025



Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina

Youth transitions to the labor market in Latin America

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

N.º 81, vol. XXIX (1er. cuatrimestre)
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065
www.revistaiconos.ec



FLACSO
ECUADOR

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador

ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
Nro. 81, Vol. XXIX (1er. cuatrimestre)
Quito, Ecuador

ISSN: 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC:
H8.S8 F53

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es una publicación de FLACSO Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y América Latina en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, estos temas. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es parte de las siguientes bases, catálogos e índices:

Academic Search Premier Magazines and Journals EBSCOhost. Estados Unidos
Actualidad Iberoamericana. Centro de Información Tecnológica (CIT). Chile
CABELL'S. Directory of Publishing Opportunities. Estados Unidos
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas. EC3metrics. Universidad de Granada. España
CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales. UNAM. México
DIALNET. Universidad de la Rioja. España
DOAJ. Directory of Open Access Journal. Lund University Libraries. Suecia
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social Science
ESCI. Emerging Source Citation Index. Web of Science. Clarivate Analytics
FLACSO Andes. FLACSO Ecuador
Fuente Académica Plus EBSCOhost. Estados Unidos
HAPI. Hispanic American Periodical Index. UCLA. Estados Unidos
IBSS. International Bibliography of the Social Science. ProQuest. Estados Unidos
Informe Académico Thompson Gale. Estados Unidos
LatAm-Studies. International Information Services. Estados Unidos
LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal. México
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Universitat de Barcelona. España
Political Science Complete. EBSCOhost. Estados Unidos
REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. UAEM. México
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. CSIC. España
SciELO. Scientific Electronic Library Online. Ecuador
SCOPUS. Elsevier. Países Bajos
Sociological Abstracts. CSA-ProQuest. Estados Unidos
Social Science Journals. Sociology Collection. ProQuest. Estados Unidos
Ulrich's Periodical Directory. CSA-ProQuest. Estados Unidos
WPSA. Worldwide Political Science Abstracts. ProQuest. Estados Unidos

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras; no reflejan necesariamente el pensamiento de *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*.



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

CONSEJO DE EDITORES (EDITORIAL BOARD)

Editora en jefe (Editors-in-chief)

- Jenny Pontón. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador

Editores asociados (Associate editors)

- Anthony Bebbington. Clark University. Estados Unidos
- Víctor Bretón. Universitat de Lleida. España
- Flavia Freidenberg. Universidad Nacional Autónoma de México. México
- Cristobal Kay. International Institute of Social Studies. Países Bajos
- María Fernanda López. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
- Liisa North. York University. Canadá
- Sarah Radcliffe. University of Cambridge. Reino Unido

Editores del dossier 81 (Editors of dossier)

- Ana Miranda. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina
- Rafael Merino. Universidad Autónoma de Barcelona. España

COMITÉ CIENTÍFICO (SCIENTIFIC ADVISORY BOARD)

- Javier Auyero. University of Texas, Austin. Estados Unidos
- Adrián Bonilla. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
- Carolina Curvale. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
- Carmen Diana Deere. University of Florida. Estados Unidos
- Roberto Follari. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina
- Andrés Guerrero. University of Saint Andrews. Reino Unido
- Hernán Ibarra. Centro Andino de Acción Popular. Ecuador
- Catalina León. Universidad de Cuenca. Ecuador
- Magdalena León. Universidad Nacional. Colombia
- Joan Martínez Alier. Universitat Autònoma de Barcelona. España
- Carlos de Mattos. Pontificia Universidad Católica. Chile
- Cecilia Méndez. University of California, Santa Bárbara. Estados Unidos
- Lorraine Nencel. Centro de Estudio y Documentación Latinoamericana. Holanda
- Pablo Pellegrini. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina
- Juan Ponce. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
- Joan Pujadas. Universitat Rovira i Virgili. España
- Luca Queirolo. Università degli Studi di Genova. Italia
- Francisco Rojas. University for Peace. Costa Rica
- Silvia Vega. Universidad Central del Ecuador
- Rob Vos. International Institute of Social Studies. Holanda

GESTIÓN TÉCNICA (TECHNICAL MANAGEMENT)

Asistente editorial: María Dolores Vaca

Corrector de estilo: Manuel Acosta

Traducción al inglés: Angus Lyall

Imagen de portada: Antonio Mena

Diseño y diagramación: Antonio Mena / Shiti Rivadeneira

Impresión:

Información o solicitud de canje:

revistaiconos@flacso.edu.ec

©FLACSO Ecuador

Casilla: 17-11-06362

Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro

Quito, Ecuador

Teléfono: +593 2 294 6800 Fax: +593 2 294 6803

CDD 300.5, CDU 3, LC: H8 .S8 F53

Íconos: Revista de Ciencias Sociales. –Quito: FLACSO Ecuador, 1997–

v. : il. ; 28 cm.

enero-abril 1997-

Cuatrimstral: enero, mayo, septiembre

ISSN: 1390-1249

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)

Contenido/Content

Dossier de investigación/Research dossier

Presentación del dossier

Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina 7-12

Introduction to dossier

Youth transitions into the labor market in Latin America

Ana Miranda y Rafael Merino

01. Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en
Argentina, Brasil, Colombia y México 13-32

*Labor precarity and youth: Labor markets in Argentina,
Brazil, Colombia, and Mexico*

Nelson Florez-Vaquiroy y Lia Alejandra Hincapié-Aldana

02. Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas
en sectores populares de Argentina 33-50

*Migrations, gender and youth work: Overlapping transitions
in popular sectors of Argentina*

Débora Gerbaudo-Suárez

03. Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile:
experiencias en la educación técnica secundaria 51-70

*Labor identity and professional internships in Chile:
Experiences in secondary technical education*

Leandro Sepúlveda-Valenzuela y María José Valdebenito-Infante

04. Tecnicatura Universitaria en Agroecología:
una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina 71-91

*Technical degree in agroecology: A job alternative for young
people from migrant families in Argentina*

Susana Shoaie-Baker

05. Cambio en la política pública para jóvenes y acceso al empleo en Colombia	93-111
<i>Change in public policy for young people and access to employment in Colombia</i>	
Jorge Enrique Martínez-Carvajal	

Temas/Topics

06. Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional	115-133
<i>Health professionals in favor of abortion in Argentina: Between rights and institutional clandestinity</i>	
Romina Accossatto y Lucas Marucci	

07. Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador	135-155
<i>The other victims of femicide: Comprehensive reparation and institutional violence in Ecuador</i>	
Carla M. Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella	

08. Movimiento antiminerero y oportunidades políticas en el sur del Ecuador	157-178
<i>Anti-mining movement and political opportunities in the south of Ecuador</i>	
Nelson Cajamarca	

09. Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile	179-197
<i>Masculinities in transformation: Meanings of the narratives of university students in southern Chile</i>	
Loreto Arias-Lagos y Juan Carlos Peña-Axt	

10. <i>Outsider-insider</i> : una experiencia identitaria de los feminismos latinoamericanos	199-216
<i>Outsider-insider: An identity experience of Latin American feminisms</i>	
Sandra Villanueva-Gallardo	

d
dossier

Presentación del dossier Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina


Introduction to dossier

Youth transitions into the labor market in Latin America



Editores del dossier / Editors of dossier

 Dra. Ana Miranda. Profesora investigadora. FLACSO (Argentina).
(amiranda@flacso.org.ar) (<https://orcid.org/0000-0002-3261-4344>)

 Dr. Rafael Merino. Profesor investigador. Universidad Autónoma de Barcelona (España).
(rafael.merino@uab.cat) (<https://orcid.org/0000-0003-1430-9853>)

A partir de la tercera década del siglo XXI, y en un contexto de estancamiento económico, la expansión de la pandemia de la covid-19 generó un recrudecimiento de las tensiones sociales, entre ellas la profundización de la brecha educativa y digital, una gran pérdida de empleos (Ripani 2022) y un considerable incremento de la pobreza. Estas tendencias afectaron significativamente a las personas jóvenes, particularmente a las mujeres y a poblaciones marginalizadas (Llorente 2020; Miranda y Alfredo 2021), generando un conjunto de incertidumbres que marcan el recorrido vital de las experiencias y expectativas de las nuevas generaciones.

El proceso de digitalización, que ya era estructural con el cambio del llamado capitalismo informacional (Castells 1996), se aceleró durante el aislamiento sanitario provocando una gran transformación en ámbitos sociales clave entre los que sobresalen la sociabilidad, la educación y las relaciones laborales. Las nuevas tendencias, afianzadas en un acelerado fenómeno de cambio tecnológico, fueron generando una jerarquización de las estructuras ocupacionales sobre las que aún no existen diagnósticos acabados (Liu, Amin y Stemmler 2023). En esta dirección, Juan Pablo Pérez Sainz (2024) plantea que en la etapa pospandémica el capitalismo digital o régimen de acumulación digital ha redefinido las condiciones de trabajo y empleo en América Latina, profundizando las asimetrías y las brechas existentes.

Los mercados laborales latinoamericanos están experimentando renovadas problemáticas asociadas al incremento de la desigualdad, de la precariedad y de la informalidad laboral. Las personas jóvenes, debido a que generalmente se encuentran recién ingresando al mundo del trabajo, sufren con mayor profundidad el creciente deterioro de la calidad de las ocupaciones y de los salarios, con amplias implicaciones en sus trayectorias laborales y en su autonomía económica. Las poblaciones con menores recursos de conectividad y saberes digitales afrontan, además, crecientes dificultades en

el acceso a un empleo decente, integrando lo que Pérez Sainz (2024) ha denominado “infraclase digital”. Asimismo, las mujeres, sobre todo las que experimentan trayectorias educativas atípicas o acotadas, están en mayor desventaja por la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados y por las menores probabilidades de acceder a un trabajo remunerado, ya sea en plataformas digitales o en sectores de mayor productividad y salario. Tal cuestión se aborda en el segundo artículo del presente dossier.

En este marco de profundas transformaciones, el estudio de las transiciones juveniles entre la educación y el mundo del trabajo cobra especial relevancia, ya que permite anticipar las tendencias hacia el cambio y la reproducción social (Merino Pareja y Miranda 2022; Roberts 2020; Woodman y Bennett 2015). Además, habilita el análisis de la reproducción intergeneracional de la pobreza y de los fenómenos de movilidad social descendente que están presentes en las familias de estratos medios y medio-altos y entre los más perjudicados de la estructura social.

En este punto, un estudio reciente sobre transiciones juveniles al mercado laboral en 17 países de América Latina demuestra la importancia que adquiere la educación secundaria y la formación profesional en el acceso a oportunidades en el sector formal de la economía. Además, ha propuesto una visión regional de las modalidades predominantes de transición al mercado laboral, distinguiendo la evolución en distintos países (Miranda, Carcar y Merino Pareja 2023).

Ante esta situación de incertidumbre, algunos sectores están optando cada vez más por postergar el acceso al mercado de trabajo, aumentando la inversión educativa o buscando de forma estratégica el tipo de estudios con mayor retorno esperado (Miranda, Carcar y Merino Pareja 2023). Especialmente debido a que se trata de un proceso en el que el capital económico y cultural de las familias es cada vez más importante para sostener las elecciones educativas y para ampliar las expectativas laborales y vitales de las personas jóvenes frente al aumento de la precariedad laboral.

En este marco, existen fuertes preocupaciones sobre el bienestar de las juventudes que se expresan en medios públicos y también en los académicos, ya que muchas veces este grupo ha realizado una fuerte inversión educativa y ven sus expectativas frustradas. Los y las jóvenes sienten inseguridad acerca de sus perspectivas, lo que refleja ansiedades más amplias sobre la estabilidad social, la seguridad económica y la dirección política, alineando sus puntos de vista con la retórica de los movimientos políticos de derecha. Muchos estudios sugieren una creciente resonancia entre las frustraciones de los y las jóvenes y el discurso de la nueva derecha, especialmente en lo que respecta a cuestiones de gobernanza y reforma económica o de justicia de género.

Ante esta situación de mayor polaridad, en investigaciones recientes se han demostrado las crecientes dificultades que enfrentan las juventudes en sus transiciones al mercado laboral por diversos aspectos. Entre estos se encuentran la vigencia de patrones tradicionales de género y sus impactos en la menor participación laboral de las mujeres, los procesos de segregación territorial, las brechas entre poblaciones

rurales y urbanas y la estigmatización de poblaciones racializadas y marginalizadas. Lo anterior alerta sobre los efectos a largo plazo, también llamados cicatriz (Tomlinson y Tholen 2023), en las trayectorias de amplios grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Frente a las problemáticas que enfrentan las juventudes, el objetivo del presente dossier es contribuir al conocimiento acerca de las transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina y generar un debate plural sobre sus condiciones de vida desde una mirada interseccional. Con la convocatoria nos propusimos reflexionar sobre la situación de este grupo etario en relación con la educación y el trabajo y analizar las acciones desarrolladas en distintos ámbitos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes. Para ello, se han seleccionado cinco artículos que abordan estas problemáticas en diversos países del continente y que enfatizan en colectivos de jóvenes y en instituciones que juegan un papel clave en la transición de la escuela al trabajo.

El primer artículo, “Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México” de Nelson Florez-Vaquiro y Lia Alejandra Hincapié-Aldana, presenta una investigación realizada con base en encuestas especializadas a hogares en los cuatro países. Representa un estudio de gran interés ya que brinda una mirada comparativa de distintos fenómenos que afectan a las personas jóvenes frente a su inserción en el mercado laboral. Parten de la idea de que la entrada de los y las jóvenes al mercado laboral tiene una fuerte incidencia en las trayectorias ocupacionales a largo plazo. El análisis se basa en información sobre la población de entre 15 y 29 años de los países seleccionados y destaca sus características en cada una de estas naciones. En sus hallazgos sostienen que en Brasil y Colombia existe una mayor proporción de personas jóvenes a cargo de hogares y que México presenta la menor cantidad de jóvenes con niveles escolares más altos. En Argentina y Brasil la precariedad es alta entre las mujeres, sobre todo entre aquellas de menor nivel educativo. En las conclusiones se enfatiza en la importancia de generar políticas diversificadas de producción social, de atención de los cuidados y de formalización para atender la pluralidad existente en las transiciones juveniles al mercado laboral.

A continuación, en el artículo “Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina”, Débora Gerbaudo-Suárez plantea un enfoque interseccional basado en las trayectorias de familias paraguayas residentes en barrios informales del Gran Buenos Aires (Argentina). La autora realizó una investigación participativa a través de entrevistas en profundidad a jóvenes de entre 15 y 25 años provenientes de familias de origen paraguay que residen en barrios populares del municipio San Martín. Observando los roles de género, Gerbaudo-Suárez da cuenta de la superposición que se presenta en las transiciones entre la educación y el mundo del trabajo en las mujeres jóvenes, especialmente en lo que respecta a la asunción temprana de las tareas de cuidado. En el texto se aborda también el rol

que cumple la economía popular, el trabajo cooperativo y la perspectiva feminista en relación con el sentido de pertenencia y con la acción comunitaria con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las juventudes.

En el texto “Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria”, Leandro Sepúlveda-Valenzuela y María José Valdebenito-Infante analizan uno de los dispositivos más extendidos en la formación técnico-profesional por su conexión entre la formación y el trabajo: las estadías en empresas o prácticas profesionales. Estas prácticas tienen algunos puntos débiles entre los que destacan la escasa institucionalización de la intermediación centro de formación-centro de trabajo o la realización de tareas repetitivas y de escasa cualificación para quienes las realizan. A manera de conclusión, se destaca la efectividad en la socialización anticipada, es decir, que más allá de las habilidades técnicas las prácticas sirven para un mayor conocimiento de las relaciones sociales en el mundo del trabajo.

El cuarto artículo, “Tecnatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina”, pertenece a Susana Shoaie-Baker. La autora investiga sobre el rol que tiene la universidad para ofrecer formación técnica terciaria a población migrante de origen boliviano, en un ámbito en el cual la familia se dedica la producción de alimentos, pero con un enfoque más técnico y desde la perspectiva de la producción ecológica y sana. Concluye que esta formación está diseñada para ofrecer oportunidades de trabajo decente y cualificado, aunque aún existen problemas de integración del alumnado inmigrante en el campus universitario.

El dossier cierra con el artículo “Cambio en la política pública para jóvenes y acceso al empleo en Colombia” de Jorge Enrique Martínez-Carvajal. En este texto se hace un repaso de la evolución de la legislación y de las políticas para la juventud en Colombia y del rol de las políticas de ocupación, tradicionalmente ubicadas en el paradigma de la transición. Aunque tales políticas han evolucionado hacia un paradigma de derechos, en el enfoque de la transición siguen dominando las políticas laborales con un mayor énfasis en la formación y el emprendimiento, lo que genera nuevas subjetividades y desigualdades entre la población joven.

En conclusión, los aportes científicos y empíricos que se presentan en el dossier actualizan la mirada crítica sobre las transiciones laborales de las personas jóvenes con las persistentes desigualdades en el acceso al mercado de trabajo, reconfiguradas a partir del relativamente reciente paradigma de la interseccionalidad en el que la tradicional perspectiva de la clase social se complejiza con las de género, migración y territorio. La evidencia generada en las investigaciones que se presentan en los artículos muestra que los retos son considerables en la región.

La transformación del modelo productivo hacia uno más inclusivo, social y ecológicamente sostenible, la adaptación de los sistemas de formación para ofrecer más oportunidades y reducir los sesgos de reproducción social y la reformulación de políticas públicas para el apoyo de las juventudes más vulnerables se vuelven asuntos ur-

gentes. Otros temas importantes son el apoyo a la capacidad o agencia de las personas jóvenes en la toma de decisiones, en la construcción de sus itinerarios formativos, laborales y vitales. En palabras de Sen (Bonvin 2006; Bilfulco et al. 2015), darles “voz”, lo cual afirmaría acciones de justicia social plural en las sociedades de América Latina.

Referencias


- Bilfulco, Lavinia, Valerie Egdell, Ronald McQuaid, Thierry Berthet, Véronique Simon, Raffaele Monteleone, Carlotta Mozzana, Emilie Rosenstein, Maël Dif-Pradalier, Jean-Michel Bonvin, Emma Hollywood, Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Karolina Sztandar-Sztanderska, Marianna Zieleńska, Bettina Haidinger, Ruth Kasper, Jan Düker, Thomas Ley y Gunilla Bergström. 2015. “Capabilities for Voice, Work and Education: Critical Analysis of Programmes for Disadvantaged Young People in Europe”. En *Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe*, editado por Hans-Uwe Otto, 201-357. Nueva York: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-11436-1_11
- Bonvin, Jean-Michel. 2006. “Promoting Capability for Work: The Role of Local Actors”. En *Transforming Unjust Structures the Capability Approach*, editado por Séverine Deneulin, Mathias Nebel y Nicholas Sagovsky, 121-142. Nueva York: Springer.
https://doi.org/10.1007/1-4020-4432-1_7
- Castells, Manuel. 1996. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza Editorial.
- Liu, Yan, Rami Amin y Henry Stemmler. 2023. “Digital Adoption: Accelerating Postpandemic, yet a Widening Divide”. En *Digital Progress and trends report 2023*, editado por World Bank Group, 3-20. Washington D. C.: The World Bank.
- Llorente, Raquel. 2020. “Impacto del covid-19 en el mercado de trabajo: un análisis de los colectivos vulnerables”. Documento de Trabajo, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social / Universidad de Alcalá. <http://hdl.handle.net/10486/691084>
- Merino Pareja, Rafael, y Ana Miranda. 2022. “Youth as Transition: Theoretical and Methodological Contributions to the Youth Study Field in Latin America and Spain”. En *Young People in Complex and Unequal Societies: Doing Youth Studies in Spain and Latin America*, editado por Jorge Benedicto, Martisa Urteaga y Dolores Rocca, 177-203. Boston: Brill.
- Miranda, Ana, Fabiola Carcar y Rafael Merino Pareja. 2023. *Transiciones juveniles en desventaja al mercado laboral en América Latina y España*. Madrid: Fundación Ayuda en Acción.
<https://lc.cx/MwIsWH>
- Miranda, Ana, y Miguel Alfredo. 2021. “El impacto de la pandemia covid-19 en la inserción laboral de las juventudes en Argentina: intersecciones entre clases y géneros”. *Última Década* 29 (57): 125-158. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362021000300125>
- Pérez Sainz, Juan Pablo. 2024. *Digitalización y nuevas desigualdades: evidencias para América Latina*. San José: FLACSO. https://lc.cx/skOIX_
- Ripani, Laura. 2022. “Impacto del covid-19 en el mercado laboral: ¿qué ha pasado desde la crisis económica, y qué sigue?”. *Factor Trabajo*, 1 de mayo. <https://lc.cx/t2hHn2>


- Roberts, Ken. 2020. "Regime Change: Education to Work Transitions in England, 1980s-2020s". *Journal of Applied Youth Studies* 3: 23-42. <https://doi.org/10.1007/s43151-020-00004-6>
- Tomlinson, Michael, y Gerbrand Tholen. 2023. "Scarring effects for young people in challenging economic times: a conceptual synthesis and future policy and research agenda". *Labour and Industry* 33 (3): 308-325. <https://doi.org/10.1080/10301763.2023.2251216>
- Woodman, Dan, y Andy Bennett. 2015. *Youth Cultures, Transitions, and Generations. Bridging the Gap in Youth Research*. Londres: Palgrave Macmillan.

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México

Labor precarity and youth: Labor markets in Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico



 Dr. Nelson Florez-Vaquiro. Profesor investigador. FLACSO (México). (nelsonflorez@flacso.edu.mx) (<https://orcid.org/0000-0001-8784-3497>)

 Dra. Lia Alejandra Hincapié-Aldana. Consultora independiente. (Colombia). (alejahincapie@gmail.com) (<https://orcid.org/0009-0001-7025-073X>)

Recibido: 06/05/2024 • Revisado: 10/07/2024
Aceptado: 23/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

La precariedad laboral es un fenómeno multidimensional que afecta gravemente a la población joven en América Latina. En el presente artículo, basado en la información proporcionada por encuestas aplicadas a hogares en Argentina, Brasil, Colombia y México en 2023, se analizan cuatro de sus dimensiones: inestabilidad, desprotección social, ingresos insuficientes y subocupación. Los resultados del estudio revelan que en México y Argentina las personas jóvenes asalariadas tienen las condiciones más precarias, mientras que Brasil mostró los menores niveles entre los cuatro países; México presenta la mayor prevalencia, seguido de Colombia y Argentina. En todos los países las mujeres jóvenes son las más afectadas y existe una asociación entre la precariedad laboral, las características sociodemográficas y las estructuras de los mercados laborales. Las personas con menos edad dentro de este grupo etario y aquellas con menor nivel de escolaridad son quienes experimentan condiciones más desfavorables. Por sector de actividad, en México se reportan más problemas en el sector primario, mientras que en Argentina, Brasil y Colombia ocurre en los servicios personales. Las mujeres jóvenes, independientemente del nivel de escolaridad y del sector de actividad, registran mayores niveles de precariedad, lo que agrava la desigualdad de género. En las conclusiones se plantean acciones que promuevan la inclusión de las juventudes en empleos formales.

Descriptores: América Latina; desigualdades; género; juventudes; mercado de trabajo; precariedad.

Abstract

Labor precarity is a multidimensional phenomenon that severely affects youth in Latin America. Based on household survey data from Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico from 2023, this article analyzes four dimensions of precarity: instability, lack of social protection, insufficient income, and underemployment. The results revealed that the salaried youth in Mexico and Argentina have the most precarious conditions, whereas Brazil showed the lowest levels of precarity. Precarity is most prevalent in Mexico, followed by Colombia and Argentina. In each of these countries, young women were the most affected, and there was an association between labor precarity, sociodemographic characteristics, and labor market structures. The youngest and those with lower levels of education are those who experience worse conditions. By sector of activity, in Mexico more problems are reported in the primary sector, whereas in Argentina, Brazil, and Colombia they occur in personal services. Young women, regardless of their level of education and sector of activity, report higher levels of precariousness, which aggravates gender inequality. The conclusions propose actions to promote the inclusion of young people in formal employment.

Keywords: Latin America; inequality; gender; youth; labor market; precarity.



1. Introducción

Contrario al predominio del trabajo asalariado formal, estable y protegido, propio de los países industrializados, los mercados laborales en América Latina y el Caribe se han caracterizado por la segmentación, la informalidad, la desigualdad y por las condiciones precarias. El problema principal no es el desempleo, sino la falta de trabajos con condiciones adecuadas que garanticen el bienestar de la población trabajadora y de sus familias y que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía social. Uno de los conceptos que se ha utilizado para dar cuenta de las carencias de los mercados de trabajo es el de precariedad laboral. La literatura especializada ha planteado que obedece a los procesos de reestructuración productiva, desregulación de los mercados laborales y flexibilización de las relaciones laborales en el nuevo modelo económico.

Si bien la precariedad se ha convertido en un rasgo estructural de los mercados de trabajo latinoamericanos, afectando a grandes contingentes de trabajadores de todas las edades, las investigaciones sobre el tema establecen que la población joven constituye uno de los grupos más perjudicados por este fenómeno. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo ([OIT] 2017, 2022) las juventudes enfrentan mayores obstáculos para su inserción laboral. En 2017 70,9 millones de jóvenes estaban desempleados a nivel mundial y el 76,7 % de los y las jóvenes trabajadores tenía empleos informales. A nivel regional, Weller (2006) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ([CEPAL] 2020) señalan que la inserción de los y las jóvenes en los mercados de trabajo latinoamericanos se caracteriza por ser de alta rotación, por su segmentación y por la precariedad. No obstante, existen diferencias entre países que es necesario comprender para promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales de la juventud y por lo tanto su bienestar presente y futuro.

El objetivo de este artículo es visibilizar las principales características sociodemográficas y laborales de las juventudes y los niveles de precariedad que alcanzan en su inserción a los mercados de trabajo, identificando las brechas de género y las diferencias entre cuatro países de América Latina –México, Colombia, Brasil y Argentina– para el año 2023. Este artículo se encuentra estructurado en cinco secciones además de esta introducción. En el epígrafe dos se describe la metodología en sus diferentes etapas. En el apartado tres se delimitan los principales elementos analíticos para el estudio de la precariedad laboral de las juventudes en América Latina. En la cuarta sesión se sintetizan las principales características sociodemográficas y sociolaborales de la población de entre 15 y 29 años en Argentina, Brasil, México y Colombia. En el apartado cinco se presenta el análisis de la precariedad laboral juvenil, poniendo el acento en las desigualdades de género entre los países. Por último, se exponen, a manera de conclusiones, algunas recomendaciones de acciones de política pública relacionadas con los principales hallazgos.

2. Metodología

La investigación en la que se basa este artículo adopta un enfoque cuantitativo basado en información estadística que proviene de encuestas especializadas a hogares en mercados laborales de cuatro países de América Latina: Encuesta Permanente de Hogares (Argentina), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (Brasil), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (México) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (Colombia). Todas las encuestas se llevaron a cabo a nivel nacional con excepción de la de Argentina que se realizó en 31 conglomerados urbanos. Esta diferencia puede imprimir un sesgo a la información sobre la juventud argentina y por lo tanto en la interpretación de los datos se hacen algunas observaciones al momento de compararla con las de los demás países.

Se plantea un estudio de corte transversal, la información analizada corresponde a la recolección de datos de todo el año 2023, con excepción de Argentina pues al momento de redactar el artículo el cuarto trimestre no estaba disponible. Debido a esta situación los datos corresponden a lo recabado entre enero y septiembre de 2023. Esto constituye una segunda limitación en lo que respecta a la comparación entre los cuatro países, por lo que se hace necesario interpretar los hallazgos con cautela.

El análisis de la precariedad laboral en la población joven de los cuatro países se realizó a través de la estadística descriptiva. En un primer momento se agruparon las variables de interés en tres grupos: características sociodemográficas, características de la estructura ocupacional y precariedad laboral, teniendo en cuenta la comparabilidad entre los cuatro países. Cabe notar que, aunque existen diferencias en las formas de hacer las preguntas y en los términos utilizados en los diferentes cuestionarios, la construcción de estas variables se hizo a través de un ejercicio riguroso para garantizar la comparabilidad.

En el caso de la precariedad, eje central del análisis, se implementaron variables dicotómicas para cada dimensión: estabilidad laboral, acceso a la seguridad social por el trabajo, ingresos¹ y subempleo por insuficiencia de horas. Para cada caso, el valor cero representa una situación positiva en términos de condiciones laborales y el valor uno la carencia o privación en esa dimensión (inestabilidad, falta de acceso a seguridad social, ingresos insuficientes y subempleo por insuficiencia de horas). Posteriormente, se creó un índice sumatorio que se agrupó en cuatro niveles: trabajo no precario (el índice es igual a 0), precariedad baja (el índice es igual a 1), precariedad media (el índice es igual a 2) y precariedad alta (el índice es igual a 3 o 4).

Una vez construidas las variables, se llevó a cabo una caracterización sociodemográfica general de la población joven y para cada país se desagregó la información por

1 Para la dimensión de ingresos el valor de referencia fue el salario mínimo legal vigente (SMLV) en cada país y el valor uno representa un ingreso insuficiente (inferior al SMLV). Para el año 2023, el SMLV de Argentina fue de 87 946 pesos argentinos (promedio enero-septiembre), el de Colombia 1 160 000 pesos colombianos, el de Brasil 1412 reales y el de México 6222 pesos mexicanos.

sexo para identificar si existen diferencias entre países y entre hombres y mujeres en lo que se refiere a su composición por grupos de edad, su nivel educativo, su rol de parentesco dentro del hogar y su situación conyugal. En las comparaciones se hace énfasis en las limitaciones de información para el caso argentino.

En un primer momento se analizó la inserción laboral a partir de distintos indicadores: tasas de participación, desempleo y asalarización. Luego, se examinaron algunas características de la estructura ocupacional en las que se inserta la población joven: tamaño del establecimiento, sector productivo en que se desempeñan, horas trabajadas y nivel de segregación ocupacional. El objetivo era identificar las diferencias entre países y las desigualdades de género que operan en los mercados de trabajo. En tercer lugar, se tomaron en cuenta las dimensiones y el nivel de precariedad de hombres y mujeres en los cuatro países, dando un lugar central a la perspectiva de género para identificar las desigualdades y las formas en que son afectados por su inserción en empleos de mala calidad. En una última etapa se utilizó el análisis estadístico bivariado para evaluar si existía asociación entre el perfil sociodemográfico y laboral de las juventudes asalariadas y su nivel de precariedad.

3. Conceptualización de la precariedad laboral

La precariedad se entiende como una condición de inseguridad generalizada que afecta varios aspectos de la vida social y económica. En este sentido amplio, la precariedad no se limita únicamente a las condiciones laborales, sino que se relaciona con dimensiones más amplias de la vida social: acceso a derechos básicos, seguridad social y oportunidades de desarrollo personal y profesional, y se ha asociado a un estado de inestabilidad e incertidumbre que afecta el acceso a derechos, a recursos y a oportunidades básicas. Castel (2005) subraya la idea de la “desafiliación” para referirse a un proceso que desarticula a los individuos de las redes de protección social, estableciendo que la precariedad constituye un problema socioeconómico profundo.

Para Rodgers (1989) la precariedad laboral es una combinación de cuatro elementos: inestabilidad, falta de control de los trabajadores sobre sus condiciones, ausencia de seguridad social y bajas remuneraciones, y señala que no se debe a la presencia de uno solo de estos factores, sino a una combinación entre ellos. En este mismo sentido, varios autores (Gazzotti 1987; Galin 1987; Offe 1997; Beck 2000; Castell 2005, 2010; Antunes 2001; Harvey 2005; Palomino 2008; Bensusán 2009; Fernández 2014) subrayan el vínculo entre las políticas de flexibilización del mercado laboral y la expansión de formas de empleo no protegido, lo cual ha generado un deterioro en la calidad del empleo impulsado por cambios económicos y políticos vinculados al nuevo modelo económico. El concepto de precariedad laboral ha evolucionado desde una perspectiva crítica de las condiciones de trabajo en el

capitalismo contemporáneo. Guy Standing (2011) introduce el concepto de precariado para describir a una clase social emergente caracterizada por la inseguridad laboral, por bajos salarios y por la falta de protección social. Esta perspectiva es clave para entender la manera en que desde los años 80 las reformas neoliberales en América Latina han exacerbado las condiciones de inestabilidad laboral.

Mora (2005) plantea que el estudio de la precarización laboral en la región latinoamericana debe analizarse bajo cuatro elementos: el vínculo entre procesos de precarización, los avances sobre desregulación de los mercados de trabajo y sobre reorganización productiva, el cambio en los modelos de regulación y de ciudadanía social y la pérdida de seguridad en la continuidad del empleo y de la vulnerabilidad social. Además, Mora y De Oliveira (2009) han estudiado el fenómeno de la precariedad laboral de los y las jóvenes en distintos países de América Latina y proponen que este concepto debe observarse a partir de varias dimensiones sociales que trasciendan el ámbito del trabajo, entre las que sobresalen las características individuales, familiares, territoriales y laborales.

La precariedad entre los y las jóvenes se agrava en un contexto de crecientes desigualdades socioeconómicas. En América Latina suelen estar sobrerrepresentados en empleos informales, temporales, con alta rotación, con transiciones en desventajas que no les permiten desarrollar trayectorias ascendentes y relaciones laborales estables. Esto limita sus oportunidades de desarrollo profesional, educativo y personal. Además, las mujeres jóvenes, en particular, enfrentan una doble desventaja al verse obligadas a conciliar el trabajo remunerado con el de cuidados, lo que las sitúa en empleos de menor calidad y en peores condiciones de protección social (De Oliveira 2006; Mora y De Oliveira 2009; Amarante 2011; Ariza y De Oliveira 2013; Hawkins 2014; Espejo y Espíndola 2015; Hincapié 2016; Miranda, Carcar y Merino 2024).

Mora y De Oliveira (2009) encontraron que más del 50 % de los y las jóvenes en Costa Rica y México tenían empleos informales, una cifra que superaba ampliamente el promedio de la población adulta. Esta situación se ha visto agravada por la crisis económica de 2020 derivada de la covid-19, que ha profundizado las desigualdades y que ha incrementado los niveles de desempleo juvenil en muchos países de la región (OIT 2013, 2022). En el marco de la investigación presentada en este artículo, se concibe la precariedad laboral desde la noción de trabajo precario, entendido este como un empleo que carece de las condiciones laborales adecuadas para garantizar el bienestar laboral y social de quienes trabajan y de sus familias, teniendo en cuenta las dimensiones de inestabilidad, desprotección social, insuficiencia de ingresos y subempleo por insuficiencia de horas. En línea con lo anterior, en las siguientes secciones se presentan los resultados del análisis de la precariedad laboral de la población joven de Argentina, Brasil, Colombia y México y se incluye el género como un elemento analítico transversal.

4. Caracterización sociodemográfica y sociolaboral de los y las jóvenes

En México y Colombia alrededor del 24 % de la población se encuentra entre los 15 y 29 años, en contraste con Brasil y Argentina (área urbana) donde solo el 22,5 % de sus habitantes pertenecen a este rango de edad, pues predomina el grupo de 25 a 29 años (tabla 1). Estos resultados se relacionan con la etapa de transición demográfica por la que atraviesa cada país. Los países del Cono Sur han protagonizado una rápida reducción de los niveles de fecundidad y un avanzado proceso de envejecimiento de la población. Es importante resaltar que los resultados presentados están mediados por las crisis políticas, sociales y económicas de las últimas décadas en cada país y por la rigidez estructural, por la segmentación de los mercados laborales y por los efectos de la pandemia de la covid-19, aspectos que no se miden directamente en este artículo, pero que forman parte del contexto de los resultados.

Con respecto al nivel de escolaridad, las juventudes con menor escolaridad residen en México, donde más de la mitad (53,6 %) tiene la secundaria incompleta o menos. En Argentina y Brasil este porcentaje se sitúa alrededor del 41 %, mientras que Colombia es el país que tiene una juventud relativamente más escolarizada, pues seis de cada 10 jóvenes tienen un nivel de secundaria completa o cuentan con algún nivel de estudios superiores. Se esperaría que esto contribuyera a una mejor inserción y a contar con mejores condiciones laborales (tabla 1).

La mayoría de los y las jóvenes siguen viviendo en sus hogares de origen, pues son hijos o hijas del jefe o jefa del hogar. Sin embargo, en Brasil y Colombia se registran los porcentajes más altos de jefes o jefas de hogar para jóvenes (21,2 % y 18,5 % respectivamente) proceso que puede estar vinculado con una mayor emancipación juvenil. En cuanto a las diferencias de género, en Argentina y Brasil hay más mujeres jefas de hogar que hombres jóvenes jefes, mientras que en Colombia y especialmente en México el porcentaje de jefas de hogar es menor y esto se acompaña de una mayor presencia de mujeres jóvenes que se declaran cónyuges. Esto se relaciona con niveles más altos de las uniones, aspecto que puede estar vinculado a la mayor necesidad de atender compromisos económicos familiares.

En los cuatro países analizados la tasa de participación en el mercado laboral de los y las jóvenes (15 a 29 años) es menor (56,5 %) que el promedio de la población adulta (65 %). Vale resaltar los altos niveles de participación juvenil en Brasil (63,6 %) y Colombia (57,4 %) en comparación con México (53,2 %) y Argentina (51,9 %). Las diferencias en la participación laboral por sexo son significativas entre los países y al interior de estos. En todos se observa una mayor tasa de actividad en los hombres en comparación con las mujeres, pero en México las brechas de participación femenina se acercan al 24 %, mientras que en Brasil alcanza el 14 %. Múltiples factores contribuyen a estas brechas: los culturales, la segregación ocupacional, las desigualdades en el ingreso, la intermitencia de las trayectorias y la desigual carga de trabajo doméstico y de cuidados.

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México

Los anteriores niveles en la oferta laboral juvenil afectan directamente los datos de desempleo y de la población económicamente inactiva. Pese a los mayores niveles de escolaridad y de desarrollo de habilidades en los cuatro países, las tasas de búsqueda de empleo juvenil son mayores a los promedios nacionales y a la de los adultos, y tres de ellos presentan niveles por encima de los dos dígitos. Por ejemplo, Brasil registra una combinación de alta participación laboral (64 %), desempleo (14 %) y una brecha del 9 % entre el desempleo juvenil y el observado en los adultos, tendencia que también se evidencia en Argentina.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población joven, 2023

Indicador	Argentina			Brasil			México			Colombia		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Porcentaje de jóvenes	23,5	21,7	22,6	23,3	21,7	22,5	25,1	23,8	24,4	24,5	22,9	23,7
Grupos de edad												
15 a 19 años	35,2	33,5	34,3	31,3	30,9	31,1	37,1	35,7	36,4	34,8	32,2	33,5
20 a 24 años	34,0	34,1	34,1	33,7	33,5	33,6	33,5	33,6	33,6	32,0	34,1	33,0
25 a 29 años	30,8	32,4	31,6	35,0	35,6	35,3	29,4	30,7	30,1	33,2	33,7	33,5
Nivel educativo												
Secundaria incompleta o menos	45,2	37,6	41,5	44,4	37,8	41,1	55,0	52,1	53,6	40,2	31,9	36,1
Secundaria completa	25,1	22,9	24,0	37,8	38,5	38,2	21,7	22,3	22,0	31,9	32,4	32,1
Superior incompleta	25,0	32,4	28,6	9,6	11,7	10,6	11,7	12,4	12,1	21,7	27,0	24,3
Superior completa	4,8	7,1	5,9	8,2	12,0	10,1	11,5	13,1	12,3	6,2	8,7	7,5
Parentesco												
Jefe o jefa de hogar	14,5	14,9	14,7	19,5	22,9	21,2	13,5	5,2	9,3	19,9	17,0	18,5
Cónyuge/ pareja	4,7	11,1	7,9	9,4	18,1	13,7	1,5	16,1	8,9	5,0	20,9	12,9
Hijo o hija/ hijastro o hijastra	68,4	62,4	65,4	56,8	47,0	52,0	69,1	61,1	65,0	59,2	47,4	53,4
Otros familiares	11,6	11,1	11,4	13,2	11,1	12,1	0,0	0,1	0,1	13,9	12,8	13,4
No familiares	0,9	0,6	0,7	1,1	0,9	1,0	16,0	17,5	16,8	1,9	1,9	1,9
Situación conyugal												
Unido	16,6	22,9	19,7				21,2	30,7	26,0	22,9	35,8	29,3
No unido	83,4	77,1	80,3				78,8	69,3	74,0	77,1	64,3	70,7

Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

Analizando las desigualdades de género, se observa una mayor búsqueda de trabajo en las mujeres con tasas de desempleo de 20,9 % en Colombia, 16,6 % en Brasil, 14,3 % en Argentina y 1,8 % en México. En Colombia y Brasil se registran las mayores brechas entre hombres y mujeres en este indicador, superando el 7 % y el 5 % respectivamente (tabla 2).

La mayor parte del trabajo juvenil es asalariado (cercano al 80 %) con leves diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, llama la atención el caso de Colombia pues presenta una baja tasa de asalarización del 62,7 %, aspecto que demuestra una mayor presencia del trabajo por cuenta propia, el cual según la literatura, se caracteriza por sus precarias condiciones laborales. La fuerte presencia del sector terciario en las economías de la región tiene un vínculo significativo con los sectores de inserción de las juventudes. Los sectores servicios y comercio generan más del 70 % de la ocupación en Argentina y Brasil, con una menor presencia en Colombia (65,8 %) y en México (61,3 %), en todos los casos concentrándose en los servicios de distribución y en los personales. Es importante resaltar la mayor presencia de los y las jóvenes en la industria en México y en Argentina y en el sector primario en Colombia y en México, resultado que puede estar asociado con la mayor presencia de población rural y agrícola en estos dos últimos países.

El número de trabajadores en las unidades económicas indirectamente muestra la heterogeneidad productiva, la precariedad y las desigualdades que pueden existir en un mercado laboral, pues un mayor tamaño de establecimiento se asocia a mejores condiciones laborales. En Brasil uno de cada dos jóvenes se encuentra inserto en establecimientos de 11 personas o más, mientras que en Colombia (52 %) y Argentina (49,4 %) predomina la vinculación a micro y pequeñas empresas. Además, existe mayor presencia de mujeres en empresas más grandes, aspecto que guarda asociación con su mayor asalarización y con la participación en las actividades del sector terciario de la economía.

En general los y las jóvenes trabajan jornadas plenas de alrededor de 40 horas a la semana, similar al resto de la población trabajadora. No obstante, existe una diferencia promedio de cuatro horas entre Colombia y Brasil. Además, los hombres jóvenes en Colombia y México tienden a tener jornadas de trabajo más extensas. En contraste, en Argentina y México las mujeres por lo general dedican un menor número de horas a la actividad económica. Las desigualdades de género no solo se reflejan en las bajas tasas participación de las mujeres, sino en la mayor presencia de jornadas parciales en mujeres adultas y jóvenes debido a la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar.

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México

Tabla 2. Características sociolaborales de la población joven, 2023

Indicador	Argentina			Brasil			México			Colombia		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Tasas de participación	57,5	46,3	51,9	70,6	56,5	63,6	65,6	41,2	53,2	65,2	49,4	57,4
Tasa de desempleo	12,3	14,3	13,2	12,0	16,6	14,0	4,6	5,2	4,9	13,5	20,9	16,7
Tasa de asalarización	83,9	83,6	83,8	77,0	81,1	78,8	81,9	79,0	80,8	60,7	65,6	62,7
Tamaño de establecimiento												
Una persona	13,4	15,7	14,3				8,1	14,7	10,7	26,2	24,1	25,4
De dos a cinco personas	36,6	32,9	35,1	44,0	39,1	42,0	37,5	32,1	35,4	28,2	24,0	26,5
De seis a 10 personas	13,2	14,0	13,5	11,3	12,9	11,9	10,2	9,1	9,8	7,5	7,1	7,4
Once o más personas	36,8	37,4	37,0	44,7	48,1	46,0	37,0	38,0	37,4	38,1	44,8	40,8
Sectores productivos												
Primario	1,1	0,5	0,9	11,1	2,9	7,6	14,6	3,9	10,4	21,8	6,8	15,7
Secundario	32,8	10,6	23,1	25,5	11,0	19,4	33,1	20,9	28,3	22,2	12,9	18,4
Terciario	66,1	88,9	76,0	63,4	86,1	73,1	52,3	75,2	61,3	56,0	80,3	65,8
Sectores productivos												
Primario	1,1	0,5	0,9	11,1	2,9	7,6	14,6	3,9	10,4	21,8	6,8	15,7
Secundario industrial	14,8	9,3	12,4	14,8	9,6	12,6	19,7	19,7	19,7	11,1	10,8	11,0
Secundario no industrial	18,0	1,3	10,7	10,8	1,4	6,8	13,4	1,2	8,6	11,1	2,1	7,5
Servicios de distribución	30,9	26,5	29,0	34,3	27,4	31,3	24,2	30,0	26,5	30,5	25,4	28,4
Servicios de producción	10,1	11,2	10,6	9,6	13,6	11,3	7,0	8,1	7,4	9,3	14,3	11,3
Servicios sociales y Gobierno	11,0	21,7	15,7	8,3	21,0	13,7	5,4	13,3	8,5	5,2	14,6	9,0
Servicios personales	14,2	29,5	20,8	11,2	24,1	16,7	15,7	23,8	18,8	11,0	25,9	17,1
Segregación ocupacional												
ID			0,286			0,367			0,310			0,345
IP			0,281			0,358			0,295			0,333
Promedio de horas trabajadas	44,7	36,7	41,2	40,4	37,3	39,1	44,0	38,1	41,7	45,6	41,5	43,9

Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

Analizando el nivel de segregación ocupacional por género² se observan mayores niveles en Colombia, Brasil y México. Es decir, que hombres y mujeres están concentrados en labores distintas, acentuado las desigualdades de género a nivel ocupacional y limitando una mayor presencia de mujeres y hombres en ciertas actividades en términos de acceso y de oportunidades laborales.

5. Jóvenes y precariedad laboral en América Latina

La precariedad laboral en América Latina es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado desde diversas perspectivas teóricas y empíricas. El concepto de precariedad laboral se encuentra íntimamente vinculado a las transformaciones del mercado de trabajo, a los cambios estructurales en la economía global y a las políticas sociales de la región.

Las dimensiones de la precariedad

La precariedad laboral es un fenómeno multidimensional. Teniendo en cuenta la disponibilidad de información de los cuatro países y la comparación entre ellos, en esta investigación se consideraron las dimensiones de inestabilidad, desprotección o falta de acceso a seguridad social por el trabajo, ingresos insuficientes y subocupación por insuficiencia de horas para el caso de los asalariados y solamente las dos últimas para el caso de los trabajadores por cuenta propia.

En primer lugar, un trabajo inestable es aquel que se realiza a través de un contrato temporal, verbal o sin contrato, mientras que un trabajo estable se ejerce mediante un contrato a término indefinido. En segundo lugar, un trabajo desprotegido no garantiza el acceso al sistema de seguridad social de cada país como un derecho vinculado al mismo. Por su parte, el ingreso insuficiente es el que se encuentra por debajo del salario mínimo definido en cada país. Finalmente, la subocupación por insuficiencia de horas es aquella en la que la persona trabajadora se desempeña a tiempo parcial (menos de 35 horas a la semana) por razones ajenas a su voluntad, pues quiere trabajar más y está disponible para hacerlo.

En relación con las dimensiones de la precariedad juvenil (15-29 años), en Argentina y Brasil predomina la estabilidad en la población joven asalariada (67,1 % y 80,7 % respectivamente), mientras que en México y Colombia la inestabilidad es más común (63,6 % y 58,5 %). En Argentina y Brasil las mujeres jóvenes presentan mayor inestabilidad que los hombres, mientras que en México y Colombia la situación que predomina es la contraria.

La población joven asalariada más desprotegida se encuentra en México (62,5 %) y en Argentina (53 %), en contraste Colombia y Brasil parecen tener mayor éxito

2 Los índices más utilizados en las investigaciones sobre segregación ocupacional por sexo son el denominado *index of dissimilarity* (ID) y el índice de Karmel-MacLachlan (IP). Son medidas que evalúan el grado en que hombres y mujeres están distribuidos en diferentes sectores u ocupaciones. Estos índices se calculan mediante la comparación de la proporción de hombres y mujeres en cada categoría ocupacional.

en garantizar a sus jóvenes asalariados el acceso a seguridad social como parte de los beneficios laborales. En el primer caso seis de cada 10 jóvenes están protegidos y en el segundo siete de cada 10. Aunque diversas investigaciones en el contexto latinoamericano han observado una mayor desprotección en las mujeres trabajadoras, las mujeres jóvenes asalariadas parecen rebatir este postulado, pues en Brasil, México y Colombia ellas están más protegidas que sus pares masculinos. En Argentina no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres para esta dimensión.

En cuanto a la insuficiencia de ingresos, la peor situación la presentan Argentina y México, ya que más de la mitad de la población joven asalariada gana menos de un salario mínimo (58,7 % y 57,1 % respectivamente). En Brasil el 53,1 % de la población asalariada entre 15 y 29 años de edad recibe un salario igual o mayor al salario mínimo, mientras que Colombia representa la mejor situación, pues solamente tres de cada 10 jóvenes asalariados reciben ingresos insuficientes (tabla 3). La insuficiencia de ingresos afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes. Esto está asociado a que las mujeres trabajan menos horas para cumplir con las responsabilidades familiares y también a la discriminación salarial que persiste en los mercados laborales latinoamericanos.

La subocupación por insuficiencia horaria es la dimensión que menos afecta a la población joven asalariada. La peor situación la ostenta la juventud argentina donde el 11,5 % trabaja menos de 35 horas a la semana de manera involuntaria. Le siguen Brasil (4,6 %), Colombia (2,7 %) y México (0,9 %). En todos los países la subocupación afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes, con excepción de México donde las diferencias no son estadísticamente significativas. Cabe señalar que la subocupación tiene un doble criterio, el deseo de trabajar más horas y la disponibilidad para hacerlo, por eso puede que algunas mujeres trabajen a tiempo parcial y quisieran laborar más horas pero no tienen disponibilidad debido a sus responsabilidades en el hogar.

Tabla 3. Dimensiones de la precariedad laboral de la población joven asalariada, 2023

Indicador	Argentina			Brasil			México			Colombia		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Estabilidad												
Estable	70,7	62,3	67,1	84,4	75,9	80,7	34,8	39,1	36,4	40,5	43,0	41,5
Inestable	29,3	37,7	32,9	15,6	24,1	19,3	65,2	60,9	63,6	59,5	57,0	58,5
Protección (seguridad social por el trabajo)												
Protegido	45,9	48,4	47,0	69,2	71,0	70,0	35,7	40,6	37,5	57,9	61,1	59,2
Desprotegido	54,1	51,6	53,0	30,8	29,0	30,0	64,3	59,4	62,5	42,1	38,9	40,8
Ingresos												
Ingreso suficiente	45,2	36,8	41,5	56,3	49,0	53,1	46,9	36,5	42,9	70,7	67,3	69,3
Ingreso insuficiente	54,8	63,3	58,5	43,7	51,0	46,9	53,1	63,5	57,1	29,3	32,7	30,7
Subocupación involuntaria por horas												
No subocupación	90,7	85,6	88,5	96,0	94,8	95,5	99,1	99,0	99,1	97,8	96,5	97,3
Subocupación	9,3	14,4	11,5	4,0	5,2	4,6	0,9	1,0	0,9	2,2	3,5	2,7

Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

En lo que corresponde a los y las trabajadoras jóvenes por cuenta propia, presentan una peor situación en términos de ingresos y de subocupación. En los cuatro países predomina la insuficiencia de ingresos y es de nuevo la juventud argentina de los contextos urbanos la más afectada, ya que alrededor de ocho de cada 10 jóvenes perciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo legal. En contraste, la situación menos crítica se registra en Brasil con un poco más de un 50 % (tabla 4). Solamente en Brasil y México las mujeres jóvenes trabajadoras por cuenta propia son más afectadas que los hombres por esta situación de insuficiencia de ingresos. En Argentina y Colombia, los países con peores cifras en este sentido, la situación parece ser crítica independientemente del género de la persona.

En lo que respecta a la subocupación por insuficiencia de horas, en todos los países son dos o más a las observadas en la población asalariada. Sin embargo, se mantiene el orden de afectación. Primero Argentina con 27,4 %, seguido de Brasil con 11,5 %, Colombia con 9,8 % y en el último lugar México con 4 %. Solamente en Brasil y Colombia hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, pues ellas se encuentran más subocupadas.

Tabla 4. Precariedad laboral de la población joven que trabaja por cuenta propia, 2023

Indicador	Argentina			Brasil			México			Colombia		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Ingresos												
Ingreso suficiente	20,2	21,2	20,7	52,5	44,0	49,3	35,4	20,7	28,6	24,5	25,7	24,9
Ingreso insuficiente	79,8	78,8	79,4	47,5	56,0	50,7	64,6	79,3	71,4	75,6	74,3	75,1
Subocupación involuntaria por horas												
No subocupación	73,7	71,3	72,6	90,3	85,6	88,5	96,5	95,4	96,0	92,3	86,6	90,2
Subocupación	26,3	28,7	27,4	9,8	14,4	11,5	3,6	4,6	4,0	7,7	13,4	9,8

Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

El nivel de precariedad laboral de la población joven asalariada

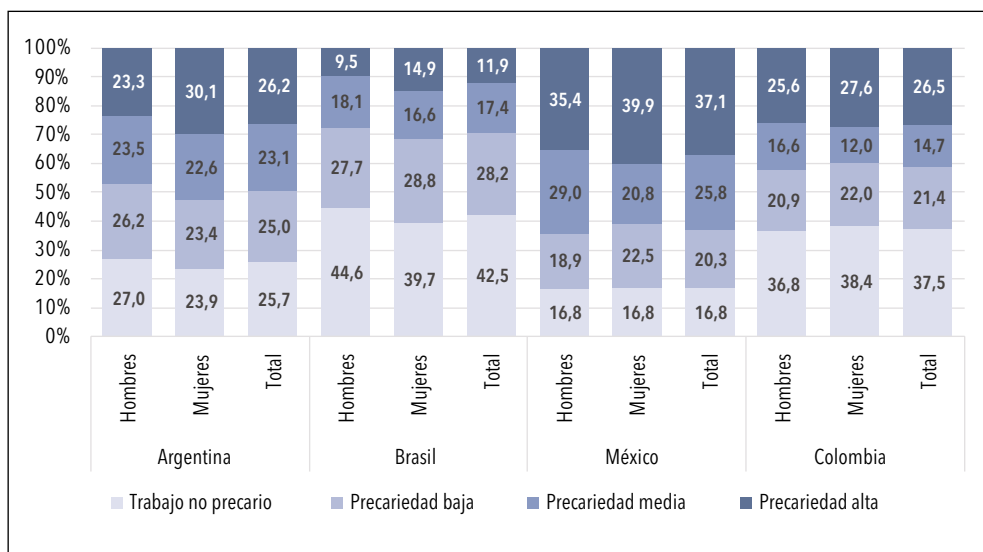
Los resultados hasta aquí expuestos dan cuenta de la situación de las juventudes en los países analizados. Sin embargo, una carencia en alguna de las dimensiones no se traduce automáticamente en precariedad laboral. De acuerdo con Rodgers (1989), esta se debe entender como una combinación de factores que permite captar una multiplicidad de situaciones. Aunque coincidimos con Ariza y De Oliveira (2013) en que la precariedad laboral no es un problema exclusivo del trabajo asalariado, a partir de este momento el análisis se enfoca en este grupo de trabajadores por dos razones: primero, es la forma de trabajo más extendida entre la población joven de los cuatro países seleccionados con porcentajes que varían entre 62,7 % (Colombia) y 83,8 % (Argentina); y segundo, porque es la posición

ocupacional en la que se pueden observar las cuatro dimensiones más comunes en los estudios sobre el tema.

Al analizar el nivel de precariedad a partir de una medida que combina las dimensiones, se observa que los países con juventudes asalariadas más precarias son México y Argentina con porcentajes de 83,2 % y 74,4 % respectivamente. Al concentrarnos en el nivel de precariedad alta que representa una situación crítica en términos de inestabilidad, de desprotección, de insuficiencia de ingresos y de subocupación, México vuelve a encabezar la lista (37,1 %), seguido de Colombia (26,5 %) y de Argentina (26,2 %). La juventud asalariada de Brasil es la menos afectada por la precariedad laboral, ya que no solo presenta el menor porcentaje de precariedad general, sino que el de precariedad alta es bastante menor a los demás países (11,9 %) (figura 1).

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, los resultados son esclarecedores. Solo en Brasil las mujeres sufren más precariedad, si nos enfocamos en la precariedad en general, mientras que en los otros países no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, si ponemos la lupa en la situación más crítica, la precariedad alta afecta en mayor medida a las mujeres en los cuatro países. Esta situación es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina y Colombia estamos hablando de tres de cada 10 mujeres jóvenes asalariadas y en México de cuatro de cada 10. Si estas mujeres no logran acceder a trabajos estables, protegidos y mejor remunerados, ellas y sus familias corren un alto riesgo de caer en la pobreza, de sufrir desigualdad de ingreso y de presentar malestar social.

Figura 1. Nivel de precariedad laboral de la población joven asalariada, 2023



Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

Factores asociados a la precariedad laboral de la población joven asalariada

Diversos estudios en el ámbito latinoamericano (De Oliveira 2006; Mora y De Oliveira 2009; Mora 2011; García 2012; Ariza y De Oliveira 2013; Hawkins 2014; Fernández 2014; Hincapié 2016; Pacheco, Florez e Hincapié 2022) han comprobado, a partir de la estadística descriptiva y de la inferencial, que la precariedad laboral está asociada con características de las personas y de sus puestos de trabajo. Así entonces, más allá de la cuantificación de la precariedad en la población joven de los cuatro países, es importante analizar la asociación que tiene con algunas características individuales: rango de edad y nivel educativo, sector productivo y tamaño de la empresa en que ejercen su trabajo. Cabe aclarar que para este ejercicio se utilizó el porcentaje general de precariedad (baja, media y alta).

La relación inversa entre la precariedad laboral y la edad de la población trabajadora ha sido ampliamente documentada y se puede observar también en el caso de la población joven. En los cuatro países la mayor precariedad la sufren las personas de entre 15 y 19 años y disminuye progresivamente en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años (tabla 5).

Al comparar los países, se observa que la mayor precariedad en todos los grupos etarios la presenta México, mientras que la mejor situación Brasil. Asimismo, en Brasil las mujeres jóvenes sufren más precariedad que los jóvenes en todos los rangos de edad, mientras que en los otros tres países no hay diferencias significativas. Sin embargo, es preciso recordar que en estos países las mujeres jóvenes se concentran más que los hombres en el nivel de precariedad alta.

Otro factor que mantiene una relación inversa con la precariedad laboral es el nivel educativo. Esto debido a que un mayor logro educativo aumenta la probabilidad de acceder a mejores remuneraciones, pero también de insertarse en empleos no manuales de alta calificación que usualmente son más estables y protegidos. Este vínculo se cumple en términos generales en los cuatro países para hombres y mujeres. Sin embargo, es necesario resaltar algunos hallazgos interesantes.

En México, el porcentaje de precariedad de la población joven asalariada con secundaria completa y superior incompleta no tiene diferencias estadísticamente significativas, es decir, solo completar la educación superior representa una mejor situación. En los otros tres países la relación inversa entre precariedad y nivel educativo es mucho más clara. Entre las juventudes con educación superior completa, la mayor precariedad se observa en México con un porcentaje de 74,4 %, muy por encima de Argentina (54,7 %), de Colombia (32,7 %) y de Brasil (31,8%). Lo que demuestra que para la población joven mexicana alcanzar un nivel de educación superior completa no constituye un factor eficaz para protegerles de la precariedad laboral (tabla 5).

En general, las mujeres jóvenes en cada nivel educativo sufren una mayor precariedad relativa comparadas con los hombres. Sin embargo, hay algunas excepciones: en México las diferencias entre los porcentajes de precariedad de hombres y mujeres con

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México

secundaria incompleta o menos y con educación superior completa no son estadísticamente significativas y tampoco lo son para el nivel educativo más alto en Argentina. En los casos de Brasil y Colombia se confirma que las desigualdades de género en términos de precariedad afectan también a la población más escolarizada.

Tabla 5. Precariedad de la población joven asalariada según características, 2023

Indicador	Argentina			Brasil			México			Colombia		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Grupos de edad												
15 a 19 años	92,8	95,1	93,6	79,7	83,4	81,3	95,0	93,9	94,6	87,8	88,9	88,2
20 a 24 años	78,1	82,2	79,9	58,0	63,1	60,2	83,2	84,3	83,6	66,9	66,5	66,7
25 a 29 años	65,0	68,4	66,5	44,8	50,7	47,4	77,2	78,4	77,7	54,7	52,9	53,9
Nivel educativo												
Secundaria incompleta o menos	85,4	92,9	87,6	72,4	81,2	75,1	88,9	87,9	88,6	86,1	92,2	87,5
Secundaria completa	70,7	78,6	73,8	52,5	63,1	57,1	79,7	83,4	81,1	64,8	71,5	67,4
Superior incompleta	65,8	74,4	70,6	50,4	62,4	56,8	79,9	84,8	82,1	52,4	57,1	54,8
Superior completa	54,1	55,3	54,7	26,9	35,3	31,8	72,8	75,9	74,4	28,3	35,9	32,7
Tamaño de establecimiento												
Una persona	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0	82,2	94,9	92,9
De dos a cinco personas	92,8	91,1	92,2	82,0	77,3	80,3	98,5	97,9	98,3	96,3	95,2	95,9
De seis a 10 personas	73,2	71,2	72,3	63,0	60,7	62,0	93,2	89,9	92,0	92,5	88,5	91,1
Once o más personas	50,3	52,5	51,2	39,6	45,4	42,0	67,5	69,8	68,4	76,7	76,1	76,5
Sectores productivos												
Primario	64,7	72,2	66,6	70,9	61,3	69,8	95,9	92,7	95,4	83,5	63,2	79,9
Secundario industrial	67,1	74,5	69,1	38,1	44,1	40,0	68,4	67,8	68,2	57,7	60,6	58,7
Secundario no industrial	86,7	47,2	84,4	67,5	48,9	65,3	94,0	82,3	93,3	71,1	43,3	67,0
Servicios de distribución	72,0	76,9	73,9	54,2	56,4	55,1	82,0	86,4	83,8	59,6	59,1	59,4
Servicios de producción	71,8	64,7	68,4	44,8	49,2	47,1	76,7	80,9	78,6	41,1	38,2	39,7
Servicios sociales y Gobierno	55,6	65,1	61,3	59,4	60,4	60,1	79,5	81,0	80,4	43,3	54,6	50,8
Servicios personales	83,3	91,4	88,5	72,0	82,6	78,6	91,2	94,3	92,6	78,7	86,4	83,5

Elaborada por la autora y el autor con base en INDEC (2023), IBGE (2023), INEGI (2023), DANE (2023).

En lo que corresponde a las características de la estructura ocupacional, diversos estudios han destacado el tamaño de las empresas como una variable central en la explicación de la precariedad laboral. Los resultados sobre la población joven de los cuatro países analizados refuerzan esta idea: la mayor precariedad se presenta en los trabajadores de pequeñas empresas (hasta cinco), mientras que es menor en la juventud asalariada inserta en empresas de 11 o más trabajadores. A pesar de lo anterior, llama la atención que en México y Colombia los porcentajes de jóvenes asalariados precarios en este tamaño de empresas son altos (68,4 % y 76,5 % respectivamente). En Argentina y en Brasil las empresas de 11 o más trabajadores ofrecen empleos de mejor calidad a las y los jóvenes.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, estas varían de acuerdo con el tamaño de la empresa y el país. En Brasil, los hombres jóvenes enfrentan más precariedad si trabajan en empresas pequeñas y las mujeres cuando se desempeñan en empresas grandes. En los casos de México y Colombia los hombres enfrentan estos problemas en su mayoría cuando trabajan en empresas medianas (de seis a 10 trabajadores). En Argentina no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en ningún tamaño de empresa.

Finalmente, en este estudio se evaluó la asociación entre la incidencia de la precariedad y el sector productivo en el que trabaja la población joven asalariada, observando importantes diferencias entre los países que no permiten concluir una asociación clara entre las dos variables. En Argentina, Brasil y Colombia los y las jóvenes que trabajan en el sector terciario de la economía, específicamente en servicios personales, son quienes enfrentan mayores niveles de precariedad, mientras que en México esta se da más en el sector primario.

Al identificar los sectores menos precarios también se encuentran diferencias interesantes entre los países. El sector de servicios sociales y Gobierno, que ha sido reconocido en los estudios sobre mercados de trabajo como el que ofrece los trabajos con mayor calidad, solo cumple esta función en Argentina, en lo que concierne a la población joven. En Brasil y México las juventudes asalariadas menos precarias trabajan en la industria manufacturera y en Colombia lo hacen en servicios de producción que incluyen actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, científicas y administrativas, propias de un sector terciario moderno.

En lo que corresponde a las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, estas son significativas en los cuatro países solamente en dos sectores. En el sector secundario no industrial los hombres son quienes mayores problemas enfrentan, mientras que en los servicios personales son las mujeres de entre 15 y 29 años las que se encuentran en una peor situación en términos de condiciones laborales. En otras palabras, cerca de la cuarta parte de las mujeres jóvenes trabaja en un sector que en la mayoría de países se erige como el más precario, y dentro del mismo son las que se encuentran en mayor desventaja.

6. Conclusiones

La precariedad laboral en América Latina, especialmente entre los y las jóvenes, es un fenómeno complejo en sus dimensiones, causas y consecuencias. Las políticas de flexibilización del mercado laboral han exacerbado la inseguridad y la desprotección en la región, afectando desproporcionadamente a este grupo poblacional. Las implicaciones de esta precariedad son profundas, no solo en términos de ingresos y derechos laborales, sino también en cuestiones de inclusión social. Para enfrentar este desafío es fundamental diseñar políticas públicas que fomenten la inclusión de jóvenes en el rezago educativo y que garanticen que sus primeras experiencias laborales sean en empleos formales y de calidad, asegurando sus derechos y sus oportunidades de desarrollo a largo plazo.

La inserción de la población joven en el mercado laboral es heterogénea, crítica y persistentemente precaria. Intervenir de manera decidida en esta etapa es crucial para romper los ciclos de exclusión y para promover una mayor igualdad social. Construir trayectorias laborales estables y protegidas no solo contribuye a mejorar las condiciones de vida, sino que también fortalece el ejercicio pleno de la ciudadanía social.

La evidencia empírica presentada a lo largo de este artículo subraya la necesidad urgente de que los Estados de los países analizados tomen medidas para reducir las desigualdades en sus mercados laborales. La urgencia radica en que estos países se encuentran en fases intermedias y avanzadas de transición demográfica, y de no atender la situación se enfrentan a un futuro incierto para su población envejecida y con trayectorias carentes de acceso a derechos laborales. A continuación, se presentan algunas recomendaciones de acciones de políticas públicas.

En primer lugar, es necesario implementar políticas que mejoren la calidad del empleo para toda la población, priorizando la formalidad, la estabilidad, el acceso a la protección social y a remuneraciones dignas. Esto permitiría a las y los trabajadores y a sus familias tener condiciones de vida adecuadas, conciliando la vida educativa, laboral y personal. En esencia, se trata de recuperar los derechos laborales perdidos a causa de las reformas flexibilizadoras.

En segundo lugar, resulta imperativo promover políticas que aumenten las oportunidades laborales para la juventud. Esto incluye establecer incentivos fiscales para empresas que contraten a jóvenes menores de 30 años, fortalecer la culminación de la educación media, la formación profesional y la capacitación tecnológica y actualizar los programas de formación en respuesta a las demandas del mercado laboral actual. Además, se debe fomentar la enseñanza dual, combinando educación formal con prácticas en empresas para facilitar una transición más efectiva al empleo (Morales y Van Hemelryck 2022; Pacheco, Florez e Hincapié 2022; Florez y Bensusán 2024).

Por último, para abordar las desigualdades de género en el mercado laboral, es necesario reducir y combatir las causas de la brecha salarial (discriminación laboral, ocupación a tiempo parcial, segregación ocupacional, penalización en la trayectoria

laboral por la maternidad, entre otras) a través de políticas que garanticen la igualdad salarial por trabajos del mismo valor y que promuevan la transparencia retributiva. Asimismo, es fundamental fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar desde una perspectiva de corresponsabilidad con una participación más activa de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, donde el Estado y el sector privado jueguen un rol activo en la implementación y financiación de los sistemas nacionales de cuidados. Estas medidas reducirían la carga global de trabajo que enfrentan las mujeres en el ámbito familiar, facilitando su participación en el mercado laboral. Además, es importante promover el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo, especialmente en sectores clave para la economía del futuro.

Referencias

- Amarante, Verónica. 2011. “Empleo y juventud: diagnóstico y propuestas”. En *Jóvenes en tránsito. Oportunidades y obstáculos en las trayectorias hacia la vida adulta*, editado por Fernando Filgueira y Pablo Mieres, 115-138. Montevideo: UNFPA / RUMBOS.
- Antunes, Ricardo. 2001. “Trabalho e precarização numa ordem neoliberal”. En *La ciudadanía negada. Políticas de exclusión en la educación y el trabajo*, compilado por Pablo Gentili y Gaudêncio Frigotto, 35-48. Buenos Aires: CLACSO.
- Ariza, Marina, y Orlandina de Oliveira. 2013. “Viejos y nuevos rostros de la precariedad en el sector terciario, 1995-2010”. En *Los mexicanos: un balance del cambio demográfico*, coordinado por Cecilia Rabell, 672-703. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Beck, Ulrich. 2000. *Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Barcelona: Paidós.
- Bensusán, Graciela. 2009. “Estándares laborales y calidad de los empleos en América Latina”. *Perfiles Latinoamericanos* 17 (34): 13-49. <https://doi.org/10.18504/pl1734-013-2009>
- Castel, Robert. 2010. *El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Castel, Robert. 2005. “El proceso de individualización: fragilización de los soportes de identidad frente a las transformaciones del capital y del trabajo”. En *Las manifestaciones actuales de la cuestión social*, coordinado por Guillermo Pérez, 25-34. Buenos Aires: Instituto Di Tella.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2020. *Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante*. Santiago de Chile: CEPAL.
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 2023. “Gran Encuesta Integrada de Hogares”. Acceso el 8 de abril de 2024. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/782>
- Espejo, Andrés, y Ernesto Espíndola. 2015. “La llave maestra de la inclusión social juvenil: educación y empleo”. En *Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad*, editado por Daniela Trucco y Heidi Ullmann, 23-68. Santiago de Chile: CEPAL.
- Fernández, Mariana. 2014. “Dimensiones de la precariedad laboral: un mapa de las características del empleo sectorial en la Argentina”. *Cuadernos de Economía* 33 (62): 231-257. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n62.43675>

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México

- Florez, Nelson, y Graciela Bensusán. 2024. “Mercado de trabajo y protección social en el contexto y post emergencia sanitaria por la covid-19”. En *Nuevas respuestas a viejos desafíos en América Latina y el Caribe: un análisis comparativo de las políticas públicas de protección social y mercado laboral en el contexto de la emergencia sanitaria*, editado por Sergio Rivero Soto y Stella Sáenz Breckenrige, 213-236. San José: FLACSO.
- García, Brígida. 2012. “La precarización laboral y desempleo en México (2000-2009)”. En *La situación del trabajo en México 2012: el trabajo en la crisis*, coordinado por Enrique de la Garza, 91-118. Ciudad de México: Plaza y Valdés Editores.
- Galín, Pedro. 1987. “Condiciones de trabajo y precarización del empleo”. En *Condiciones de trabajo en América Latina*, compilado por Marta Novick, 101-109. Buenos Aires: CLACSO.
- Gazzotti, Alejandro. 1987. “La inserción precaria al mercado de trabajo”. En *Condiciones de trabajo en América Latina*, compilado por Marta Novick, 111-119. Buenos Aires: CLACSO.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hawkins, Daniel. 2014. *La precariedad laboral en Colombia. Crónicas y reportajes*. Bogotá: Escuela Nacional Sindical / Friedrich Ebert Stiftung.
- Hincapié, Lia Alejandra. 2016. “La promesa incumplida al trabajo asalariado: un análisis de la precariedad laboral en Colombia en 2014”. Tesis de maestría, FLACSO México.
<https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1026/99>
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2023. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua”. Acceso el 8 de abril de 2024. <https://lc.cx/ZGFtAn>
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 2023. “Encuesta Permanente de Hogares”. Acceso el 8 de abril de 2024. <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2023. “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Acceso el 8 de abril de 2024.
<https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#microdatos>
- Miranda, Ana, Fabiola Carcar y Rafael Merino. 2024. “Transiciones juveniles en desventaja al mercado laboral en América Latina y España”. Acceso en abril de 2024. <https://lc.cx/-LkGEv>
- Mora, Minor. 2011. “El empleo precario asalariado y globalización: enseñanzas desde Costa Rica”. En *Trabajos atípicos y precarización del empleo*, coordinado por Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas, 161-198. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Mora, Minor. 2005. “Ajuste y empleo: notas sobre la precarización del empleo asalariado”. *Revista de Ciencias Sociales* 108: 27-39. <https://lc.cx/Wm8KxG>
- Mora, Minor, y Orlandina de Oliveira. 2009. “La degradación del empleo asalariado en los albores del siglo XXI: Costa Rica y México”. *Papeles de Población* 15 (61): 195-231.
<https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8537>
- Morales, Beatriz, y Tamara Van Hemelryck. 2022. *Inclusión laboral de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe en tiempos de crisis: desafíos de igualdad para las políticas públicas*. Santiago de Chile: CEPAL. <https://lc.cx/fmZa8b>
- Offe, Claus. 1997. “Precariedad y mercado laboral: un análisis a medio plazo de las respuestas disponibles”. En *¿Qué crisis?, retos y transformaciones de la sociedad del trabajo*, 11-50. Donostia: Tercera Prensa.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2022. “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2022. Invertir en la transformación de futuros para los jóvenes”, 11 de agosto. <https://lc.cx/-Ji4DN>

- OIT. 2017. “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017”, 20 de noviembre. https://lc.cx/apLOY_
- OIT. 2013. *Trabajo decente y juventud en América Latina: políticas para la acción*. Lima: OIT. <https://lc.cx/JuwVh1>
- Oliveira, Orlandina de. 2006. “Jóvenes y precariedad laboral en México”. *Papeles de Población* 12 (49): 37-73. <https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8660>
- Pacheco, Edith, Nelson Florez y Lia Hincapié. 2022. “Jóvenes y precarización del trabajo en cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México)”. En *Danzar en las brumas. Género y juventudes en entornos desiguales en América Latina*, editado por Paola Aguilar, Luis Carrizo, María Isabel Domínguez, Laura Flamand, Andrés Morales, Juan Olmeda y Landy Sánchez, 151-171. Ciudad de México: UNESCO / El Colegio de México / CLACSO.
- Palomino, Héctor. 2008. “¿Por qué la precariedad no es un fenómeno inevitable de capitalismo contemporáneo? El debate incipiente sobre la instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina”. *Veredas* 9 (16): 153-179. <https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/195>
- Rodgers, Gerry. 1989. “Precarious work in western Europe: The estate of the debate”. En *Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical Employment in Western Europe*, editado por Gerry Rodgers y Janine Rodgers, 1-16. Ginebra: International Labour Office.
- Standing, Guy. 2011. *The Precariat: The New Dangerous Class*. Londres: Bloomsbury Publishing.
- Weller, Jürgen. 2006. “Tendencias recientes de la inserción de los jóvenes latinoamericanos en el mercado laboral”. En *Los jóvenes y el empleo en América Latina desafíos y perspectivas ante el nuevo escenario laboral*, editado por Jürgen Weller, 1-30. Bogotá: CEPAL.

Cómo citar este artículo:

Florez-Vaquiro, Nelson, y Lia Alejandra Hincapié-Aldana. 2025. “Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 13-32. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6233>

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

*Migrations, gender and youth work:
Overlapping transitions in popular sectors of Argentina*



 Dra. Débora Gerbaudo-Suárez. Investigadora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
(dgerbaudosuarez@unsam.edu.ar) (<https://orcid.org/0000-0002-8090-2279>)

Recibido: 05/05/2024 • Revisado: 09/07/2024
Aceptado: 10/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En el artículo se exploran las trayectorias de jóvenes de familias paraguayas residentes en barrios periféricos del Gran Buenos Aires, indagando su relación con los mercados de trabajo a los que ingresan y con la ciudad que habitan. De esta forma, el objeto de estudio lo constituyen los y las migrantes y también quienes nacieron en Argentina pero viven en hogares transnacionales. Se desarrolló una etnografía colaborativa que implicó la observación participante y entrevistas a jóvenes en el entorno de sus familias, de los grupos de pares y de organizaciones comunitarias. Los resultados muestran que constituyen juventudes de clases populares y que enfrentan procesos de exclusión del mercado laboral en espacios sociourbanos segregados. Aunque también visibilizan las particularidades de sus transiciones juveniles, se perciben las desigualdades interseccionales de género, etnia, raza y clase que experimentan, ligadas a la condición migratoria de sus familias. En conclusión, su inserción en trabajos precarizados asociados a nichos laborales de migrantes, si bien genera identidad en el espacio urbano, también reproduce las desigualdades de clase en las familias. A su vez, aunque las transiciones de las jóvenes reflejan mayores desigualdades debido a los estereotipos de género y de clase, también evidencian que a través del trabajo de cuidados comunitarios disputan su derecho a una ciudad desde una perspectiva feminista.

Descriptores: Argentina; desigualdad social; espacio urbano; género; juventud; migración.

Abstract

This article explores the trajectories of young Paraguayan families living in peripheral neighborhoods of Greater Buenos Aires, exploring their relationship with labor markets and with the city they live in. Thus, the object of study is constituted by migrants and by those who were born in Argentina but live in transnational households. A collaborative ethnography was carried out involving participant observation and interviews with young people and their families, peer groups, and community organizations. The results demonstrate that they are young people from lower classes and that they face exclusion from the labor market in segregated socio-urban spaces. Although the results make visible the particularities of these youth transitions, intersectional inequalities are evident regarding experiences of gender, ethnicity, race, and class, linked to the migratory conditions of their families. In conclusion, their insertion in precarious jobs associated with migrant labor niches generates identity in urban spaces and reproduces class inequalities among families. In turn, although the transitions of young women reflect greater inequalities due to gender and class stereotypes, they also show that through community care work they dispute their right to the city from a feminist perspective.

Keywords: Argentina; social inequality; urban spaces; gender; youth; migration.

1. Introducción

En el presente artículo se exploran las trayectorias de jóvenes de familias paraguayas residentes en barrios populares de San Martín, un municipio del Gran Buenos Aires, para indagar su relación con los mundos del trabajo a los que ingresan y con la ciudad que habitan, en los alrededores del mayor basurero a cielo abierto de Buenos Aires y de una de las cuencas más contaminadas de Argentina. Se comprende así a quienes llegaron en la infancia con sus familias, quienes lo hicieron de mayores siguiendo sus propios proyectos y a quienes nacieron en Argentina de madres o padres de Paraguay. En todos los casos, se trata de jóvenes de hogares transnacionales puesto que sus familias forman parte de redes en las que circulan personas, mercancías, dinero, ideas, información y prácticas entre el país de origen y el de recepción (Levitt y Glick Schiller 2004).

Estas juventudes migrantes son parte de las clases populares y enfrentan procesos similares de exclusión del mercado laboral en espacios sociourbanos segregados del conurbano bonaerense. Aunque también se visibilizan las particularidades en dichas transiciones, se toman en consideración las desigualdades interseccionales de género, étnico-raciales y de clase que experimentan, ligadas a la condición migratoria de sus familias.

En el campo de los estudios de las juventudes esta transición es un momento específico del paso a la adultez en la búsqueda de autonomía donde acontecen dos procesos centrales: el cambio de la educación al empleo y la mudanza del hogar paterno al propio (Casal et. al. 2006). Desde los enfoques que han concebido las desigualdades en términos de inclusión versus exclusión se abarcaron temas entre los que sobresalen el acceso a la escolarización, las transiciones entre educación y trabajo (Jacinto 2004; Beheran 2012; Miranda y Córlica 2015), la producción estatal de la cuestión juvenil (Vázquez y Liguori 2018; Vommaro 2015) y las políticas públicas dirigidas a juventudes vulnerables “o en riesgo” en el ámbito de la prevención del delito (Raggio y Sabarots 2012) y de los programas de transferencias condicionadas de ingresos (Medan 2014). Estos estudios brindan complejos análisis sobre las condiciones de vida de las personas jóvenes en torno a la educación, al trabajo y a las posibilidades de inserción social, analizando las desigualdades socioeconómicas que las atraviesan.

El enfoque de género, aunque no fue explorado de igual manera, también propone interesantes y necesarias miradas que complementan las anteriores. De acuerdo con la socióloga Silvia Elizalde, en general predominó una mirada androcéntrica y binaria en las investigaciones sobre juventudes, recortando un sujeto juvenil hombre, urbano, pobre o de clase media, en la escuela o en el mercado de trabajo (Elizalde 2006; Elizalde y Álvarez Valdés 2021). En contraste, los aportes de la teoría feminista de las últimas décadas y de los estudios de género permitieron comprender las condiciones de producción de las diferencias sexo-genéricas y su articulación con otras, delimitando sentidos normativos sobre las maneras de ser mujer, hombre, no binaria, heterosexual, lesbiana, gay, etc.

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

En esta línea, se produjeron investigaciones que problematizaron distintas dimensiones de género en las transiciones juveniles: aquellas afectadas por las violencias y el delito (Medan 2013) o por las desigualdades en torno a la pobreza y a las maternidades en las jóvenes (Tabbush 2009; Llobet y Milanich 2014; Gaitán 2019; Llobet 2020). En este artículo cobran especial relevancia aquellas centradas en la educación y en el mundo del trabajo desde la perspectiva de género (Miranda y Arancibia 2017; Jacinto, Roberti y Martínez 2022).

Cabe mencionar que con la migración se visibiliza una tercera transición vinculada a la movilidad transnacional que las personas realizan en su juventud (García Borrego 2003). En este sentido, algunos estudios focalizaron sobre el fenómeno de la migración juvenil en el corredor paraguayo-argentino, donde la movilidad se produce debido a la búsqueda de mejores posibilidades de vida, de trabajo y de consumo cultural. La mayor parte de quienes migran tienen entre 15 y 29 años, lo que da cuenta de una migración compuesta esencialmente por personas jóvenes (Serafini 2023) y con una marcada tendencia hacia la feminización (Soto, González y Dobrée 2012).

En el texto se dialoga con estudios que visibilizan las diversas trayectorias educativas y laborales de los y las jóvenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Olmedo 2011; Miranda Cravino y Martí Garro 2012), considerando las desigualdades de género (Miranda 2012) en sus transiciones. En paralelo, se parte también de literatura sobre familias migrantes y de los procesos de inserción de sus descendientes, contemplando las desigualdades de clase y generacionales en torno a desarrollos de movilidad social que han sido centrales en países del Norte Global (García Borrego 2003; Portes, Fernández Kelly y Haller 2006; Pedreño Cánovas 2010), pero también con antecedentes en el Sur (Trpin 2004; Gavazzo 2012; Zenklusen 2018; Lemmi, Morzilli y Moretto 2018; Novaro y Diez 2021).

El artículo se estructura en tres apartados. En el primero, se caracteriza la inserción de las personas jóvenes migrantes en nichos laborales entre los que se encuentran la construcción y el sector de los cuidados tradicionales en familias migrantes. En el segundo, se analizan algunas formas alternativas de trabajo derivadas de la economía social en los barrios populares de San Martín, Argentina. Por último, se plantea una reflexión sobre la intersección de las desigualdades que configuran las transiciones juveniles superpuestas y que afectan particularmente la inserción laboral de las mujeres jóvenes.

2. Metodología de una investigación participativa

El artículo se basa en la participación en un proyecto colectivo de investigación-acción, donde la construcción de conocimiento se orienta de manera explícita hacia los objetivos políticos de las comunidades (Rahman y Fals Borda 1989). En este caso, se buscó atender las desigualdades entre las poblaciones migrantes del área Reconquista.

Esto implicó que el trabajo de campo muchas veces combinara la observación y las entrevistas con la participación en actividades demandadas por la comunidad: la producción de reportes para consejerías migrantes, la sistematización de talleres con mujeres, la ayuda en tareas escolares y la solicitud de subsidios para familias durante el aislamiento por la covid-19, entre otras cuestiones.

Además, la evidencia empírica presentada se obtuvo a partir de 20 entrevistas semiestructuradas y en profundidad a hombres y mujeres de entre 15 y 25 años provenientes de familias paraguayas en Costa Esperanza y Costa del Lago, dos barrios autoconstruidos a partir de la toma y la ocupación de tierras en San Martín. Si bien estas juventudes tenían en común el estar atravesadas por el proceso migratorio, propio o de sus familias, se diferenciaban por su mayor o menor involucramiento con organizaciones sociales y políticas y por el rol de liderazgo barrial con el que contaban algunas de las familias en la comunidad.

A través de las entrevistas etnográficas, donde los datos son construidos entre las personas que realizan las preguntas y las que ofrecen sus testimonios (Guber 2001), se buscó captar el punto de vista de las personas jóvenes en las familias. Siguiendo un enfoque generacional de las migraciones (Gavazzo 2012), se comprendió a interlocutores e interlocutoras desde una dimensión genealógica que les une con sus familias (hijos, hijas, hermanos, hermanas), desde una dimensión etaria que les ubica en una posición social específica en tanto grupo etario (jóvenes) y desde una dimensión sociohistórica con experiencias sociales compartidas (hijos e hijas de migrantes, habitantes de barrios populares). A partir de preguntas retrospectivas sobre sus experiencias educativas y laborales pasadas, pero también de otras relacionadas con el presente del trabajo de campo, reconstruí relatos de vida de los y las jóvenes para relacionar sus biografías y sus trayectorias individuales y familiares con el contexto social, cultural, político y simbólico en el que transcurren, teniendo en cuenta la manera en que ese contexto influencia y es transformado por estas personas (Mallimaci y Giménez 2006).

3. Formación para el trabajo: entre la obra y los cuidados

La transición escuela-trabajo hacia la vida adulta y su inserción en la estructura social es una preocupación clásica en los estudios sobre la juventud, aunque estos escasamente contemplan la perspectiva de género o las trayectorias particulares de las juventudes en la migración. Retomando algunos de sus aportes, en este apartado me pregunto ¿qué transiciones educación-trabajo hacen los y las jóvenes de las familias paraguayas?, ¿qué mundos del trabajo transitan? y ¿de qué modo el acceso a esos trabajos se relaciona con la ciudad que habitan? Se entiende por “mundos del trabajo” la trama de relaciones en las que se insertan personas jóvenes, considerando la

articulación de las políticas públicas con los diversos actores que intervienen en sus transiciones (Jacinto, Roberti y Martínez 2022).

Muchos hombres en las familias paraguayas combinan a temprana edad el estudio en escuelas secundarias de formación técnica con el trabajo en la construcción. Los hermanos Ezequiel y Leonardo estudiaron en la Escuela Secundaria Técnica (EST) n.º 4 todo lo relacionado con construcciones y el mayor de ellos se graduó de maestro mayor de obras. Para ellos esto es algo “natural”, ya que destacaban que “en toda mi familia somos albañiles” (entrevistas a Ezequiel y Leonardo, Costa del Lago, 8 de febrero de 2021). Ambos hermanos aprendieron desde pequeños a colaborar en las jornadas de construcción de su propia vivienda en el asentamiento con su padre, con sus tíos y con sus abuelos. Además, los tíos a veces los llevaban a trabajar con ellos como ayudantes en algunas obras en otros barrios. Debido a esta experiencia laboral temprana ellos dicen no haber sentido la presión de sus madres y padres en la elección de un colegio técnico orientado a este rubro.

Históricamente en Argentina la educación secundaria técnica estuvo asociada a la movilidad social. Según Gallart (2002), desde su impulso en los años cuarenta hasta la década de los 80, sus egresados eran en su mayoría hombres provenientes de sectores bajos y medio-bajos y presentaban una mejora educativa respecto a sus progenitores, quienes solo habían culminado el nivel primario. Esas representaciones perduran entre las familias migrantes del área Reconquista y sus jóvenes. En repetidas ocasiones mencionaban que “son muy buenas escuelas” por la amplia carga horaria que mantienen, o bien que “en la técnica no se jode” por la rigurosidad y exigencia con sus estudiantes. Además, frecuentemente resaltaban que “tienen rápida salida laboral”, ya que brindan una educación orientada a demandas del mercado de trabajo.

Por esto mismo, muchas personas jóvenes sienten la presión familiar respecto a la elección de esta modalidad. Un ejemplo de esto lo encontramos en los hermanos Nicolás y Fernando, que viven en Costa Esperanza y estudian en la EST n.º 1 en el centro del municipio. “A veces los padres obligan a los hijos a seguir esto. Dicen ‘yo seguí esto, vos tenés que ser lo mismo que yo, así me podés ayudar’ ¿viste?” (entrevista a Nicolás, Costa Esperanza, 8 de enero de 2021). Así, para unos la transición estudio-trabajo está atravesada por presiones de madres y padres para que sus hijos e hijas elijan una orientación escolar con una “rápida salida laboral” que les permita contribuir con ingresos económicos. Por otro lado, esta elección parece darse sin mayores complicaciones entre los jóvenes de las familias paraguayas, quienes ya se relacionan con estos mundos del trabajo a temprana edad a través del parentesco y de la autoconstrucción de las viviendas en el barrio.

Esta coincidencia de perspectivas también refleja valoraciones compartidas entre madres, padres, hijos e hijas sobre la educación y su importancia para ascender socialmente. Algo similar muestran Lemmi, Morzilli y Moretto (2018) sobre familias bolivianas horticultoras en La Plata, para quienes el acceso a la educación pública es

un anhelo de madres y padres que se convierte en una estrategia también valorada y sostenida por los y las jóvenes. Además, al igual que sucede con las familias paraguayas, dan importancia a la orientación productiva de la enseñanza que reciben sus hijos e hijas, ligada a formas de sociabilidad y a la participación en los espacios de producción doméstica o de trabajo con personas adultas (Novaro y Diez 2021).

En el área Reconquista, muchas personas jóvenes que asisten a estas escuelas técnicas en simultáneo trabajan en actividades ligadas a mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas autoconstruidas en sus barrios. Por ejemplo, en los últimos años de colegio Ezequiel trabajó en obras en construcción haciendo “prácticas profesionalizantes” en convenio con TECHO, una ONG dedicada a la construcción de viviendas de emergencia para familias en situación de pobreza.

Si bien esto fomenta un oficio con rápida salida laboral como esperan sus familias, también reproduce, en muchos casos, la inserción precarizada de la generación que les precede. Algo similar observó Andrés Pedreño Canovas (2010) entre hijos e hijas de migrantes marroquíes y ecuatorianos en Murcia. Madres y padres apuestan al ascenso social a través de la “carrera escolar” de sus hijos e hijas como estrategia para acceder a trabajos “buenos o dignos”, a diferencia de los “trabajos de migrantes”, aquellos más duros y en el campo. Aunque sus hijos e hijas buscan desmarcarse de ese capital simbólico negativo luchando por conseguir un título, la escuela termina reproduciendo estereotipos que condicionan las posibilidades de éxito o fracaso de los jóvenes y las jóvenes.

En cambio, en su estudio sobre hijos e hijas de familias chilenas asentadas en la Patagonia argentina, Verónica Trpin (2004) encontró que, si bien la escuela refuerza estereotipos identificándoles como personas extranjeras, ellas y ellos manifiestan su “chilenidad” en un contexto donde “ser chileno” está muy asociado a “trabajar en el campo”. Esa dinámica es más similar a la que veo entre jóvenes de familias paraguayas que, si bien buscan alcanzar mayores niveles de escolaridad que sus padres y madres, no reniegan de los trabajos que hacen y en los que se vieron involucrados en su infancia y adolescencia. Tal vez procuran negociar sus condiciones de subalternidad, asociadas a una nacionalidad y a una clase social (“paraguayos y paraguayas pobres”) continuando con el oficio familiar, pero buscando su profesionalización a través de la obtención de títulos que lo certifiquen.

En relación con la migración paraguaya, Martí Garro (2012) encuentra que los y las descendientes de estas familias presentan niveles educativos más altos que sus madres y padres, y que ello repercute en una diversificación mayor de los trabajos. Si bien es común la inserción laboral temprana en el rubro de la construcción, también se observa que muchos han podido cambiar de sector y que poseen ocupaciones sin vinculación con el área de actividad de sus progenitores, por ejemplo, trabajando de mozos o de cadetes. En esta línea, el autor sostiene que las mayores posibilidades de empleo favorecieron las chances de los y las jóvenes para escapar de un horizonte laboral acotado a “nichos” de actividad.

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

El sostenido crecimiento económico registrado desde el año 2004 en Argentina, la creciente demanda agregada de empleo y el estancamiento y reducción del empleo no registrado, dan cuenta de un contexto favorable para la búsqueda de mejores condiciones laborales (Martí Garro 2012, 263).

Sin embargo, casi dos décadas después las historias de estas familias muestran trayectorias similares entre los y las jóvenes y sus madres y padres, o al menos una inserción laboral donde complementan el trabajo en la construcción con otras actividades, entre las que se encuentran el autoempleo en barberías o el trabajo en cooperativas. En relación con esto, es importante considerar el modo en que la pandemia del 2020 puede llegar a afectar en los próximos años las trayectorias de estas personas jóvenes que están terminando sus estudios y comenzando sus recorridos laborales. Es decir, el efecto “generación” en las transiciones juveniles educación-trabajo, que puede reflejar tendencias reproductoras y de cambio sociohistórico, dependiendo de los ciclos socioeconómicos y de las oportunidades educativas (Miranda y Corica 2015).

Ahora bien, las transiciones juveniles educación-trabajo en general muestran que la generación se interseca con el género, creando trayectorias diferenciadas entre hombres y mujeres jóvenes. Históricamente, la educación técnica en sus distintos niveles fue sexista, ya que al 2020 la matrícula continuaba siendo mayoritariamente masculina con apenas un 34 % de estudiantes mujeres (INET 2020). La elección de las orientaciones está influida por segregaciones de género condicionadas por la división sexual del trabajo. Mientras que los hombres son mayoría en especialidades masculinizadas como mecánica, construcción o electrónica, hay una mayor presencia de mujeres en especialidades consideradas más “blandas” entre las que destaca la administración y otras relacionadas con los servicios. Esto repercute en su inserción laboral, con menor participación de las mujeres en el sector industrial y más en las tareas de cuidados dentro de los hogares.

Entre los y las jóvenes migrantes se han encontrado situaciones que responden a esta tendencia general de desigualdad de género en las trayectorias educativas y laborales. En un estudio sobre familias peruanas en Córdoba, Zenklusen (2018) encontró que muchas prefieren una educación técnica para sus hijos, esperando que continúen la universidad, mientras que sus hijas reciben una educación “de señoritas” en escuelas religiosas. Si bien en el trabajo de campo no encontré mandatos de género organizando las elecciones escolares o laborales de sus hijos e hijas, esto no implica que no existan desigualdades en sus trayectorias juveniles, sino que en este contexto de pobreza prima más la clase social que el género en la elección educativa.

Por otra parte, sí existen transiciones educación-empleo condicionadas por el género en las trayectorias de las mujeres jóvenes que no logran concluir el nivel secundario por las grandes dificultades que conlleva conciliar el estudio con las tareas de cuidados y, en muchos casos, con la maternidad adolescente. Las hermanas Gisel y

Daianis son dos adolescentes paraguayas que viven con su madre y con sus dos hermanos pequeños en una vivienda precaria en Costa del Lago. Gisel, de 17 años, estudia en la EST n.º 1 para ser maestra de obras, y su hermana Daianis de 15 también está matriculada en esta institución.

La madre de ambas, que debe cuidar sola a todos sus hijos e hijas, hace grandes esfuerzos para mantener a la familia, trabaja de promotora de economía social en la Casa de la Mujer Kuña Guapa, por lo que pasa gran parte del tiempo fuera para poder “llegar a fin de mes”. Así, las adolescentes distribuyen su tiempo entre el estudio y las tareas de trabajo doméstico y de cuidados en el hogar. Otras obtienen ingresos económicos provenientes del trabajo en casas particulares, haciendo “changas” de niñeras al cuidar a hijos e hijas de vecinas del barrio.

Si bien las jóvenes estudian y trabajan desde pequeñas, al igual que sus pares hombres, también se desempeñan en áreas de actividad atravesadas por los roles de género que más que una “transición” muestran una “superposición” en sus trayectorias. En este sentido, los estudios sobre juventud y género señalan que las transiciones educación-trabajo no son tan lineales si se tienen en cuenta la reproducción social y la economía de los cuidados,

40

en especial en los países de América Latina donde desde edades muy tempranas las niñas y adolescentes son las encargadas del cuidado de niños/as y de personas dependientes y los hombres se vinculan de forma temprana a la actividad laboral, sobre todo en familias migrantes, rurales, o pobres y en contextos de crisis económica o política (Segato 2003 en Miranda y Arancibia 2017, 3-4).

Dicho fenómeno también repercute entre las jóvenes de familias paraguayas. Si bien la desventaja de las mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres es un rasgo general en el conjunto de trabajadores, entre las jóvenes de origen migrante “se añade la carga simbólica que pesa sobre los empleos de cuidados que desempeñan las mujeres paraguayas” (Martí Garro 2012, 265) y que condiciona su inserción en empleos no calificados con un alto índice de informalidad laboral (Rodríguez Enríquez y Sanchís 2011). Así, desde una mirada interseccional, es posible comprender que las transiciones juveniles están marcadas por el género, por el origen migratorio y por la edad, condicionando a las y los adolescentes a desarrollar trabajos invisibilizados y, por ello, más factibles de ser vulnerados.

4. Mujeres jóvenes en el trabajo cooperativo y feminista

En contraste con lo anterior, la inserción laboral de jóvenes migrantes y de hijas de migrantes en la economía popular les permite acceder a otros mercados de trabajo.

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

La economía popular, similar al modelo de la economía social y solidaria, destaca la importancia de las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, aunque le atribuye un importante rol al salario social en tanto remuneración cubierta a cargo del Estado (Miranda 2019).

En los años setenta un proceso de desindustrialización afectó fuertemente al municipio San Martín, derivando la pauperización de los antiguos barrios obreros y afectando a varias generaciones de trabajadores. No obstante, ello promovió una amplia red de trabajo informal y de economía popular en la que se insertaron gran cantidad de jóvenes. El Movimiento Evita, que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEPE),¹ tiene una fuerte presencia allí con dos polos productivos integrados por fábricas recuperadas por las organizaciones sociales. Además de actividades laborales, en las asambleas se discuten las problemáticas del territorio.

El polo de San Andrés alberga distintos emprendimientos que emplean a jóvenes del área Reconquista.² Uno de ellos es “Changuita Despierta”, una cooperativa textil y de serigrafía que tiene su propia marca de ropa feminista. Allí trabaja Lennis junto a su prima y a otras 15 jóvenes que forman parte de una generación que ya no accede a trabajos formales. Según el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, el 60,6 % tiene entre 18 y 35 años y son en su mayoría mujeres (Lombardo 2022).

Casi la mitad de estas cooperativistas migraron desde Paraguay y son beneficiarias de un programa que otorga un subsidio de ayuda económica.³ Para ellas, lo que hacen no solo es “cobrar un plan” sino también “inventar su propio trabajo”. Una tarde compartí una jornada laboral con ellas. Lennis acomodaba remeras en una máquina mientras me explicaba que “la propuesta de Changuita es organizarse y generar trabajo”. Malena, otra joven migrante que repasaba la tela con una esponja, comentaba que “además de ser autogestionado es militante porque tenés ese plus del trabajo social y colectivo”. Mía, en otra mesa con una pistola de calor secando las remeras terminadas, agregaba: “claro, ese es el alto problema en la juventud. Básicamente ya no hay trabajo formal ¡No hay fábricas a las que podamos ir! Entonces en la economía popular producir tu propio trabajo es la que va”.

Este diálogo refleja un desafío generacional que atraviesan muchas jóvenes, sobre todo de barrios populares, ante la desocupación y los cambios en el mercado laboral de las últimas décadas. Según Vommaro y Daza (2017) estos procesos convirtieron el espacio del barrio en un territorio híbrido, concebido como lugar de producción y

1 La UTEPE es una entidad gremial reconocida por el Estado que vela por los derechos de trabajadores y trabajadoras informales desde el 2011. Está integrada por movimientos sociales y políticos de trabajadores desocupados en Argentina.

2 En el predio funcionan una cooperativa textil, una de panificados, otra de alimentos agroecológicos y también un diario local.

3 “Potenciar Trabajo” es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que proporciona una transferencia condicionada de ingresos a personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad o que se desempeñen en alguna actividad de la economía popular, ya sean argentinas o extranjeras con residencia permanente. Las personas que reciben este beneficio deben participar en proyectos socioproductivos, comunitarios o educativos.

de reproducción mediante lógicas laborales subalternas. En ese contexto, participar en un movimiento social es una estrategia para generar ingresos, ya que gran parte de quienes habitan este territorio realizan tareas comunitarias a cambio de subsidios estatales a los cuales acceden por formar parte de la organización (Longa 2018). Sin embargo, desde una perspectiva de género es posible entender que esta transición al mundo del trabajo implica, en muchos casos, una transformación política y feminista más amplia que excede lo laboral.

[El trabajo] no tiene esa lógica punteril de ‘venís, trabajas tantas horas y te vas, no me importa lo que te pasa’. No, es como ‘che, vos tenés tu salario, pero vamos a construir esto’ y te explican qué espacio somos, que somos feministas, qué es el feminismo popular y que todas podamos estar en la misma línea de discusión y podamos construir en base a eso (entrevista a Lennis, Costa Esperanza, 26 de diciembre de 2019).

El contexto de oportunidad que las jóvenes encuentran en este trabajo tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género al movimiento social. En 2012 se creó el Frente de Mujeres, pues era algo necesario para “la organización de los temas de las mujeres” bajo una mirada feminista, popular y peronista (Vázquez Laba, López y Rajoy 2018). Años más tarde, se impulsaron talleres de promoción de género destinados a trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales (Rajoy 2019). Estas transformaciones institucionales influyeron sobre la construcción de subjetividad de las jóvenes respecto al trabajo. Para Lennis y sus compañeras ellas son “sobrevivientes que nos organizamos y creamos nuestro propio trabajo” (Pedelacq 2021, párr. 16).

Con el trabajo sobreviven a las violencias de género. Sabrina me contaba que la cooperativa se formó en 2016 “para ayudar a mujeres que sufren violencia de género, que puedan tener su plata para salir de esa” (entrevista a Sabrina, Costa Esperanza, 6 de octubre de 2019). Si la dependencia económica es una limitante para enfrentar las violencias, cobrar un plan social les permite contar con un salario mínimo y con cierta autonomía para salir de esas situaciones.⁴ Algo similar ocurre con los centros dependientes de instituciones religiosas que ofrecen a las juventudes la posibilidad de generar ingresos, con libertad de horarios y con acompañamiento para proyectar alternativas de vida ante las violencias cotidianas que imperan en los barrios marginalizados (Miranda, Arancibia y Fainstein 2021).

Las violencias de género son más visibles entre las jóvenes, aunque afectan de manera particular a quienes provienen de otro lugar y se agravan por la falta de redes

⁴ El programa Acompañar, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, busca fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género brindando un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil durante seis meses consecutivos. Además, proporciona a las personas beneficiarias un acompañamiento en el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

familiares en el lugar de destino, por la xenofobia, el tabú de la denuncia y el desconocimiento de la burocracia local. De hecho, durante la pandemia por la covid-19 las mujeres migrantes y refugiadas enfrentaron mayores riesgos de sufrir violencia física, psicológica y sexual debido al cierre de fronteras que intensificó la xenofobia hacia personas migrantes y que dificultó su acceso a la documentación, dejándolas en situaciones de extrema vulnerabilidad (Batthyány y Sánchez 2020).

Además, estas jóvenes sobreviven a formas de trabajo esclavo particularmente asociadas a su condición migratoria. Algunas de ellas, o sus familias, trabajaron previamente en talleres clandestinos de costura, entre otros rubros. Ninguna tuvo buenas experiencias en este sentido. En una nota, Karen quien hace poco se incorporó a la cooperativa, comentaba que “a los talleres clandestinos no queremos volver”, y Lennis identificándose con varias de sus compañeras, reconocía haber sobrevivido a muchas otras cosas: “a ser pobres, mujeres y migrantes” (Pedelacq 2021, párr. 17).

Ahora bien, para otras jóvenes la inserción al mundo laboral cooperativo se da de manera más temprana por medio de vínculos familiares que configuran trayectorias educativas, laborales y de militancia superpuestas. La familia Monges es reconocida en Costa Esperanza por su participación en la toma y ocupación de tierras a principios del siglo XXI y por los numerosos cortes de rutas llevados a cabo para luchar por la llegada de servicios al barrio. Además, la familia es conocida por su liderazgo en la organización de actividades comunitarias y políticas en la UTEP. María, la madre, hace muchos años es supervisora de una de las cooperativas de limpieza de arroyos en el área Reconquista. En ese marco, al menos tres de las siete hermanas ingresaron a trabajar con ella.

Para ellas el trabajo comunitario y cooperativo no era nada nuevo. Ambas recuerdan que ya desde chicas, Zulma con 15 y María con 12 años, mientras iban al colegio trabajaban con la familia en una “panadería comunitaria” donde elaboraban alimentos para proveer a los diversos comedores y merenderos de la zona. También producían facturas y las vendían a “precios populares” en el barrio. En ese entonces su madre militaba en el movimiento social Barrios de Pie y por ese vínculo consiguieron que el Ministerio de Desarrollo Social les brindara máquinas e insumos para aumentar la producción. Por eso, Zulma reflexiona:

Para nosotras fue siempre laborar, estudiar y la militancia nos dio la posibilidad de hacer el primer emprendimiento, ahí empezamos a discutir la cuestión del trabajo porque siempre fue ‘bueno, hacemos comedor merendero por una cuestión de necesidad’ y después dijimos ‘bueno, veamos también la posibilidad de generar trabajo’ (entrevistas a Zulma y María, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020).

Experiencias similares a las de estas jóvenes, con trayectorias educativas, laborales y de militancia en simultáneo, también se ven atravesadas por tareas de cuidados comunitarios y eso influye en las decisiones que toman para alcanzar una autonomía en la

adultez. Dichas transiciones moldean otra relación con el trabajo en un contexto de precariedad general de las condiciones de vida y de desempleo, en particular de falta o insuficiencia de ingresos económicos, asociadas a madres o padres con desempleo crónico o con ocupaciones informales que no permiten cubrir las necesidades básicas en los hogares. Ahora bien, en los barrios populares la participación en movimientos sociales de base permite acceder a programas sociales a través de los cuales disponer de recursos para generar ingresos “por y para el barrio”.

En este escenario, las mujeres, a través de los cuidados comunitarios, construyen liderazgos migrantes con los cuales negociar sus condiciones de desigualdad (Magliano 2018; Gavazzo y Nejamkis 2021). Zulma, con 21 años ya coordinaba el trabajo territorial de un movimiento social en dos distritos, San Martín y Tres de Febrero, junto a un grupo de jóvenes: “el subsecretario de desarrollo social decía que era hora del cambio generacional” (entrevista a Zulma, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020). Asumir tal responsabilidad a tan corta edad no fue difícil para ella porque era una de “las Monges”, y en ese sentido sus compañeras, mujeres de generaciones más grandes, la reconocían por su “laburo territorial, militaba desde los 16 años las doñas a mí me adoraban” (entrevista a Zulma, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020), sobre todo en espacios altamente feminizados como comedores y cooperativas de reciclaje o de limpieza en el área Reconquista.

Esto refleja lo encontrado entre jóvenes activistas en organizaciones de la colectividad paraguaya, quienes también disponen y hacen uso de un “capital militante” donde el “ser descendiente” (y haber migrado a temprana edad) puede constituir una ventaja para legitimar su participación en la comunidad (Gavazzo y Gerbaudo Suárez 2020). Asimismo, las jóvenes migrantes en organizaciones sociales del área Reconquista ponen en juego mecanismos similares a través de relaciones de cooperación con mujeres de distintas generaciones en las que también se transmite un capital político, en este caso, de madres a hijas, mediante el cual obtienen reconocimiento de las mayores (Gavazzo y Gerbaudo Suárez 2024).

Por otra parte, dicha inserción les permitió a las hermanas Monges desarrollar proyectos de maternidad compatibles con el trabajo cooperativo. Zulma recordaba que durante su primer embarazo se “quedaba a dormir en los acampes ¡con la panza así! (de grande), entonces las compañeras me respetaban desde ese lugar, le puse ¡todo!” (entrevista a Zulma, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020). Eso incluso, reflexiona, contribuyó a legitimar aún más sus roles de mujer joven y de madre en el trabajo comunitario.

María, una joven de 19 años con un hijo y una hija, tenía un trabajo en CABA que no le permitía pasar tiempo con ellos. Cuando su madre se afianzó en la cooperativa del área Reconquista se fue a trabajar con ella, así no tenía que viajar tanto. Además, me decía, “el programa te permite trabajar y tener a los hijos cerca” (entrevista a María, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020). Al igual que muchas otras mujeres,

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

trabajar en cooperativas con jornadas de cuatro horas diarias le posibilita organizarse mejor con el cuidado de sus hijos e hijas, sobre todo en barrios donde la provisión estatal de cuidados es escasa o nula.

Por último, el lugar de trabajo se ha convertido en un espacio de discusión política sobre las desigualdades de género que enfrentan las mujeres jóvenes y las trabajadoras en sus barrios.

Siempre tengo una discusión interna con mis compañeras en el Frente de Mujeres, porque para mí el feminismo tiene que ser comunitario... no le podés decir a la doña ‘bueno, decíle a tu marido que no te pegue’ ¡no es tan así! o cuando te dicen ‘separate ¿por qué vas a estar así?’ Acá no es solamente la violencia sino ¡la cuestión económica! porque muchas compañeras sufren situaciones de violencia porque no tienen resuelta la cuestión económica (entrevista a María, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020).

En ese sentido, las trayectorias de las jóvenes migrantes ponen en tensión un feminismo de las clases medias que no las representa por otro que sí, uno más “comunitario” o “popular” que traduzca las demandas en función de las diversas desigualdades que experimentan en los territorios que habitan (Gerbaudo Suárez 2023). Frente a ello, la inserción laboral en la economía popular presenta otras transiciones juveniles posibles para quienes participan en movimientos sociales, en emprendimientos cooperativos y en espacios feministas en el área Reconquista. A la vez, ilumina la relación entre juventudes, género y trabajo desde una dimensión espacial.

La perspectiva de la reproducción social ampliada sostiene que “el trabajo puede ser reconceptualizado poniendo de relieve la reespacialización de trabajo, territorialización y las maneras en que dicha reespacialización o territorialización están transformando el espacio urbano” (Dinerstein 2016, 5). Esta concepción espacial del trabajo permite entender las nuevas formas de generar empleo que las juventudes crean o de las que participan, sobre todo en los barrios populares donde a partir de estas prácticas laborales y políticas transforman el lugar que habitan. Por un lado, generan ingresos de manera comunitaria en un trabajo que es “por” y “para” el barrio, es decir, que surge del territorio y con el que procuran atender las necesidades vulneradas de sus habitantes. Por otro, lo hacen desde una perspectiva feminista y situada de las múltiples violencias que afectan particularmente a las mujeres y a las disidencias en dicho espacio, disputando en el proceso su derecho a una ciudad con perspectiva de género.

5. Conclusiones

En el presente artículo se profundiza en las trayectorias de jóvenes de familias paraguayas en barrios periféricos del Gran Buenos Aires y su relación con los mercados laborales a los que ingresan y con la ciudad que habitan. Comprendiendo las

condiciones de exclusión que comparten con las juventudes de sectores populares, pero también las desigualdades que experimentan ligadas a la condición migratoria de sus familias.

Desde una perspectiva espacial, sobre sus transiciones notamos que hombres y mujeres desarrollan trabajos asociados a las necesidades del espacio urbano en el que viven, ya sea contribuyendo a la construcción de viviendas en los barrios populares o donde escasean las instituciones de provisión de cuidados. Estas experiencias les proporcionan una rápida inserción laboral, aunque en trabajos precarios y mal pagados, integrando los nichos laborales de migrantes en los que también participan sus madres y padres. Además, aunque en su formación educativa las mujeres jóvenes también se inclinan por orientaciones técnicas, sobre ellas pesan estereotipos de género que reflejan una “superposición” en sus trayectorias. Esto se condice con un contexto latinoamericano donde las transiciones a la vida adulta están atravesadas por las tareas de cuidado desde momentos muy tempranos de la vida. Asimismo, los datos aportan a estas perspectivas de los estudios sobre transiciones juveniles y género, considerando que la desigualdad se agrava entre las jóvenes por su origen extranjero. Así, una mirada interseccional mostró que las transiciones juveniles marcadas por el género, la clase y el origen migratorio, condicionan a las jóvenes a desarrollar trabajos invisibilizados y vulnerados.

46

Por otra parte, la inserción laboral de jóvenes migrantes e hijas de migrantes en cooperativas les permite acceder a otros campos laborales ligados a la economía popular, donde forjan un sentido de pertenencia al espacio urbano ligado a la acción comunitaria. Si para algunas juventudes es mejor no habitar el barrio, para otras se trata de transformarlo a través del trabajo cooperativo. Estas prácticas dan cuenta de la importancia de las redes comunitarias para la generación de ingresos entre juventudes con “trayectorias rotas” debido a la persistencia del desempleo, la precariedad laboral y demás violencias en barrios marginalizados (Miranda, Arancibia y Fainstein 2021). También ponen en primer plano las desigualdades de género entre las juventudes, donde son las mujeres quienes con su trabajo apuntan a transformar el espacio que habitan desde una perspectiva feminista.

Apoyos

Este artículo es parte de una investigación doctoral en Antropología Social financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y desarrollada en la Universidad Nacional de San Martín. A su vez, fue llevada a cabo en el marco del Programa Migración, Género y Ambiente (Migrantes en Reconquista), de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, gracias al apoyo del International Development Research Center (Canadá).

Referencias

- Batthyány, Karina, y Agustina Sánchez. 2020. “Profundización de las brechas de desigualdad por razones de género: el impacto de la pandemia en los cuidados, el mercado de trabajo y la violencia en América Latina y el Caribe”. *Astrolabio* 25: 1-21.
<https://doi.org/10.55441/1668.7515.n25.29284>
- Beheran, Mariana. 2012. “Tratamientos a la población inmigrante en escuelas de nivel medio de Buenos Aires”. *Ánfora* 19 (32): 49-68. <https://doi.org/10.30854/anf.v19.n32.2012.69>
- Casal, Joaquim, Maribel García, Rafael Merino y Miguel Quesada. 2006. “Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la juventud desde la perspectiva de la transición”. *Revista de Sociología* 79: 21-48. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v79n0.798>
- Dinerstein, Ana Cecilia. 2016. “El trabajo en transición: multiplicación, reproducción social ampliada y reespecialización del trabajo”. Ponencia presentada en el VIII Congreso ALAST. Buenos Aires, 4 de agosto.
- Elizalde, Silvia. 2006. “El androcentrismo en los estudios de juventud: efectos ideológicos y aperturas posibles”. *Última Década* 14 (25): 91-110.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362006000200005>
- Elizalde, Silvia, y Carolina Álvarez Valdés. 2021. “Habitar los intersticios: retos a la investigación sobre género y juventud en clave feminista”. *Última Década* 29 (55): 197-222.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362021000100197>
- Gaitán, Ana Cecilia. 2019. “Construir ‘otra mirada’. Tensiones en la participación de jóvenes mujeres en una política social en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. En *¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis*, editado por Gerardo Gutiérrez Cham y Olaf Kaltmeier, 284-310. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Gallart, María Antonia. 2002. *Veinte años de educación y trabajo*. Montevideo: OIT / Cinterfor.
- García Borrego, Iñaki. 2003. “Los hijos de inmigrantes extranjeros como objeto de estudio de la sociología”. *Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales* 3: 27-46.
<https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3771>
- Gavazzo, Natalia. 2012. “Hijos de bolivianos y paraguayos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Identificaciones y participación entre la discriminación y el reconocimiento”. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires. <https://lc.cx/Wct3RS>
- Gavazzo, Natalia, y Débora Gerbaudo Suárez. 2024. “Acceder, habitar y crear la ciudad cuidadora: la participación comunitaria de distintas generaciones de mujeres migrantes en el área Reconquista de San Martín”. En *Migraciones y conurbano: territorio, institucionalidad y representaciones en contextos de desigualdades*, compilado por Brenda Matossian y Cecilia Melella, 231-254. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo Press.
- Gavazzo, Natalia, y Débora Gerbaudo Suárez. 2020. “Desigualdades generacionales y prácticas políticas en las juventudes migrantes paraguayas en Buenos Aires”. *Migraciones* 48: 133-160.
<https://doi.org/10.14422/mig.i48y2020.006>
- Gavazzo, Natalia, y Lucila Nejamkis. 2021. “‘Si compartimos, alcanza y sobra’. Redes de cuidados comunitarios entre mujeres migrantes del Gran Buenos Aires frente al covid-19”. *REMHU: Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana* 29: 97-120.
<https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006107%20>

- Gerbaudo Suárez, Débora. 2023. "Participación de jóvenes paraguayas en el feminismo popular de Argentina". *POLIS. Revista Latinoamericana* 22 (65): 214-247.
<https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/3095>
- Guber, Rosana. 2001. *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Norma.
- INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica). 2020. "Mujeres en la ETP: algunos datos sobre la participación de las mujeres en la secundaria técnica". Acceso el 12 de agosto de 2022.
<https://lc.cx/TotxeW>
- Jacinto, Claudia. 2004. "Ante la polarización de oportunidades laborales de los jóvenes en América Latina. Un análisis de algunas propuestas recientes en la formación para el trabajo". En *¿Educar para qué trabajo? Discutiendo rumbos en América Latina*, coordinado por Claudia Jacinto, 187-200. Buenos Aires: RedEtis.
- Jacinto, Claudia, Eugenia Roberti y Silvia Martínez. 2022. "Desigualdades multidimensionales en las trayectorias de jóvenes que egresaron de la educación técnica". *Profesorado* 26 (3): 101-124. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i3.22832>
- Lemmi, Soledad, Melina Morzilli y Ornella Moretto. 2018. "Para no trabajar de sol a sol: los sentidos de la educación en jóvenes y adultos/as integrantes de familias migrantes bolivianas hortícolas del Gran La Plata-Buenos Aires, Argentina". *Runa* 39 (2): 117-136.
<https://doi.org/10.34096/runa.v39i2.5188>
- Levitt, Peggy, y Nina Glick Schiller. 2004. "Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society". *International Migration Review* 38 (3): 1002-1039.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x>
- Llobet, Valeria. 2020. "Intersections, meanings and morals of care, violence and everyday life in the barrios. Is there more than a Janus' tale?". [Documento no publicado].
- Llobet, Valeria, y Nara Milanich. 2014. "La maternidad y las mujeres de sectores populares en las transferencias condicionadas de ingresos. Un aporte al debate sobre el cuidado y las relaciones de género". *Zona Franca* 22 (23): 58-69. <https://doi.org/10.35305/zf.v22i23.8>
- Lombardo, Sonia. 2022. "Principales características de la economía popular registrada". *Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas* 19: 1-83. <https://lc.cx/8sPfmA>
- Longa, Francisco. 2018. "¿Tirando viejos por la ventana? Militancia juvenil y gestión estatal en el Movimiento Evita de Argentina (2005-2015)". *Ánfora* 25 (45): 197-218.
<https://doi.org/10.30854/anf.v25.n45.2018.518>
- Magliano, María José. 2018. *Entre márgenes, intersticios e intersecciones: diálogos posibles y desafíos pendientes entre género y migraciones*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo Press.
- Mallimaci, Fortunato, y Verónica Giménez Béliveau. 2006. "Historia de vida y métodos biográficos". En *Estrategias de investigación cualitativa*, coordinado por Irene Vasilachis de Gialdino, 175-209. Buenos Aires: Gedisa.
- Martí Garro, Santiago. 2012. "La juventud descendiente de migrantes de Paraguay en Argentina". En *Ahata che: juventud, migración y género en el corredor paraguayo-argentino*, compilado por Ana Miranda, 245-295. Buenos Aires: FLACSO Argentina.
- Medan, Marina. 2014. "Distintos mensajes estatales en la regulación de la 'juventud en riesgo'". *Astrolabio* 13: 313-343. <https://doi.org/10.55441/1668.7515.n13.9011>
- Medan, Marina. 2013. "Prevención del delito y construcción de feminidades juveniles". *Revista de Ciencias Sociales* 2 (140): 73-83. <https://doi.org/10.15517/rcs.v0i140.12314>

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina

- Miranda, Ana. 2019. "Estrategias de emprendimientos productivos y economía social y popular para la generación de ingresos: juventudes, territorio y género". En *A golpes de presente, a gritos de futuro. Jóvenes, trabajo y violencias en América Latina*, compilado por Juan Pablo Pérez Sáinz, 159-196. San José: FLACSO.
- Miranda, Ana. 2012. "Introducción". En *Abata che: juventud, migración y género en el corredor paraguayo-argentino*, coordinado por Ana Miranda, 13-37. Buenos Aires: FLACSO Argentina.
- Miranda, Ana, y Agustina Corica. 2015. "Las actividades laborales y extraescolares de jóvenes de la escuela secundaria en la Argentina de principios del siglo XXI". *Perfiles Educativos* 37 (148): 100-118. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2015.148.49316>
- Miranda, Ana, María Cristina Cravino y Santiago Martí Garro. 2012. "Transiciones juveniles de migrantes paraguayos/as en la Argentina: condiciones de vida y vigencia de las redes". *Última Década* 20 (37): 11-39. <https://ultimadecada.uchile.cl/index.php/UD/article/view/56112>
- Miranda, Ana, y Milena Arancibia. 2017. "Repensar el vínculo entre la educación y el mundo del trabajo desde la perspectiva de género: reflexiones a partir de un estudio longitudinal en el Gran Buenos Aires". *Archivos Analíticos de Políticas Educativas* 25 (74): 1-22. <https://doi.org/10.14507/epaa.25.2907>
- Miranda, Ana, Milena Arancibia y Carla Fainstein. 2021. "Estrategias comunitarias de construcción de oportunidades de juventudes en situación de vulnerabilidad". *Revista Reflexiones* 100 (2): 139-165. <https://doi.org/10.15517/rr.v100i2.43796>
- Novaro, Gabriela, y María Laura Diez. 2021. "El programa Educación y Comunidad en la radio de la colectividad boliviana de Escobar: reflexiones metodológicas desde una experiencia colaborativa". Ponencia presentada en el XII Congreso Argentino de Antropología Social. La Plata, 12 de septiembre. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/132935>
- Olmedo, Mirtha. 2011. "Trayectoria migratoria: principales destinos y tipos de trabajos que desarrolla la juventud paraguaya en el exterior". En *Migrantes. Perspectivas (críticas) en torno a los procesos migratorios del Paraguay*, compilado por Gerardo Halpern, 83-94. Asunción: Ápe Paraguay.
- Pedelaq, Delfina. 2021. "Changuita Despierta: trabajo cooperativo y feminista". *Feminacida*, 13 de mayo. <https://www.feminacida.com.ar/changuita-despierta-trabajo-cooperativo-y-feminista/>
- Pedreño Cánovas, Andrés. 2010. "Carrera y fracaso en las trayectorias sociales de los hijos de migrantes". En *Tránsitos migratorios: contextos transnacionales y proyectos familiares en las migraciones actuales*, editado por Antonio García, María Montesinos y Andrés Pedreño, 205-230. Murcia: Universidad de Murcia.
- Portes, Alejandro, Patricia Fernández Kelly y William Haller. 2006. "La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta". *Migraciones* 19: 7-58. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/3082>
- Raggio, Liliana, y Horacio Sabarots. 2012. "Políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a juventudes vulnerables: continuidades y transformaciones en la última década". *Runa* 33 (1): 9-31. <https://doi.org/10.34096/runa.v33i1.337>
- Rajoy, Romina. 2019. "Las no blancas. Cuando ser mujer, pobre y migrante te convierte en un caso no atendible frente a las violencias de género y los sexismos". Ponencia presentada en las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales. Buenos Aires, 17 de septiembre.
- Rahman, Anisur, y Orlando Fals Borda. 1989. "La situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo". *Análisis Político* 5: 46-54.

- Rodríguez Enríquez, Corina. 2015. "Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad". *Nueva Sociedad* 256: 30-44. <https://lc.cx/mqkVDu>
- Soto, Clyde, Myrian González y Patricio Dobrée. 2012. *La migración femenina paraguaya en las cadenas globales de cuidados en Argentina: transferencia de cuidados y desigualdades de género*. Santo Domingo: ONU Mujeres.
- Serafini, Verónica. 2023. *Informe sobre juventud en el Paraguay: insumos para una política pública de juventud*. Asunción: Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0005217>
- Tabbush, Constanza. 2009. "The possibilities for and constraints on agency: situating women's public and 'hidden' voices in greater Buenos Aires". *Journal of International Development* 21 (6): 868-882. <https://doi.org/10.1002/jid.1624>
- Trpin, Verónica. 2004. *Aprender a ser chilenos: identidad, trabajo y residencia de migrantes en el Alto Valle de Río Negro*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Vázquez Laba, Vanesa, Belén López y Romina Rajoy. 2018. "Las consejerías territoriales como espacios de decisión colectiva. La organización de las mujeres frente al embarazo no deseado y la violencia de género". *Papeles de Trabajo* 12 (22): 126-140. <https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/article/view/749>
- Vázquez, Melina, y Mariana Liguori. 2018. "La gestión estatal de juventudes durante la vuelta a la democracia en Argentina: agendas, escenarios y actores (1982-1987)". *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales* 15: 1-23. <https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/79141>
- Vommaro, Pablo. 2015. *Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina: tendencias, conflictos y desafíos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Vommaro, Pablo, y Arley Giovanni Daza. 2017. "Politizaciones generacionales y procesos de territorialización en las periferias urbanas: la experiencia del sur del gran Buenos Aires entre los años ochenta y la actualidad". *Última Década* 25 (47): 44-82. <https://ultimadecada.uchile.cl/index.php/UD/article/view/48530>
- Zenklusen, Denise. 2018. "Trayectorias situadas. Una aproximación a la experiencia de jóvenes peruanos/as que residen en Córdoba, Argentina, desde una perspectiva de género". En *Entre márgenes, intersticios e intersecciones: diálogos posibles y desafíos pendientes entre género y migraciones*, compilado por María José Magliano, 25-54. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo Press.

Entrevistas

- Entrevista a Lennis, Villa Ballester, 28 de noviembre de 2019.
- Entrevista a María, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020.
- Entrevistas a Nicolás, barrio Costa Esperanza, 8 de enero de 2021.
- Entrevista a Sabrina, Costa Esperanza, 6 de octubre de 2019.
- Entrevista a Zulma, Costa Esperanza, 14 de febrero de 2020.
- Entrevistas a Ezequiel y Leonardo, barrio Costa del Lago, 8 de febrero de 2021.

Cómo citar este artículo:

Gerbaudo-Suárez, Débora. 2025. "Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas en sectores populares de Argentina". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 33-50. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6222>

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

*Labor identity and professional internships in Chile:
Experiences in secondary technical education*



 Dr. Leandro Sepúlveda-Valenzuela. Investigador. Universidad Alberto Hurtado (Chile).
(lesepulv@uahurtado.cl) (<https://orcid.org/0000-0001-9173-7275>)

 Dra. María José Valdebenito-Infante. Investigadora. Universidad Alberto Hurtado (Chile).
(mavaldeb@uahurtado.cl) (<https://orcid.org/0000-0002-9231-188X>)

Recibido: 05/05/2024 • Revisado: 16/07/2024
Aceptado: 15/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

Los estudios sobre la transición sistema educativo-trabajo tradicionalmente se han centrado en las formas en que los y las jóvenes movilizan sus capitales y se adaptan a las condiciones que ofrecen los distintos espacios laborales. Sin embargo, también resulta importante considerar la incidencia del trabajo y de la vida laboral en la reelaboración de las subjetividades y de las relaciones sociales de las nuevas generaciones en los lugares donde inician su experiencia profesional. En este artículo se analiza esta preocupación a partir de la incidencia de la práctica profesional en la educación técnica secundaria en Chile. Los dispositivos institucionales de intermediación y los agentes que participan en su implementación juegan un rol relevante en la transición educación-trabajo, pero, paradójicamente existe escasa investigación sobre estos actores, acerca de los procesos y de casi todo lo relacionado con sus logros y debilidades. Se ahonda en este tema mediante un enfoque cualitativo en una muestra de establecimientos educativos técnico-profesionales en Santiago de Chile. Con base en entrevistas semiestructuradas a docentes y a egresados y egresadas, se describen los principales mecanismos de gestión de las prácticas profesionales. Se concluye que, si bien son criticables las condiciones de implementación, existe una alta valoración de estas prácticas como inducción al mundo del trabajo, especialmente por el aprendizaje social contenido en tales experiencias.

Descriptores: docentes; educación técnico-profesional; estudiantes; práctica profesional; subjetividades; transición educación-trabajo.

Abstract

Studies on the education-work transition have traditionally focused on the ways in which young people mobilize their capital and adapt to the conditions offered by distinct workplaces. However, it is also important to consider the impact of work and working life on the transformation of the subjectivities and social relations of new generations in the places where they begin their professional experience. This article analyzes this issue based on professional internships in secondary technical education in Chile. Institutional intermediation mechanisms and the agents that participate in their implementation play a significant role in the education-work transition, but, paradoxically, there is little research on these actors, on the processes and on almost everything related to their achievements and weaknesses. This topic is explored through a qualitative approach in a sample of technical-professional educational establishments in Santiago, Chile. Based on semi-structured interviews with teachers and graduates, the main mechanisms of management of the professional internships are described. It is concluded that, although the conditions of implementation are open to criticism, there is a high valuation of these internships as an induction into the world of work, especially because of the social learning that such experiences entail.

Keywords: teachers; vocational-professional education; students; professional internship; subjectivities; education-work transition.

1. Introducción

Pese al incremento de los años de escolaridad y a la tendencia a una reducción de la tasa de abandono temprano de la educación formal, la incorporación al mercado del trabajo sigue siendo una tarea de difícil resolución para las juventudes en América Latina. Prevalece un contexto de incertidumbre y fragmentación y se mantienen los déficits estructurales del empleo juvenil (Corica, Freytes y Miranda 2018). La precariedad de los mercados laborales, la todavía persistente desigualdad en la división sexual del trabajo y la inadecuación de las credenciales educativas respecto a la demanda socioproductiva son algunos de los problemas que inciden en esta situación (Gontero y Weller 2019).

Además, la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 incidió negativamente en esta situación, elevando la tasa de desocupación juvenil en el año 2020 casi un 3 %; se alcanzó un 23,2 %, es decir, casi uno de cada cuatro jóvenes que participaba en el mercado laboral en ese periodo se encontraba desocupado (OIT 2020). De acuerdo con algunos análisis a partir de datos agregados, durante la fase de recuperación pospandemia los y las jóvenes regresaron al empleo de manera más rápida que las personas adultas (Maurizio 2022). Sin embargo, las brechas han persistido: en 2023 mientras que la tasa de ocupación de la población adulta alcanzaba el 62,3 %, en los jóvenes solo llegaba al 41 %. La tasa de desocupación juvenil alcanzó al 14,4 % (alrededor del 20 % en algunos países, algo similar a lo que se registra en los países del Cono Sur de América Latina) y la tasa de informalidad llegó al 58 %, un 13 % más que en la población adulta (OIT 2023).

En este escenario, la consideración de los factores que facilitan o dificultan la transición al mercado laboral de las nuevas generaciones resulta particularmente relevante. La formación de las personas jóvenes para que puedan acceder al mercado de trabajo es una preocupación central de los Gobiernos y motivo de políticas específicas, toda vez que el quehacer laboral es considerado un elemento clave en la transición hacia la adultez. A través del proceso de inserción laboral los y las jóvenes no solo consiguen un empleo, también acceden a una experiencia de integración social, ampliando las redes de contacto y la interacción con sujetos diversos que, por lo menos potencialmente, fortalece el desarrollo de la ciudadanía y el progreso material (OIT 2010).

En los recientes debates sobre política pública se ha reemplazado el concepto de inserción laboral por el de inclusión laboral, que se entiende por “un componente del desarrollo social inclusivo que busca que todos los integrantes de la fuerza laboral puedan acceder a trabajos decentes, que aseguren niveles adecuados de remuneración y cobertura de la protección social” (CEPAL 2023, 94). Debido a su carácter prescriptivo, en este artículo se mantendrá el concepto de inserción laboral que se ha empleado en el campo de la sociología en los últimos años (ver Verdier y Vultur 2018).

Sin embargo, en este contexto, los estudios de las últimas décadas sobre el proceso de inserción laboral de las nuevas generaciones han enfatizado en una mirada crítica al modelo normativo lineal de la experiencia de transición de las nuevas generaciones, advirtiendo acerca de la complejidad y la heterogeneidad de esta experiencia (Miranda 2015). La prolongación de los estudios y el rol predominante de la familia, en cuanto soporte de las transiciones, se convierten en una característica extendida de esta época y evidencian la dificultad de alcanzar la autonomía plena de los sujetos en el marco de mayores incertidumbres (Abramo et al. 2021).

Los estudios sobre la transición de la juventud han centrado su preocupación, entre otros aspectos, en el desajuste que se verifica entre la subjetividad de los y las jóvenes y la realidad del mercado laboral condicionado por cambios en los ciclos económicos a nivel regional (Morales y Van Hemelryck 2022; Weller 2007), y también en las formas en que la juventud moviliza sus capitales y se adapta a las condiciones del entorno de trabajo en un proceso de incorporación al mercado laboral que se caracteriza por presentar una gran heterogeneidad e inestabilidad de las trayectorias (Chesters 2020; Bynner 2013). Con todo, un ámbito que ha merecido menor atención corresponde al análisis de las instancias o mecanismos que sirven de intermediación entre los procesos educativos en el espacio escolar y el inicio de la experiencia laboral de los y las jóvenes.

Dubar (2001) señala que en la experiencia de inserción laboral la existencia de un nuevo espacio posescolar, intermediario entre la escuela y la empresa, constituye una realidad relativamente reciente en nuestras sociedades y que no responde únicamente a un proceso de adecuación entre la formación recibida y el empleo. Es un espacio que se asocia a una nueva edad (que el autor denomina posadolescencia) y donde los sujetos toman diversas decisiones respecto a su vida y a sus relaciones sociales. En este artículo sostendremos que la existencia de los mecanismos de intermediación o dispositivos de vinculación educación-trabajo (Millenaar et al. 2016; Jacinto 2013) resultan de gran relevancia en este proceso, pues tienen consecuencias significativas en las trayectorias futuras de los y las jóvenes aprendices.

En el caso chileno, uno de esos dispositivos corresponde a la práctica laboral que realizan los estudiantes de la enseñanza media técnico profesional (EMTP) al finalizar su periodo formativo en sus respectivos centros educacionales. En la actualidad, alrededor de 160 000 jóvenes cursan la enseñanza técnica, lo que corresponde a casi el 38 % del total de la matrícula de los dos últimos años de enseñanza secundaria.¹ Distribuidos preponderantemente en especialidades del área industrial, educación, salud y el sector de administración y comercio,² los estudiantes de la EMTP deben realizar una práctica profesional antes de su egreso del sistema escolar y de su incorporación a la vida laboral, más allá de si esta se combina o no con la realización de

1 La educación técnica en Chile corresponde a una propuesta curricular integrada en el plan educativo de los dos últimos años de educación secundaria y contempla un plan de formación diferenciado que corresponde al 50 % del total de horas pedagógicas obligatorias.

2 El actual marco curricular de la EMTP reconoce la existencia de 15 sectores productivos, 35 especialidades y 17 menciones dentro de estas. Sin embargo, la matrícula se concentra mayormente en un grupo reducido de especialidades.

estudios postsecundarios en los años posteriores a la finalización de su escolaridad obligatoria. Aunque la gran mayoría de los egresados de la EMTP realizan su práctica profesional, casi un 50 % continúa estudios superiores en los años posteriores al término de su educación secundaria (MINEDUC 2020).

Entonces, ¿en qué consisten y de qué manera se implementan estas prácticas profesionales?, ¿qué incidencia tienen para la construcción de la identidad de los y las jóvenes en su transición al mercado laboral?, ¿cuál es la incidencia de esta experiencia en la elaboración de los proyectos de las juventudes? Estas son las principales preguntas que se abordan en este artículo. Aunque el modelo de práctica profesional adolece de una serie de deficiencias y presenta limitaciones institucionales y de coordinación entre los actores educativos y productivos, constituye, pese a estas restricciones, una experiencia de socialización sociolaboral altamente valorada por docentes y egresados de la educación técnica secundaria.

En este espacio no solo es posible poner en práctica aprendizajes de las especialidades cursadas en los centros educativos, sino que representa una instancia de apertura y reconocimiento de la vida laboral concreta y de las interacciones que ocurren en su interior, que constituyen una experiencia de aprendizaje social y emocional de gran relevancia para los y las jóvenes aprendices. La consideración de los factores culturales que enmarcan las actividades del espacio postescolar ha sido débilmente abordada en la investigación en esta área. Sin embargo, su consideración permitiría el levantamiento de evidencia novedosa para las políticas educativas y de transición al mercado laboral, permitiendo abordar, de una manera más compleja, las tareas de apoyo a las trayectorias de las nuevas generaciones en proceso de llegar a la adultez. Este artículo intenta ser un aporte en esta dirección.

2. Perspectiva analítica

La educación técnica profesional tiene entre sus fines la formación de conocimientos generales y específicos de una disciplina o especialidad, el despliegue de las capacidades que facultan el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de una identidad profesional (Achtenhagen y Grubb 2001; Geijsel y Meijers 2005). Aunque la propuesta formativa alterna distintas estrategias y su integración se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, el mecanismo más reconocido para el logro de este objetivo corresponde a las prácticas profesionales en los lugares de trabajo.

Las prácticas profesionales han sido valoradas por sus amplias potencialidades formativas. Gallart (2006) sostiene que permiten la incorporación de hábitos y saberes del mundo laboral, posibilitando la activación de las subjetividades y favoreciendo la búsqueda de intereses propios en los estudiantes. Se trata de un dispositivo que, al situar a los y las jóvenes en un contexto distinto al escolar, brinda una

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

nueva aproximación a la construcción de los saberes de las especialidades cursadas, potenciando nuevas comprensiones que van más allá del conocimiento disciplinar (Jacinto y Dursi 2010). Estas prácticas³ habilitan a los y las estudiantes a explorar nuevas aristas de sus experiencias educativo-laborales y favorecen una reflexión sobre sí mismos y de las propias trayectorias que están y que deben seguir desarrollando (Martínez, Garino y Fernández 2020).

Asumiendo el reconocimiento de estas potencialidades, las evidencias en torno a la manera en que los y las estudiantes integran los nuevos conocimientos y capacidades de manera coherente son exiguas y plantean incertezas (Schaap, Van der Schaaf y De Bruijn 2011). Algunos de los hallazgos, entre ellos los que reporta Boshuizen (2003), indican que existiría una distancia entre el razonamiento utilizado en las escuelas técnicas y el de los lugares de trabajo, lo que afectaría una articulación virtuosa entre ambas instancias. Stavenga-De Jong, Wierstra y Hermanussen (2006), señalan que existiría una débil relación entre los estilos de aprendizaje utilizados en las escuelas técnica y en las organizaciones laborales. Aun cuando en las escuelas técnica prima un aprendizaje de carácter reflexivo, este se caracteriza por ser eminentemente pasivo. En los lugares de trabajo, por su parte, prevalece un aprendizaje activo basado en el hacer, pero de carácter reproductivo.

Estas diferencias, sumadas a las dificultades que existirían en los espacios laborales para generar instancias de reflexión cotidiana que habiliten a quienes realizan prácticas para tomar conciencia de los procesos que llevan a la adquisición de conocimientos y habilidades, incrementan las complejidades para producir una experiencia de aprendizaje significativo (Baartman y De Bruijn 2011). Aun cuando la evidencia no es clara respecto a la integración de competencias y aprendizajes, en algunos estudios existen pruebas más auspiciosas en torno al desarrollo de habilidades relacionales y a los procesos identitarios que se producen en la experiencia de los practicantes.

Desde la perspectiva de Colley et al. (2003), las prácticas profesionales son un espacio privilegiado para la socialización anticipatoria. En este proceso, los y las estudiantes desarrollan un conocimiento compartido vinculado a los valores, a las normas y a las creencias colectivas de una determinada comunidad. Jacinto y Dursi (2010), plantean que las prácticas profesionales orientan a los jóvenes a desentrañar la forma en que se conectan sus intereses en espacios donde se conjugan otras racionalidades. Se trata de una instancia en que la alteridad se expresa de manera diferente, haciendo posible que el otro se manifieste en la experiencia de los y las jóvenes, ampliando el marco de referencia identitario común que representa la experiencia escolar. Además, estos son espacios para que los y las jóvenes puedan pensar y proyectar su tiempo futuro y construir otras perspectivas sobre sus propias trayectorias de formación. Desde

3 De acuerdo con Jacinto (2018a), en la mayoría de los países de América Latina existe algún dispositivo de práctica profesional destinado a cumplir la tarea de vincular la educación y el trabajo. En el caso argentino, el uso del concepto práctica profesionalizante resulta aún más sugerente del carácter transicional de esta experiencia destinada a favorecer el acceso a lo profesional.

esta perspectiva, los y las estudiantes pueden encontrar en la práctica un espacio para reflexionar sobre su propio recorrido, generándose una especie de condensación de la trayectoria escolar y de los aprendizajes previos (Martínez, Garino y Fernández 2020).

En este marco, las prácticas profesionales estarían remitiendo a la noción de ventanas de aspiraciones acuñada por Ray, quien expresa que en estas los individuos se autoimponen restricciones y sopesan las probabilidades de lograr ciertas metas a partir, fundamentalmente, de la observación de otros (Ray 2003). Si bien los valores y las disposiciones de un individuo, sus capitales y recursos, su contexto social y sus influencias culturales e institucionales son los factores predominantes en la construcción de sus aspiraciones, existirían ventanas de naturaleza relacional, entre las que se encuentran las prácticas profesionales, que pueden convertirse en escenarios relacionales virtuosos que posibilitarían, por lo menos potencialmente, la activación de otras capacidades distintas a las derivadas de su experiencia previa.

Ahora bien, Colley et al. (2003) postulan que estos procesos no ocurren de manera espontánea, sino que requieren ser guiados para influir en los horizontes de acción de los y las jóvenes. Es más, se sugiere que este aprendizaje que debiese ser consciente y dirigido a un objetivo, muchas veces es incidental, no planificado o inconsciente. Los valores y las predisposiciones, al igual que la presencia o ausencia de hechos concretos que producen valores particulares, prefiguran a estas experiencias en procesos interactivos que requieren ser guiados (Lareau y Horvat 1999; Marjoribanks 2002). Rush et al. (2011), establecen que dicho entorno de aprendizaje debe ser seguro y orientado a la retroalimentación. En tal sentido, se plantea la necesidad de propiciar ambientes inclusivos y basados en interacciones positivas (Johnson, Starobin y Santos Laanan 2016) donde la figura del tutor que facilite el proceso y que asuma el seguimiento pedagógico necesario para el aprendizaje se vuelve determinante.

Los estudios realizados en Latinoamérica sobre las prácticas profesionales demuestran ciertas limitaciones para alcanzar estas condiciones. Las evidencias ponen de manifiesto que este es un dispositivo que, aunque detenta una alta valoración por parte de los y las estudiantes, posee un bajo grado de institucionalidad en la mayoría de los países. La existencia de una institucionalidad más fuerte para articular el campo formativo con el trabajo sin duda favorece el logro de mejores experiencias de aprendizaje situado, al igual que sucede con las iniciativas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia o el Sistema S en Brasil.⁴ Sin embargo, en otros países entre los que se encuentran Chile (Sevilla 2017), Argentina (Pozzer 2016) o Ecuador (Tomaselli 2018), las principales tensiones se asocian a debilidades de articulación entre los planes de aprendizaje de las escuelas y las empresas, a una baja capacidad para hacer un

⁴ El Sistema S es un conjunto de instituciones que están a cargo de la coordinación, supervisión y fortalecimiento de la educación técnica vocacional en Brasil: Servicio Social de la Industria (SESI), Servicio Social del Comercio (SESC), Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (SENAR). Para una revisión de la institucionalidad de la formación técnico profesional en estos países, ver García (2016) para el caso de Colombia y Nogueira et al. (2021) para el caso brasileño.

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

seguimiento a las estrategias de apoyo, sumado a un bajo nivel de estandarización de la formación en las empresas y a una baja estima sociocultural del empresariado hacia la educación técnica (Pilz y Wiemann 2020).

A esto se agregan las complejidades en las estructuras de gobierno interno de las escuelas. La inexistencia de una estructura de gobernanza orientada a favorecer la relación escuela-trabajo se agrava todavía más con la existencia de modelos de gobernanza delegativa en los establecimientos educativos. Estudios exploratorios sobre este ámbito han reconocido que la gestión de las prácticas se realiza de manera parcelada o desvinculada del resto de las temáticas tradicionales al interior de los establecimientos y posee escasos soportes institucionales (Sepúlveda y Valdebenito 2019).

3. Metodología

El material que sirve de base para este artículo corresponde a datos generados de dos investigaciones en curso y que buscan indagar en las subjetividades implicadas en la experiencia educativo-laboral, en los contextos de formación e incidencia de agentes educativos y en la situación de egreso de jóvenes que cursan la educación media técnica profesional en Chile. Para tal efecto, se seleccionó una muestra de 10 establecimientos educativos que imparten educación técnica en Santiago de Chile y que en su oferta formativa incluyen las especialidades que concentran el grueso de la matrícula del estudiantado. De igual modo, se consideró tomar en cuenta, de manera proporcional, centros educativos de las tres modalidades de dependencia administrativa existentes a nivel nacional: establecimientos públicos, con una matrícula del 47,4 %, centros particulares que reciben subvención del Estado (41,8 %) y establecimientos entregados en comodato a corporaciones privadas empresariales (10,8 %).

A partir de lo anterior, la muestra incluyó cuatro establecimientos de dependencia municipal (públicos), cuatro centros particulares subvencionados y dos centros educativos de administración delegada. Las especialidades impartidas incluyeron administración y comercio, metalmecánica, electricidad, construcción, salud y educación, que en su conjunto concentran un poco más del 70 % del total de la matrícula de la educación técnica de nivel secundario.

En cada centro educativo se entrevistó a un encargado de prácticas profesionales o profesor tutor responsable del seguimiento de los y las jóvenes en los lugares de trabajo. De igual modo, a partir de los datos de contacto institucionales, se identificó un mínimo de dos egresados para ser entrevistados en relación con su experiencia de práctica profesional; el número total de entrevistados ascendió a 16. Las entrevistas a los tutores de prácticas se realizaron en los establecimientos educativos y se centraron en la modalidad de gestión de las prácticas, en la relación con las empresas u otros

lugares de trabajo y en la percepción de la utilidad y sentido de esta experiencia para el proceso formativo del estudiantado.

En el caso de las personas que se graduaron, las entrevistas tuvieron un énfasis retrospectivo y se ahondó en la reflexión y evaluación de la experiencia y el grado de utilidad otorgado a la situación actual por cada persona entrevistada. Las entrevistas tuvieron una duración variable entre 40 y 60 minutos y fueron grabadas y transcritas en su totalidad. El análisis de este material se realizó sobre la base de los principios de la teoría fundamentada, orientados a generar conceptos que sintetizan la información más relevante mediante codificación abierta, luego se llevaron a cabo análisis de “comparaciones constantes” con el objetivo de dar consistencia a los conceptos emergentes respecto al tema de interés, y así favorecer su transversalidad (Gibbs 2012).

Aunque preliminarmente se previó que los resultados evidenciaran diferencias en relación con los criterios definidos en la selección de la muestra, el proceso de análisis del material evidenció la similitud de las orientaciones discursivas de los actores entrevistados, independientemente de las características de los centros educativos, del área de especialidad en que se desempeñaban o de los lugares donde los y las estudiantes realizaron sus prácticas. A partir de lo anterior, los resultados que se presentan en la siguiente sección constituyen tendencias transversales, pues se identifican de manera puntual algunos matices o sesgos en función del contexto de referencia.

58

4. Análisis y resultados

A partir de lo señalado anteriormente, en este apartado se presentan los principales resultados del análisis del material recogido durante las entrevistas. Los antecedentes se organizan en dos subapartados que reúnen la visión de los y las docentes y de egresados y egresadas de la EMTP con respecto a la experiencia de las prácticas profesionales.

Visión de los y las docentes

La práctica profesional corresponde al último hito del proceso formativo de los y las estudiantes de educación técnica secundaria y constituye el paso necesario para obtener el título de técnico de nivel medio. Por tanto, se trata de un periodo de estancia en una empresa u otro centro laboral reconocido y validado por las autoridades educativas y donde él o la estudiante realiza un plan formativo de un mínimo de 180 horas cronológicas. Aunque, vale aclarar que anteriormente este mínimo de horas exigible era de 360, pero a partir del año 2020 debido a la pandemia de la covid-19 se redujo a la cantidad actual.

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

Para el cumplimiento de las exigencias curriculares de la educación técnica, la mayoría de los establecimientos educativos chilenos cuentan con un plan de formación que regula las experiencias de práctica profesional de sus estudiantes. Sin embargo, en el caso de los centros educativos de carácter público la construcción de vínculos con las empresas o con otros actores socioproductivos relevantes para la colocación de los y las jóvenes, recae fundamentalmente en los propios docentes y se sustenta en los contactos personales o en redes que estos han construido durante su vida profesional.

Debido a esta situación, en muchas oportunidades no es posible la colocación de todos los estudiantes en espacios laborales y deben gestionar o ayudar a buscar otros lugares donde potencialmente puedan ser aceptados. De hecho, la normativa vigente posibilita que el propio estudiante proponga y gestione su ingreso a una empresa o lugar de trabajo (Sevilla 2017). Existen diversos testimonios de jóvenes que recurren a este procedimiento para acelerar la realización de su práctica profesional ante las dificultades que tienen los centros educativos para facilitar su colocación en un tiempo oportuno. Por regla general, esta experiencia se lleva a cabo en el periodo estival, al finalizar los estudios formales del último año de educación obligatoria y consiste en una estadía en el lugar de trabajo donde, en lo posible, se cumpla con un plan de rotación que permita el ejercicio de competencias contenidas en el plan de estudio de las respectivas especialidades, supervisada por un profesor tutor.

Al igual que en otros sistemas de pasantía en lugares de trabajo, los centros educativos solicitan a las empresas la formalización de la figura del maestro guía, que corresponde a la persona que favorece la inducción de los y las estudiantes a las rutinas y actividades propias de su desempeño disciplinar. El maestro guía debe facilitar, orientar y evaluar el desempeño del estudiante en práctica dentro de la empresa; y cuando finaliza su periodo de permanencia tutelada, el profesor tutor certifica el proceso realizado a partir de la información proporcionada por el maestro guía.

En la gran mayoría de las entrevistas realizadas se advierte que la contraparte del espacio laboral no recibe ninguna formación o capacitación para el desempeño de su rol y que tampoco el grueso de las empresas generan condiciones institucionales mínimas para favorecer un proceso formativo de los y las estudiantes durante su experiencia de pasantía. Y aunque las personas entrevistadas revelan la importancia que debería tener el seguimiento del proceso, este resulta particularmente acotado debido al momento del año en que ocurre, coincidente con las vacaciones de verano.

Los alumnos egresados generalmente parten a su práctica en el periodo de enero y febrero, pleno periodo de vacaciones. Se presenta el inconveniente de poder hacer un seguimiento, puesto que hay un solo encargado de práctica del área y una cantidad enorme de alumnos que están en distintos lugares porque cada empresa tiene su alumno, eso hace muy difícil hacer la fiscalización o evaluación del joven en el terreno (entrevista a docente del área de Administración, octubre de 2023).

Para algunos docentes entrevistados lo anterior también se complejiza cuando los y las estudiantes ingresan a empresas o a espacios laborales donde no están asegurados los procedimientos de acogida o de acompañamientos adecuados al perfil de aprendiz que tiene la figura del practicante. Esto ocurre con mayor frecuencia en los casos donde la capacidad institucional de articulación con el mundo productivo se ve limitada, sin que exista la posibilidad de construir compromisos de colaboración entre los actores educativos y socioproductivos. La dificultad de no controlar el espacio de práctica se refleja en el siguiente testimonio de un docente que se desempeña en el área de la formación industrial.⁵

La mayoría de los maestros en los talleres es gente antigua, gente que no tiene una preparación y que aprendió más con el trabajo a través de toda su vida, pero esos maestros viejos también tienen mañas, tienen defectos también en el trato, en la forma de relación entre ellos y esos defectos de repente los chiquillos los absorben. Entonces cuesta cumplir con el objetivo de formación que debería tener la práctica (entrevista a docente del área de Metalmecánica, noviembre de 2023).

En consideración con tales obstáculos sería previsible una evaluación y disposición negativa de los y las docentes respecto a la realización de la práctica profesional, pero esto no ocurre en el caso de las personas entrevistadas. ¿Qué explica la valoración generalizada que tienen los y las docentes respecto a este dispositivo?

El lugar de trabajo constituye, desde el discurso de los y las docentes, un espacio fundamental para lograr consolidar los aprendizajes que establecen los planes y programas de las distintas especialidades que cubren la enseñanza técnica de nivel secundario. Es en ese espacio donde se pondría en práctica lo aprendido en el aula o en el taller del centro escolar, permitiendo a los y las estudiantes experimentar situaciones reales y que ayudan a fortalecer las competencias y habilidades requeridas para hacer frente a la vida laboral y lograr una adecuada transición hacia el mundo del trabajo.

Dado que la mayoría de los establecimientos educativos en Chile no cuentan con un plan de formación por alternancia en los dos años de enseñanza lectiva, la práctica profesional constituye un momento clave para el “aprendizaje informal” (De Ibarrola 2004). O sea, un aprendizaje donde los individuos adquieren habilidades y conocimientos de su experiencia en el lugar en el que se desenvuelven y que depende, fundamentalmente, del vínculo que establecen con otros, del acompañamiento en el desempeño de distintas funciones, o en un sentido más general, de ser parte de una comunidad de práctica. Puesto que el aprendizaje informal no significa aprender informalmente, sino que se trata de un aprendizaje en una situación y escenario distinto al del aprendizaje tradicional (De Ibarrola 2016).

5 Por lo general las prácticas educativas en el área industrial se realizan en empresas pequeñas o medianas donde no existe un soporte de apoyo más allá del que brinda la figura del maestro guía. Lo anterior dificulta el cumplimiento de un plan de rotación en tareas diversas o en fases productivas al interior de las empresas.

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

El aprendizaje situado, que remite a la relevancia del contexto sociocultural para la adquisición y consolidación de las habilidades y competencias de los individuos (Lave y Wenger 1991), constituye un principio compartido por el conjunto de docentes y hace de la práctica laboral un momento clave en el proceso transicional que experimentan los y las jóvenes al finalizar sus estudios formales. Aunque en las entrevistas se destacó que pese a las limitaciones de seguimiento y, muchas veces, a las inadecuadas condiciones de incorporación de sus estudiantes, la práctica profesional tiene una importancia capital para completar la adquisición no solo de las competencias propias del área disciplinar en que cada estudiante ha sido formado. Además, los y las docentes destacan que se trata de una instancia de aprendizaje social que incluye el reconocimiento de las formas organizativas en los lugares de trabajo, el desarrollo personal en la función laboral y la adquisición de competencias blandas necesarias para el desempeño profesional.

El estudiante accede a una experiencia laboral, conoce cómo es el proceso de la empresa, el área productiva, qué es lo que se necesita, cómo trabaja la gente, los requerimientos que se necesitan. Entonces eso es bastante beneficioso para él; aprenden a relacionarse con las demás personas, la relación con el jefe, con el compañero. No sé, adquieren más responsabilidad, dirigirse a otras personas que ellos nunca han visto, coordinar un trabajo. Porque ya lo técnico, lo que saben, ya lo saben acá en el liceo, entonces el implementarlo en terreno, ahí es donde ellos aprenden más (entrevista a docente del área de Construcción, noviembre de 2023).

61

En efecto, las personas entrevistadas atribuyen un rol fundamental a la dimensión actitudinal en este proceso, y eso ocurre independientemente del área productiva y del contexto laboral donde se realiza la práctica. Cuestiones entre las que sobresalen desarrollar habilidades interpersonales, la puntualidad y la responsabilidad en los quehaceres laborales son, entre otros, aprendizajes necesarios y que solo se verificarían de manera plena en el lugar de trabajo. En algunos casos, esto adquiere incluso más relevancia que el desarrollo de los conocimientos disciplinares o de las competencias profesionales más específicas.

De hecho, en las entrevistas buena parte del personal docente percibe que los actores del mundo productivo circunscriben sus demandas a este tipo de competencias, mayormente funcionales al requerimiento de un buen trabajador; o sea, aquel que expresa conductas apropiadas en el lugar de trabajo, sobre todo cuando la actividad laboral se restringe al desarrollo de algunas tareas específicas que pueden ser aprendidas a través de un adiestramiento en un periodo relativamente corto de tiempo, algo que se destaca en las áreas de tipo industrial. Es importante recalcar la particularidad de que se trata de aprendices recién egresados, por lo que es posible que la disposición hacia ellos y ellas minimice su capacidad de hacerse cargo de tareas más complejas, lo que puede reforzar el discurso que privilegia los aspectos actitudinales de su formación laboral.

Y donde nosotros mandamos a los chiquillos a hacer la práctica muchas veces nos dicen eso, o sea “usted enséñele a cumplir horarios, y el resto se lo hago yo aquí”. Porque enseñarle a manejar una máquina nueva en una semana se puede lograr para la actividad que el empresario lo quiere. Pero la parte de cumplir horarios, el buen trato, que ayude a cuidar las cosas en la empresa y que esté en un buen clima laboral, eso es difícil. Además, que el empresario no tiene tiempo para hacer eso, dice simplemente “este me sirve”, “este no” (entrevista a docente del área de Metalmecánica, noviembre de 2023).

De este modo, aunque la práctica profesional sería una instancia destinada a validar los aprendizajes adquiridos por los y las estudiantes durante su periodo de formación en la especialidad cursada, en sentido estricto, los y las docentes a su cargo resaltan la importancia de que en esta instancia los y las jóvenes experimenten la realidad del entorno laboral y que esta experiencia represente una inducción a la cultura del mundo del trabajo en sus respectivas especialidades.⁶ Tal experiencia, desde el discurso transversal de los agentes educativos, enmienda las debilidades de operación que presentan las instituciones educativas y las precarias condiciones de integración y el débil apoyo formativo complementario que evidencian la mayoría de los centros de práctica profesional.

62

Visión y experiencia de egresados y egresadas

Uno de los primeros elementos que emerge en el discurso de las personas egresadas que fueron entrevistadas en el marco de este estudio corresponde a la alta significación otorgada a las prácticas profesionales, independientemente del área formativa o de las condiciones de realización de estas. La práctica constituye un momento transicional que da inicio a un nuevo ciclo hacia la consolidación personal y profesional de los y las jóvenes. Y a pesar de que en los relatos se pone de manifiesto el efecto de las grietas institucionales en los procesos de aprendizaje y en las experiencias al interior de las empresas, se reconoce también que el tránsito por esta experiencia tiene una transcendencia relevante en la vida de los y las estudiantes-practicantes.

En las entrevistas se reveló que una de las grietas corresponde a la búsqueda e identificación del lugar de práctica profesional, pues se trata de uno de los momentos gravitantes asociado a este ciclo transicional. Las experiencias de exclusión y las dinámicas de competencia se vuelven manifiestas para los y las jóvenes desde el momento en que se toma contacto con el mundo productivo. La búsqueda del lugar de práctica es para ellas y ellos una experiencia individual compleja por la

⁶ Es interesante notar que una orientación como esta, aunque sea solo discursivamente, sirve para hacer frente al desajuste o a la inadecuación del sistema formativo respecto al productivo, situación que ha caracterizado el campo de la educación para el trabajo en la región en las últimas décadas. Al respecto ver Jacinto (2018b).

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

emergencia de barreras de acceso existentes o por las debilidades institucionales para gestionar adecuadamente la colocación del estudiantado en distintos espacios laborales. Pero esto no es solo aplicable al caso chileno, Gluz et al. (2021) reportan una situación similar en un estudio realizado en tres provincias argentinas sobre las prácticas profesionalizantes de la educación técnica secundaria. Ante las dificultades de colocación de practicantes, criterios como el “mérito” son esgrimidos por autoridades o por agentes educativos para la colocación segmentada de jóvenes en espacios laborales.

La inexistencia de procesos institucionales de distribución y asignación de prácticas conlleva a que gran cantidad de jóvenes se vean sometidos a una búsqueda laboral anticipada, en la que prima la escasez de información y de capitales sociales que les den soporte. “Postulé a varias empresas porque el liceo me estaba buscando una práctica, pero no pasaba nada. Me llamaron de una sola empresa que era de litio, era para arriba. De todos los postulantes quedaron dos, éramos como 80” (entrevista a graduado de Metalmecánica, octubre de 2023).

Aunque en las entrevistas se observa un número importante de casos que aseguran que gestionaron personalmente el lugar de práctica, los relatos también muestran formas de mediación institucional virtuosas. Cuando la búsqueda y la gestión de prácticas se realizan de manera centralizada por parte de los establecimientos educacionales, se configura un escenario más propicio para el acompañamiento del proceso. Desde la perspectiva de los y las estudiantes, la gestión y el apoyo brindado por las instituciones educativas se transfieren a las y los jóvenes, formando una red de soporte que se convierte en un apoyo que permite enfrentar con mayor certeza las experiencias futuras. Especialmente porque en el espacio de las empresas se observa un mayor reconocimiento a la particularidad de esta experiencia y a la necesidad de generar condiciones de acogida favorables para ayudar a lograr una transición armónica hacia la vida laboral.

Los profesores están ahí, apoyándonos, nos dan su número de referencia y, luego de eso están las postulaciones. En el curso se dice: “Ya, miren, se abrieron postulaciones para tal empresa, hay tantos cupos, ya, ¿quién quiere postular?”. Y ahí nos ponemos de acuerdo y la profesora jefa, que va de la mano con nosotros y tenemos más apoyo en la misma empresa (entrevista a graduada de Administración y Comercio, diciembre de 2023).

Situados en el lugar de la práctica profesional, los y las jóvenes muchas veces se enfrentan, en un comienzo, a una experiencia que choca con las lógicas tradicionales de aprendizaje escolar. En algunos casos, el inicio de la práctica está marcada por el descrédito que los actores del mundo productivo y de las empresas manifiestan hacia sus saberes y habilidades previas. A esta desvaloración se suman también estereotipos

y sesgos asociados a la edad. Es recurrente en los relatos reconocer que la juventud constituye un factor de discriminación que se adiciona al estigma de la educación técnica y de la vulnerabilidad social de sus estudiantes, reproduciéndose situaciones de falta de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos en el periodo escolar. Además, tampoco se cumplen los objetivos de formación que implican el adiestramiento en cuestiones operativas de la disciplina (manejo de tecnología) o la realización de un circuito de procesos operativos funcionales al denominado plan de rotación formativo, contenido en el plan de práctica profesional de cada especialidad. Desde este punto de vista, es común que ocurran situaciones como la que describe una de las personas entrevistadas:

Como eres de práctica ellos te ven como un cabro [muchacho] recién llegado y te mandan a “limpiar el taller”, “barre esto, barre esto otro”, y así, pero luego ellos mismos te van calificando cómo eres y solo después de eso los mandaban a hacer las mantenciones de vehículos, cambiar aceite, revisión de frenos (entrevista a graduado de Mecánica Automotriz, octubre de 2023).

Ahora bien, y de una manera similar a lo señalado por el personal docente, este contexto inicial adverso no se traduce en una disposición de enajenamiento o de crítica por parte de los y las jóvenes. Aun cuando con frecuencia los y las estudiantes se ven obligados a desarrollar tareas de escaso vínculo con su formación inicial, en los relatos es posible reconocer testimonios que enuncian que eso no impide desarrollar, a lo largo de la experiencia, competencias para imaginar nuevos escenarios de futuro y aprendizajes situacionales que no habían tenido la oportunidad de experimentar en su paso por la educación formal.

Las entrevistas demuestran que los desafíos iniciales que imponen las prácticas son una oportunidad para desarrollar actitudes y disposiciones que, entienden, son altamente valoradas en el colectivo de los respectivos espacios de trabajo. El despliegue de actitudes asociadas a la disposición al entorno, a la responsabilidad y a la adaptabilidad, representan un tipo de aprendizaje que no necesariamente formaba parte del mundo escolar y, por lo tanto, podría convertirse en la llave de entrada al mundo laboral, al mundo adulto.

En tal sentido, de acuerdo con Hart (2016), aunque las condiciones no siempre son las favorables para cumplir con un objetivo de aprendizaje, en la práctica se abre un espacio que ofrece oportunidades para activar capacidades actitudinales (una nueva forma de agencia) que habilitan a los y las jóvenes a enfrentar el futuro en espacios no protegidos, a diferencia de lo que ocurre en la escuela. El aprendizaje de esas capacidades sería un nuevo poder, toda vez que permite moverse estratégicamente en un contexto antes desconocido, propiciando mayor seguridad de cara al futuro.

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria

Se desarrollan las habilidades blandas porque tienes que saber relacionarte con distinta gente. El conocimiento más que tenerlo, se puede aprender (...) el conocimiento, aunque yo creo que es fundamental, no lo es todo. Si no tienes las habilidades blandas no va a servir de nada. Es necesario tener disposición, una actitud para enfrentar las cosas (entrevista a graduada de Salud y Educación, diciembre de 2023).

A partir de lo recogido en los testimonios, sostenemos que la naturaleza de este nuevo poder es eminentemente relacional. Las nuevas capacidades se activan a través de las interacciones y de las relaciones sociales que posibilitan el trato cotidiano con los actores del trabajo. En estos procesos de interacción laboral se configura un marco relacional que ayuda a los y las jóvenes a reforzar sus motivaciones y sus nuevas identidades. En los relatos se expresa la constitución de una atmósfera en la que sienten valorados por sus aprendizajes y por los esfuerzos desplegados para alcanzarlos. Se expresa una emocionalidad que transmite satisfacción por sortear el desafío de ganar un espacio en un escenario que se inició marcado por la subvaloración de sus capacidades.

Es rico saber que valoraron tu trabajo, que lo hiciste bien. Rescato mucho eso, porque los siento como una familia. Por eso a mí me encantaría volver a trabajar ahí (...). Me ayudó a reconocer mis límites, las capacidades que tengo, sé reconocer también la valorización de la vida, del trabajo, de lo que cuesta, el trabajo en sí. He tenido que trabajar duro para poder ganarme el espacio y me considero una persona madura (entrevista a graduada de Administración y Comercio, octubre de 2023).

65

Aunque con argumentos diferentes a los de sus docentes, los egresados y las egresadas de la educación técnica también proporcionan aspectos centrales que avalan la importancia de la práctica laboral en cuanto mecanismo o dispositivo fundamental para la transición a la vida del trabajo. El enfrentamiento a una nueva realidad (que para la mayoría solo había sido tema de relatos de sus docentes) y el aprendizaje práctico, situado a partir de nuevas relaciones de sociabilidad con diversos actores del mundo del trabajo, representa el eje central de este nuevo aprendizaje y la acumulación de nuevos capitales, particularmente lo que Côté (2002) denomina el capital identitario, necesario para una integración satisfactoria a la vida laboral.

5. Conclusiones

No cabe duda que la transición educación-trabajo representa un periodo de cambio de gran importancia para los y las jóvenes. Se trata de un proceso que no solo implica el inicio de una nueva forma de relación con el entorno a través del empleo y una actividad remunerada, también es un proceso de ampliación de sus relaciones

sociales y de los ámbitos de reconocimiento que inciden directamente en la manera en que las nuevas generaciones se construyen a sí mismas a través del requerimiento de convertirse en trabajadores.

Farrugia (2022) ha advertido que los estudios de transición por lo general han centrado su atención en las formas en que la gente joven moviliza sus capitales y se adapta a las condiciones laborales del mundo del trabajo. Ese enfoque, sin embargo, parece oscurecer en parte el rol que cumple el trabajo y la vida laboral como lugar de formación de los propios sujetos. Desde este punto de vista, la transición (o inserción) en el trabajo no representa solo el paso a un lugar donde se desempeña una función aprendida y se recibe un salario, sino que constituye un paso crítico para la formación de subjetividades y de nuevas relaciones sociales que se verifican en las dimensiones más íntimas y personales de los individuos.

La práctica profesional o profesionalizante representa un dispositivo en el cual se ponen en juego estos procesos de manera patente en los y las jóvenes. El material revisado para este artículo demuestra que aunque existen ciertas limitaciones para su implementación y seguimiento por parte de las instituciones educativas, y aunque la mayoría de los casos las empresas no reúnen las condiciones suficientes para formar aprendices, los y las jóvenes viven en esta instancia una experiencia personal que no es necesariamente específica del trabajo o de la formación, pero que hace que las dimensiones relacionales y afectivas del sujeto se conviertan en un componente activo de la vida laboral y del proceso de convertirse en personas adultas.

La experiencia de las prácticas profesionales, en cuanto situación de socialización anticipatoria (Colley et al. 2003) en el paso de hacerse plenamente autónomo a través del trabajo, representa una de las mayores cualidades de esta experiencia formativa práctica. Un mayor seguimiento y control de las mismas por parte de las instituciones educativas y de las agencias educativo-laborales podría incidir positivamente en favorecer transiciones exitosas y en mayores oportunidades de inserción laboral para las nuevas generaciones.

Desde este punto de vista, el desarrollo de políticas específicas de apoyo a la realización de las prácticas laborales —débilmente abordadas en el caso chileno— no solo debería considerar los requerimientos de un adecuado adiestramiento práctico de los aprendizajes alcanzados en los centros educativos. La relevancia de esta experiencia en el proceso de los y las jóvenes aprendices en su tránsito hacia la adultez evidencia la necesidad de políticas más complejas y de soporte efectivo a los esfuerzos que realizan docentes y agentes laborales que acompañan a estos futuros trabajadores y trabajadoras.

Apoyos

Este artículo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación FONDECYT Regular n.º 1221171, “Elecciones vocacionales y trayectorias educativas de estudiantes de la educación media técnico profesional: un estudio longitudinal” y FONDECYT Iniciación n.º 11220676, “El efecto de las normas, prácticas y discursos en las aspiraciones de los estudiantes y las transiciones post egreso”, apoyados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile.

Referencias

- Abramo, Laís, Daniela Trucco, Heidi Ullmann y Andrés Espejo. 2021. “Jóvenes y familia: políticas para apoyar trayectorias de inclusión”. *Políticas Sociales* 241: 1-77. <https://lc.cx/fyu9Yq>
- Achtenhagen, Frank, y Norton Grubb. 2001. “Vocational and occupational education: Pedagogical complexity, institutional diversity”. En *Handbook of research on teaching*, editado por Virginia Richardson, 604-639. Washington D.C.: American Educational Research Association.
- Baartman, Liesbeth, y Elly De Bruijn. 2011. “Integrating knowledge, skills and attitudes: Conceptualizing learning processes towards vocational competence”. *Educational Research Review* 6 (2): 125-134. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.03.001>
- Boshuizen, Henny. 2003. *Expertise development: The transition between school and work. Inaugural address*. Heerlen: Open Universiteit Nederland. <https://lc.cx/rD86dw>
- Bynner, John. 2013. “School to Work Transitions and Wellbeing in a Changing Labour Market”. En *Youth and Work Transitions in Changing Social Landscapes*, editado por Helena Helve y Karen Evans, 31-42. Londres: Tufnell Press.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2023. *La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo*. Santiago de Chile: CEPAL. <https://lc.cx/hVJ5Pv>
- Chesters, Jenny. 2020. “The disintegrating education-work nexus”. En *Youth and the new adulthood: generations of change*, editado por Johanna Wyn, Helen Cahill, Dan Woodman, Hernán Cuervo, Carmen Leccardi y Jenny Chesters, 47-66. Oklahoma: Springer.
- Colley, Hellen, David James, Kim Diment y Michael Tedder. 2003. “Learning as becoming in vocational education and training: Class, gender and the role of vocational habitus”. *Journal of Vocational Education & Training* 55 (4): 471-498. <https://doi.org/10.1080/13636820300200240>
- Corica, Agustina, Ada Freytes y Ana Miranda. 2018. *Entre la educación y el trabajo: la construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO. <https://lc.cx/maVA3u>
- Côté, James. 2002. “The role of identity capital in the transition to adulthood: The individualization thesis examined”. *Journal of Youth Studies* 5 (2): 117-134. <https://doi.org/10.1080/13676260220134403>
- Dubar, Claude. 2001. “La construction sociale de l’insertion professionnelle”. *Éducation et Sociétés* 1 (7): 23-36. <https://doi.org/10.3917/es.007.0023>
- Farrugia, David. 2022. *Youth, work and the post-fordist self*. Bristol: Bristol University Press.

- Gallart, María Antonia. 2006. *La escuela técnica industrial en Argentina. ¿Un modelo para armar?* Montevideo: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional.
- García, William. 2016. “¿Qué efectos tienen la formación técnica, tecnológica y el contrato de aprendizaje sobre la calidad del empleo de los egresados del SENA?”. Tesis de maestría, Universidad de los Andes. <http://hdl.handle.net/1992/13637>
- Geijsel, Femke, y Frans Meijers. 2005. “Identity learning: The core process of educational change”. *Educational Studies* 31 (4): 419-430. <https://doi.org/10.1080/03055690500237488>
- Gibbs, Graham. 2012. *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Gluz, Nora, Silvia Martínez, Silvina Feeney, Lucrecia Rodrigo e Inés Rodríguez Moyano. 2021. “Configuraciones institucionales en escuelas técnicas de Buenos Aires y Neuquén. Posibilidades y tensiones con vistas a la inclusión educativa”. En *Investigaciones en la educación técnica profesional en Argentina: saberes prácticos y experiencias*, editado por Silvia Martínez y Delfina Garino, 185-218. Buenos Aires: Teseo.
- Gontero, Sonia, y Jürgen Weller. 2019. “Desafiando la incertidumbre: jóvenes en transición de la escuela al trabajo en América Latina”. En *Educación técnico profesional: ¿hacia dónde vamos? Políticas, reformas y nuevos contextos de desarrollo*, editado por Leandro Sepúlveda y María José Valdebenito, 265-297. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- Hart, Caroline. 2016. “How Do Aspirations Matter?”. *Journal of Human Development and Capabilities* 17 (3): 324-341. <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1199540>
- Ibarrola, María de. 2016. “Dilemas de futuro para la educación y la formación técnico profesional en América Latina”. *Tendencias en Foco* 33: 1-32. <https://lc.cx/sGeNeG>
- Ibarrola, María de. 2004. *Escuela, capacitación y aprendizaje: la formación para el trabajo en una ciudad en transición*. Montevideo: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional.
- Jacinto, Claudia. 2018a. “La formación para el trabajo en la escuela secundaria como reflexión crítica y como recurso”. En *Conversaciones en la escuela secundaria. Política, trabajo y subjetividad*, compilado por Silvia Martínez, 73-110. Río Negro: Universidad Nacional de Comahue.
- Jacinto, Claudia. 2018b. “Los mundos del trabajo en los procesos de inserción: tránsitos y quiebres entre educación, formación profesional y trabajo. A modo de introducción”. En *El secundario vale: saberes, certificados y títulos técnicos en la inserción laboral de los jóvenes*, editado por Claudia Jacinto, 17-32. Buenos Aires: IDES / CONICET.
- Jacinto, Claudia. 2013. “La formación para el trabajo en la escuela secundaria como reflexión crítica y como recurso”. *Propuesta Educativa* 2 (40): 48-63. <https://lc.cx/qYXmiR>
- Jacinto, Claudia, y Carolina Dursi. 2010. “La socialización laboral en cuestión: las pasantías ante las incertidumbres de las transiciones laborales de los jóvenes”. En *La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes. Políticas, instituciones, dispositivos y subjetividades*, compilado por Claudia Jacinto, 331-368. Buenos Aires: Teseo / IDES.
- Johnson, Joel, Soko Starobin y Frankie Santos. 2016. “Predictors of Latina/o Community College Student Vocational Choice in STEM”. *Community College Journal of Research and Practice* 40 (12): 983-1000. <https://doi.org/10.1080/10668926.2016.1204963>
- Lave, Jean, y Etienne Wenger. 1991. *Situated learning: legitimate peripheral participation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria
- Lareau, Annette, y Erin McNamara Horvat. 1999. "Moments of social inclusion and exclusion: Race, class and cultural capital in family-school relationships". *Sociology of Education* 72 (1): 37-53. <https://doi.org/10.2307/2673185>
- Marjoribanks, Kevin. 2002. *Family and school capital: Towards a context theory of students' school outcomes*. Oklahoma: Springer. <https://lc.cx/ChuCfm>
- Martínez, Silvia, Delfina Garino y Natalia Fernández. 2020. "Escola secundária e formação para o trabalho na Argentina: políticas e saberes em disputa". *Revista on Line de Gestão e Política Educacional* 24 (1): 841-864. <https://doi.org/10.22633/rpge.v24iesp1.13778>
- Maurizio, Roxana. 2022. "Un crecimiento débil y crisis global frenan la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe". Nota Técnica, OIT. <https://lc.cx/0bGmTZ>
- Millenaar, Verónica, Carolina Dursi, Delfina Garino, Eugenia Roberti, Alejandro Burgos, Mariana Sosa y Claudia Jacinto. 2016. "Los jóvenes en la construcción: dinámicas y actores en dispositivos de educación-formación-empleo" *Última Década* 45: 10-33. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362016000200002>
- MINEDUC (Ministerio de Educación de Chile). 2024. "Datos abiertos". Acceso el 25 de abril de 2024. <https://datosabiertos.mineduc.cl/>
- MINEDUC. 2020. "Estudio sobre trayectorias educativas y laborales de estudiantes de educación media técnico-profesional". Acceso el 25 de abril de 2024. <https://lc.cx/sfEGJw>
- Miranda, Ana. 2015. "Aportes para una lectura crítica del vínculo entre la juventud, la educación y el mundo del trabajo". En *Sociología de la educación y transición al mundo del trabajo: juventud, justicia y protección social en la Argentina contemporánea*, editado por Ana Miranda, 77-102. Buenos Aires: Teseo.
- Morales, Beatriz, y Tamara van Hemelryck. 2022. *Inclusión laboral de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe en tiempos de crisis: desafíos de igualdad para las políticas públicas*. Santiago de Chile: CEPAL. https://lc.cx/-aF_yS
- Nogueira, Sidarta, Cintia Araújo, Luiza Alencar, Liege Santos Soares y Ana Paula Vasconcelos. 2021. *Trilhas da educação profissional*. Fortaleza: Senac Ceará. <https://lc.cx/iVkd0F>
- OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2023. *Panorama laboral 2023 de América Latina y el Caribe*. Lima: OIT. <https://lc.cx/jJZgNI>
- OIT. 2020. *Panorama laboral 2020 de América Latina y el Caribe*. Lima: OIT. <https://lc.cx/fUK7fN>
- OIT. 2010. *Trabajo decente y juventud en América Latina*. Lima: OIT. <https://www.oitcinterfor.org/node/6417>
- Pilz, Mathhias, y Kristina Wiemann. 2020. "Does Dual Training Make the World Go Round? Training Models in German Companies in China, India and Mexico". *Vocations and Learning* 14: 95-114. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-020-09255-z>
- Pozzer, José. 2016. "Alcances y limitaciones de los entrenamientos para el trabajo como dispositivo de formación e inserción en el empleo. Un estudio de caso en Resistencia, Chaco". En *Protección social y formación para el trabajo de jóvenes en la Argentina reciente: entramados, alcances y tensiones*, editado por Claudia Jacinto, 161-184. Buenos Aires: IDES.
- Ray, Debarj. 2003. *Aspirations, Poverty and Economic Change*. Nueva York: Instituto de Análisis Económico.

- Rush, Sue, Leslie Acton, Kim Tolley, Di Marks-Maran y Linda Burke. 2011. "Using simulation in a vocational programme: Does the method support the theory?". *Journal of Vocational Education and Training* 62 (4): 467-479. <https://doi.org/10.1080/13636820.2010.523478>
- Schaap, Harmen, Marieke Van der Schaaf y Elly De Bruijn. 2011. "Development of students' personal professional theories in senior secondary vocational education". *Evaluation & Research in Education* 24 (2): 81-103. <https://doi.org/10.1080/09500790.2010.550280>
- Sepúlveda, Leandro, y María José Valdebenito. 2019. "Gestión directiva en establecimientos de educación media técnico profesional: desafíos para el liderazgo". *Revista Calidad en la Educación* 51: 192-224. <http://dx.doi.org/10.31619/caedu.n51.666>
- Sevilla, María Paola. 2017. *Panorama de la educación técnico profesional en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL. https://lc.cx/_IX-Zw
- Stavenga de Jong, Jan, Ronny Wierstra y José Hermanussen. 2006. "An exploration of the relationship between academic and experiential learning approached in vocational education". *British Journal of Educational Psychology* 76: 155-169. <https://doi.org/10.1348/000709905X42932>
- Tomaselli, Andrés, 2018. *La educación técnica en el Ecuador: el perfil de sus usuarios y sus efectos en la inclusión laboral y productiva*. Santiago de Chile: CEPAL. <https://lc.cx/NT3Wn->
- Verdier, Éric, y Mircea Vuktur, 2018. "La inserción laboral de los jóvenes: un concepto histórico, ambiguo y societal". *Cuestiones de Sociología* 19: 1-20. <https://doi.org/10.24215/23468904e067>
- Weller, Jürgen, 2007. "La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos". *Revista de la CEPAL* 92: 61-82. <https://www.oitcinterfor.org/node/6487>

Entrevistas

- Entrevista a docente del área de Administración, octubre de 2023.
- Entrevista a docente del área de Metalmecánica, noviembre de 2023.
- Entrevista a graduada de Administración y Comercio, diciembre de 2023.
- Entrevista a graduada de Salud y Educación, diciembre de 2023.
- Entrevista a graduado de Mecánica Automotriz, octubre de 2023.
- Entrevista a graduado de Metalmecánica, octubre de 2023.
- Entrevista a docente del área de Construcción, noviembre de 2023.


Cómo citar este artículo:

Sepúlveda-Valenzuela, Leandro, y María José Valdebenito-Infante. 2025. "Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en la educación técnica secundaria". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 51-70. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6227>

Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina

Technical degree in agroecology: A job alternative for young people from migrant families in Argentina



 Mgtr. Susana Shoaie-Baker. Doctoranda. Universidad Nacional de la Plata y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).
(susanashoaie@hotmail.com) (<https://orcid.org/0000-0003-2296-5260>)

Recibido: 06/05/2024 • Revisado: 15/07/2024
Aceptado: 30/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

Los y las jóvenes de familias migrantes de origen boliviano establecidas en el cinturón hortícola platense, en Argentina, acceden a carreras universitarias para alejarse de una actividad caracterizada por las precarias condiciones de vida y de trabajo. En el presente artículo se examinan los desafíos que enfrenta esta población en su tránsito hacia estudios superiores. Mediante una metodología cualitativa y con el marco conceptual de la educación endógena, el encuentro y el reconocimiento cultural, se analiza la manera en que la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata brinda una alternativa cercana a la realidad de los y las jóvenes. En las conclusiones se destacan las potencialidades de esta alternativa viable que representa una oportunidad de formación para asesorar a productores familiares y a sus organizaciones. Se enfoca en la participación activa de estudiantes, especialmente en cursos prácticos donde se convierten en sujetos protagonistas al compartir sus experiencias. También se puede mencionar que, aunque estas carreras ofrecen espacios colectivos para cuestionar el modelo productivo convencional, todavía persisten desafíos: el nivel de formación inicial y la adaptación de horarios por la necesidad de combinar el estudio y el trabajo. En un contexto de crisis y transición, este tipo de propuesta otorga valor a los saberes locales y potencia la autonomía de la juventud para transformar su realidad.

Descriptores: agricultura familiar; empleo; juventud; migración; sustentabilidad; transición agroecológica.

Abstract

Young men and women from migrant families of Bolivian origin settled in the horticultural belt of La Plata, in Argentina, access university degrees to shift away from activities characterized by precarious living and working conditions. This article examines the challenges faced by this population in their transition to higher education. Using a qualitative methodology and with the conceptual framework of endogenous education, encounter, and cultural recognition, we analyze the ways in which the Technical Degree in Agroecology at the National University of La Plata offers an alternative close to the reality of young people. The conclusions highlight the potential of this viable alternative that represents a training opportunity to advise family farmers and their organizations. It focuses on the active participation of students, especially in practical courses where they become protagonists by sharing their experiences. It can also be mentioned that, although these degrees offer collective spaces to question the conventional productive model, challenges still persist: the quality of lower-level training and the adaptation of schedules due to the need to combine study and work. In a context of crisis and transition, this type of proposal values local knowledge and empowers the autonomy of youth to transform their reality.

Keywords: family farming; employment; youth; migration; sustainability; agroecological transition.

1. Introducción y contextualización

El cinturón hortícola platense (CHP) es la principal zona productora de hortalizas frescas en Argentina y abastece la mayor parte del consumo de aproximadamente 16 millones de habitantes que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Baldini 2020; Barsky 2013; García 2012). En las últimas décadas el trabajo en este sector, al igual que en otros cinturones hortícolas del país, ha sido llevado a cabo por familias campesinas que migran desde Bolivia (Benencia y Quaranta 2009) en búsqueda de mejores condiciones de vida y de nuevas oportunidades para las generaciones más jóvenes. Estas familias migrantes llenan el vacío que va dejando la salida de productores vinculados a anteriores olas migratorias de origen italiano y portugués, quienes en lugar de continuar con la producción comenzaron a alquilar sus tierras a los que llegaban (García 2012). Los y las migrantes viven y trabajan en las “quintas”, unidades productivas hortícolas que suelen tener una superficie de 0,5 a 2,5 hectáreas (García y Quaranta 2022).

Figura 1. Cinturón hortícola en el periurbano de La Plata



Elaborada con base en Google Earth Pro.

La horticultura platense se vio fuertemente influenciada entre los años 70 y 80 por las fuerzas desencadenadas por la Revolución Verde a nivel mundial (García 2012). Esta revolución buscaba modernizar los procesos productivos para aumentar la productividad agrícola a corto plazo y promover un uso más intensivo de la tierra con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de alimentos en el mundo. Este enfoque implicó el uso de pocos cultivos de alto rendimiento, insumos químicos y maquinaria pesada, lo que llevó al desplazamiento de prácticas agrícolas tradicionales y provocó serios problemas sociales y económicos en los sectores campesinos (Ceccon 2008; Mirafuentes y Salazar 2022; Sarandón 2021). Muchos pequeños

agricultores se vieron forzados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en mano de obra en producciones intensivas gestionadas por grandes empresas (García 2012).

En este contexto, la horticultura en La Plata implementó diferentes tecnologías, entre ellas los invernáculos y un uso excesivo de agroquímicos, priorizando la competitividad y la eficiencia en la producción de hortalizas para satisfacer la demanda (García 2015). Sin embargo, este modelo ha generado efectos negativos: degradación del suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental y riesgos para la salud de trabajadores y trabajadoras que se exponen a productos químicos (Baldini 2020). Además, acarrea condiciones precarias de vida y de trabajo para las familias migrantes, quienes no acceden a la propiedad de la tierra que trabajan, sino que están sujetas a un mercado irregular y abusivo de alquileres (García 2014, 2015).

Al establecerse en el CHP y no poder encontrar las condiciones favorables para que sus hijos e hijas continúen trayectorias educativas y laborales que mejoren sus vidas en el sector, los padres y madres promueven su salida hacia la ciudad de La Plata. Los y las jóvenes también sienten el deseo de dejar atrás la actividad hortícola y señalan entre los principales motivos el alto grado de sacrificio físico que implica, las precarias condiciones laborales y de vida, la inestabilidad económica, la dificultad de acceder a la propiedad de la tierra y el deficiente acceso a servicios y a infraestructura, entre los cuales el acceso a internet adquiere una importancia nueva y relevante (Garatte 2016; Larrañaga 2017; Shoaie y García 2020). Sin embargo, cuando intentan acceder a nuevas oportunidades no lo logran, y en muchos casos deben permanecer en la unidad productiva familiar y proyectar su futuro en lo que les resulta conocido: la actividad hortícola (Garatte 2016; Larrañaga 2017).

Miranda (2013), investigadora sobre juventudes, educación, trabajo y géneros en Argentina y América Latina, señala que los y las jóvenes migrantes en la región, viven en redes sociales y grupos familiares transnacionales y representan un colectivo juvenil a menudo ignorado e invisibilizado. La autora plantea que desde las teorías sociológicas se considera la juventud dentro de estructuras sociales que afectan su desarrollo. Una de ellas es el acceso a la educación y la transición educación-empleo, la cual es crucial para la inserción laboral y el estatus social de la juventud. Otra de las estructuras se refiere a las expectativas sociales sobre la maternidad y la paternidad y la transición del hogar familiar a la independencia. Por su parte, Casal et al. (2006) argumentan que la juventud es un tramo biográfico que va desde la pubertad física hasta la adquisición de la emancipación familiar plena, y destacan la centralidad del itinerario o trayectoria como manera de ver o pensar la inserción social y profesional de los y las jóvenes y su transición a la vida adulta.

Dina Krauskopf (2015, 127), psicóloga especializada en adolescencia y juventud en la región latinoamericana, establece que los y las jóvenes “son el segmento poblacional con mayor potencial para enfrentar con flexibilidad las innovaciones tecnológicas, las transformaciones productivas, los cambios sociales y existenciales.

Sin embargo, son también los que enfrentan condiciones insuficientes para efectuar con éxito las transiciones propias de sus trayectorias”. Durston (1996, 3), uno de los referentes de la investigación sobre la juventud rural en América Latina, advierte que no solo se requieren políticas para mejorar las oportunidades futuras de la juventud, sino también “para enfrentar sus problemas actuales y para dar sentido de utilidad a sus vidas como jóvenes, en el presente”.

Estudios recientes en el CHP (Garatte 2016; Larrañaga 2017; Lemmi, Morzilli y Castro 2020; Shoaie y García 2020, 2021; Moretto, Hirsch y Lemmi 2021; Shoaie 2023), analizan las trayectorias educativas y laborales de hijos e hijas de las familias horticultoras. Shoaie et al. (2011), con base en un trabajo previo con jóvenes de Bolivia y Perú, abordan la juventud entendiendo que se trata de una etapa donde los individuos se caracterizan por su dinamismo, por su actitud cuestionadora y por su apertura y predisposición al cambio, independiente de las definiciones etarias que pueda atribuírseles.

Shoaie y García (2020) consideran que también puede tratarse de una edad bisagra entre la adolescencia y la adultez en la cual se toman decisiones que, en el caso del CHP, podrían conducir a la reproducción del modelo productivo convencional o a su interrupción a través de la adopción de modelos alternativos. Por supuesto, no desconocen la importancia de diversos tipos de soportes y oportunidades para que esto suceda. Por ello, centran su investigación en explorar el rol que podrían tener los y las jóvenes de estas familias productoras en los procesos de transición agroecológica impulsados en el sector por instituciones públicas y por organizaciones sociales.

Saradón (2021) destaca que el enfoque agroecológico implica un cambio conceptual en la relación entre el ser humano y la naturaleza, valorando el conocimiento local y adaptándolo. Marasas et al. (2015) señalan que la transición hacia una producción agroecológica es un proceso complejo en el que se articulan distintas escalas (finca, comunidad local, territorio) y que se ve afectada por factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y ecológicos. Además, subrayan la importancia de valorar las prácticas de las familias agricultoras y de resignificarlas en el proceso de transición.

En el discurso de las instituciones y organizaciones promotoras de la agroecología se reconoce el papel crucial de la juventud para impulsar y sostener estos procesos de transformación. En los últimos años, varias universidades nacionales en Argentina han iniciado tecnicaturas en agroecología. Las tecnicaturas suelen ser carreras cortas, de tres años o menos, especializadas o enfocadas en un ámbito concreto y proporcionan la capacitación y la habilitación necesarias para desarrollar ciertas actividades laborales.

En el presente artículo se examinan los desafíos que enfrentan los y las jóvenes del CHP que lograron terminar sus estudios secundarios y que pretenden acceder a estudios superiores, y de qué forma la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata (TUnA-UNLP) representa una alternativa concreta y cercana para esta población. Para ello, se emplea el marco de educación y comunicación endógena junto con los conceptos encuentro cultural

Tecnatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina

y reconocimiento planteados por Jorge Huergo (2004), un reconocido comunicador, docente e investigador argentino.

Los modelos endógenos de educación y comunicación enfatizan la importancia de que los educandos sean protagonistas de su propio proceso de transformación. Este enfoque reconoce que la cultura constituye un elemento central en la comunicación y busca la problematización, alentando a las personas a desarrollar sus capacidades y a transformar su realidad. Huergo (2004) plantea que la cultura, es decir, el conjunto de estrategias para vivir de los sujetos, en la cual también está inmersa la transformación que se busca, no puede ser ignorada. Establece que en la comunicación el encuentro de culturas requiere ser trabajado a fondo, pues implica conocer cuáles son los sueños y expectativas, las labores cotidianas, los lenguajes, las dudas, las limitaciones, las creencias, etc.

Asimismo, Rosenstein, Primolini y Pascuale (2003) advierten que es necesario aprovechar “la morfología de una red de diálogo” en la recreación y transformación del conocimiento, intentando construir un sentido común. Este enfoque reconoce que, aunque los sujetos están condicionados culturalmente, también tienen autonomía para actuar dentro de esos condicionamientos. “En síntesis, no hay sujetos pasivos; por eso confiamos en que son esos sujetos los artífices de la transformación del mundo, entendido también como un contexto, caracterizado por su complejidad y por una prolongada situación de crisis orgánica” (Huergo 2004, 3).

Finalizando esta sección introductoria y de contextualización, se pasa a explicar la metodología utilizada, posteriormente, se comparten los resultados organizados en dos apartados: desafíos y tensiones que enfrentan los y las jóvenes del CHP en su tránsito hacia estudios superiores y el trabajo y la TUnA-UNLP una alternativa concreta y cercana a la realidad de los y las jóvenes del CHP. Finalmente, se plantean algunas conclusiones sobre las condiciones de vida precarias acarreadas por el modelo convencional impulsado por los principios de la Revolución Verde, por los desafíos académicos, por el aislamiento social y por las presiones económicas y familiares que conducen a la reproducción intergeneracional de este modelo. Además, se analiza la manera en que la formación en agroecología, a través del programa de la TUnA-UNLP, responde a las necesidades de este grupo de jóvenes al ofrecer un enfoque académico que valora sus conocimientos previos, que fomenta redes de apoyo y que brinda herramientas para transformar su entorno productivo hacia un modelo más sostenible y adecuado para sus quintas familiares.

2. Metodología

Para la investigación en la que se basa este artículo se siguió una estrategia cualitativa y se combinó con el relevamiento de información primaria y secundaria. Paralelo a una revisión bibliográfica, se realizó observación directa en clases de la TUnA-UNLP y

entrevistas semiestructuradas a informantes clave de la coordinación de la tecnicatura y a 10 jóvenes estudiantes universitarios. Las personas entrevistadas se organizaron en tres grupos: quienes provenían de familias horticultoras y estudiaban en la TUUnA-UNLP, quienes estudiaban en la tecnicatura, pero no provenían de estas familias y un tercer grupo formado por hijos o hijas de familias horticultoras que estudiaban Ingeniería Agronómica,¹ una carrera más larga y tradicional de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. En total se entrevistaron a cuatro hombres y a seis mujeres. Todos los nombres han sido modificados para preservar la identidad de las personas entrevistadas. En la tabla 1 se detallan los actores entrevistados, los espacios observados, las técnicas utilizadas y el criterio de selección o forma de contacto empleada.

Tabla 1. Actores, técnicas y criterios de selección

Actores	Técnica	Fecha	Criterio de selección
Estudiantes de Ingeniería Agronómica	Entrevista grupal	Mayo de 2022	Contacto directo, área de juventud y agroecología de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo
Estudiantes de la TUUnA-UNLP que provienen de familias horticultoras	Entrevista grupal	Noviembre de 2022	Contacto directo durante las clases observadas, área de agroecología de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo
Estudiantes de la TUUnA-UNLP que no provienen de familias horticultoras	Entrevista grupal	Noviembre de 2022	Contacto directo durante las clases observadas
Estudiantes y docentes en clases de la TUUnA-UNLP	Observación	Noviembre 2022	Contacto docente
Coordinación de la tecnicatura	Entrevista individual	Noviembre de 2023	Contacto directo en el lugar de trabajo, Departamento de Desarrollo Rural

Elaborada por la autora.

3. Análisis y resultados

En esta sección se presentan los resultados organizados en dos partes. En la primera se abordan las dificultades que enfrentan los y las jóvenes del CHP al intentar acceder a estudios superiores y mejorar sus condiciones laborales. Mientras que en la segunda se presenta la TUUnA-UNLP, una tecnicatura creada en 2022 que ofrece formación en agroecología, combinando teoría y práctica con un enfoque que busca incluir a estudiantes de sectores excluidos como los del CHP. Se incorporan extractos de entrevistas realizadas a jóvenes que cursan esta tecnicatura y a estudiantes de la carrera Ingeniería Agronómica.

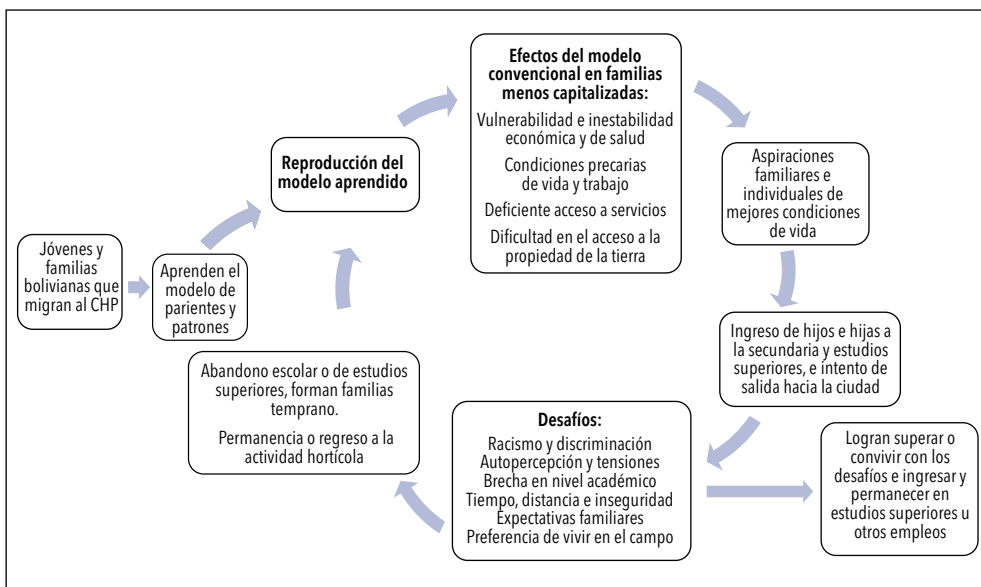
1 Estas últimas entrevistas fueron realizadas en conjunto con otra investigadora, Melina Morzilli, que pertenece al CONICET-UNLP.

3.1. Desafíos y tensiones que enfrentan los y las jóvenes del CHP en su tránsito hacia estudios superiores y el trabajo

Las familias horticultoras de origen boliviano aspiran a que sus hijos e hijas salgan de las precarias condiciones de vida y laborales asociadas a la actividad hortícola, buscando que continúen sus trayectorias en contextos más favorables. Esta posibilidad de mejorar su situación a menudo se relaciona con la educación secundaria y superior. Sin embargo, muchas veces los y las jóvenes enfrentan diversos desafíos en su trayectoria educativa (figura 2). Esto provoca, especialmente en el caso de los hombres, que abandonen sus estudios y que no logren acceder a otras oportunidades, viéndose obligados o motivados a permanecer en la unidad productiva familiar. Así, continúan viviendo con sus padres o madres y trabajando en la misma actividad que desempeñan sus progenitores. Con el tiempo, se espera que se casen, que formen sus propias familias y que inicien una nueva unidad productiva (Shoaie y García 2021).

Naturalmente, cuando los y las jóvenes permanecen o regresan a la actividad hortícola, mientras colaboran o trabajan en la quinta familiar, más aún si llegan a ser arrendatarios, suelen continuar con la forma de producir que aprendieron. Por ello, tienden a reproducir el modelo productivo, quedando así atrapados o atrapadas en un ciclo donde las aspiraciones familiares e individuales de mejores condiciones de vida parecieran no encontrar vías de realización.

Figura 2. Ciclo de reproducción intergeneracional del modelo convencional



Elaborada por la autora.

Las mujeres jóvenes entrevistadas aseguran que para ellas es más difícil conseguir un trabajo que para sus pares hombres. Además, consideran que si no estudian y solo dependen de su pareja, presente o futura, serían vulnerables ante la posibilidad de ser abandonadas con sus hijos o hijas. Así, por una inquietud propia y motivadas por sus madres, las jóvenes buscan continuar sus estudios superiores enfrentando múltiples obstáculos entre los que se encuentran la brecha educativa, la soledad en la universidad, inseguridades sobre su apariencia y dificultades con algunos docentes. Las madres jóvenes deben equilibrar el cuidado de sus hijos o hijas con sus estudios.

A continuación, se comparten extractos de algunas de las entrevistas realizadas. Gladys, la más joven de las entrevistadas, y quien en 2022 cursaba su primer año de Ingeniería Agronómica, comenta:

No me fue bien en el ingreso, no fue como me esperaba, antes era buena alumna y yo re ilusionada (...). En la escuela no teníamos tanta exigencia (...). Ya en las primeras clases me sentí muy inferior porque justo me tocó matemáticas con chicos que venían de una escuela agropecuaria que eran compañeros, es decir, venían entre amigos a estudiar y eran más avanzados (...), me costaba y me dio miedo y por miedo no preguntaba. Cuando la profe decía ¿entendieron? todos decían sí, nadie levantaba la mano, solo una vez me animé (...) y alcé la mano, me dijo que me parara y que diga mi nombre y me dio vergüenza porque todos te quedaban mirando, entonces me espanté (entrevista a Gladys, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022).

78

Laura, una joven que al momento de ser entrevistada, en mayo de 2022, cursaba el cuarto año de la misma carrera, aseguró:

La mayoría son argentinos, vienen con sus propios grupos (...) quinteros no había, eran hijos de productores más grandes (...). El mayor obstáculo que creo que vivimos todos los paisanos es llegar a una facultad y no conocer a nadie, te sentís tan solo. Pero eso con el tiempo lo fui manejando con el otro objetivo que era más fundamental, no era tener amigos, era estudiar y aprobar las materias. Qué importa si no eres rico, es muy marcado eso de las clases sociales (...). Después fui haciéndome mi propio grupete (...). Llegas a la facultad queriendo ser perfecta, queriendo sobresalir, y capaz que no podés y pensás que te critica la gente. Capaz que es algo mío (...). En mi curso de ingreso era la única paisana (entrevista a Laura, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022).

Nancy, otra de las jóvenes entrevistadas y quien también se encontraba en cuarto año de Ingeniería Agronómica, comenta que miembros del personal docente “no bajan al nivel del que quiere aprender”. En general, las cuatro jóvenes entrevistadas consideran que hay profesores que las “tratan mal” y que no tienen empatía hacia ellas.

En un momento me dije por qué, a él le pagan para explicarme, yo tengo que ir (...). Le decía, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y abajo me temblaban las rodillas. Como soy morocha la ventaja es que no se nota lo colorado (...). Le pierdes ese miedo a esos profesores que están en esa altaneidad y vos decís tienen que bajar (entrevista a Nancy, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022).

Sin embargo, Nancy y Laura, que están más avanzadas en sus carreras, consideran que esta situación ha ido cambiando en los últimos años gracias a la intervención de los centros de estudiantes. Ambas son madres de hijos menores de 10 años. Nancy tuvo que dejar sus estudios en dos ocasiones y comenta que la primera vez que decidió retomarlos tenía un hijo de dos años y una bebé recién nacida, entonces cursó una sola materia hasta poder avanzar al segundo año de la carrera. Cuando sus hijos crecieron fue más fácil acomodar sus tiempos. Comenta que al dejar sus estudios perdió amistades y compañeros y compañeras. Los nuevos desafíos que representó la virtualidad durante el aislamiento obligatorio debido a la pandemia por la covid-19 la llevaron a abandonar por segunda vez la universidad. No solo tenía que lidiar con sus clases virtuales, sino también con el constante envío de tareas escolares para que sus hijos realizaran en casa. Por su parte, Laura enfrentó desafíos similares, ella es madre de una niña y pudo manejarlo, por lo que no llegó a abandonar sus estudios.

En el caso de los hombres jóvenes entrevistados observamos que uno de los condicionantes para continuar los estudios es la necesidad de trabajar. Carlos, uno de los entrevistados, inició en Ingeniería Agronómica y luego de la pandemia decidió cambiarse a la TUnA-UNLP y comentó lo siguiente:

Los que vienen a estudiar terminan estudiando un poco y trabajando un poco (...). Llega el punto en que se cansan. En el caso de mi primo, el hijo de mi tío, se recibió de ingeniero eléctrico, pero demoró como 20 años en recibirse porque él tenía este tema de estudiar y trabajar y bueno, los primeros años eligió dejar la carrera y trabajar hasta que un día su padre le dijo “no, deja de trabajar y ponte las pilas” y ahí fue aflojándole al trabajo y poco a poco todos los años de poquito en poquito y es el único que ha terminado. Tenía otro que estaba en Informática (...) ve que sus padres están laburando y ese es un pensamiento de ellos “yo voy a la facultad, pierdo mucho tiempo, mis viejos están reventados y otra vez tengo que irme todo el día a perder el tiempo”. El estudio y el trabajo los come mentalmente (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Por su parte, Franco, amigo de Carlos y también estudiante de la TUnA-UNLP, aporta otra visión de esta situación.

Tenés que tener una base que te sostenga, más que nada en el verano [cuando el trabajo es más intenso], en la quinta no hay horario. O sea, tenés que adaptarte. He

conocido también amigos así productores que venían, cursábamos juntos y se dormían en clase porque el tipo trabajaba toda la mañana y parte de la noche y venía acá, teníamos cuatro horas de clase y se dormía, teníamos que levantarlos. Probablemente no iba a terminar bien, no iba a aprobar bien (entrevista a Franco, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Carlos comenta que también tiene que hacer frente a este tipo de situaciones que contaba Franco.

Dentro de todo no trabajo tanto como antes. Por la parte de mi hermano él sí trabaja, intentó [estudiar] pero no pudo. Aunque me hago mi tiempito para ayudar, mi conciencia, ellos están en la quinta y yo estoy acá. Yo al venir para acá me siento que no hago nada, a ratos digo voy a perder el tiempo, no estoy ayudando. O cuando mi mamá a veces me dice que voy a perder el tiempo [a la universidad], pero dentro de todo me ayudan a seguir el estudio, pero ellos también viendo el progreso mío. Si ellos ven que pierdo el tiempo o no hago nada, ahí también me cortarían ese privilegio (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Franco relata que es necesario estar muy concentrado y saber enfocarse en las dos cosas, el estudio y el trabajo, para no desaprobado y no sentir que se pierde el tiempo mientras los familiares están trabajando en la quinta. En las entrevistas con mujeres jóvenes, si bien no fue mencionada esta disyuntiva interna entre estudiar o ayudar en la quinta, sí comentaron que los fines de semana siguen colaborando con la producción familiar.

El transporte y la seguridad son otros de los desafíos importantes que deben enfrentar los y las jóvenes. Regresar de la universidad al CHP de noche implica realizar viajes en remis, transportes similares a los taxis, pero más costosos, y temor a la delincuencia. Durante el día el transporte público implica largos trayectos en colectivos con pocas frecuencias. Quienes cuentan con vehículos propios a menudo facilitan el traslado a compañeros y compañeras. La falta de transporte adecuado puede afectar significativamente el tiempo disponible para trabajar y estudiar.

Finalmente, las personas entrevistadas comentan que cuando mostraron interés en seguir carreras afines con la agricultura muchas veces no encontraron apoyo de sus familias, pues desean que se alejen de esta actividad para que accedan a mejores condiciones de vida. Carlos contó la situación de un primo que quería estudiar agronomía, pero que su padre no lo dejó porque “agronomía es quinta, sufrir lo que yo”. También relató su propia experiencia. “Les dije ‘voy a estudiar agronomía’, ‘pero estudia otra cosa’ me decían, ‘derecho o medicina’. Yo decía ‘me crie en el campo, quiero seguir en el campo y voy a morir en el campo, lo más cercano es agronomía’ de a poco van aflojando” (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina

Por su parte, Nancy dijo que sintió que sus “paisanos” se burlaban de ella por escoger la carrera de Ingeniería Agronómica, le decían “¿qué es? ¿plantar una papa?”, insinuando que no había nada nuevo que ella pudiera aprender con su selección. Carlos dejó la carrera elegida al iniciar la pandemia por la covid-19, además siente que lo conducía “para un lado que mi familia y yo no podemos llegar, a un nivel más extensivo y yo quería ir estudiando y practicando y no había esa posibilidad” (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022). Posteriormente, en 2021 decidió inscribirse en la TUnA-UNLP. Comparte que la reacción de su tío al darle la noticia al inicio fue de desconfianza, pero pudo explicarle de qué se trataba y este le cedió un cuarto de hectárea de su tierra alquilada para que pudiera experimentar. “Por eso ahora donde mi tío estoy haciendo un pedacito agroecológico para demostrarles a ellos que es una buena manera de trabajar y que no va a ser tan sufrido como ellos lo vivieron” (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

3.2. La TUnA-UNLP: una alternativa concreta y cercana a la realidad de los y las jóvenes

La TUnA-UNLP surge en 2022 a partir de la participación y construcción colectiva de la comunidad educativa de la UNLP. Su objetivo es “formar técnicos y técnicas con conocimientos teóricos y prácticos que aporten al diseño, manejo y gestión de agroecosistemas con un enfoque agroecológico, de manera de promover sistemas productivos sustentables” (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 2024, 6). A su vez, busca

atraer a un universo de estudiantes tradicionalmente excluidos del acceso al estudio universitario, quienes podrían ver en esta propuesta una oportunidad de formación académica. Asimismo, pueden resultar de interés para los y las jóvenes que proceden del sistema de educación media agraria (...) y a jóvenes con titulación secundaria que trabajan en el medio productivo o pertenecen a organizaciones de productores/as u organizaciones no gubernamentales interesadas en la problemática. También, sería una alternativa para quienes integran organizaciones y movimientos de productores/as del cinturón hortícola de La Plata (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 2024, 5).

Su duración es de dos años y medio con una carga semanal de 15 a 20 horas, los requisitos para la inscripción son tener un título secundario o haber aprobado el examen estipulado por la UNLP para el caso de personas mayores de 25 años que no cuenten con título secundario. La TUnA-UNLP pretende también atender, con una alternativa concreta, la creciente demanda de profesionales formados en agroecología, estimulada por las políticas públicas impulsadas a nivel nacional y especialmente provincial.

En diciembre de 2021 había 150 estudiantes inscriptos organizados en cuatro comisiones (Infocielo 2021). Según los y las jóvenes que concedieron entrevistas, del total de estudiantes solo siete, tres hombres y cuatro mujeres, provienen de familias

productoras del CHP, aunque reconocen que pueden ser más. De los 24 estudiantes en promedio que participaron en las clases observadas de una de las comisiones, tres eran de familias horticultoras. Son varias las motivaciones de los y las jóvenes del CHP para inscribirse en esta tecnicatura.

Quería un cambio por la salud de mi papá porque yo creo que la manera convencional es lo que más le afecta a un productor y la agroecología es como una forma más segura en sí. Con los agroquímicos mi papá nos comenta que le arde la piel (entrevista a Romina, estudiante de la TUnA-UNLP, mayo de 2022).

En 2019 empecé a estudiar la carrera de Agronomía, estaba haciendo el primer año y me agarró la pandemia y no esperaba que fuera virtual, no pude seguir. En el grupo [de WhatsApp] Ana [una de las coordinadoras del área de juventud de la organización de productores en la que participa] tira que hay la tecnicatura, me lo mandó a mí y a varios compañeros más. Me metí a investigar de qué se trataba y me interesó bastante, más que la carrera que estaba haciendo. Estaba pensando en cambiar de Agronomía porque me tiraba más para un lado que mi familia y yo no podemos llegar, a un nivel más extensivo y yo quería ir estudiando y practicando y no había esa posibilidad. En la tecnicatura lo que he visto en el plan de estudio me gustó más, también Ana me recomendó. Es una carrera que hacés una materia y podés hacer [práctica] al mismo tiempo, está pensada más para el productor que para un empresario (...). Otra cosa que me incentivó a anotarme a la TUnA-UNLP fue la palabra agroecología, me gustó, una por mis abuelos y otra por mí. Mi abuelo siempre producía para mi familia allí en Bolivia de esa manera agroecológica, pero no se conocía como agroecológica, sabían por saber, no tenían el nombre de la ciencia (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Durante la entrevista grupal con jóvenes del CHP se les consultó si consideraban que ser productores o productoras representaba una ventaja en los cursos de la tecnicatura frente al estudiantado que no provenía de familias productoras.

Nosotros venimos con una idea, tenemos conocimiento, pero (...) a mí me pasaba que hay cosas que conozco pero que no las relaciono de una forma más técnica (...). El viernes estábamos viendo procesos, cómo desarrollar un cultivo en forma de franja, surco, cómo prevenir las heladas, [estas prácticas] ¡tienen su nombre! no sabía eso (entrevista a Franco, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022),

Te lo hacen saber vos que sos productor (...) está bueno. He visto que hay personas que no tienen ni idea de cuánto tarda en salir una cosecha, cuál es el riego, qué se le tiene que echar, los fertilizantes. Nos preguntaban qué le pasa a la planta en el invernadero o cómo prevenir las heladas (...). El profesor no conocía y dijo "ustedes deben saber". Aquí es mucha teoría para la gente que nunca vio una producción. José [un

compañero que no es productor] dice que quiere ver nacer, producir. Así me di cuenta de que producir verdura no es cualquier cosa. Antes yo decía “cualquiera hace esto”, la TUnA-UNLP puso un valor a lo que hacemos nosotros (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Una de estas jóvenes, quien a su vez participa en el área de agroecología de una organización del CHP, relató que en los cursos de la TUnA-UNLP puede ver reflejado lo que le dicen sus “compañeros” productores en las reuniones. Fue común durante las observaciones ver también la manera en que se generaban conversaciones paralelas. Por ejemplo, algunos estudiantes que deseaban conocer más sobre algunos biopreparados específicos o intercambios de contactos para seguir en comunicación con el fin de participar en los talleres que realizan las organizaciones de las que forman parte.

Al ser consultado sobre sus aspiraciones una vez concluya la TUnA-UNLP, uno de los entrevistados compartió sus anhelos futuros.

Yo en la quinta antes de la agroecología no le veía mucha salida, por eso comencé a estudiar oficios: manipulación de alimentos, montador de electricidad (...). Estar en lo convencional es arriesgado para la salud y era muy inestable, los precios se iban para arriba, no podía sostener. Tenés que alquilar, más los químicos. He visto como familiares y amigos están mal de la vista, de la espalda. Entonces me decían “si no querés trabajar en la quinta, busca un trabajo”, y empecé a hacer esos cursos. A veces tengo trabajo de montador [de electricidad] pero capaz que con esto [la TUnA-UNLP] puedo tener un emprendimiento de producción agroecológica para mí. Conseguir tierra y poder implementar toda esa práctica. También está la posibilidad de ser extensionista, asesor, o incluso meterte al Estado, pero quiero meterme más en la producción. Mi papá me decía “por último te consigo tierra y te pones a trabajar allí”. Estaba pensando en buscar un lugar donde practicar la agroecología, poder producir (entrevista a Franco, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Cabe mencionar que cuando este joven cursaba el segundo año de la tecnicatura comenzó a trabajar asesorando técnicamente a una organización de pequeños productores agroecológicos de otra localidad cercana a La Plata. Por su parte, Carlos, que recientemente también culminó su formación en agroecología en la Escuela Nacional de Agroecología (ENA) de la FRPA, reveló lo siguiente: “está la agroecología que es de asesor de productor grande, pero me enfoqué más en el acá, ser asesor de la [producción] familiar de mis vecinos, de mi familia, ayudarles a ellos” (entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

A finales de 2022, con otro compañero de la ENA, estaban estableciendo una parcela agroecológica comunitaria. Además, cumple la función de tesorero en una cooperativa de productores familiares del CHP y ha iniciado una línea de formación en agroecología en el área de juventud de la FRPA. En el caso de una de las mujeres jóvenes, se proyecta

también “enseñando a los quinteros, dando charlas y talleres sobre el preparado de bioinsumos” (entrevista a Romina, estudiante de la TUnA-UNLP, mayo de 2022).

Estudiantes de la TUnA-UNLP que no provienen del CHP

En este punto, y a fin de contar con mayores insumos para el análisis bajo el concepto de encuentro cultural, también resulta interesante conocer y contrastar las motivaciones y aspiraciones en torno a la TUnA-UNLP de los y las estudiantes que no provienen de familias del CHP. También se enfatiza en sus percepciones sobre sus compañeros y compañeras que se dedican a la producción.

Uno de los casos analizados es el de una estudiante de 31 años que ya contaba con una licenciatura en Trabajo Social, tiene un historial de formación en movimientos campesinos y trabaja en la comisión ambiental de una organización social que impulsa huertas comunitarias que abastecen comedores en barrios periféricos de La Plata. Supo de la TUnA-UNLP por compañeros del trabajo y tiene un interés propio por la cuestión campesina y por la soberanía alimentaria.

De la misma organización proviene otro de los jóvenes entrevistados, de 21 años, quien comenzó sus estudios superiores en Botánica, pero sintió que quería algo más directo para el cambio. Una compañera le avisó sobre la TUnA-UNLP y no dudó en inscribirse. Durante la entrevista explicó que en la organización hace años impulsan huertas agroecológicas sin saber que se llamaban así. Otro caso es el de una estudiante de 31 años que trabajaba de electricista y que además realizaba labores de serigrafía. Su motivación principal es el cuidado del medioambiente y supo de la TUnA-UNLP por un amigo que estudia agronomía. Le gusta la tierra, la huerta y también le inquieta la incertidumbre sobre el futuro y los problemas de energía, climáticos y de alimentos. Aseguró que nunca hubo una carrera que le llamara la atención, pero que cuando conoció el programa pensó que era lo que quería estudiar.

Estos y estas estudiantes son de la ciudad de La Plata y contaron que generalmente se movilizaban en bicicleta por considerar que es el medio más rápido de transporte. En sus casos sienten que vivir en la ciudad, tener trabajos con horarios flexibles, una buena base de la enseñanza secundaria, contar con el apoyo familiar y no tener hijos o hijas les ha permitido continuar sus estudios. Sobre la manera en que se proyectan una vez que terminen sus estudios dijeron tener cierta incertidumbre. Aunque creen que la demanda de asesores y técnicos en agroecología está incrementando, saben que esto depende de las políticas públicas favorables actuales. Además, expresaron que no saben ubicarse laboralmente.

El estudiante más joven entrevistado se muestra más esperanzado. “Mientras más proyectos haya en torno a la agroecología mejor, mientras más redes se tejan en el proceso, sembrando la semilla como la idea. No tengo nada seguro, pero me mando para adelante” (entrevista a Juan, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina

A la pregunta de si conocen el CHP respondieron “sí, desde la ruta”. Ninguna de las personas entrevistadas tiene padres o madres que se dediquen a la agricultura, pero recuerdan que sus bisabuelos sí lo hacían y manifestaron que en alguna medida sus abuelos “comían de la quinta”. Las experiencias de transición agroecológica que conocen principalmente se relacionan con las prácticas desarrolladas en la TUnA-UNLP. Finalmente, al igual que a los y las jóvenes del CHP, se les consultó si consideraban que sus compañeros y compañeras contaban con alguna ventaja o desventaja por el hecho de dedicarse a la producción.

A veces aportan mejor ellos que los profesores, tienen mejor experiencia (entrevista a Pablo, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Yo hablé con un compañero, yo sé que trabaja en agroecología, hablé con él (...) le dije “yo no sé, vivo en departamento, vos vivís en el campo desde chico, sabes más que yo” (...). Yo lo aprecio, él viene, trabaja, estudia acá, también estudia en agronomía (entrevista a Juan, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Yo creo que los compas que son productores y vienen a la agroecología tienen mucho para compartir y para trabajar juntos (...). El otro día hablando con un compa me compartió una banda sobre bioinsumos, abonos, repelentes, con plantas de alrededor, espontáneas de la huerta, no vimos nada de eso en la facu pero está presente (entrevista a Josefina, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

Sería interesante que desde lo práctico la gente de la facu pueda verlos como potenciales docentes incluso, tienen un montón de teoría que por ahí no está sistematizada, el saber está ahí. Podemos leer un montón de cosas en los libros, pero ellos ya lo tienen en el cuerpo (entrevista a Bianca, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022).

De forma general, las personas entrevistadas consideran que se han convertido en un grupo, valoran poder tejer redes y mantener el contacto al terminar la tecnicatura. En el caso de los y las jóvenes estudiantes del CHP, también manifiestan su entusiasmo por trabajar de forma conjunta, aunque reconocen que tienden a agruparse entre “paisanos”. Es interesante notar que, aunque participan en organizaciones diferentes, muestran el deseo de articular esfuerzos, pues la competencia entre organizaciones se debe a “los más antiguos”.

En cuanto a las interacciones entre docentes y el estudiantado, se pudo observar que desde la docencia se utilizan recursos que contribuyen al reconocimiento de los saberes y prácticas de los y las estudiantes y a la identificación con los contenidos compartidos. Entre los recursos utilizados se emplearon dinámicas de presentación, la constante interpelación por parte de los y las docentes mediante preguntas o afirmaciones que daban lugar al intercambio de comentarios y a la reflexión, las dramatizaciones, la proyección de videos seguidos de debates, los trabajos en grupo, etc.

Figura 3. Estudiantes de la TUnA-UNLP trabajando en grupo



Fuente: Fotografía de la autora (2022).

4. Conclusiones

86

El cinturón hortícola platense es una de las principales zonas de producción de hortalizas en Argentina. Aquí las familias migrantes de origen boliviano han asumido un rol central en la actividad. La introducción de tecnologías promovidas por la Revolución Verde en décadas anteriores ha definido las características del modelo productivo prevaleciente en el sector, el cual, si bien busca aumentar la productividad para lograr una mayor competitividad, acarrea fuertes daños al medioambiente y genera condiciones precarias de vida y de trabajo. Los y las jóvenes, motivados por sus familiares, aspiran a salir de la actividad, a continuar sus estudios superiores y a acceder a otros empleos.

Sin embargo, al intentarlo enfrentan múltiples obstáculos para acceder y permanecer en la educación superior, incluyendo la falta de preparación académica, el sentimiento de aislamiento en instituciones educativas donde predominan otros grupos sociales y la presión económica y moral de contribuir al trabajo familiar en la quinta. Las mujeres jóvenes presentan también, en algunos casos, la carga adicional de la maternidad. A pesar de las aspiraciones de los y las jóvenes por mejorar sus condiciones de vida, la mayoría continúa el ciclo intergeneracional de la producción hortícola, evidenciando la manera en que las condiciones estructurales y la falta de oportunidades pueden limitar su capacidad de cambio.

La presión que los y las jóvenes experimentan para alejarse de la actividad en busca de mejores oportunidades se traduce en una resistencia familiar hacia la elección de carreras relacionadas con la agricultura. Sin embargo, algunos y algunas jóvenes manifestaron sentirse atraídos o atraídas justamente hacia lo conocido y hacia lo que consideran

que hacen bien: el trabajo en el campo. Así, buscan seguir carreras entre las que destaca Ingeniería Agronómica, descubriendo luego que el programa, permeado por las premisas del modelo convencional en grandes extensiones agrícolas, no representa para ellos o ellas una posibilidad de llevar los aprendizajes a la práctica en las quintas familiares de pequeñas dimensiones y bajo las limitaciones económicas que enfrentan.

La promoción de la agroecología por parte de instituciones públicas y de organizaciones sociales en el CHP debido a su potencial para transformar el modelo productivo en la horticultura familiar y los programas académicos que buscan formar un número creciente de técnicos y técnicas para el impulso y el acompañamiento de los procesos de transición, podrían representar un enfoque más cercano a las posibilidades de los y las jóvenes. Tal es el caso de la TUnA-UNLP.

Un breve análisis a la luz de los modelos de educación y de comunicación endógena y bajo los conceptos de encuentro cultural y reconocimiento, puede conducir hacia algunas reflexiones en torno a la cercanía de la TUnA-UNLP a la realidad de los y las jóvenes del CHP, convirtiéndose en una alternativa concreta para esta población. En los objetivos de la TUnA-UNLP y en las clases observadas se ve claramente el esfuerzo por dar lugar a que los y las estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje.

En los cursos con contenidos más prácticos y directamente relacionados con la producción agrícola familiar, los y las estudiantes del CHP parecieran convertirse en sujetos protagonistas al poder posicionarse como productores y productoras y compartir desde su experiencia y su historia. Esto marca una diferencia entre la TUnA-UNLP y el sentimiento de los y las entrevistadas hacia otras carreras donde los contenidos son completamente nuevos. Inclusive en el caso de Ingeniería Agronómica, la percepción de las personas entrevistadas es que el programa estaría enfocado en productores de grandes extensiones provenientes de “otras clases sociales”, dejando fuera la posibilidad de identificación.

Cabe mencionar que la propuesta agroecológica, y por ende también la TUnA-UNLP, promueve una liberación de preceptos heredados de modelos exógenos en los que existen sectores carentes de saberes a los cuales hay que transferirle conocimiento e información. Aquí las propuestas no están centradas en los destinatarios sino en quienes las promueven, lo que Freire (1970) denomina “invasión cultural”, muy coherentes con los preceptos de la Revolución Verde y cuya herencia se ve reflejada en el modelo productivo prevaleciente en el CHP.

Pero ¿cuál es la cultura en la que se inserta la TUnA-UNLP? Es interesante notar que pareciera existir una diversidad cultural entre el estudiantado, constituyéndose esta tecnicatura, por sus características, en un ámbito ideal para promover el encuentro y la articulación cultural al que hace referencia Huergo (2004). Así, en alguna medida, se puede observar que se dan procesos de reconocimiento y de identificación entre los y las estudiantes y también entre estudiantes y docentes.

Si bien los y las jóvenes que provienen de familias del CHP no constituyen la mayoría en número, sienten que en algunos de los cursos existe una “puesta en valor” de sus capacidades y saberes y que el intercambio que se da y los contenidos que se comparten les recuerdan conversaciones que tienen entre productores y productoras en reuniones de sus organizaciones. También pareciera representar una oportunidad para conocer las bases científicas detrás de las prácticas con las cuales se familiarizan.

Los y las estudiantes que no provienen de familias productoras valoran la posibilidad de establecer redes de diálogo y contactos con jóvenes productores para conocer las implicaciones de la propuesta agroecológica en la práctica. En coherencia con lo que señalan Rosenstein, Primolini y Pascuale (2003), estas redes de diálogo permiten a los y las participantes de la TUnA-UNLP recrear y transformar el conocimiento y construir sentidos y proyectos colectivos e individuales.

Entre las motivaciones y aspiraciones de los y las jóvenes del CHP vemos que la TUnA-UNLP representa una alternativa para formarse y poder asesorar a sus familiares y a otros productores sobre la mejor manera de producir sin agroquímicos y así evitar problemas de salud. Sienten que la agroecología es algo más concreto y aplicable a las pequeñas producciones. Los y las estudiantes, especialmente quienes pertenecen al CHP, suelen formar parte de organizaciones y son motivados a unirse a la TUnA-UNLP por sus referentes.

Estas organizaciones proporcionan respaldo a los y las jóvenes que eligen estudiar agricultura, a menudo careciendo de apoyo inicial de sus familias. Además, ofrecen un espacio colectivo para cuestionar el modelo productivo convencional y promover esfuerzos de transformación que difícilmente serían impulsados individualmente. La participación de jóvenes productores de diversas organizaciones en la TUnA-UNLP fomenta el reconocimiento mutuo, la identificación con objetivos comunes y la posibilidad de colaboración.

En cuanto a la manera en que la TUnA-UNLP aborda los obstáculos que enfrentan los y las jóvenes del CHP al acceder a la educación universitaria, pareciera aliviar los desafíos relacionados con el miedo, la soledad y las inseguridades que suelen experimentar al ingresar a la universidad. Además, la duración de la carrera es valorada positivamente, al igual que la oportunidad de ingreso para personas mayores de 25 años sin completar la educación secundaria, lo que aborda una limitación identificada, especialmente entre los productores hombres. La existencia de ciertos soportes, entre ellos los centros estudiantiles y los grupos y redes que se forman entre el estudiantado, ha demostrado ser crucial para que puedan sortear las dificultades, proporcionando un sentido de pertenencia y solidaridad en el proceso. Sin embargo, todavía persisten desafíos entre los que sobresalen el nivel de formación académica al ingresar y los horarios de los cursos, que también necesitarían ajustarse para adaptarse a las responsabilidades laborales de los y las estudiantes.

Con respecto a la posibilidad de insertarse laboralmente como técnicos en agroecología, se deduce de las entrevistas que quienes provienen de familias horticultoras tienen las mayores posibilidades. Pues según sus propias palabras “llevan en el cuerpo” el conocimiento, lo que les permite asumir roles de asesoría o funciones administrativas en las organizaciones de productores y productoras.

A manera de comentario final, retomo a Huergo (2004) cuando señalaba que, si bien los sujetos están condicionados culturalmente, también son relativamente autónomos para actuar en el terreno de esos condicionamientos y ser artífices de la transformación del mundo en un contexto caracterizado por su complejidad y por una prolongada situación de crisis orgánica. Los y las jóvenes del CHP se ubican perfectamente en estas palabras. Se encuentran en un contexto claro de crisis, de constante transición, de búsqueda de oportunidades que representen mejores condiciones de vida. Propuestas como la TUnA-UNLP, más cercanas a su realidad, podrían representar una posibilidad concreta que se construye sobre capacidades, prácticas y saberes que se resignifican y que adquieren nuevos sentidos valorados por la sociedad.

Apoyos

89

La investigación en la que se basa este artículo se financió con fondos de la beca doctoral 2019-2025 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Referencias

- Baldini, Carolina. 2020. “Territorios en movimiento: las transformaciones territoriales en el cinturón hortícola platense en los últimos 30 años”. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90102>
- Barsky, Andrés. 2013. “Gestionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2013)”. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. <https://www.tdx.cat/handle/10803/129121>
- Benencia, Roberto, y Germán Quaranta. 2009. “Familias bolivianas en la actividad hortícola: transformaciones en sus procesos de movilidad”. En *Cinturón hortícola de la ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos*, coordinado por Roberto Benencia, Germán Quaranta y Javier Souza Casadinho, 111-126. Buenos Aires: CICCUS.
- Casal, Joaquim, Maribel García, Rafael Merino y Miguel Quesada. 2006. “Itinerarios y trayectorias. Una perspectiva de la transición de la escuela al trabajo”. *Trayectorias* 22: 9-20. <https://lc.cx/g7xLG4>
- Ceccon, Eliane. 2008 “La Revolución Verde: tragedia en dos actos”. *Ciencias* 91: 21-29. <https://lc.cx/vbAYmx>

- Durston, John. 1996. "La situación de la juventud rural en América Latina. Invisibilidad y estereotipos". Acceso el 4 de mayo de 2024. <https://lc.cx/dOv3gc>
- Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 2024. "Tecnicatura Universitaria en Agroecología". Acceso en abril de 2024. <https://lc.cx/x9gB90>
- Freire, Paulo. 1970. *Pedagogía del oprimido*. Nueva York: Herder y Herder.
- Garatte, María Cecilia. 2016. "Entre la quinta, la escuela y la ciudad. Trayectorias laborales de jóvenes en el cinturón hortícola de La Plata (2003-2015)". Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. https://lc.cx/_irDs
- García, Matías. 2015. "Horticultura de La Plata (Buenos Aires). Modelo productivo irracionalmente exitoso". *Revista de la Facultad de Agronomía* 114 (1): 190-201. https://lc.cx/6_03RI
- García, Matías. 2014. "Fuerza de trabajo en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argentina). Razones y consecuencias de su competitividad". *Trabajo y Sociedad* 22: 67-85. <https://lc.cx/TxvJ8A>
- García, Matías. 2012. "Análisis de las transformaciones de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años. El rol de los horticultores bolivianos". Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18122>
- García, Matías, y Germán Quaranta. 2022. "Análisis de las estadísticas hortícolas de Buenos Aires. Un aporte para la cuantificación de los establecimientos hortícolas de La Plata". *Geograficando* 18 (1): 1-11. <https://doi.org/10.24215/2346898Xe108>
- Huergo, Jorge. 2004. "Desafíos a la extensión desde la perspectiva cultural". *Dialoguemos* 8 (14): 1-6. <http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/100>
- Infocielo. 2021. "UNLP: finalizó la inscripción a las carreras de 2022", 30 de diciembre. <https://lc.cx/TKx2fR>
- Krauskopf, Dina. 2015. "Los marcadores de juventud: la complejidad de las edades". *Última Década* 42: 115-128. <https://ultimadecada.uchile.cl/index.php/UD/article/view/56189>
- Mirafuentes, César, y Mariana Salazar. 2022. "La Revolución Verde y la soberanía alimentaria como contrapropuesta". *Veredas. Revista del Pensamiento Sociológico* 42: 105-131. <https://lc.cx/wximg1>
- Larrañaga, Juan Esteban. 2017. "Juventud rural, trabajo y educación en el periurbano platense: tensiones en torno a la construcción de proyectos futuros". Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. <https://lc.cx/VhpKbG>
- Lemmi, Soledad, Melina Morzilli y Andrea Soledad Castro. 2020. "Jóvenes que horticultean, adultos/as horticultores/as: aproximaciones al sentido de juventud en familias migrantes bolivianas que se dedican a la horticultura en el Gran La Plata". *Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales* 7 (13): 141-172. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millca-digital/article/view/3544>
- Marasas, Mariana, Guillermo Cap, Laura De Luca, Maximiliano Pérez y Raúl Pérez. 2012. *El camino de la transición agroecológica*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Miranda, Ana, ed. 2013. *Ahata che: juventud, migración y género en el corredor paraguayo-argentino*. Buenos Aires: FLACSO Argentina.
- Moretto, Ornella, María Mercedes Hirsch y Soledad Lemmi. 2021. "Trabajo, educación y proyectos de futuro de jóvenes y adultos horticultores migrantes". *Temas Sociales* 49: 60-85. <https://doi.org/10.53287/lzyd9363vf67j>

Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina

Rosenstein, Susana, Carlos Primolini y Adhemar Pascuale. 2003. "Reconstruyendo el sistema de conocimiento local acerca de la sustentabilidad del recurso suelo. El caso de la localidad de Zavalla (Pcia de Santa Fe)". *Theomai* 99: 1-26. <https://lc.cx/Y-IwuT>

Sarandón, Santiago. 2021. "Agroecología: una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias". *Ciencia, Tecnología y Política* 4 (6): 58-68. <https://doi.org/10.24215/26183188e055>

Shoaie, Susana. 2023. "La condición transicional y emergente de las juventudes en el cinturón hortícola platense". *Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales* 10 (18) 1-20: <https://lc.cx/h4Ul-r>

Shoaie, Susana, Graciela Cardarelli, Javier Salinas, Francisco Tancredi y Molvina Zeballos. 2011. *Participación juvenil en el desarrollo territorial: experiencias en Bolivia y Perú*. Lima: DESCO.

Shoaie, Susana, y Matías García. 2021. "Jóvenes de familias migrantes y transición agroecológica en el cinturón hortícola de La Plata, Argentina". *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial* 19: 97-118. <https://doi.org/10.17141/eutopia.19.2021.4966>

Shoaie, Susana, y Matías García. 2020. "Jóvenes, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense". *Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação* 2 (1): 406-417. <https://doi.org/10.33871/26747170.2020.2.1.3361>

Entrevistas

Entrevista a Bianca, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Carlos, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Franco, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Gladys, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022.

Entrevista a Josefina, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Juan, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Laura, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022.

Entrevista a Nancy, estudiante de Ingeniería Agronómica, mayo de 2022.

Entrevista a Pablo, estudiante de la TUnA-UNLP, noviembre de 2022.

Entrevista a Romina, estudiante de la TUnA-UNLP, mayo de 2022.

Cómo citar este artículo:

Shoaie-Baker, Susana. 2025. "Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 71-91. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6242>

Libros de FLACSO Ecuador



Serie Atrio

Una inmersión en la industria del reciclaje: el trabajo de las minadoras en Quito

Catalina Rivadeneira Suárez

Editorial FLACSO Ecuador/ Abya-Yala

246 páginas

Mientras prevalezcan los actuales patrones de consumo, la cantidad de basura seguirá aumentando. También aumentará la necesidad de que alguien la procese con sus manos e inicie así la cadena de reciclaje. ¿Quiénes conforman este primer eslabón?, ¿cómo esta labor ha moldeado sus experiencias? Catalina Rivadeneira nos responde en este libro, protagonizado por las minadoras y ambientado en el espacio social en el que se gestionan los desechos sólidos de Quito.

La autora comienza situando históricamente el arraigo de la precariedad y la violencia en las sociedades de consumo. Luego revela cómo se entretajan las desigualdades de clase y género en la industria del reciclaje, una actividad bien lucrativa para quienes ocupan los eslabones más altos de la cadena. A su vez, da cuenta del significado que las minadoras otorgan a sus vidas al trabajar con aquello que ha perdido valor para la mayoría de la gente.


Palabra a palabra, *Una inmersión en la industria del reciclaje* es un retrato del oficio mismo de vivir, de esa lucha de las minadoras por ser y pertenecer al mundo en cuanto paisaje global. Cada página convoca a reflexionar sobre el derecho al trabajo digno, sobre cómo la gente sostiene sus vidas en el capitalismo.

Disponible en www.flacso.edu.ec

Cambio en la política pública para jóvenes y acceso al empleo en Colombia

Change in public policy for young people and access to employment in Colombia



 Mgtr. Jorge Enrique Martínez-Carvajal. Doctorando. Doctorado en Políticas Públicas, FLACSO (Ecuador). (jemartinezfl@flacso.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0002-7285-6786>)

Recibido: 06/05/2024 • Revisado: 08/08/2024
Aceptado: 18/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En Colombia, las políticas públicas orientadas a la población joven se estructuraron bajo el marco de los derechos sociales, económicos y culturales establecido por la Constitución Política aprobada en el año 1991, lo que permitió ampliar la perspectiva sobre el rol de este grupo etario y de su ciclo de vida. En el presente artículo me enfoco en las políticas públicas dirigidas a la juventud en Colombia entre 1992 y 2022, ahondando especialmente en lo relacionado al empleo juvenil, el cual constituye el caso de estudio. El análisis busca contrastar los patrones teóricos sobre el papel de los y las jóvenes con el rol que se les asigna en la política pública, examinando los planes de desarrollo nacional, los documentos publicados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y los programas de empleo, con el fin de evidenciar los cambios y la evolución hacia el reconocimiento de sus derechos. Se concluye que la estructura gubernamental implementada para el desarrollo de estas políticas, al igual que sus respectivos programas, han limitado la continuidad y la progresión de los derechos juveniles, pues prevalece una visión donde se entiende a la juventud como una etapa de transición en la que los recursos familiares e individuales determinan en gran medida el goce efectivo de sus derechos.

Descriptor: análisis de política pública; cambio de política pública; Colombia; derechos ciudadanos; empleo juvenil; rol de la juventud.

Abstract

In Colombia, public policies aimed at the youth population were structured under the framework of social, economic, and cultural rights established by the national constitution of 1991, which allowed for broadening perspectives regarding the role of this age group and its life cycle. In this article, I focus on public policies aimed at youth in Colombia between 1992 and 2022, especially in relation to youth employment, which constitutes the case study. The analysis seeks to contrast theoretical patterns regarding the role of young people with the role assigned to them in public policy, examining national development plans, documents from the National Council for Economic and Social Policy (CONPES, in Spanish), and employment programs, to demonstrate changes and advances towards the recognition of their rights. It is concluded that the governmental structure implemented for the development of these policies, as well as their respective programs, have limited the continuity and progression of youth rights, as a vision prevails in which youth is understood as a transitional stage and family and individual resources determine to a great extent the effective enjoyment of rights.

Keywords: public policy analysis; public policy change; Colombia; citizenship rights; youth employment; role of youth.

1. Introducción

En Colombia, para el tercer trimestre de 2022 la tasa global de participación (TGP) de la población joven fue de 55,9 %, mientras que las tasas de ocupación y de desempleo fueron del 45,4 % y el 17,9 %, respectivamente (DANE 2022). La tasa de desempleo en el país fue de 9,7 %, por lo que se aprecia una diferencia de 8,2 % en relación con la de dicho grupo poblacional, situación que ha sido recurrente desde principios de la década de los 90. Sobre esto se han identificado múltiples determinantes del desempleo juvenil: las condiciones económicas, los entornos de conflictividad, los programas educativos desactualizados, la ausencia de experiencia y los contactos laborales que se agudizan debido a un entorno familiar precario (De la Hoz-Aguilar, Quejada-Pérez y Yáñez-Contreras 2013; Jaramillo Jassir 2016; Guzmán Cuervo, Munevar Castillo y Acosta Prias 2015). El desempleo juvenil conlleva una serie de implicaciones sociales y económicas entre las que sobresalen las trayectorias laborales precarizadas, una transición a la adultez rezagada, la exclusión del sistema productivo formal y las trampas de pobreza por la permanencia de ingresos bajos o de subsistencia (Banerjee y Dufflo 2007; De la Hoz-Aguilar, Quejada-Pérez y Yáñez-Contreras 2013).

Estos problemas no solo se originan bajo el proceso de crecimiento o desarrollo económico, sino por el reconocimiento institucional de las personas jóvenes en Colombia que ha evolucionado significativamente, reflejando cambios en la percepción social y política de este grupo demográfico y en las respuestas y medidas adoptadas por el Gobierno. Este proceso se ha desarrollado en varias fases, desde la creación de un marco legal y políticas públicas específicas para los y las jóvenes hasta la implementación de programas orientados a promover el empleo, esta última articulada hacia los procesos de formación terciaria.

Ante esta situación, el Estado colombiano ha implementado una serie de programas enfocados en las personas jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad: “Jóvenes en Acción”, “Jóvenes Rurales” o “Aprendices”. Estas políticas incluyeron la puesta en marcha de programas de formación que abarcaban aspectos educativos entre los que destacan la formación para el trabajo, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el acceso a universidades públicas y privadas. El objetivo de estas iniciativas era ofrecer oportunidades a través del fortalecimiento de competencias para facilitar su inserción económica y social. Si bien las competencias son fundamentales para el acceso al empleo, de acuerdo con la tasa de desempleo por nivel educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), Colombia no presenta grandes diferencias en el nivel de desempleo global y ni en la de personas con tercer ciclo de formación, pues solo alcanza un 2,4 % (OCDE 2022).

Ha predominado la búsqueda del compromiso de las jóvenes generaciones con la sociedad, centrado en la educación y en la participación política, trasladando esta lógica al empleo, indicándole o motivándole a crear su propio empleo o a acudir al

denominado emprendimiento. Lo anterior implica una ruptura en la transición del joven a la adultez, especialmente porque las personas jóvenes con redes sociales precarias y sin acceso a información de calidad y financiación quedan excluidas y con una vulneración de derechos que trasciende lo económico y se traslada a lo social. Surge así un desfase entre la práctica económica y su participación política, la cual influye en la política pública no solo por intereses políticos, sino también por la dinámica propia que adoptan los y las jóvenes diferenciándose del resto de la sociedad (Brito Lemus 1998). Esta realidad ha llevado los asuntos económicos y sociales de este grupo etario a ser considerados asuntos públicos por las connotaciones que supone sobre la estabilidad social y económica, pero especialmente por el reconocimiento de derechos señalados en la Constitución y en la jurisprudencia.

¿De qué forma han cambiado las políticas públicas diseñadas para las jóvenes generaciones en Colombia entre 1992 y 2022 y la orientación de los programas de empleo? En el presente artículo se aborda el despliegue de políticas públicas que explícitamente se enfocan en las personas jóvenes y se presenta un análisis del cambio que se registró en esas políticas. La hipótesis que se formula es que el cambio en estas políticas públicas se ha dado mediante una estructura institucional y con coherencia dispersa, condicionada por la coyuntura de gobierno y sin involucrar las necesidades del grupo que buscan beneficiar, pues se han centrado en la responsabilidad de cada joven de crear su propio puesto de trabajo a partir del emprendimiento o del autoempleo.

2. Estado de la cuestión

El desempleo juvenil se considera un problema global (Tamesberger 2017), aun así, la situación en Colombia es permanente, con periodos con una tasa superior al 20 % que supera el promedio regional (Rodríguez 2011). Esto ha llevado a la necesidad no solo de promover procesos de generación de empleo o de actividades económicas, sino a comprender las razones por las que se produce. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que la educación constituye un factor crucial en la tasa de desempleo juvenil en el país (Castillo Robayo 2019; Hopenhayn 2004). Sin embargo, a pesar de su importancia para la consecución de empleos formales, no parece influir significativamente en la probabilidad de tener trabajo (Castillo-Robayo y García-Estévez 2019).

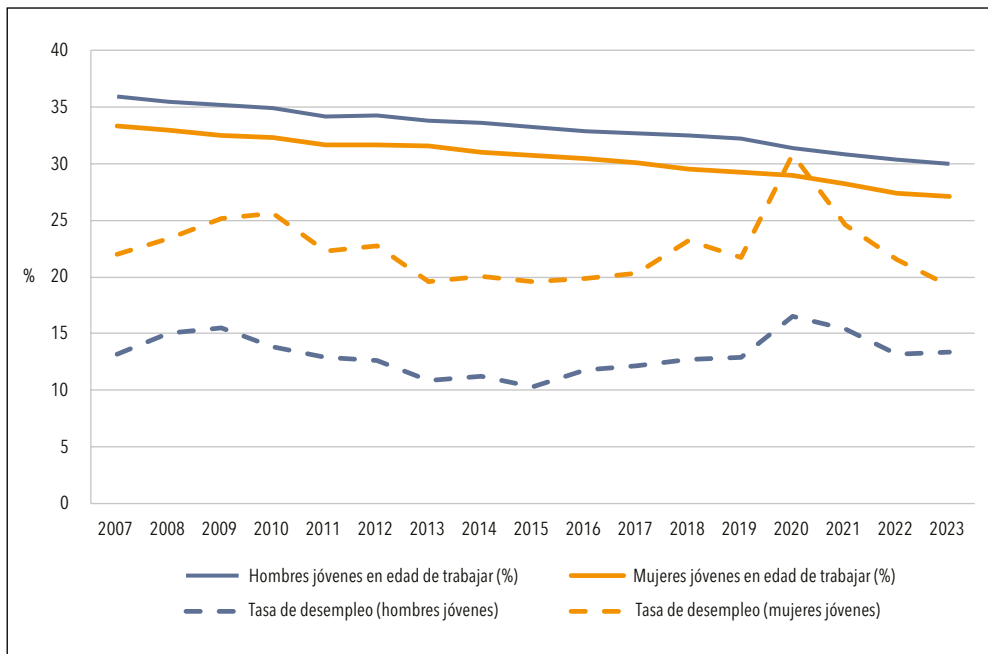
A la dificultad de encontrar un empleo se debe adicionar la brecha salarial, no solo por la edad sino también por el género, que se relaciona con los tipos de formación que toman los y las jóvenes, a pesar que las mujeres cuentan con mayores años de educación que los hombres (Cepeda y Barón 2012). Por lo tanto, los sistemas de intermediación laboral brindan información a la juventud y a las

instituciones de educación sobre las necesidades de las empresas, mejorando la calidad de la oferta laboral e incorporando incentivos para las empresas al contratar jóvenes (OIT 2010).

En los periodos de recesión económica las jóvenes generaciones suelen ser quienes primero pierden sus empleos y las últimas personas en encontrar trabajo durante la recuperación, lo que denota mayor sensibilidad al desempleo y a la continuidad de trayectorias laborales (Castillo Robayo 2019; Viollaz 2014). Por ello, el desafío de las políticas públicas está asociado al aumento de trabajadores y trabajadoras jóvenes con acuerdos laborales estables, a reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población joven y a brindar posibilidades de reentrenamiento a quienes han tenido que emplearse en la economía informal (OIT 2010).

La disminución de la participación de las personas jóvenes en el mercado laboral se asocia a la transición demográfica. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantiene y es peor para las mujeres jóvenes (figura 1). Esto pone de manifiesto que la generación de oportunidades se encuentra segmentada, especialmente para la juventud, y más aún si se trata de las mujeres. Existe evidencia que sugiere que quienes experimentan largos periodos de desempleo enfrentan mayores dificultades para acceder a nuevos puestos de trabajo, especialmente a formales (Ham et al. 2019; Martínez Pedraza 2023).

Figura 1. Población joven en edad de trabajar y desempleo: diferencias entre géneros



Fuente: DANE (2023).

La participación y el vínculo político de los y las jóvenes no solo son cruciales para su inclusión social y económica, también se han convertido en elementos fundamentales para el éxito electoral en Colombia al tratarse de un grupo poblacional fundamental. La capacidad de la gente joven para influir en las decisiones políticas y participar activamente en el proceso democrático es esencial para el futuro político del país. Se trata de un grupo activo en el reclamo de derechos y a la vez se han vuelto una preocupación gubernamental y social dadas las dificultades para su incorporación a la vida política y económica de la nación. Aun así, la literatura para el análisis de política pública para jóvenes, en términos de instrumentos y mecanismos que dan un alcance específico a los derechos, es aún limitada (Soler y Comas 2015) y se suscribe a elementos más de diagnósticos y de percepción.

En el caso de Colombia se destacan los cambios en el enfoque del rol de los y las jóvenes en el desarrollo del país, pasando de un rol instrumentalizado vinculado al servicio militar obligatorio implementado a finales del siglo XIX, una medida para que los hombres realizaran los procesos de adaptación a la vida adulta, a las actividades voluntarias relacionadas con el deporte que imperaron hasta finales del siglo XX. Para la población joven se prioriza lo que se denomina “activación”, que implica que se involucren en los procesos políticos, en el desarrollo económico y en el entorno social para generar vínculos con procesos ya establecidos o con la generación de nuevas dinámicas que los refuerzan. Es fundamental vincular este grupo a las dinámicas de contribución a la seguridad social por medio de la individualización de procesos formativos, de empleo y familiares, donde las contribuciones salariales son el mecanismo para validar ese vínculo (Stallings y Weller 2001).

3. Marco para el análisis del cambio en las políticas públicas para jóvenes

La política pública constituye el conjunto de acciones, directrices y planes que un Gobierno lleva a cabo para solucionar los problemas que enfrenta la sociedad o para alcanzar ciertos objetivos considerados importantes para el bienestar colectivo (Fontaine 2015). Por lo tanto, el análisis de las políticas públicas implica descomponer la complejidad de la acción gubernamental en dimensiones identificables, no con el propósito de simplificarlas, sino de tornarlas comprensibles mediante categorías de análisis (Palier y Surel 2005, 9).

La variable de respuesta utilizada en este artículo es el cambio. Para ello, se aborda la tipología de cambio de política pública propuesta por Peter Hall (1993) que establece tres tipos de modificaciones: de primer orden, vinculado a las calibraciones en los instrumentos de la política dentro de los confines institucionales e instrumentales; de segundo orden, asociado a los cambios en los tipos de instrumentos de política utilizados; y de tercer orden, que implica ajustes paradigmáticos en el conjunto de

los fines abstractos. Se debe señalar que los cambios de primer y segundo orden son más recurrentes debido a los procesos de aprendizaje social, por el contrario, los de tercer orden son más complejos e implican la transformación de todos los órdenes (Cruz-Rubio 2012).

Para comprender el cambio de la política pública centrada en la juventud, se adopta el marco analítico a partir de tres variables que interactúan de forma simultánea: ideas, instituciones e intereses, lo cual permite realizar un abordaje sectorial y comprender la acción pública para jóvenes. La interacción de estas tres variables brinda la posibilidad de vincular las dinámicas, influencias y la estructura de análisis en el funcionamiento del Estado (Palier y Surel 2005, 9), especialmente en acciones que son transversales o intersectoriales. El análisis en la política social toma relevancia dado que posibilita tratar lo económico, asociado a la provisión vía mercado o en contraposición a la promoción de la desmercantilización; lo político, relacionado con la legitimización del poder político por medio de las prestaciones sociales; y lo social, que representa qué tanto la respuesta de la política social reconoce las demandas y los valores sociales (Barba 2007).

El análisis de los instrumentos de política pública se realiza a partir de la matriz propuesta por Howlett y Cashore (2009), que aborda fines, medios y objetivos, permitiendo incorporar el concepto de calibración (tabla 1). Evidenciando así el cambio de política pública por medio de una matriz estructurada que identifica las modificaciones sustantivas en las políticas e instrumentos que impulsan la transformación y el ajuste de la política pública.

Tabla 1. Componentes involucrados en el diseño de las políticas públicas

Nivel de política			
	Alto nivel de abstracción	Operacionalización a nivel de programa	Medias específicas sobre el terreno
Objetivos de las políticas públicas	Objetivos generales abstractos	Objetivos operacionalizables	Objetivos específicos
	La declaración más general a nivel macro de los objetivos y ambiciones del Gobierno en un área específica de política	Las áreas específicas de nivel meso que se espera que aborden las políticas para lograr los objetivos	Los microrrequisitos específicos en el terreno necesarios para alcanzar los objetivos
Componente de las políticas públicas			
Medios de las políticas públicas	Preferencias generales de implementación de políticas	Herramientas de políticas operativas	Calibración de herramientas específicas de las políticas
	Las preferencias a largo plazo del Gobierno en cuanto a los tipos de dispositivos organizacionales que se utilizarán para abordar los objetivos de las políticas	Los tipos específicos de instrumentos rectores que se utilizarán para abordar los objetivos a nivel de programa	Los ajustes específicos de las herramientas de políticas necesarias para alcanzar los objetivos

Elaborada con base en Howlett (2009).

Las políticas públicas para jóvenes, situadas dentro del amplio espectro de la política social, establecen un marco integral que coordina el vínculo entre diversos sectores políticos, instrumentos de asignación de recursos, financiamiento y mecanismos de entrega a los beneficiarios (Gilbert y Terrell 2014). En relación con la prestación de servicios, están mediadas por una red compleja de actores, incluyendo familias, donde los y las jóvenes provenientes de contextos de pobreza cuentan con menores posibilidades de vincularse a procesos de desarrollo económico y social.

Metodología utilizada

La metodología empleada en este artículo es el estudio de caso, dado que brinda la capacidad de proporcionar una comprensión profunda y detallada de las condiciones de un fenómeno y su interrelación con el contexto (Yin 2018). Este método permite captar características propias de los procesos, conservando su naturaleza holística y su riqueza de significados. Se alinea con la pregunta de investigación formulada dado que posibilita abordar un fenómeno complejo y multidimensional en el que las fronteras entre el fenómeno y su entorno no siempre están claramente definidas (Yin 2018). Aun así, se comprende la limitación producto de la selección del método, especialmente en términos de generalización y predicción. En este artículo se privilegia el análisis de política pública debido a la capacidad para integrar fuentes de datos, lo que brinda la posibilidad de abordar políticas intersectoriales o transversales.

Para esto, es relevante definir patrones de política pública, que implica abordar la comparación entre lo teórico y lo empírico, permitiendo validar la hipótesis formulada e identificar discrepancias que pueden ser objeto de exploración adicional (García-Ravidá y González Velázquez 2019). Esta técnica es útil en el contexto de las políticas públicas para jóvenes, donde se pueden identificar patrones de sus roles, estrategias de políticas, programas y tipo de atención. Reconocer estos patrones en este contexto puede ofrecer perspectivas o información sobre la forma en la que ha cambiado la política pública, a qué ideas responden, qué institución promueve la acción y qué intereses subyacen desde la estructura gubernamental.

El instrumento de análisis es la matriz anidada propuesta por Michael Howlett y Benjamin Cashore (2009), que permite sintetizar los instrumentos para evidenciar la manera en la que ha cambiado la política pública para jóvenes en Colombia y la orientación de los programas de empleo. Esta herramienta es útil para identificar los componentes que conforman una política, y aplicada a lo largo del tiempo permite detectar si las políticas públicas, los instrumentos, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y otros programas, han experimentado continuidad o cambio. Una vez conceptualizadas las distintas orientaciones que puede asumir la política pública dirigida a la población joven, se procedió al análisis de las políticas explícitas para este grupo.

Esto permitió extraer conclusiones sobre las modificaciones que han sufrido las políticas públicas, no solo a través de cambios en su denominación o expresión, sino también descomponiendo los fines y los medios de la acción pública. Para lograrlo se realizó un análisis documental referido a las leyes y a los documentos aprobados por el CONPES que han declarado de forma explícita a los y las jóvenes en su propósito y de los instrumentos reflejados en los planes de desarrollo nacional de Colombia. Lo anterior posibilitó la reconstrucción del proceso de la política pública para jóvenes, evidenciando los cambios en relación con los patrones en el reconocimiento del sujeto juvenil en las políticas públicas.

Patrones en la política pública para jóvenes

En Latinoamérica, las generaciones más jóvenes se han visto influenciadas por contextos socioeconómicos y culturales específicos, lo que ha llevado a la necesidad de desarrollar políticas públicas que reconozcan y respondan a tales realidades. Desde la perspectiva sociológica, la juventud se considera una etapa de transición que implica la búsqueda de identidad y la construcción de relaciones sociales (Leyva Tarazona et al. 2021). Este enfoque resalta la importancia de las experiencias vividas y cómo estas influyen en la percepción de la realidad; de igual forma, representa un periodo de construcción de subjetividad y de regulación del comportamiento (Hirsch 2022; Fandiño Parra 2011). Desde la antropología se ha propuesto un enfoque multidimensional, en el cual este grupo etario, en cuanto parte activa del cuerpo social, presenta una disputa intergeneracional que configura iniciativas juveniles que pueden desafiar las normas establecidas (Segura Lazcano, Vilchis Torres y Argüello Zepeda 2021).

La política pública para jóvenes puede ser diseñada bajo diferentes ideas, especialmente por el rol que deben asumir en la sociedad o por el modo en que la sociedad les percibe. En tal sentido, se pueden señalar los siguientes patrones: les miran desde la transición a la adultez o el déficit en las manifestaciones de su desarrollo, les consideran una amenaza al orden social, les incluyen dentro del concepto de ciudadanía o en su calidad de actores estratégicos del desarrollo.

En este artículo, se ha tomado la clasificación propuesta por Dina Krauskopf (2003), quien prioriza el reconocimiento del sujeto juvenil en las políticas públicas para este segmento en Centroamérica. Así, plantea la necesidad de visibilizar a las y los jóvenes como sujetos sociales: en el diseño de la política pública se deben involucrar sus necesidades específicas y, para ello, se debe transformar la institucionalidad partiendo de situaciones específicas y no de la percepción de la sociedad (tabla 2).

Tabla 2. Principales patrones de las políticas públicas dirigidas a la juventud

Enfoque		Estrategia de política	Programas	Tipo de atención
Rol de la población joven	Objetivo			
Transición a la adultez Del joven a la sociedad	Preparación para la adultez	Orientadas a la preparación para la adultez. Extensión de la cobertura educativa. Tiempo libre, recreación y deporte. Servicio militar.	Universales Indiferenciados Aislados	Indiferenciada. Pensada como protección externa. Se les consideraba sujetos pasivos. Implicaba discriminación étnica.
Riesgo y trasgresión De la sociedad al joven	Evitar que se conviertan en problemas para sociedad	Compensatorias. Sectoriales (predominio de salud y justicia). Focalizadas.	Relevancia de la juventud urbano-popular. Dispersión de las ofertas.	Asistencialismo. Control externo. Criminalización de jóvenes pobres.
Juventud ciudadana Del joven a la sociedad	Crecimiento y desarrollo social	Articulación de política pública. Intersectoriales Inclusión sujetos de derechos	Integral y participativa. Alianzas extendidas. Equidad de género.	Preparación, promoción y cuidado integral. Acceso equitativo. Protección de derechos. Escenarios diversos y descentralizados
Actor estratégico para el desarrollo De la sociedad al joven	Formación y aporte productivo	Políticas públicas intersectoriales para la vinculación. Incorporación como capital humano y parte del desarrollo del capital social.	Equidad y transversalidad institucional contra la exclusión. Aporte a las estrategias de desarrollo.	Inclusión en el desarrollo social para fortalecer el capital humano, social y cultural. Manejo social del riesgo. Participación efectiva.

Fuente: Adaptada a partir de Krauskopf (2003, 19).

Estos patrones se pueden entender como un proceso, desde la comprensión de la transición a la adultez y sus riesgos hasta el reconocimiento de que la juventud integra la ciudadanía y son actores fundamentales para el desarrollo. Los cambios en los instrumentos no se dan de forma abrupta, sino que se realizan al margen para responder a un mecanismo de adaptación más que una optimización (Fontaine 2015, 108). En el caso de las políticas dirigidas a los y las jóvenes se relaciona con los sectores que intervienen.

Asumiendo la conceptualización presentada en la tabla 2, se puede identificar el rol asignado a cada joven en las declaraciones incorporadas en los documentos de política pública. Esto permite contrastar la transformación y el cambio de la política pública para jóvenes en leyes, planes de desarrollo y en documentos del CONPES. En el contexto específico de Colombia, se abordan los desafíos que enfrenta este grupo a través de políticas que implícitamente le asignan un papel al joven en cuanto sujeto que se diferencia dentro de un marco de acción más amplio, por ejemplo, la paz, la estabilidad

social y el crecimiento económico. Con esas premisas se han formulado políticas públicas explícitas e implícitas: las primeras se enfocan en la situación de la población joven; y las segundas si bien no se crean para influir directamente en tal población, tienen impactos positivos o negativos en ella (Romero Rodríguez et al. 2015, 122).

4. Resultados

En 1997 Colombia estableció su primer marco normativo específico pensando en la gente más joven: la Ley 375, también conocida como Ley de la Juventud. Dicha ley fue diseñada para promover el desarrollo integral de las nuevas generaciones en aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales y fomentar su participación activa en la vida nacional. Además, se instituyó el Sistema Nacional de Juventud y diferentes instancias de participación, por ejemplo, los consejos locales y el Consejo Nacional de Juventud. Esta legislación marcó el inicio de un enfoque de ciudadanía juvenil que se consolidó con la Ley 1622 de 2013 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con los cuales se garantizaba un reconocimiento pleno de la ciudadanía de los y las jóvenes y el goce efectivo de sus derechos.

Con respecto a los cambios institucionales o de primer orden, en la tabla 3 se evidencia el aumento en el rango de edad para el reconocimiento de las personas jóvenes. Esto demuestra cómo la juventud, en cuanto concepto social, ha sido objeto de diversas construcciones y representaciones que reflejan su complejidad y su vinculación con procesos de dependencia, de tránsito a la adultez y de subordinación (Cozachcow 2016). Si bien lo anterior sugiere un proceso de evolución y calibración de acuerdo con las circunstancias sociales que la definen, esto ha favorecido la ambigüedad e invisibilización en la programación social (Krauskopf 2003) al momento de focalizar y definir acciones de gobierno para la población joven.

Complementario a la legislación, el Gobierno ha expedido documentos de política pública en el marco del CONPES, que está integrado por los ministros del gabinete, la secretaría técnica a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y encabezado por el presidente de la República; su principal función es la aprobación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del Gobierno nacional (DNP 2024). En 1988 el DNP reconoció la necesidad de dar respuesta a las demandas de las jóvenes generaciones y publicó los lineamientos generales para formular la política pública de juventud, con el objetivo de orientar las acciones gubernamentales hacia dicho grupo.

Tabla 3. Compresión de las edades para ser joven

Año	Reglamentado por	Rango de edad
1992	Política social para los jóvenes y las mujeres	12-24
1997	Ley 375	14-26
2013	Ley 1622	14-28

Fuente: Elaborada a partir de Romero Rodríguez et al. (2015).

Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, el Gobierno adoptó la “Política social para los jóvenes y las mujeres” en 1992. El objetivo era “garantizar la plena participación de los jóvenes en la vida social, económica y productiva del país y mejorar las condiciones de vida” (DNP 1992, 6). Este documento se considera un hito, dado que define características que aún se conservan en la política pública para jóvenes; muestra de ello es la importancia de la ejecución de los proyectos de forma descentralizada en los municipios a fin de lograr las metas propuestas.

En el documento “Política social para los jóvenes y las mujeres” se incorpora a la población joven en el marco de la familia y las mujeres y se plantea la juventud como un estado de tránsito. En 1995 se adopta el CONPES 2794 “Política de juventud”, con la cual se reconoce a la persona joven en su calidad de sujeto de derechos, promoviendo espacios de participación; no obstante, su centro se fija en la educación en cuanto principal derecho. La organización institucional que se dispuso para llevar a cabo la política pública se vinculó al Ministerio de Educación Nacional y se creó un viceministerio como órgano de diseño y coordinación en el cual predominó la lógica sectorial de la educación.

En Colombia, la organización institucional encargada de las personas jóvenes refleja la importancia política del tema, con un discurso que ha venido consolidándose desde la década de los 90 en vínculo con el cargo del presidente de la República. Sin embargo, la capacidad operativa para movilizar recursos o generar programas ha sido limitada, incluso en el periodo 1994-2000 donde tuvo la categoría de viceministerio (tabla 4). En el marco del denominado “Plan Colombia” se promulgó el CONPES 3081/2000, que dio paso al programa de subsidios condicionados y capacitación laboral para jóvenes sin empleo y de bajos recursos, estrategia que se vinculó de nuevo a la presidencia de la República.

En el año 2000 se suprimió el Viceministerio de la Juventud y la responsabilidad administrativa asociada a los programas o proyectos orientados a jóvenes pasó de nuevo a una consejería presidencial (tabla 4). Pero, en este caso, con una fuente de recursos externa al Gobierno y bajo el enfoque de la juventud como grupo poblacional conflictivo, especialmente en las áreas rurales del país. Esto último se explica por la crisis social y de orden público que afrontaba Colombia en las áreas rurales por el conflicto armado. Si bien el CONPES 3081 es relevante para comprender el ordenamiento institucional, las ideas y los intereses alrededor de los jóvenes corresponde a un programa específico que tuvo una duración limitada.

En 2021 se adopta el CONPES 4040 “Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud”, cuyo fin es “promover el desarrollo integral de la población joven urbana y rural y la construcción de sus proyectos de vida, para contribuir a su vinculación como agentes de desarrollo político, económico, social y cultural del país” (CONPES 2021, 13). Actualiza el marco de las políticas para jóvenes e incorpora la vivienda cual elemento fundamental para el joven. Aun cuando adopta un enfoque de curso de vida, reconoce dimensiones fuera de la educación, la participación y el empleo para el desarrollo pleno de cada joven.

Tabla 4. Documentos explícitos de política pública para jóvenes

Año	Documentos del Consejo Nacional de Política Social
1992	Política social para los jóvenes y las mujeres
1995	Política nacional de juventud
2014	Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes
2021	Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud

Elaborada por el autor.

Nota: En cuanto al tipo de documento, todos corresponden a guías de política pública.

En la tabla 5 se presentan los cambios organizacionales o institucionales en la entidad responsable o interlocutora con la población joven. Las transformaciones se caracterizan por su lógica intersectorial y por la relación con el programa presidencial. El vínculo político para diseñar políticas cuyos grupos metas son la gente joven es más relevante que los aspectos asociados al goce de los derechos o la movilización de recursos de forma específica (Romero Rodríguez et al. 2015). Se definió que las políticas de juventud serían transversales en estructura administrativa y programática de cada entidad territorial y de la nación, a través de la articulación de objetivos sectoriales (Ley 1622/2013, art. 12).

Tabla 5. Instituciones que han orientado las políticas de jóvenes

Año	Nombre	Institución/dependencia	Documento asociado	Rol institucional
1990	Consejería para la Juventud, la Niñez y la Familia	Despacho del presidente de la República	Decreto 1878, art. 1	Aconsejar y asesorar
1994	Viceministerio de la Juventud	Ministerio de Educación	Decreto 1953, art. 5	Diseño y coordinación
2000	Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”	Departamento administrativo de la presidencia/director del programa	Decreto 822, art. 1	Diseño y asistencia
2006	Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, “Colombia Joven”	Departamento administrativo de la Presidencia/Oficina de la Vicepresidencia de la República	Decreto 1984, art. 1.	Diseño y asistencia
2013	Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, “Colombia Joven”	Departamento administrativo de la Presidencia/director del departamento	Decreto 1919	Diseño y coordinación del SNJ
2019	Consejería Presidencial para la Juventud, “Colombia Joven”	Departamento administrativo de la Presidencia/jefe de Gabinete	Decreto 1784	Asistencia y coordinación
2022	Consejería Presidencial para la Juventud	Departamento administrativo de la Presidencia/director del departamento	Decreto 2647	Diseño y coordinación

Fuente: Adaptación y actualización a partir de Romero Rodríguez et al. (2015).

Entre los cambios de segundo orden se encuentran los instrumentos orientados por el rol que se le brinda a la gente joven en la sociedad. En la década de los 90 los documentos del CONPES planteaban, la adaptación de sus derechos a la educación y la participación social o política, como tradicionalmente se había realizado. Pero en el año 2000 ese enfoque se transformó, dando paso a la problematización del joven e incorporando la necesidad de evitar el reclutamiento, brindando mayor acceso al empleo y al emprendimiento (autoempleo). Adicionalmente, se refleja en la supresión del Viceministerio de la Juventud, cuyas responsabilidades fueron trasladadas, de nuevo, a la presidencia de la República.

Para realizar la revisión de las calibraciones se llevó a cabo el análisis de ocho planes de desarrollo nacional, principales instrumentos de planeación en términos de proyectos y asignación presupuestal en los cuales se definen las acciones y metas. En la tabla 6 se presenta una síntesis de los resultados, vinculando las acciones de los y las jóvenes al enfoque que adoptan las políticas públicas diseñadas para este grupo.

Los cambios de la política pública han respondido más a una orientación de transición a la adultez, que esquematiza las nociones de vida y desarrollo social, y que en muchos casos ya no está vigente y no corresponde a las estructuras de trabajo y a las expectativas. Esto se debe, entre otros factores, a la irrupción de nuevas condiciones, como la tecnología, con una orientación a otro tipo de vocaciones, pero especialmente a la concepción del trabajo que tiene cada generación de jóvenes. En consecuencia, un enfoque de derechos o la asociación de las personas jóvenes con los procesos de desarrollo presentan mayor posibilidad de adaptación.

Tabla 6. Resumen de los planes de desarrollo y orientación de acciones hacia jóvenes

Periodo	Presidente	Plan de desarrollo	Transición a la adultez	Riesgo y trasgresión	Juventud ciudadana	Actor estratégico para el desarrollo
1990-1994	Cesar Gaviria	La revolución pacífica	X			
1994-1998	Ernesto Samper	El salto social		X	X	
1998-2002	Andrés Pastrana	Cambio para construir la paz	X	X		
2002-2006	Álvaro Uribe Vélez	Hacia un Estado comunitario	X			X
2006-2010		Estado comunitario			X	
2010-2014	Juan Manuel Santos	Prosperidad para todos	X			
2014-2018		Todos por un nuevo país	X		X	X
2018-2022	Iván Duque Márquez	Pacto por Colombia, pacto por la equidad	X	X		

Elaborada por el autor.

Programas de empleo juvenil

Las políticas de empleo para jóvenes en Colombia no solo han pretendido combatir el alto desempleo juvenil, también se han propuesto vincular a quienes finalizan sus procesos de formación o cualificación, generando incentivos para las empresas en caso de que les ofrezcan el denominado primer empleo. Ahora bien, los instrumentos que menos se han transformado son los relacionados al empleo; en la década de los 90 se promovió la formación en cuanto medio principal para dar paso a los incentivos empresariales y facilitar el acceso al empleo; a partir de 2002 se profundizó en los programas de emprendimiento o autoempleo, con mecanismos de financiación, por ejemplo, el fondo Emprender, administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La inserción económica de los y las jóvenes ha sido un componente de todas las políticas adoptadas por el Gobierno colombiano que han tenido como objetivo cerrar esta brecha en el empleo juvenil (tabla 7) (González-Velosa 2021). El problema tiende a crecer y la ausencia de una estrategia efectiva para incidir en su solución está condicionada por el enfoque o propósito de la política pública implementada.

Tabla 7. Objetivos de los programas de empleo para jóvenes

Legalización, política pública o programa	Hacia la oferta laboral	Incidencia en la demanda de trabajo	De mercado laboral
Jóvenes en Acción y Rurales, 2000-2022	X		
Ley 789/2002, art. 40. Fondo Emprender		X	
Ley 789/200, art. 32. Aprendices o practicantes	X		
Programa Jóvenes con Empresa, 2004-2009		X	
Ley 1429/2010. Ley del Primer Empleo	X		
Ley 1636/2013. “Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia” Creación de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo			X
CONPES 173/2014. Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes		X	
Ley 1780/2016. “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”		X	
Ley 2043/2020. Se reconocen o acreditan las prácticas laborales como experiencia profesional o relacionada; se dictan otras disposiciones.	X		
Estrategia Sacúdete, Decreto 688/2021			X

Elaborada por el autor.

Los programas de empleo para jóvenes se pueden caracterizar por su propósito. De acuerdo con Farné (2009), estos son: a) orientados al fortalecimiento de la oferta laboral, formación o cualificación; b) que incida en la demanda de trabajo (se orientan a la creación de puestos de trabajo nuevos o que las personas desempleadas se provean su propio empleo); y c) vinculados a incidir en el funcionamiento del mercado laboral (se centran en medidas de información de vacantes o en generar incentivos para la contratación de jóvenes).

A pesar de esta estructura, los recursos públicos involucrados han sido insuficientes para la reducción del desempleo de las y los jóvenes; además, dado que las condiciones económicas de Colombia a finales de 2019 se deterioraron, surgieron una serie de protestas de este grupo etario, ya no solo vinculadas al movimiento estudiantil, sino como expresión social del malestar, que se denominó “estallido social” (Rodríguez y Pérez-Cardoso 2022). La pandemia, en 2020, modificó la agenda social, que en 2021 se reactivó e implicó que el Gobierno de Colombia optara por nuevas medidas no solo para tramitar o escuchar a sus jóvenes, sino para transformar de forma definitiva los derechos sociales desde la potencialidad de este grupo etario.

5. Conclusiones

107

Respondiendo a la pregunta planteada en la introducción —¿de qué forma han cambiado las políticas públicas diseñadas para las jóvenes generaciones en Colombia entre 1992 y 2022 y la orientación de los programas de empleo?—, se arriba a las siguientes conclusiones. A pesar de contar con un amplio marco de derechos establecido en la Constitución, en la política pública ha predominado un concepto de juventud/jóvenes como una etapa de transición hacia la adultez. En el ámbito del empleo, si bien las políticas se han segmentado entre medidas de oferta y demanda laboral, no han logrado posicionar a la población joven en cuanto actores estratégicos en el desarrollo del país. Para lograrlo, sería necesario ir más allá de esas medidas e impulsar un mercado laboral que ofrezca mecanismos de democratización, acceso e información.

En cuanto a la hipótesis formulada, el vínculo de la presidencia de la República con el programa de jóvenes es constante, lo cual le confiere máxima importancia, en especial en el discurso político hacia el electorado joven o sobre procesos de renovación, pero limita operativa y organizacionalmente la implementación de instrumentos. Si bien esto otorga visibilidad política, en la práctica la gestión queda fragmentada y restringida por el enfoque sectorial que se adopte (Hirsch 2022).

También la calibración de instrumentos presentada en este artículo confirma que en Colombia las políticas diseñadas para jóvenes, al estar vinculadas a los planes de desarrollo, han realizado mayor hincapié en abordar la juventud en cuanto transición a la adultez, enfoque que ha estado presente en seis de los ocho planes de desarrollo.

En los periodos de mayor conflicto, por ejemplo 1994-2002, la juventud se asoció con el riesgo y la trasgresión, idea coherente con el contexto social, al igual que entre 2018 y 2022 cuando se les percibió desde el riesgo.

El enfoque de la juventud como actor estratégico para el desarrollo solo lo incorporan dos planes (periodos 2002-2006 y 2014-2018) que contienen lo señalado en el Estatuto de Ciudadanía. Un caso particular se refleja en la trayectoria del programa “Colombia joven”, que se instauró con el plan de desarrollo promulgado en 1998 y tuvo continuidad hasta 2022, con variaciones mínimas en su aplicación. Fue a partir de 2019 que se dieron cambios de primer y segundo orden en la política pública para dar respuesta al estallido social (protestas) y a la pandemia, que no solo modificó las necesidades sino el acceso de las personas jóvenes a bienes y servicios públicos. No obstante, en dicha política pública se mantiene el enfoque con el cual considera la juventud una transición a la adultez, un paradigma establecido desde 1992.

Con relación al poder legislativo, la promulgación de la Ley 375 de 1997 vinculó rápidamente a los jóvenes a un reconocimiento temprano de sus derechos, desarrolló el Sistema Nacional de Juventud y los Consejos de Juventud. Sin embargo, no desarrolló instrumentos ni mecanismos para su aplicación. En 2013 y 2018 fue promulgado y perfeccionado el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es un conjunto de normas robusto, con una naturaleza estatutaria que permite armonizar las acciones a nivel local y generar un marco más ambicioso de implementación (Garzón et al. 2018, 167). Aun así, la falta de una institución u organización que tenga la posibilidad de autonomía administrativa y presupuestal, desde el Gobierno nacional, genera limitaciones para llevar el discurso político a las acciones.

En cuanto a las ambigüedades, se puede señalar que el marco de derechos ciudadanos para jóvenes continúa fundamentando las acciones en la responsabilidad de la familia y de cada joven. Por consiguiente, la movilización de recursos recae sobre estos sujetos, especialmente en la educación superior que, de acuerdo con Sabatinelli (2010), debe conducir a la obtención de un empleo y generar el cambio de una persona beneficiaria pasiva a una activa. A su vez, hay un doble sentido en la continuidad del enfoque con el que se considera a la juventud una transición a la adultez y la dirección gubernamental vinculada a la presidencia de la República. Por un lado, ello ha significado una limitación operativa y presupuestal y también una mayor vinculación de los problemas de la juventud con los intereses políticos. Por otro, a partir de la iniciativa del Congreso de la República, las leyes promulgadas han permitido el reconocimiento de las personas jóvenes en su calidad de sujetos de derechos y del contexto en cuanto actor estratégico del desarrollo.

Apoyos

Este artículo es resultado del programa de Doctorado en Políticas Públicas llevado a cabo con el apoyo de una beca de excelencia otorgada por FLACSO Ecuador. Agradezco los valiosos comentarios de la Dra. Margarita Manosalvas, así como de revisores y revisoras de *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, cuyos aportes contribuyeron significativamente a mejorar el contenido del presente texto.

Referencias

- Banerjee, Abhijit, y Esther Duflo. 2007. "The economic lives of the poor". *Journal of Economic Perspectives* 21 (1): 141-168. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>
- Barba, Carlos. 2007. "América Latina: regímenes de bienestar en transición durante los años noventa". *Caderno CRH* 20 (50): 197-211. <https://doi.org/10.9771/ccrh.v20i50.18912>
- Brito Lemus, Roberto. 1998. "Hacia una sociología de la juventud". *Última Década* 6 (9): 170-182. https://lc.cx/Qt_f_cy
- Castillo Robayo, Cristian Darío. 2019. "Desempleo juvenil en Colombia". Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid. <https://lc.cx/s5Gs72>
- Castillo-Robayo, Cristian Darío, y Javier García-Estévez. 2019. "Desempleo juvenil en Colombia: ¿la educación importa?". *Revista Finanzas y Política Económica* 11 (1): 101-127. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.1.7>
- Cepeda, Laura, y Juan Barón. 2012. "Segregación educativa y la brecha salarial por género entre los recién graduados universitarios en Colombia". Documento de Trabajo 162, Banco de la República. <https://lc.cx/MFL9QJ>
- CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia). 2021. "Pacto Colombia con las juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud". Acceso el 17 de octubre de 2023. <https://lc.cx/FpaFwJ>
- CONPES. 1992. "Política social para los jóvenes y las mujeres", 3 de noviembre. <https://lc.cx/5EZs6X>
- Cozachcow, Alejandro. 2016. "La construcción de la juventud como problemática de política pública en la Argentina: análisis de iniciativas de legislación sobre juventudes entre 1983 y 2015". *Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 24: 197-223. <https://doi.org/10.17163/uni.n24.2016.08>
- Cruz-Rubio, César. 2012. "La taxonomía del cambio: enfoques y tipologías para la determinación del cambio de las políticas públicas". *Andamios. Revista de Investigación Social* 9 (20): 297-321. <https://doi.org/10.29092/uacm.v9i20.382>
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 2023. "Gran Encuesta Integrada de Hogares". Acceso el 17 de octubre de 2023. <https://lc.cx/NPe82k>
- DANE. 2022. "Mercado laboral de la juventud", 12 de diciembre. https://lc.cx/MfUU_K
- De la Hoz-Aguilar, Fabio José, Raúl Quejada-Pérez y Martha Yáñez-Contreras. 2013. "Desempleo juvenil en Cartagena de Indias: un análisis transversal de sus causas y consecuencias". *Papeles de Población* 19 (75): 1-27. <https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8400>

- DNP (Departamento Nacional de Planeación). 2024. “Consejo Nacional de Política Económica y Social”, 14 de junio. https://lc.cx/_7I8w4
- Farné, Stefano. 2009. *Políticas activas del mercado de trabajo en Colombia, México y Perú*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Fandiño Parra, Yamith José. 2011. “Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos”. *Revista Iberoamericana de Educación Superior* 2 (4): 150-163. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2011.4.42>
- Fontaine, Guillaume. 2015. *El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y métodos*. Barcelona: Anthropos.
- García-Ravidá, Laura Betiana, y Lilia González Velázquez. 2019. “Patrones de aprendizaje en el contexto universitario mexicano: revisión sistemática del modelo y de sus publicaciones”. *Revista Colombiana de Educación* 1 (77): 299-320. <https://doi.org/10.17227/rce.num77-9538>
- Gilbert, Neil, y Paul Terrell. 2014. *Dimensions of Social Welfare Policy*. Essex: Pearson Education.
- González-Velosa, Carolina. 2021. “Se buscan empleos de calidad: políticas activas y pasivas de empleo en Colombia. Informe para la misión de empleo”. Nota Técnica, Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0003826>
- Guzmán Cuervo, Andrés, Leonardo Munevar Castillo y Johnattan Acosta Prias. 2015. “Determinantes del desempleo juvenil en Colombia: un análisis econométrico para el periodo 2002-2011”. Tesis de licenciatura, Universidad de La Salle. <https://lc.cx/k2o-bz>
- Hall, Peter. 1993. “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain”. *Comparative Politics* 25 (3): 275-296. <https://doi.org/10.2307/422246>
- Hirsch, María Mercedes. 2022. “Jóvenes y proyectos de futuro. Entre la educación superior y el trabajo en Cañuelas, provincia de Buenos Aires”. *Estudios Rurales* 10 (19): 1-16. <https://doi.org/10.48160/22504001er19.96>
- Hopenhayn, Martín. 2004. *La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Howlett, Michael. 2009. “Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design”. *Policy Sciences* 42 (1): 73-89. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1>
- Howlett, Michael, y Benjamin Cashore. 2009. “The Dependent Variable Problem in the Study of Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem”. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 11 (1): 33-46. <https://doi.org/10.1080/13876980802648144>
- Jaramillo Jassir, Iván Daniel. 2016. *Desempleo juvenil en Colombia*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Krauskopf, Dina. 2003. “La construcción de políticas de juventud en Centroamérica”. En *Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales*, editado por Oscar Dávila, 13-46. Viña del Mar: Ediciones CIDPA.
- Ley 375/1997. Por la Cual se Crea la Ley de la Juventud y se Dictan Otras Disposiciones. Diario Oficial 43079, 9 de julio. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5322>
- Ley 1622/2013. Por Medio de la Cual se Expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se Dictan Otras Disposiciones. Diario Oficial 48776, 29 de abril. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52971>

- Leyva Tarazona, Gloria Melina, Ketty Marilú Moscoso Paucarchuco, Cristian Jordy Casas Cornelio, Reysenia Peña Chinguel, Claudia Adelayda Quispe Santos, Anali Karin Sillo Campos y Kelvin Jhon Ramírez Palomino. 2021. “Resiliencia laboral juvenil en tiempos de pandemia”. *Visionarios en Ciencia y Tecnología* 6 (1): 186-226. <https://doi.org/10.47186/visct.v6is1.81>
- Martínez Pedraza, Angie Alejandra. 2023. “Mapa de brecha de evidencia a partir de la revisión sistemática de las estrategias para mejorar el empleo juvenil en América Latina y el Caribe”. Tesis de maestría, Universidad de Los Andes. <https://lc.cx/zvfpRh>
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 2022. *Estudios económicos de la OCDE: Colombia 2022*. París: OCDE. <https://doi.org/10.1787/991f37df-es>
- OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2010. “Políticas de empleo juvenil durante la recuperación económica”. Acceso el 7 de enero de 2024. <https://lc.cx/cbnun6>
- Palier, Bruno, e Yves Surel. 2005. “Les ‘trois I’ et l’analyse de l’État en action”. *Revue Française de Science Politique* 55 (1): 7-32. https://lc.cx/_UWTKg
- Rodríguez, Ernesto. 2011. “Políticas de juventud y desarrollo social en América Latina: bases para la construcción de respuestas integradas”. Ponencia presentada en el VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina. San Salvador, 11 y 12 de julio. https://lc.cx/5lyD_K
- Rodríguez, Jairo, y Gabriela Pérez-Cardozo. 2022. “Estallido social: ¿nuevas o viejas agendas del movimiento social?”. *Bitácora Urbano Territorial* 32 (3): 7-13. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n3.104811>
- Romero Rodríguez, Gina, Cindy García Buitrago, Carlos Rodríguez Castro, Daniel Tobón-García y Juliana Aguilar Forero. 2015. *Juventud y políticas públicas en Colombia*. Berlín: Youth Policy Press.
- Sabatinelli, Stefania. 2010. “Activation and Rescaling: Interrelated Questions in Social Policy?”. En *Rescaling Social Policies: Towards Multilevel Governance in Europe*, editado por Yuri Kazepov, 75-102. Viena: Ashgate Publishing.
- Segura Lazcano, Gustavo Antonio, Ivett Vilchis Torres y Francisco José Argüello Zepeda. 2021. “Juventud y confinamiento social en México”. *Antropología Experimental* 21: 27-38. <https://doi.org/10.17561/rae.v21.6667>
- Soler, Pere, y Domingo Comas. 2015. “Los estudios sobre políticas de juventud en España”. *Revista de Estudios de Juventud* 110: 173-189. <https://lc.cx/rlgmqN>
- Stallings, Barbara, y Jürgen Weller. 2001. “El empleo en América Latina, base fundamental de la política social”. *Revista de la CEPAL* 75: 191-210. <https://lc.cx/NT2U65>
- Tamesberger, Dennis. 2017. “¿Pueden explicarse las diferencias en cuanto a desempleo juvenil según el régimen laboral y de bienestar imperante?”. *Revista Internacional del Trabajo* 136 (3-4): 461-482. <https://doi.org/10.1111/ilrs.12067>
- Viollaz, Mariana. 2014. “Transición de la escuela al trabajo. Tres décadas de evidencia para América Latina”. *Revista de la CEPAL* 112: 47-75. <https://doi.org/10.18356/4472d750-es>
- Yin, Robert. 2018. *Case Study Research and Applications - Design and Methods*. Londres: SAGE.

Cómo citar este artículo:

Martínez-Carvajal, Jorge Enrique. 2025. “Cambio en la política pública para jóvenes y acceso al empleo en Colombia”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 93-111. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6240>

Libros de FLACSO Ecuador



Serie Atrio

Fracturas que nos marcan.

Las desigualdades en la educación en Ecuador

Ana María Larrea Maldonado

Editorial FLACSO Ecuador

276 páginas

Historias cargadas de sueños y esperanzas, pero también de angustia y frustración son el sustrato del libro. Ana María Larrea reúne las voces de diferentes actores del entorno educativo: estudiantes, docentes y directivos, para mostrar la relación entre violencia y desigualdad y cómo esta produce la exclusión social.

La novedad de su aporte se basa en la aplicación del enfoque de las capacidades, propuesto por Amartya Sen, al campo de la educación en Ecuador. Además, revisa las políticas educativas en el país desde 1980 y hasta 2017, a fin de contextualizar el ambiente social en el que se desenvuelve el estudiantado y los principales rasgos del entorno escolar.

Todo ello hace de *Fracturas que nos marcan...* una reflexión original sobre el funcionamiento de las unidades educativas ecuatorianas durante el período 2007-2017. Ana María Larrea busca motivar tanto a los actores directos del ámbito educativo como a quienes diseñan las políticas públicas del sector, con una exhortación académica y social: situar la igualdad en el centro del debate sobre la educación.



Disponible en www.flacso.edu.ec

t
temas

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

Health professionals in favor of abortion in Argentina: Between rights and institutional clandestinity



-  Mgtr. Romina Accossatto. Doctoranda. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Centro Científico Tecnológico Mendoza y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). (romina.accossatto@gmail.com) (<https://orcid.org/0000-0003-0306-3704>)
-  Esp. Lucas Marucci. Doctorando. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Centro Científico Tecnológico Mendoza y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). (lucasmmarucci@gmail.com) (<https://orcid.org/0009-0001-9001-1293>)

Recibido: 15/01/2024 • Revisado: 11/04/2024
Aceptado: 03/09/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En el presente artículo se examina el rol de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (Red) en el proceso de implementación de las interrupciones del embarazo en Mendoza, Argentina, entre los años 2018 y 2020. Para ello, nos centramos en el proceso de emergencia de la Red, en su articulación con el Estado provincial y en el impacto que tuvieron sus intervenciones en el acceso al aborto en el sistema de salud. Metodológicamente se emplea el enfoque cualitativo a través del estudio de casos, combinando diferentes fuentes de información: entrevistas en profundidad, análisis documental y sistematización de indicadores sanitarios. Los resultados muestran que entre 2018 y 2020 se produjo una articulación entre activismos feministas, profesionales de la salud y funcionarios y funcionarias estatales. Esto permitió sostener el circuito de implementación de interrupciones del embarazo a través de una dinámica de clandestinidad institucional donde confluyeron prácticas y saberes de los acompañamientos feministas con un precario entramado institucional del sistema de salud. En este marco, la Red se convirtió en un actor fundamental en el desarrollo de intervenciones, de conexiones y de dispositivos para garantizar el acceso a interrupciones del embarazo.

Descriptores: aborto; Argentina; derechos reproductivos; movimiento feminista; políticas de salud; políticas públicas.

Abstract

This paper examines the Network of Health Professionals for the Right to Choose in the process of implementation of pregnancy terminations in Mendoza, Argentina, between 2018 and 2020. We focus on the rise of the Network and their coordination with the provincial government and on the impact of their interventions in abortion access within the public health system. Methodologically, a qualitative approach is used through case studies, combining a variety of sources of information: in-depth interviews, documentary analysis, and systematization of health indicators. The results show that between 2018 and 2020 there was an articulation between feminist activism, health professionals, and state officials and civil servants. This enabled sustaining the implementation circuit of pregnancy terminations through a dynamic of institutional clandestinity, where practices and knowledge of feminist accompaniments converged with the precarious institutional framework of the health system. Within this framework, the Network became a fundamental actor in the development of interventions, connections, and mechanisms to guarantee access to pregnancy terminations.

Keywords: abortion; Argentina; reproductive rights; feminist movement; health policy; public policy.



1. Introducción

El acceso y el derecho al aborto en Argentina han recorrido un camino sinuoso hasta la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)¹ en 2020. Diversas disciplinas, instituciones y equipos de trabajo han contribuido a producir conocimiento en materia de aborto, no solo para comprender mejor el fenómeno en todas sus dimensiones (subjetiva, sanitaria, social, política y cultural), sino también como factor de movilización y de acción colectiva (Ramos 2015). En este sentido, algunas investigaciones sostienen que un elemento ineludible para comprender el proceso de ampliación del derecho al aborto es la centralidad que adoptó el movimiento de mujeres y feministas, el cual viene desplegando diversas estrategias para su legalización desde el retorno democrático. A través de estos estudios se advierten las diversas modalidades en las que el derecho al aborto devino un reclamo central en los encuentros nacionales de mujeres² y en las acciones que allí se fueron desarrollando para expandir la demanda más allá de los feminismos (Alma y Lorenzo 2009). El reclamo por la legalización del aborto logró articular al movimiento de mujeres y feministas con los movimientos sociales emergentes de fines de los 90, condensando la lucha por el laicismo, por la pluralidad y por la ciudadanía plena en un periodo de profunda crisis social y económica (Di Marco 2011; Sutton 2014).

Esta línea de trabajo coincide en señalar que la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (en adelante Campaña), constituyó un punto de inflexión en la lucha por esta demanda, la cual se estableció desde el año 2005 en una alianza federal que buscaba impulsar la legalización del aborto voluntario en Argentina (Daich y Tarducci 2012; Zurbriggen y Anzorena 2013). Asimismo, la masificación del movimiento por el derecho al aborto denominado Marea Verde, que tuvo su punto más álgido en el contexto de los debates parlamentarios por el proyecto de Ley de IVE durante el año 2018, ha sido un tema de interés (Barrancos 2018; Gutiérrez 2018). También emerge un subcampo de estudios referidos al activismo feminista vinculado a los acompañamientos de abortos medicamentosos que lograron una sólida organización a nivel nacional a través de la emergencia de Socorristas en Red (Maffeo et al. 2015; Burton 2017).

1 En Argentina desde 1921 el acceso al aborto estuvo regido por el Código Penal de la Nación salvo dos excepciones: si corría peligro la vida o la salud de la mujer o si el embarazo era producto de una violación (Ley 11179/1921, art. 86). A partir de 2015 los abortos no punibles comenzaron a denominarse interrupciones legales del embarazo (ILE) para hacer énfasis en la legalidad de la práctica. Con la sanción de la Ley 27610/2020 se incorporó la denominación interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a la interrupción de la gestación a la que se accede con la sola expresión de la voluntad hasta la semana 14. En el periodo analizado en este artículo observamos que las prácticas de ILE e IVE se solapan al interior del sistema de salud, a pesar de que esta última no se encontraba legalizada aún. Es por eso que decidimos referirnos a interrupciones del embarazo.

2 Se trata de encuentros autónomos, federales y autogestionados por las organizaciones de mujeres, feministas, lesbianas, trans, bisexuales y no binarias que se realizan desde 1986 hasta la actualidad.

En este prolífico campo de estudios, atento a las diversas vertientes del espacio feminista que han intervenido en la problemática del aborto en Argentina, se localiza una línea de reciente desarrollo que examina la conformación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (en adelante la Red), que se constituyó como un colectivo federal de profesionales comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos y con garantizar el acceso al aborto legal y seguro (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir 2024). Su objetivo era sortear los obstáculos que se interponían en el sistema de salud para el acceso al derecho al aborto (Drovetta 2018; Mazur et al. 2023). Un aspecto que se ha enfatizado acerca de la Red es justamente la articulación entre activismos feministas y profesionales de la salud, lo cual permitió el surgimiento de nuevos enfoques dentro del campo médico para concebir y disputar los sentidos respecto a las interrupciones de embarazos en el sistema público de salud (Rodríguez Cometta 2021; Bosio, Crosetto y Bilavcik 2023). Otros trabajos apuntan a analizar las prácticas desarrolladas a partir de los modelos de acompañamientos de abortos medicamentosos y de las consejerías pre y posaborto (Fernández-Vázquez 2018; Fernández-Vázquez y Szwarc 2018). Con el presente artículo nos proponemos contribuir a esta incipiente línea de trabajo, examinando el rol de la Red en el proceso de implementación de las interrupciones del embarazo en la provincia Mendoza, Argentina, entre 2018 y 2020.

117

Una particularidad de este corpus de estudios es que aún se encuentra circunscrito a la experiencia de la Red en algunos territorios específicos (principalmente a las provincias Buenos Aires y Córdoba), a pesar de ser una articulación que se ha extendido a nivel nacional. De modo que la heterogeneidad territorial, cultural y política que atraviesa al país exige profundizar la mirada hacia otras realidades locales para reconstruir de manera cabal la complejidad de los procesos sociales y las experiencias políticas sobre las que se asienta el acceso efectivo al derecho al aborto. Es por eso que en el presente artículo tomaremos el caso de Mendoza, una provincia que reviste características singulares asentadas en las fuertes tensiones que atraviesa el debate del aborto en una sociedad con sectores conservadores muy activos y con acceso a espacios de poder (Fares 2011; Rodríguez Agüero y Ciriza 2023).

Por un lado, la aplicación de políticas restrictivas en el ámbito del Estado: la negación de cumplimiento de abortos legales, la obstaculización a la adhesión al protocolo de atención integral para las personas con derecho a la ILE y la prohibición de la venta de misoprostol³ desde 2009 a 2021. Por otro, y a manera de contrapartida, las organizaciones de mujeres y feministas que abogan por el derecho al aborto en Mendoza se presentan como un movimiento con un importante activismo en torno a esta demanda y cuentan con una larga trayectoria de articulación nacional. Estas

3 Fármaco utilizado para la inducción del aborto. En 2005 fue incluido en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2021). En Mendoza el expendio, suministro y fraccionamiento de este fármaco fue limitado al ámbito institucional sanitario por la Ley 8116/2009.

marcadas tensiones trazan un campo de disputas que resulta fundamental recuperar para comprender de manera integral los procesos de ampliación de derechos que se están dando a nivel nacional y regional.

La experiencia de la Red y su impacto en el sistema de salud en esta provincia son aspectos que no han sido explorados aún. A su vez, si bien se cuenta con datos de egresos hospitalarios y de causas de muerte relacionadas con el aborto, no existen registros estadísticos sistematizados que den cuenta del alcance de la problemática a nivel local hasta el año 2020 (Dirección de Estadísticas e Información de la Salud 2021). Asimismo, Mendoza fue identificada como una de las dos jurisdicciones con menor cantidad de servicios de ILE de todo el territorio nacional en 2021 (Proyecto Mirar 2024). En función de esta importante vacancia, examinaremos, por un lado, el proceso de emergencia de la Red y su articulación con el Estado provincial, y por otro, el impacto que tuvieron sus intervenciones en el acceso a las interrupciones del embarazo en el sistema de salud.

Sostenemos que el acceso al derecho al aborto en el sistema de salud de Mendoza encuentra profundas limitaciones y resistencias asentadas en prácticas y entramados institucionales conservadores. En este contexto, profesionales de la salud y organizaciones feministas se constituyen actores fundamentales para el desarrollo de intervenciones y de dispositivos que permitan garantizar el acceso efectivo a abortos seguros.

El artículo se encuentra estructurado en cuatro apartados además de esta introducción. En el segundo describimos la metodología empleada para recolectar la información necesaria. En el tercero damos cuenta del proceso de conformación de la Red, su contexto de surgimiento y las primeras acciones ejecutadas. En el cuarto analizamos la relación que se establece entre la Red y el Programa Provincial de Salud Reproductiva (PPSR). En el quinto apartado examinamos los dispositivos e intervenciones de la Red en la implementación de interrupciones del embarazo en el sistema de salud. Finalmente, delineamos las conclusiones del trabajo y ofrecemos algunas líneas de indagación para futuras investigaciones.

2. Metodología

Este artículo se encuadra en un enfoque cualitativo que adopta la perspectiva del estudio de casos. Esta metodología nos permite centrarnos en la experiencia de la Red en la provincia Mendoza mediante una recopilación detallada y profunda de datos que involucran múltiples fuentes de información (Creswell 2007). Realizamos seis entrevistas en profundidad a integrantes locales de la Red y a funcionarios y funcionarias del PPSR, entidad dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. La selección de casos para abordar el objeto de estudio fue intencional. Para la selección de los y las integrantes de la Red priorizamos el criterio de simultaneidad de su par-

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

ticipación en este espacio y en la Campaña. Esto responde a uno de los objetivos de este trabajo, en el que nos proponemos reconstruir el proceso de conformación de la Red, la cual se encuentra ligada a la trayectoria de los activismos feministas, especialmente a la articulación de la Campaña. Los funcionarios y las funcionarias del PPSR que concedieron entrevistas ocupaban cargos de jerarquía durante el periodo analizado. En las entrevistas aplicamos resguardos éticos pertinentes y se requirió el consentimiento informado de manera verbal. El trabajo de campo se llevó a cabo entre 2021 y 2023 y se han utilizado nombres ficticios para respetar el anonimato de entrevistadas y entrevistados

Durante la reconstrucción del proceso de conformación de la Red, además de las entrevistas en profundidad, incorporamos otras técnicas de recolección de información entre las que se encuentran el análisis de documentos gubernamentales, legislaciones, resoluciones, guías, protocolos, archivos periodísticos, documentos y materiales elaborados por las organizaciones feministas. Para analizar el impacto que tuvo la Red en la implementación de la ILE, sistematizamos indicadores sanitarios relacionados con el acceso al aborto en Mendoza. Los datos fueron obtenidos a partir de entrevistas en profundidad a informantes clave de la Red y del PPSR y de las bases de datos del Ministerio de Salud provincial (Sistema SIDICO). El recorte temporal de esta investigación abarca desde el año 2018 al 2020, periodo que va desde la conformación de la Red hasta la aprobación de la Ley 27610/2020 de acceso a la IVE.

119

3. Entre el activismo feminista y profesionales de salud.

El surgimiento de la Red en Mendoza

El surgimiento de la Red a nivel nacional se produce en el año 2014 con un enfoque federal a través del cual se buscaba sostener la identidad y la autonomía de cada territorio de acuerdo con sus características y su contexto particular (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir 2024). La regional Mendoza tuvo su origen oficial en 2018 cuando comenzaba a vislumbrarse una posibilidad concreta de aprobación de la Ley de IVE. Emergió como una iniciativa de la Campaña, la cual, si bien venía desarrollando estrategias de incidencia desde sus inicios en 2005, planteaba la necesidad de impulsar mecanismos y redes para hacer efectiva la práctica y territorializar el debate en la agenda del sistema sanitario.

Empezamos a organizar y a convocar profesionales porque se venía el momento del debate parlamentario (...). Mucho tabú, mucha persecución en las instituciones, poca claridad de los protocolos. Entonces tomando de referencia todo eso, era urgente que paráramos la Red porque necesitábamos que los profesionales que estaban laburando

empezaran a estar en contacto con el tema. Podés estar re de acuerdo, pero si nadie te capacita, si no tenés un marco legal, si no tenés un protocolo, si no tenés experiencia, ¿qué haces? (entrevista a Anabel, psicóloga, 20 de junio de 2022).

El horizonte de una posible legalización del aborto mostraba la necesidad de establecer relaciones concretas con el sistema de salud e implicar en este proceso a funcionarios y funcionarias provinciales. Sumado a esto, en el contexto de la Marea Verde, profesionales de la salud que no tenían participación en organizaciones sociales o políticas aglutinadas en la Campaña, comenzaron a llevar adelante acciones en sus espacios de trabajo para garantizar el acceso a la ILE y con el fin de apoyar el proyecto de Ley de IVE.

Es importante señalar que desde 2012 organizaciones y activistas que desarrollaban acciones vinculadas a los acompañamientos de abortos se articulaban en el espacio nacional de Socorristas en Red (Burton 2017; Santarelli y Anzorena 2017). En Mendoza, a partir de la experiencia del socorrismo, se crearon dispositivos para la asistencia de abortos medicamentosos que implicaron no solo el acceso a abortos seguros con cierta independencia del sistema de salud, sino también un trabajo de incidencia sobre los efectores sanitarios estatales. Una de estas organizaciones, La Malona Rosa, desde sus inicios articuló acciones con profesionales de la salud que consideraban “amigables” para poder garantizar la práctica de manera segura, aun en la clandestinidad.

El 23 de junio de 2018 activistas de la Campaña, principalmente socorristas que se encontraban insertas en el sistema de salud, convocaron a una reunión a profesionales de distintos sectores. A esta convocatoria asistieron cerca de 50 profesionales de la salud que compartieron sus experiencias y las intenciones de facilitar, desde sus lugares de trabajo, distintas prácticas para favorecer el acceso a la ILE y apoyar el proyecto de Ley de IVE. En ese primer encuentro se dialogó sobre los objetivos de la Red, se organizaron comisiones de trabajo (prensa y difusión, acción política y consejerías) y se creó un grupo de WhatsApp para centralizar la comunicación. Este grupo se fue ampliando hasta llegar a tener cerca de 250 participantes.

De allí surgió un primer mapeo de profesionales de la salud que se manifestaban dispuestos a facilitar las distintas etapas del circuito de atención de la ILE. Estuvo compuesto por integrantes de equipos de centros de atención primaria de la salud y de efectores hospitalarios de los diferentes subsectores de salud asentados principalmente en el área del Gran Mendoza. A diferencia de otras provincias, este mapeo de profesionales no se hizo público en la página web de la Red (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir 2024).

Una de las primeras acciones de la Red fue definir un estatuto de funcionamiento interno e incorporarse al armado nacional como regional Mendoza. A partir de allí se eligieron dos representantes para integrar la mesa nacional de la Red, donde

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

se discutían los lineamientos generales que aglutinaban y articulaban a los distintos colectivos del país.

Inicialmente éramos un grupo de WhatsApp de 250 personas de todos lados. Pero era un juntadero de buenas intenciones. Éramos profesionales de salud que queríamos que salga una ley (...). Empieza a conformarse la Red como algo muy amplio sin todavía forma definida porque no mucha gente conocía la Campaña o sabía que la Campaña y la Red estaban ligadas. (...). El trabajo inicial fue referido a qué es la Campaña y cuál era el objetivo de esta Red (entrevista a Cecilia, psicóloga, 20 de junio de 2022).

La incorporación a la articulación a nivel nacional, sumado al contexto favorable que propició la media sanción del proyecto de Ley IVE en la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2018, confirió a la regional Mendoza un importante impulso en el proceso de organización interna y de visibilización en el espacio público. El 15 de julio de 2018 anunciaron oficialmente su conformación en redes sociales y en medios de comunicación locales (*El Ciudadano* 2018) y comenzaron a realizar acciones públicas (*El Mirador* 2018). El 27 de julio se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud provincial y del PPSR (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir 2018).

El 9 de agosto de 2018 el proyecto de Ley IVE fue rechazado en la Cámara de Senadores. Este hecho, que significó un duro golpe para las organizaciones que venían demandando la legalización del aborto voluntario, reubicó la estrategia desplegada por la Red hasta el momento. A partir de ese momento se focalizó en la efectivización de la ILE en el sistema de salud provincial.

121

4. Articulaciones entre la Red y el Programa Provincial de Salud Reproductiva

Para enfocar su tarea en la implementación de la ILE, la Red comenzó a articular su trabajo con las autoridades del PPSR. Este organismo gubernamental es el encargado de garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la provincia. Fue creado en 1998 a partir de la Ley 6433 sancionada en el año 1996. Si bien la emergencia del PPSR fue un avance significativo, en sus orígenes no logró trascender la concepción que transmite el Estado de la sexualidad unida a la prevención, a la procreación y a la heterosexualidad obligatoria (Anzorena 2006). En relación con el acceso al aborto, la Ley 6433/1996 tenía entre sus objetivos proteger la vida desde el momento de la concepción, promover el desarrollo integral de la familia y evitar los abortos provocados. A lo largo del tiempo esta perspectiva ha condicionado las acciones del PPSR y se ha traducido muchas veces en la imposibilidad de avanzar en la implementación de políticas públicas y de estrategias para garantizar el acceso al derecho al aborto.

El reclamo por una institucionalización de la ILE en la provincia es de larga data. Desde 2006, año en que se hizo público el primer caso de solicitud de acceso a un aborto no punible (ANP) en Mendoza, una de las principales demandas de las organizaciones feministas a las autoridades sanitarias locales y al PPSR fue la solicitud de formulación o adhesión a las guías técnicas y a los protocolos nacionales (Accossatto y Marucci 2022). Esta falta de regulación de la práctica empujó a las organizaciones feministas y a algunos profesionales de la salud a desarrollar dispositivos de acompañamiento de abortos medicamentosos en la clandestinidad.

A partir del año 2010, en Mendoza la Comisión Salud de la Campaña y luego la organización La Malona Rosa tomaron de referencia las guías técnicas, los protocolos disponibles a nivel nacional y las diversas experiencias de acompañamientos de aborto que se fueron sistematizando de manera autónoma. Atendiendo a diferentes contextos, la propuesta era difundir una línea de teléfono público a la cual pudieran contactarse las personas gestantes, realizar encuentros cara a cara en espacios públicos (individuales o grupales), acompañar telefónicamente durante el proceso de aborto respondiendo inquietudes que pudieran surgir y continuar con el seguimiento hasta los controles posaborto. Además, buscaban también establecer y fortalecer vínculos con los servicios de salud promoviendo los controles médicos pre y posaborto y la elección de un método anticonceptivo (Maffeo et al. 2015).

Al mismo tiempo, una característica de este periodo es la imposibilidad del PPSR de efectivizar los recursos materiales y simbólicos necesarios para que los derechos sexuales y reproductivos tuvieran un peso propio en la estructura del Estado. Uno de los mayores obstáculos fue la conformación de equipos en centros de salud y en hospitales para la atención de la ILE y el amplio porcentaje de profesionales objetores de conciencia. Entre 2018 y 2019 solo dos instituciones del ámbito hospitalario, ubicadas en el área metropolitana de Mendoza, atendían casos de ILE: el Hospital L. Lagomaggiore y el Hospital R. Carrillo (tabla 1). Esta situación generó inequidad en el acceso a los servicios en la mayor parte del territorio provincial. En estas instituciones casi la totalidad de profesionales de la salud en condiciones de participar en los servicios de ILE declararon su objeción de conciencia. A su vez, las obras sociales y los centros de medicina privada de la provincia no incorporaron dentro de su cartera servicios de ILE.

Tabla 1. Servicios de ILE en Mendoza, 2006-2020

Indicadores de oferta de servicios	Periodo			
	2006-2017	2018	2019	2020
Cantidad de efectores públicos que realizan ILE	0	1	2	12
Cantidad de efectores públicos que brindan al menos una práctica de salud sexual y reproductiva	Sin datos	322	322	322
Cantidad de efectores públicos que utilizan la aspiración manual endouterina (AMEU)	0	0	0	0

Fuente: Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2021).

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

El amplio porcentaje de objetores de conciencia puede atribuirse, de acuerdo con Claudia Anzorena (2023), al encuadre ideológico que el sistema de salud desplegaba en su funcionamiento. Este incidía en las prácticas de quienes allí trabajaban y se vincula a la formación profesional. En el caso de la práctica del aborto, este encuadre se ubica en los ministerios de salud provinciales y en las áreas de maternidad e infancias, cuyos profesionales están formados para las tareas de cuidado del embarazo y de las niñas y no para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, “la interrupción del embarazo, e incluso el uso de métodos anticonceptivos, implican resistencia a un mandato que algunas personas se sienten llamadas a preservar” (Anzorena 2023, 9). Todos estos elementos convergen en el sistema de salud como un campo de relaciones de fuerzas donde las resistencias a los derechos sexuales y reproductivos tienen una importante centralidad.

La publicación de los protocolos locales en 2018 y 2019⁴ significaron un avance para la aprobación de la ILE en Mendoza, sin embargo, la falta de equipos de salud para su implementación hizo que la Red tomara un rol protagónico a partir de la realización de acompañamientos desde una perspectiva feminista. El PPSR encontró en la Red un soporte para comenzar a implementar esta práctica desde el ámbito institucional. Al mismo tiempo, esto fue interpretado por integrantes de la Red como una oportunidad política para institucionalizar las prácticas de acompañamientos de abortos que venían realizando. Esta confluencia de intereses abrió un periodo que, en sus palabras, denominan contexto de “clandestinidad institucional”.

Nosotras nos llevábamos trabajo y lo hacíamos en la tarde, en la plaza, como hacíamos con La Malona y era otra la lógica. Porque la lógica de La Malona era visibilizar, hacerlo en un lugar público además por la seguridad. Bueno, teníamos otras lógicas porque estábamos en la clandestinidad. Pero esto se supone que no estaba en la clandestinidad. Pero sí estaba un poco, empezó estando en la clandestinidad institucional (entrevista a Anabel, psicóloga, 15 de septiembre de 2021).

La dinámica de la clandestinidad institucional puede observarse en el modo en que se desarrolló el circuito para el acceso efectivo a las interrupciones del embarazo en el sistema de salud. Las integrantes de la Red conformaban los equipos territoriales encargados de llevar adelante el circuito de atención y los y las referentes del PPSR facilitaban la obtención de los medicamentos, ya que su venta se encontraba limitada por la Ley 8116/2009.

A partir de este relato la clandestinidad institucional surgió como una categoría emergente. Permite comprender la dinámica en que los dispositivos desarrollados por el activismo feminista para el acceso a abortos seguros en la clandestinidad se recrean

4 En agosto de 2018 autoridades del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes presentaron la “Guía técnica para la atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y enero de 2019 la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) publicó su propio protocolo de atención.

y se actualizan dentro del sistema de reglas institucionales que configuran el campo sanitario. En esta definición subyace una concepción pragmática de institución, que Guillermo O'Donnell define como “un patrón regularizado de interacción que es conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por actores que tienen la expectativa de seguir interactuando bajo las reglas sancionadas y sostenidas por ese patrón” (O'Donnell 1997, 310).

Este enfoque de las instituciones, concebidas como un sistema de reglas y prácticas sedimentadas, toma distancia de la clásica división que ubica al Estado y a las instituciones, por un lado, y por otro a la sociedad civil. Bajo esta óptica, es posible pensar que los movimientos sociales, y en especial los activismos feministas, “pueden contribuir a una mayor democratización no solo de la sociedad civil sino también del Estado a partir de la institucionalización de nuevas pautas de acción” (Natalucci y Pérez 2015, 7). La clandestinidad institucional es una categoría dinámica que permite comprender la conformación de nuevas prácticas y pautas de acción para el acceso efectivo a las interrupciones del embarazo en el sistema sanitario mediante la interacción entre activistas feministas, profesionales de la salud y funcionarios y funcionarias gubernamentales.

Esta dinámica se produce en un contexto específico marcado por la publicación en 2015 del “Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a ILE” y previo a la sanción de la Ley de acceso a la IVE en el año 2020. Este protocolo introdujo cambios sustanciales con respecto a la versión de 2010: incorporó por primera vez la denominación de ILE para hacer énfasis en la legalidad de la práctica y no en sus condiciones de no punibilidad, y estableció las pautas para identificar la causal salud integral, tomando de referencia la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sobre este último aspecto, se explicita que la salud “es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social”, por lo tanto, el peligro para la salud de la persona gestante no requiere la constatación de una enfermedad, sino que “basta con la potencialidad de afectación de la salud de la mujer para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto” (Ministerio de Salud de la Nación 2015, 15). De esta manera, se desplaza la exclusividad del campo de la medicina sobre la valoración del peligro para la salud o para la vida. Esta protocolización de la ILE abrió un intersticio de semilegalidad para las interrupciones voluntarias del embarazo mediante la causal de salud integral, ya que su certificación se convirtió en una estrategia de profesionales de la salud afines a la legalización de la IVE e insertos en el sistema de salud. En esto fue fundamental el rol de otras disciplinas no médicas, especialmente de la psicología y del trabajo social, ya que desde allí se realizaron en mayor medida las certificaciones de esta causal. A partir de este nuevo dispositivo muchas mujeres pudieron acceder a interrupciones voluntarias en el sistema de salud a pesar de que la práctica aún no había sido legalizada.

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

Para llevar adelante el circuito de atención, una de las primeras acciones de la Red fue la confección de un mapa para identificar a profesionales de la salud que no fueran objetores de conciencia⁵ y que estuvieran dispuestos o dispuestas a realizar acompañamientos de ILE. La composición interdisciplinaria de la Red (medicina, psicología, trabajo social, sociología, licenciatura en obstetricia), permitía contar con profesionales para certificar las causales previstas en el Código Penal de la Nación. Frente a una solicitud en el sistema de salud o a través de las organizaciones sociales, se identificaba a integrantes de la Red que quisieran llevar adelante la evaluación inicial del caso y la certificación de las causales. Esto implicaba una entrevista con algún profesional, en muchas oportunidades fuera de su agenda habitual de trabajo, para la realización de la atención preaborto, la derivación al hospital de referencia para la realización de la ILE y el seguimiento posaborto. Debido a que estas evaluaciones eran realizadas en su mayoría de manera informal en los distintos efectores, no existe registro estadístico de dichas prestaciones.

Y después pasamos a lo ambulatorio. Todo eso era garantizado por la Red a través de las consejerías y de los informes, 90 % en su momento y después un poco menos. Al principio éramos quienes nos animábamos a firmar los informes. Todos esos informes los hacíamos desde la militancia. Yo, por ejemplo, citaba a las mujeres al centro de adicciones porque era la manera de darle legalidad y legitimidad a un acto (entrevista a Cecilia, psicóloga, 20 de junio de 2022).

125

En este primer periodo de articulación, que se extendió a lo largo de 2018, la implementación de la ILE reposaba sobre dos elementos principales: la trayectoria de integrantes de la Red y la voluntad política de ciertos funcionarios y funcionarias del PPSR. Entre 2016 y 2020 quienes encabezaban el PPSR, si bien poseían un compromiso personal con el acceso a la ILE, no contaban con apoyo político ni con recursos institucionales para garantizarla.

Creo que hay que reconocer que la dirección del programa se calza la ILE al hombro y se la calza en serio. Sin capacidad de gestión, sin banco provincial y sin recursos. Pero entendían que la ILE había que hacerla, el tema es que no tenía aparato. No tenían banco provincial que pusiera el Ministerio. Entonces empieza la articulación con nosotras. Era una articulación compleja porque nosotras siempre fuimos militantes que estuvimos trabajando gratis para el Estado. Estuvimos garantizando la ILE en una actitud militante. La dirección del programa arma todo el circuito sostenido por la Red (entrevista a Anabel, psicóloga, 15 de septiembre de 2021).

La precariedad de este esquema fue generando tensiones entre los diferentes actores, por un lado, por el gran volumen de trabajo que recaía sobre la Red, y por otro, por la falta

⁵ Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del ANP, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retraso o impedimento para el acceso (CSJN 2012).

de avances en el proceso de institucionalización del circuito. A partir de esto, la Red comenzó a exigir de manera directa al PPSR la instauración efectiva de mecanismos formales para sostener la implementación de interrupciones del embarazo.

En 2019 empezamos a ordenarnos porque nos llegaba la demanda del Estado y de las organizaciones. Ahí armamos un esquema de responsables por regiones y hacíamos ingresar los casos por el *mail* de la Red. En un momento nos llamaban del Programa para pedir un informe y nosotras le decíamos que no solo hacíamos informes, que hacíamos asesoría y acompañamiento. Ahí empezamos a distanciarnos del Estado e instalar que la Red hacía un acompañamiento con perspectiva de derecho y feminista. Si querían que los casos entren por la Red le pedíamos que nos escriban al *mail* (entrevista a Cecilia, psicóloga, 20 de junio de 2022).

A pesar de las tensiones que generó este esquema de trabajo, la articulación que se produjo entre la Red y el PPSR a partir de 2018 permitió sortear una serie de obstáculos que limitaban el acceso a las interrupciones del embarazo en el sistema de salud. Estos últimos se enmarcan en las dificultades que tuvo el PPSR para institucionalizar la práctica en los distintos ámbitos del sistema de salud, atravesado por la falta de apoyo político, por el amplio porcentaje de profesionales objetores de conciencia, por un excesivo personalismo por parte de las autoridades y por la ausencia de capacitaciones formales con una mirada integral del problema. A su vez, a partir de marzo de 2020 la pandemia de la covid-19 generó una reorientación de los servicios de salud que profundizó las barreras de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el contexto de alta restricción generado por la pandemia llevó a incrementar y a fortalecer el trabajo articulado de sectores del Estado con la Red (Marucci y Accossatto 2024).

5. Impacto de la Red en el acceso a las interrupciones del embarazo. Dispositivos, redes e intervenciones

La Red fue desarrollando dispositivos e intervenciones de manera autónoma para apoyar el proceso de institucionalización. El aumento en la demanda de interrupciones del embarazo hizo que tuviera que formalizar mecanismos para la recepción y la atención de casos. En el área urbana la estrategia empleada fue centralizar todas las solicitudes de evaluación a través del correo electrónico de la organización. Esto permitía recibir la demanda de forma más organizada y optimizar el funcionamiento del circuito. En áreas rurales prevaleció la difusión de la información de “boca en boca”.

Se sabía de boca en boca. Yo era “pañuelo verde” abiertamente, tenía el pañuelo colgado en la mochila. Pero más que eso no se podía, ¿viste? Y así te contactaban y ahí iban llegando los casos. A partir de ahí, hacíamos la articulación con el centro de salud (entrevista a Soledad, trabajadora social, 28 de agosto de 2023).

Además, se establecieron articulaciones con profesionales de la salud de los centros de atención primaria que querían acompañar casos de interrupciones del embarazo, pero que no tenían la experiencia para hacerlo ni el acceso a instancias formales de capacitación. En este sentido, la Red tuvo un rol pedagógico para difundir la información y los modelos de atención integral aprendidos en el marco del socorrismo.

Una de las acciones de la Red fue realizar capacitaciones para dar a conocer los lineamientos legales y técnicos. En ellas se informaba sobre los distintos métodos y procedimientos recomendados por la OMS en sus manuales vigentes y se repartían guías y documentos elaborados por organizaciones socorristas. También se hacía hincapié en la seguridad del tratamiento farmacológico para realizar un aborto durante el primer trimestre de gestación, ya que hasta ese momento el acceso al misoprostol presentaba severas restricciones. El mismo solo se dispensaba en el PPSR y en efectores hospitalarios de la provincia bajo la prescripción de un número limitado de profesionales autorizados. Estas capacitaciones, sumadas a las que se brindaron oficialmente durante el periodo 2019-2020 por parte del PPSR, permitieron incorporar nuevos efectores y profesionales de la salud a los circuitos de atención.

Otro aporte significativo de la Red fue el monitoreo y seguimiento de situaciones de vulneración de derechos en el acceso a las interrupciones del embarazo. Gracias a esta labor se elaboró el informe “Violencias en el acceso al aborto. Un acercamiento desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en las regionales de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y Mendoza” (Cascardo et al. 2021). Este informe da cuenta del modo en que se desarrollaron algunas de las interrupciones de embarazos que acompañó la Red en el año 2020 en esos territorios.

También es importante destacar la articulación a nivel nacional que logró entablar la Red con la Campaña. Debido a esta sinergia, basada en una estructura organizativa que enlazaba la participación de integrantes de la mesa nacional de la Red con plenarias y con la comisión de la Campaña, la Red propició aportes técnicos al proceso de elaboración del proyecto de Ley de IVE llevado adelante por la Campaña en 2019. Su participación fue fundamental en la redacción de la ley que fue aprobada en 2020. Además, apoyó un proyecto legislativo para la derogación de la Ley 8116/2009 que limitaba la venta de misoprostol en Mendoza (Cámara de Diputados de Mendoza 2018).

Esta multiplicidad de intervenciones y de dispositivos tuvo un impacto positivo en el acceso a las interrupciones de embarazos en Mendoza. “Las feministas, sobre todo las que hacen acompañamientos para el aborto seguro, hemos logrado que desde el Programa se amplíe considerablemente la cantidad de ILE y muchas bajo la causal salud integral con el solo informe psicológico o de una trabajadora social” (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 2019, 2).

Sin embargo, esto no se vio reflejado en indicadores sanitarios ya que se produjo en un marco de clandestinidad institucional. Si bien se cuenta con registros de egresos hospitalarios por aborto, no existen estadísticas sistematizadas que den cuenta del alcance

del acceso a las interrupciones del embarazo durante el periodo analizado. A su vez, los datos de egresos hospitalarios se caracterizaban por estar mal clasificados e incompletos debido a su penalización legal (Mario y Pantelides 2009). Por este motivo, una de las principales demandas de la Red fue la posibilidad de tener acceso a información pública que diera cuenta de la magnitud del problema y contar también con información relacionada con el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

Frente a esta ausencia de datos oficiales recurrimos a los registros de tratamientos de misoprostol que, según la información provista por referentes del PPSR, pueden interpretarse que se trata de insumos puestos a disposición para atender la demanda de interrupciones del embarazo. Sin embargo, es necesario considerar que un número significativo de estas fueron realizadas en efectores hospitalarios mediante la técnica de legrado. Estas prestaciones constan en los registros como egresos hospitalarios por aborto, por lo que no es posible constatar que se trate de prestaciones de ILE. Si bien no existen registros estadísticos que permitan reconocer el causal identificado, según referentes del PPSR, durante el periodo 2006-2017 casi la totalidad de las ILE fueron realizadas en el marco de la causal violación en efectores hospitalarios. A partir de 2018 la mayoría de las interrupciones del embarazo fueron llevadas a cabo en el marco de la causal salud integral mediante articulaciones entre referentes del PPSR, profesionales de la salud e integrantes de la Red (tabla 2).

En la tabla 2 se puede observar un aumento significativo de los tratamientos de misoprostol dispensados para la atención de interrupciones del embarazo a partir de 2018. A la luz de la dinámica que se produjo en la clandestinidad institucional de este periodo, este aumento puede ser el impacto de la articulación entre activismos feministas, profesionales de la salud y referentes del PPSR en el impulso de un circuito para la implementación efectiva de interrupciones del embarazo en el sistema sanitario.

Tabla 2. Cantidad de interrupciones del embarazo, 2006-2020

Indicadores	Periodo							
	2006-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cantidad total de ILE realizadas	Sin datos							
Cantidad de ILE realizadas mediante legrado uterino	Sin datos							
Cantidad de ILE realizadas mediante técnica AMEU	0							
Cantidad de tratamientos de misoprostol 200 mg dispensados	Sin registros	0	3	0	4	51	701	1645

Fuente: PPSR (2023).

Nota: Tomamos como fecha de inicio el 2006, año en que se hizo público el primer pedido de ANP en el sistema de salud provincial. El objetivo fue observar el comportamiento y la tendencia de indicadores en un marco temporal más amplio que permita realizar comparaciones en relación con el momento previo y posterior a la emergencia de la Red.

6. Conclusiones

En el presente artículo se detallan las profundas limitaciones que existían en el entramado estatal de Mendoza, donde sistemáticamente se obstaculizó el derecho al aborto. Hasta 2018 acceder a una ILE en el sistema de salud fue algo excepcional, no exento de actos discriminatorios, de maniobras dilatorias, de medidas judiciales y de intervenciones excesivas de los comités de bioética. A esto se suma que a partir de 2012 entró en vigor la Ley 8116/2009 que limitó el acceso al fármaco utilizado para la realización de abortos medicamentosos. El intento por sortear estos obstáculos impulsó a los activismos feministas que se dedicaban a realizar acompañamientos de abortos a la articulación con sectores estratégicos del campo sanitario y a la conformación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Mendoza.

Entre 2018 y 2020 se produjo una articulación entre activismos feministas, profesionales de la salud y funcionarios y funcionarias estatales, la cual permitió sostener el circuito de implementación de interrupciones de embarazos a través de una dinámica de clandestinidad institucional donde confluyeron prácticas y saberes de los acompañamientos feministas con un precario entramado institucional del sistema de salud. En este contexto, los dispositivos desarrollados por el activismo feminista para el acceso a abortos seguros en la clandestinidad se recrean y se actualizan dentro del sistema de reglas institucionales que configuran el campo sanitario. Esta articulación tuvo lugar en el marco de la Marea Verde en un momento donde el debate parlamentario por una Ley de IVE en 2018 configuró un escenario de mayor legitimidad de la práctica en diversos sectores de la sociedad, incluyendo el ámbito sanitario. En este marco, la Red se convirtió en un actor fundamental en el desarrollo de intervenciones, de redes y de dispositivos para garantizar el acceso a las interrupciones de embarazos.

El impacto de la Red se cristaliza en los datos presentados, sin embargo, es importante reconocer que estos no son suficientes para advertir bajo qué condiciones y parámetros de calidad se accedió a la interrupción del embarazo en este periodo. Esta consideración abre posibles líneas de trabajo que podrían ser exploradas en futuras investigaciones. En primer lugar, sería interesante un abordaje que permita analizar las diferentes dimensiones vinculadas al grado de calidad con que se accedió a la práctica de abortos legales en la provincia. Por otra parte, los resultados de este artículo podrían extenderse en el tiempo a partir de la indagación acerca de los dispositivos, las intervenciones y el impacto de la Red en el contexto del nuevo marco legal dispuesto por la Ley 27610/2020.

Asimismo, este análisis puntualizado y en profundidad de la regional Mendoza puede ponerse en diálogo con otras experiencias a nivel nacional o regional a través de estudios comparados. Finalmente, y en el actual contexto de una oleada neoconservadora a nivel global, sería interesante seguir ahondando en el rol que cumplen los feminismos y las organizaciones sociales en la ampliación y en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y en su efectiva implementación en las políticas de salud.

Apoyos

La investigación en la que se basa este artículo fue realizada en el marco de la formación doctoral de la autora y el autor, y financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).

Referencias

- Accossatto, Romina, y Lucas Marucci. 2022. “El acceso al aborto en Mendoza: Gobierno local y estrategias feministas”. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 9 al 11 de noviembre.
<https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/Bat>
- Alma, Amanda, y Paula Lorenzo. 2009. *Mujeres que se encuentran. Una recuperación histórica de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina (1986-2005)*. Buenos Aires: Feminaria Editora.
- Anzorena, Claudia. 2023. “El derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina: obstáculos y desafíos de la política en acto a 18 meses de su implementación (2021-2022)”. *Salud Colectiva* 19: 1-12. <https://doi.org/10.18294/sc.2023.4613>
- Anzorena, Claudia. 2006. “Reflexiones en torno a las sexualidades en las políticas públicas en Mendoza: las sexualidades esperadas, las invisibles y las excluidas”. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales* 31: 283-300.
<http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/622>
- Barrancos, Dora. 2018. “La ley abortada: notas sobre el debate de la interrupción voluntaria del embarazo”. *Salud Colectiva* 14: 373-376. <https://doi.org/10.18294/sc.2018.2025>
- Bosio, María Teresa, Rossana Crosetto y Claudia Bilavcik. 2023. “Estrategias de incidencia de la red de profesionales de la salud en el acceso al aborto legal en el municipio cordobés”. *Ciudadánías. Revista de Políticas Sociales Urbanas* 12: 1-16.
<https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/1870>
- Burton, Julia. 2017. “De la comisión al socorro: trazos de militancia feminista por el derecho al aborto en Argentina”. *Descentrada* 1 (2): 1-17.
<https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe020>
- Cámara de Diputados de Mendoza. 2018. “Medida sanción a la derogación de la ley que prohíbe la comercialización de misoprostol en Mendoza”, 21 de noviembre. <https://bit.ly/46X5e6L>
- Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 2019. “Balance año 2019”. Documento interno [no publicado].
- Cascardo, Florencia, Isondu Robaina, Eugenia Testoni y Gisel Trebotic. 2021. “Violencias en el acceso al aborto. Un acercamiento desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en la regional zona oeste PBA y Mendoza”, 30 de diciembre. <https://bit.ly/41Qxfug>
- Creswell, John. 2007. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación). 2012. Medida autosatisfactiva. Sentencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo. <https://bit.ly/4guNYtO>

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

- Daich, Débora, y Mónica Tarducci. 2012. "Aborto legal, una deuda de la democracia". Aportes para una historia por la despenalización y legalización del aborto en Argentina". Presentación realizada en Second ISA Forum of Sociology. Buenos Aires, 2 de agosto. <https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Paper19799.html>
- Di Marco, Graciela. 2011. "Las demandas en torno al aborto legal en Argentina y la constitución de nuevas identidades políticas". En *Feminismos, democratización y democracia radical*, compilado por Constanza Tabbush y Graciela Di Marco, 177-200. Buenos Aires: Unsam Edita.
- Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. 2021. "Egresos hospitalarios del sector oficial, según edad por grupos de diagnósticos". Acceso el 13 de junio de 2021. <https://bit.ly/3B7A0hp>
- Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 2021. "Tablero de monitoreo para la toma de decisiones de la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva". Acceso el 4 de marzo de 2021. <https://bit.ly/472Tpf>
- Drovetta, Raquel. 2018. "Profesionales de la salud y el estigma del aborto en Argentina. El caso de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir". *Salud Problema* 24: 13-35. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/98264?show=full>
- El Ciudadano*. 2018. "Médicos mendocinos crearon una Red en apoyo a la 'decisión de la mujer'", 17 de julio. <https://bit.ly/4aVMBlt>
- El Mirador*. 2018. "Profesionales de salud de Mendoza se unieron para apoyar la ley de aborto", 18 de julio. <https://bit.ly/48Gflac>
- Fares, María Celina. 2011. "Tradición y reacción en el sesquicentenario: la escuela sevillana mendocina". *Prismas. Revista de Historia Intelectual* 15 (1): 87-104. https://prismas.unq.edu.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/Fares_prismas15/434
- Fernández-Vázquez, Sandra Salomé. 2018. "Políticas públicas de aborto en transición: de las consejerías pre y posaborto a las interrupciones legales del embarazo en el Área Metropolitana de Buenos Aires". *Revista de Bioética y Derecho* 43: 145-160. <https://doi.org/10.1344/rbd2019.0.21639>
- Fernández-Vázquez, Sandra Salomé, y Lucila Szwarc. 2018. "Aborto medicamentoso: transferencias militantes y transnacionalización de saberes en Argentina y América Latina". *Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 12 (12): 163-177. <https://ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/280>
- Gutiérrez, María Alicia. 2018. "Feminismos en acción: el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo". *Sociales en Debate* 14: 1-7. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/socialesendebate/article/view/3340>
- Ley 6433/1996. Ley de Creación del Programa Provincial de Salud Reproductiva en la provincia de Mendoza. Boletín Oficial, 25 de octubre. <https://bit.ly/4dJAUif>
- Ley 8116/2009. Medicamentos que contengan el principio activo misoprostol. Boletín Oficial, 15 de diciembre. <https://bit.ly/47kGB2C>
- Ley 11179. 1921. Código Penal de la Nación. Buenos Aires, 21 de octubre. <https://bit.ly/3X6C2ad>
- Ley 27610/2020. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Boletín Oficial, 15 de enero. <https://bit.ly/3aaC9ZS>
- Maffeo, Florencia, Natalia Santarelli, Paula Satta y Ruth Zurbriggen. 2015. "Parteras de nuevos feminismos. Socorristas en Red-feministas que abortamos: una forma de activismo corporizado y sororo". *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* 20 (44): 217-227. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/9108

- Mario, Silvia, y Edith Alejandra Pantelides. 2009. "Estimación del aborto inducido en Argentina". *Notas de Población* 87: 95-120. <https://hdl.handle.net/11362/12842>
- Marucci, Lucas, y Romina Accossatto. 2024. "La calidad en el acceso al derecho al aborto desde una perspectiva relacional. Barreras, intervenciones y dispositivos en la provincia de Mendoza". En *Derechos sexuales y accesibilidad a servicios de salud: perspectivas y experiencias*, compilado por Patricia Schwarz, Graciela Di Marco, Leila Passerino y Claudia Anzorena. Buenos Aires: Editorial SB (en prensa).
- Mazur, Viviana, María Isabel Donnet, María Arminda Mattar Domínguez, Gisel Romina Boidi, Horacio Boggiano y Pilar Galende Villavicencio. 2023. *Trayectoria de la federación argentina de medicina general en la lucha por los derechos de salud sexual y reproductiva en la Argentina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudio de Estado y Sociedad. <https://bit.ly/3X5aYYR>
- Ministerio de Salud de la Nación. 2015. "Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo". Acceso el 10 de diciembre de 2023. <https://bit.ly/47grOpD>
- Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 2018. "Guía técnica para la atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo". Acceso el 20 de noviembre de 2023. <https://bit.ly/3H3114b>
- Natalucci, Ana, y Germán Pérez. 2015. "La imaginación institucional. Movimientos sociales y Estado en Argentina (2003-2015)". Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Quito, del 26 al 28 de agosto. <https://lc.cx/ZZ-OtW>
- O'Donnell, Guillermo. 1997. "Otra institucionalización". En *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, editado por Guillermo O'Donnell, 217-244. Buenos Aires: Paidós.
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2021. "Lista modelo de medicamentos esenciales". Acceso el 10 de marzo de 2024. <https://bit.ly/3yHlaNK>
- OSEP (Obra Social de Empleados Públicos). 2019. "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)". Acceso el 20 de noviembre de 2023. <https://bit.ly/4cwwKsO>
- PPSR (Programa Provincial de Salud Reproductiva). 2023. "Sistema de Información Consolidada (SIDICO)". Acceso el 20 de marzo de 2023. <https://bit.ly/47vopF5>
- Proyecto Mirar. 2024. "Aborto en números". Acceso el 20 de junio de 2024. <https://bit.ly/4cID9Bs>
- Ramos, Silvina, comp. 2015. *Investigación sobre aborto en América Latina y el Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia*. Buenos Aires: CEDES. <https://bit.ly/46TqElo>
- Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. 2024. "Capacitaciones". Acceso el 8 de junio de 2024. <https://bit.ly/3NWP80>
- Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. 2018. "Gacetilla de prensa reunión con Sra. ministra de Salud y autoridades del Ministerio de Salud". Facebook, 3 de agosto. <https://bit.ly/3T9tqfF>
- Rodríguez Agüero, Laura, y Alejandra Ciriza. 2023. "Pisar la cabeza de la serpiente: una lectura feminista de discursos y prácticas del bloque conservador en Cuyo entre los 60 y los 90". *Avances del Cesor* 20 (29): 1-22. <https://doi.org/10.35305/ac.v20i29.1887>

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional

- Rodríguez Cometta, Lisandro. 2021. “Médicxs por el derecho a decidir: itinerarios profesionales de generalistas que garantizan abortos en el primer nivel de atención de CABA y PBA”. Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. <https://bit.ly/3WRUjXg>
- Santarelli, Natalia, y Claudia Anzorena. 2017. “Los socorristos y las disputas de sentidos sobre el aborto voluntario. Consideraciones teóricas desde una perspectiva del feminismo crítico”. *Descentrada* 1 (1): 1-14. <https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe008>
- Sutton, Barbara. 2014. “More than reproductive uterus: woman and the politics of abortion in Argentina”. En *Cuerpo, educación y liderazgo político: una mirada desde el género y los estudios feministas*, coordinado por Sara Poggio y María Amelia Viteri, 141-192. Quito: FLACSO Ecuador / University of Maryland / LASA.
- Zurbriggen, Ruth, y Claudia Anzorena. 2013. *El aborto como derecho de las mujeres: otra historia es posible*. Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

Entrevistas

- Entrevista a Anabel, psicóloga, 15 de septiembre de 2021 y 20 de junio de 2022.
- Entrevista a Cecilia, psicóloga, 20 de junio de 2022.
- Entrevista a Daniel, especialista en toco ginecología, 27 de junio de 2022.
- Entrevista a Federico, especialista en medicina de familia, 27 de junio de 2022.
- Entrevista a Soledad, trabajadora social, 28 de agosto de 2023.
- Entrevista a Valeria, especialista en toco ginecología, 27 de junio de 2022 y 30 de noviembre de 2023.

133

Cómo citar este artículo:

Accossatto, Romina, y Lucas Marucci. 2025. “Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: entre el derecho y la clandestinidad institucional”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 115-133. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6126>

Libros de FLACSO Ecuador



Caminando con el tiempo

Francisco Rhon Dávila

Editorial FLACSO Ecuador / CAAP

149 páginas

Montado en su memoria, en este libro Paco Rhon cabalga por uno de los períodos más fascinantes del pasado reciente de Ecuador, ese que se inauguró con los profundos cambios de los años sesenta y se extendió hasta la primera década del siglo XXI.

El libro nace de las conversaciones semanales *on line* que Andrés Guerrero y Víctor Bretón mantuvieron con Paco desde 2021 hasta su fallecimiento en octubre de 2022. Ceden la voz a Paco para que solo él cuente su experiencia desde esa posición única, creando así un vínculo entrañable con quienes lo leemos. Es uno de los aciertos de los editores de este libro.

Con una narración vibrante, optimista, emotiva, Paco cuenta la historia de un grupo de intelectuales activistas agrupados alrededor de un centro, el CAAP, que pensaron los cambios agrarios y trabajaron junto con campesinos e indígenas para impulsar otras formas de organización social. Recorre la erosión lenta de la comunidad andina, del mundo indígena, de su capacidad de reproducción sociocultural que se derrumbó frente al predominio del mercado y el consumo.



Es un libro delicioso que se lee de un tirón y al que se puede volver muchas veces y seguir disfrutando y aprendiendo. La gente de su generación recordará con nostalgia ese pasado reciente, mientras que la gente joven descubrirá una sociedad de la que apenas quedan vestigios.

Disponible en www.flacso.edu.ec

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

The other victims of femicide: Comprehensive reparation and institutional violence in Ecuador



-  Dra. Carla M. Álvarez-Velasco. Docente-investigadora. Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). (carla.alvarez@iaen.edu.ec) (<https://orcid.org/0000-0002-3372-5273>)
-  Lcdo. Alejandro Laufer-Corella. Investigador asociado. Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). (lauferalejandro@gmail.com) (<https://orcid.org/0009-0002-5251-7573>)

Recibido: 15/01/2024 • Revisado: 18/04/2024
Aceptado: 10/09/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

El hecho de que la violencia institucional anula los intentos de la justicia restaurativa por reparar a los hijos y a las hijas de las víctimas de feminicidio en Ecuador motiva la reflexión del presente artículo. El análisis se basa en más de un centenar de sentencias judiciales emitidas entre 2014 y 2021 en seis provincias del país. Además, se aplicaron 20 entrevistas en profundidad a funcionarios y funcionarias del sistema judicial y del sistema de protección social de víctimas. También se construyó un modelo causal que evidencia el conjunto de consecuencias derivadas de la violencia institucional y de género. Entre los principales hallazgos se encontró que existe una limitada comprensión por parte del funcionariado judicial de lo que implica la reparación integral de las otras víctimas del feminicidio. Dicho de otro modo, en las sentencias judiciales revisadas se pudo constatar que no siempre se ordena la aplicación de todos los mecanismos legales para reparar a los hijos y a las hijas de las víctimas letales de la violencia de género (reparación, rehabilitación, indemnización, medidas simbólicas y garantías de no repetición). Estos resultados revelan que estos niños y estas niñas son victimizados por la sociedad y por el Estado cuando este no hace lo posible por restaurar sus derechos.

Descriptores: ciclos de violencia; feminicidio; hijos e hijas de víctimas de feminicidio; reparación integral; violencia de género; violencia institucional.

Abstract

The article posits that institutional violence undermines attempts at restorative justice to compensate the children of femicide victims in Ecuador. The analysis is based on more than a hundred judicial sentences issued between 2014 and 2021 in six provinces of the country. In addition, 20 in-depth interviews were applied to male and female officials of the judicial system and of the social protection system for victims. A causal model was also constructed that demonstrates the consequences of institutional and gender-based violence. Among the main findings, it was found that there is a limited understanding on behalf of judicial officials regarding the implications of comprehensive reparations for the other victims of femicide. In other words, in the judicial sentences reviewed, it was found that not all the legal mechanisms for the reparation of sons and daughters of lethal victims of gender-based violence (reparation, rehabilitation, compensation, symbolic measures, and guarantees of non-repetition) are always ordered to be applied. These results reveal that these children are victimized by society and by the state when the latter does not do what is possible to restore their rights.

Keywords: cycles of violence; femicide; children of femicide; comprehensive reparation; gender violence; institutional violence.

1. Introducción

En 2008 el Estado ecuatoriano reconoció por primera vez el derecho a la reparación integral de las personas que eran víctimas de delitos. Esto se plasmó en la Constitución promulgada ese año, lo que representó toda una declaración respecto a una nueva manera de impartir justicia y planteó la posibilidad de restaurar los derechos vulnerados de las víctimas. Además, se buscó girar la orientación de la lógica judicial tradicional (enfocada exclusivamente en el castigo del victimario) para centrarla en la reparación, que se focalizaría en las víctimas “con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que las decisiones sean más eficaces” (Código Orgánico Integral Penal [COIP] 2014, art. 180). Con esta lógica, la reparación integral hizo referencia a un amplio rango de medidas que pueden adoptarse para atender una violación real o potencial y para contemplar la ayuda y los procedimientos a través de los cuales esta se puede obtener. En definitiva, la justicia para las víctimas buscó ir más allá del castigo al victimario con el objetivo de aliviar la vulneración de los derechos de las personas afectadas (Escudero Soliz 2013, 275).

En 2014 el Estado ecuatoriano tipificó el femicidio en su ley penal (COIP 2014, art. 141)¹ y cuatro años después declaró que su investigación y sanción constituye una prioridad para la Función Judicial (Consejo de la Judicatura 2018). Adicionalmente, en concordancia con la Constitución, la ley penal reiteró el derecho a la reparación integral de las víctimas a través de cinco mecanismos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la garantía de no repetición y las medidas simbólicas (COIP 2014, art. 78).

La ley reconoció también que las víctimas son las personas que han sufrido un daño de manera directa o indirecta, y que las indirectas pueden ser ascendientes o descendientes (entre otros grados de parentesco) de quien recibió el daño directamente (COIP 2014, art. 441). Para la ley ecuatoriana las víctimas indirectas son aquellas que han perdido a su madre debido a la violencia feminicida, sin embargo, en el presente artículo se les reconoce como víctimas directas porque generalmente han estado expuestas a largos periodos de violencia intrafamiliar. En muchos casos han sido testigos presenciales de la violencia de género, y al igual que sus madres han sufrido una interrupción abrupta de su proyecto de vida (Galvis Doménech y Garrido Genovés 2016; Alcántara López 2012; Yugueros García 2016; Carrillo Meraz y Jiménez Bernal 2018).

De manera complementaria, en 2018 se promulgó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de

prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad o

1 En el Ecuador el COIP tipificó el asesinato de mujeres por su condición de género como femicidio. Sin embargo, en este artículo se utilizará el término feminicidio para mantener coherencia con las teorías feministas y de violencia institucional utilizadas.

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades (Ley 0/2018, art. 1).

Un año más tarde, en 2019, se creó un bono para niñas, niños y adolescentes (NNA) que estaban en situación de pobreza y quedaron huérfanos a causa del feminicidio de sus madres (Decreto Ejecutivo 696/2019). Esta ayuda se ha ido perfeccionando progresivamente para ampliar su cobertura (Decreto Ejecutivo 1186/2020; Decreto Ejecutivo 370/2022), de manera que, en la actualidad, los hijos e hijas que hayan perdido a sus madres producto de un feminicidio y estén en situación de pobreza, pueden acceder a un monto concedido por el Estado desde el momento mismo en que se inicia la investigación para determinar la responsabilidad del hecho violento.

Las normas y disposiciones mencionadas comenzaron a crearse hace más de una década y están orientadas a instaurar una forma de justicia que repare a toda persona que resulte perjudicada por la violencia de género. En otras palabras, en Ecuador durante los últimos años se creó un marco jurídico que supera la sanción como único mecanismo para impartir justicia, que promueve un proceso de ayuda a las víctimas para superar los daños recibidos y que les permita retomar su proyecto de vida (Guarderas y Carófilis 2020).

Sin embargo, el Estado todavía enfrenta dificultades para materializar lo dispuesto en sus normas. Entre 2014 y 2022 1378 mujeres han sido asesinadas en Ecuador (Guerra y Marinelli 2023, 41). Esta violencia ha crecido anualmente, al punto que en 2022 se registraron 332 muertes violentas de mujeres, lo que representa el 24 % del total registrado en todo el periodo. En lo que respecta a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, se reporta que durante estos años 1526 NNA perdieron a sus madres, mientras que solo en 2022 la cifra fue de 245, lo que representa el 16 % del total (Guerra y Marinelli 2023, 52).

Desde que se llevan registros en Ecuador el número de NNA que viven la tragedia del asesinato de su madre evidencia un crecimiento. No obstante, poco se ha estudiado sobre estas víctimas (esto también ocurre en el resto del mundo), por lo que en el país se desconoce dónde y con quién viven, las afectaciones psicológicas que enfrentan durante la niñez y la adultez, si lograron romper el ciclo de violencia, las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven, entre muchos otros datos. Tampoco se conoce la efectividad y la eficacia de las disposiciones legales y de las asistencias sociales que ofrece el Estado para procurar su reparación integral. Hasta aquí las cifras únicamente permiten deducir que hay un compromiso normativo del Estado con la prevención y con la erradicación de la violencia de género y del feminicidio que difícilmente se materializa en una verdadera reparación del daño.

En el presente artículo se demuestra que los hijos y las hijas de mujeres víctimas de feminicidio, además de los efectos de la violencia de género deben enfrentar la

violencia institucional, que es la que ejerce el Estado al no ser capaz de materializar sus compromisos de reparación integral, lo que contribuye a su permanencia en un ciclo de violencia. Para ello, se revisaron sentencias judiciales, se realizaron entrevistas y se llevó a cabo el diseño de un modelo causal. Respecto a las condenas, fueron revisadas aquellas correspondientes a los casos de muertes de mujeres en seis provincias de Ecuador (Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos) en el periodo comprendido entre agosto de 2014 y julio de 2021, el cual corresponde al tiempo del proyecto de investigación en el que se basa este artículo.

En este proceso se encontraron 121 sentencias que condenaron la muerte violenta de 125 mujeres que dejaron 268 hijos e hijas en orfandad,² quienes recibieron la disposición legal de recibir los cinco mecanismos que conforman la reparación integral. Esta información fue confirmada y complementada por las 20 entrevistas realizadas a funcionarios y funcionarias de distintas instituciones relacionadas con la implementación de la reparación integral en casos de feminicidio: operadores de justicia, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y de consejos provinciales de protección de derechos en distintas provincias. Estas entrevistas fueron semiestructuradas y giraron en torno a aproximadamente 15 preguntas, cuyo objetivo consistía en conocer si el Estado se hizo cargo del cumplimiento de las sentencias judiciales emitidas en casos de feminicidio (instituciones responsables y protocolos de seguimiento) y de la reparación integral de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas.

El análisis de toda la información (sentencias y entrevistas) permitió construir un diagrama causal de la interacción entre violencia de género, violencia institucional y reproducción de la violencia. El mencionado diagrama es una representación cualitativa que permite observar las interacciones más importantes que explican el fenómeno estudiado. Para ello, se utilizó el software Vensim, el cual permitió graficar las interacciones entre violencia de género, niñez y violencia institucional, lo que facilitó la interpretación de los hallazgos.

El texto se estructura en cuatro apartado además de esta introducción. A continuación, se presenta una reflexión teórico-conceptual sobre los impactos del feminicidio en los NNA cuyas madres fueron víctimas de este tipo de violencia. Luego se muestran los hallazgos resultantes del análisis de las sentencias judiciales emitidas en Ecuador por violencia de género y en las que se dictaminaron la aplicación de medidas de reparación para los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas. Aquí se incluye información obtenida de 20 entrevistas realizadas a operadores de justicia, a funcionarios y funcionarias del MIES y de los consejos provinciales de protección de derechos en distintas provincias. En tercer lugar, se plantea una discusión respecto a los hallazgos y se expone un modelo causal que muestra gráficamente

2 Los casos procesados no incluyen los feminicidios cometidos por adolescentes debido a que su información recibe un tratamiento de confidencialidad.

los impactos de la violencia institucional en las víctimas de violencia de género, específicamente en los NNA. Finalmente, se exponen un conjunto de conclusiones sobre las consecuencias sociales de la forma más extrema de violencia de género.

2. Violencia de género y violencia institucional

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la violencia es “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos” (OPS 2023, párr. 1). La violencia de género es distinta a la violencia común. El género es una categoría clasificatoria de los seres humanos que, al igual que la clase social o la etnia, afecta a las relaciones sociales, al acceso a distintas oportunidades de la vida, incluso a la posibilidad de disponer de ciertos recursos que ofrece la sociedad (Sagot 1995).

La diferenciación de los roles de género (entre hombres y mujeres) se basa en la existencia de complejos sistemas de relaciones de poder que, cuando un miembro de la sociedad o un grupo sale de su rol, facultan a otro a utilizar la fuerza y la violencia para que quien incumple respete el papel que le ha sido asignado socialmente (Monteiro 2019). De tal forma que, en muchas sociedades los hombres se sienten empoderados para utilizar la violencia contra las mujeres cuando violan los roles tradicionales femeninos o cuando sienten que se cuestiona su masculinidad (OPS 2023).

2.1. Feminicidio, violencia institucional y *continuum* de la violencia

La forma más extrema de violencia contra las mujeres ocurre cuando los hombres, en su deseo de obtener poder, dominación o control, cometen un feminicidio (Carcedo y Sagot 2000, 45). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los feminicidios generalmente son perpetrados por hombres y difieren de los homicidios, es decir, de la muerte violenta de hombres, porque en su mayoría son cometidos por la pareja actual o pasada de la víctima. Además, incluyen maltrato repetido en el hogar (amenazas, intimidación, violencia sexual) y tiene lugar en situaciones donde las víctimas cuentan con menos poder o recursos que su pareja (OMS 2013).

Ahora bien, es importante recalcar que la muerte no es la única forma de violencia que reciben las mujeres. Jill Radford y Diana Russell (2006) señalan que las mujeres enfrentan un conjunto de hechos y conductas violentas por el hecho de ser mujeres, y solamente en ciertas ocasiones esta violencia conduce a la muerte de algunas de ellas. En este *continuum* de violencia, en palabras de Marcela Lagarde (2005), el feminicidio representa solo una ínfima parte de la violencia contra niñas

y mujeres y constituye el culmen de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de sus derechos humanos.

Respecto al *continuum* de violencia, este término hace referencia a una inercia y una continuidad de la violencia en la vida de las personas, especialmente de las mujeres, en cuyas historias la violencia adquiere una dimensión temporal y espacial que las atrapa en dinámicas que difícilmente les permiten romper el ciclo de la violencia, aun cuando el Estado haya desarrollado marcos legales para este fin (Cockburn 2004). La dimensión temporal se manifiesta de dos formas: en la presencia de la violencia en distintos momentos de la vida de la mujer; y en la reproducción de paradigmas y dinámicas de violencia de una generación de mujeres a otra dentro de una misma familia.

Esta dimensión también muestra la reproducción de la violencia en tanto un problema histórico y estructural sustentado en el mantenimiento de un sistema de impunidad y de opresión sobre la vida y el cuerpo de las mujeres (Partners El Salvador-FICA 2017). Sobre la dimensión espacial, esta se refiere al tránsito de la violencia contra las mujeres de un espacio a otro, de lo público a lo privado, es decir, del hogar al trabajo y a las calles. En estos contextos, las mujeres tienden a ser intimidadas y revictimizadas cuando pretenden buscar ayuda o justicia por las agresiones que sufren, lo que refuerza su vulnerabilidad (Partners El Salvador-FICA 2017).

El *continuum* de la violencia contra las mujeres tiene repercusiones profundas y prolongadas en sus vidas, en sus entornos y en sus descendencias. Para Lagarde (2005), después de perpetrado el homicidio la violencia continúa en forma de violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza el tratamiento de este tipo de violencia. De acuerdo con Ana Carcedo, la impunidad constituye una alianza por omisión del Estado con los agresores porque les permite seguir ejecutando la violencia sin castigo (Landaburo 2015). Cuando el Estado interviene impartiendo justicia, equilibra el desbalance de poder entre mujeres y hombres, pero cuando no interviene o cuando lo hace a favor del agresor, aumenta el desequilibrio de poder entre géneros y permite su continuidad. En el caso de los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, la no intervención o la inacción del Estado en lo que respecta a su protección constituye una forma de injusticia que permite la reproducción del ciclo de la violencia.

2.2. Feminicidios y sus consecuencias en niños, niñas y adolescentes

Los NNA que sobreviven al asesinato de su madre generalmente se ven obligados a abandonar su hogar porque su padre ha sido encarcelado o porque se suicidó. La inmediata condición de orfandad que enfrentan, junto con el abandono del hogar biológico les provocan graves afectaciones físicas y psicológicas (Ferrara et al. 2015), pues deben adaptarse a un ambiente donde quizás sean encasillados como “los hijos

del asesino” (Lewandowski et al. 2004). Además, corren el riesgo de sufrir secuelas psicológicas y conductuales negativas debido al trauma de experimentar el asesinato de sus madres y todos los procesos subsecuentes. También son proclives a ser víctimas de violencia de género, a sufrir abusos sexuales (Espinar-Ruiz y López-Monsalve 2015) o a convertirse en victimarios que recrean la agresión que experimentaron en sus familias (Burman y Allen-Meares 1994; Lewandowski et al. 2004, 217).

Los NNA expuestos a la violencia familiar tienden a involucrarse en interacciones más negativas con sus compañeros, maestros y con otras personas en sus entornos sociales a una edad muy temprana, lo que puede generar rechazo y propiciar la percepción de que el mundo es hostil y sesgado en su contra (Lewandowski et al. 2004, 217). Asimismo, es posible que no desarrollen la capacidad de reflexionar, que les resulte difícil revisar sus sentimientos, pensamientos, intenciones y motivaciones en relación con los demás y que tampoco se impliquen en acciones alternativas a la violencia en las relaciones interpersonales, por esta razón están expuestos a un mayor riesgo de agresión y de acciones hostiles. Por lo tanto, los huérfanos y las huérfanas del feminicidio requieren atención terapéutica urgente, especialmente quienes presenciaron el asesinato (Kapardis, Baldry y Konstantinou 2017).

Siguiendo esta lógica, la ausencia de atención social y de justicia restaurativa tiende a impedir que los y las sobrevivientes al feminicidio cierren de manera apropiada los ciclos de violencia y crea las condiciones propicias para la reproducción de los patrones de violencia de género que presenciaron y de los que fueron víctimas. Lo anterior demuestra que es importante cuestionar la denominación legal de víctimas indirectas en referencia a los hijos y a las hijas de mujeres víctimas de feminicidio, puesto que los NNA indudablemente sufren afectaciones directas debido a la violencia de género y son quienes más necesitan de la reparación integral para poder cerrar los ciclos de violencia que vivieron y reconstruir su proyecto de vida.

2.3. Niños, niñas y adolescentes frente a la violencia institucional

Las consecuencias de la violencia de género en los NNA rara vez se reconocen en toda su magnitud. Esto ocurre porque las investigaciones sobre este tipo de violencia, aunque incorporan referencias hacia este grupo, no los estudian de forma directa (Bodelón 2014). En este artículo se plantea que son los hijos e hijas de las mujeres asesinadas quienes cargan con el mayor peso de la violencia contra las mujeres, no solo por el trauma que viven o por los impactos que deben superar, sino también porque deben enfrentarse a la violencia institucional cuando buscan justicia para castigar al victimario o para restaurar sus vidas. En otras palabras, al igual que las mujeres, que además de la violencia de género deben encarar aquella ejercida desde el Estado (Bodelón 2014), los huérfanos y las huérfanas del feminicidio también deben enfrentarla.

La violencia institucional está presente “en los sistemas políticos, económicos y sociales que mantienen la opresión de determinadas personas a las que se les niegan beneficios sociales, políticos y económicos, haciéndolas más vulnerables al sufrimiento y a la muerte” (Larraín y Rodríguez 1993, 202). En el ámbito de la justicia, la violencia institucional puede ser vista como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o pretendan dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia (Bodelón 2014, 133).

Esta forma específica de violencia puede expresarse de varias maneras. La primera es la ausencia de confianza en el sistema judicial, lo que conlleva a la no presentación de denuncias o a retractarse en el proceso. A su vez, esto supone una reprivatización del conflicto, es decir, un retorno de los conflictos al ámbito privado³ (Bodelón 2014, 151-152). La segunda son las formas de violencia que se producen a través de la conceptualización jurídica de la violencia de género y de su vaciamiento conceptual. Entendemos el vaciamiento conceptual en los mismos términos en que Laclau planteó la idea de significante vacío, que se refiere a que si bien las palabras tienen un significado esto no supone un significado preciso o unívoco para el conjunto de la sociedad, y que en ciertos casos las palabras pueden contar con una pluralidad de significantes que no admiten cierre (Laclau 1996).

De esta forma, si bien la reparación integral para huérfanos y huérfanas del feminicidio en el marco normativo local constituye un derecho constitucional y una forma de justicia restaurativa que se garantiza a través de la aplicación de al menos cinco mecanismos explícitos en la ley (indemnización, rehabilitación, restauración, garantía de no repetición y medidas simbólicas), para los jueces y las juezas solamente es la disposición de dos medidas: la sanción al victimario y la indemnización económica a las víctimas. Dificilmente los jueces y las juezas asumen que la reparación integral tiene la capacidad de prevenir y reducir los ciclos de violencia en la sociedad.

La tercera forma de expresión de violencia institucional se relaciona con las acciones y omisiones estatales. Es la que se comete cuando el Estado no financia sus propias iniciativas legales, cuando su normativa no contempla una fase de ejecución forzosa o cuando la ayuda psicológica, educativa o médica no logra mitigar los daños causados por la violencia de género. Durante la investigación en la que se basa este artículo se abordaron el vaciamiento conceptual de la reparación integral y las acciones y omisiones estatales.

3 En este artículo no se aborda esta manifestación de la violencia institucional debido a las dificultades para acceder a las víctimas y consultarles sobre sus niveles de confianza en la justicia.

3. La reparación integral: un camino tortuoso y una promesa sin cumplir

El análisis de las 121 sentencias ejecutoriadas permitió caracterizar a los 268 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio en el Ecuador y analizar la aplicación de los cinco mecanismos de la reparación integral que recibieron. Esta labor brindó la posibilidad de constatar que los mecanismos individuales y los colectivos que contempla la reparación integral difícilmente se materializan a favor de los NNA afectados por la violencia de género, lo que genera una doble vulneración.

3.1. Caracterización de hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio

La revisión de las sentencias mostró que los 268 NNA que perdieron a su madre por violencia de género son hijos e hijas de madres y padres jóvenes (en edades aproximadas entre los 29 y los 33,5 años en promedio) y que antes del asesinato vivían en familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica (Álvarez, Espín y Corella 2023). Del total de NNA que perdieron a su madre, 103 son niñas y 89 niños. La mayoría (66) tenían entre un mes de vida y cinco años, 50 se encontraban entre los seis y los 10 años, 40 contaban con entre 11 y 15 años al momento del hecho violento y 17 tenían entre 16 y 21 años. A estos datos se suman 12 bebés en proceso de gestación (no nacidos). En 83 casos no hubo información sobre la edad de estas víctimas.

Estas cifras muestran que la mayoría de víctimas requieren ayuda para cubrir sus necesidades básicas (salud física, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, etc.), durante un largo tiempo, es decir, desde que ocurre el hecho violento hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, la totalidad de las víctimas necesitan apoyo psicológico debido a que el 36 % enfrentaron el trauma de haber presenciado el asesinato de su madre, mientras que el 74 % tenían antecedentes de violencia intrafamiliar.

3.2. Aplicación de los mecanismos de reparación integral

En Ecuador los operadores de justicia tienen la obligación de incluir en la sentencia la pena privativa de libertad,⁴ la pena de multa⁵ para el victimario y las diferentes formas de reparación integral para la víctima. La sentencia debe contener también, de manera explícita, el tiempo y lugar en que deben cumplirse la condena y la reparación, considerando que un principio inherente es la celeridad en su aplicación

4 La pena tiene como objetivo sancionar proporcionalmente al autor de un delito por los daños ocasionados (Da Fonte, Monteiro y Charry 2022, 162).

5 La pena de multa es una sanción patrimonial para el victimario, ya que esta tiene incidencia en el patrimonio del condenado, disminuyéndolo (Morla 2021, 4).

(Herrera-Velarde y Obando-Peralta 2020). El análisis de las sentencias judiciales arrojó varios resultados respecto a los mecanismos de reparación integral dispuestos por jueces y juezas. Estos hallazgos se ordenaron en dos grupos según el tipo de mecanismo del que se trate: individual o colectivo.

Mecanismos individuales

El primer mecanismo es la restitución, y en el tema que nos atañe hace referencia a la posibilidad de restituir a los hijos y a las hijas de mujeres víctimas de feminicidio un hogar que cuente con protección física y afectiva. Durante la investigación se pudo constatar que ninguna sentencia hizo referencia al responsable de la protección de los hijos y de las hijas de las víctimas. No obstante, se conoce que son las familias de las mujeres asesinadas quienes acogen a estos niños y niñas por temor a que terminen en un orfanato (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, 14 de julio de 2022). Pese a las limitaciones de recursos, de capacidades, o a la falta de salud, lo cual se evidencia en el siguiente relato de una trabajadora social entrevistada:

la abuela era una adulta mayor, pero era analfabeta. (...), y nos preguntaba ¿cómo lo hago? Yo le respondí que no hay más porque no hay quién asuma, ¿o quiere que les mandemos [a sus nietos] a una institución? ¿Quiere no volver a ver a sus nietos? A veces los equipos técnicos son así de crudos y fríos. Entonces la abuela dijo: ¡no, no, me quedo con mis nietos! (entrevista a funcionaria del Consejo de Protección de Derechos, 20 de julio de 2022).

La falta de designación de responsables del cuidado de los niños y de las niñas en las sentencias refleja el desinterés del sistema judicial por el bienestar de los NNA durante y después del proceso penal. También invisibiliza las condiciones socioeconómicas de los familiares que asumen la custodia: pobreza extrema, enfermedades catastróficas, vejez o discapacidad (Pareja 2023, 61), lo que termina convirtiendo a estas familias en víctimas adicionales de la violencia de género porque además de enfrentar el duelo, deben encarar el desafío del cuidado de niños y niñas.

El segundo mecanismo es la rehabilitación y alude a la atención médica y psicológica que requieren los hijos y las hijas de mujeres víctimas de feminicidio después del acto violento. Se identificó que en 89 casos (74 %) los NNA sobrevivientes estuvieron expuestos a la violencia antes del feminicidio y que en 44 de los casos analizados (36 %) presenciaron el asesinato de su madre. Además, durante el proceso judicial solamente en 32 casos (30 %) la fiscalía solicitó un peritaje para determinar el estado médico y psicológico de los niños y de las niñas. En otras palabras, la mayor parte de las víctimas no tuvieron una adecuada valoración de su salud física y mental para determinar las medidas de rehabilitación requeridas. Por otra parte, solo en 44 casos

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

(36 %) se dispuso la rehabilitación y en tres se dictaminó la obligatoriedad de contar con apoyo psicológico.

Al limitado alcance de la rehabilitación se suma la dificultad de acceder a lo dispuesto en la sentencia. De hecho, solo en 17 casos (14 %) el tribunal señaló una entidad responsable de su cumplimiento, ya sea el Ministerio de Salud Pública (MSP), el MIES o el Sistema de Protección de Víctimas de la Fiscalía General del Estado. Esto quiere decir que solo en el 14 % de las causas las víctimas supieron a dónde acudir para efectivizar las medidas de rehabilitación que les correspondían.

A esto se suman las limitaciones de recursos y de personal que enfrenta la salud pública ecuatoriana para atender a las víctimas de diferentes tipos de violencia. Situación que se evidencia en el siguiente testimonio:

Esto quiere decir que tampoco podemos hablar de rehabilitación de salud mental o de un proceso terapéutico de salud mental, porque usted sabe que se requiere sostenimiento, continuidad y no hay. Yo diría realmente que los jueces lo disponen, pero el sistema público no está listo para cubrir (...) porque una cita cada 60 días o después de dos años no restituye ningún derecho. Al sistema le falta muchísima estructura para poder responder a estas cuestiones (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, 14 de julio de 2022.).

145

Estas dificultades también se presentan en lo que respecta a la garantía de la educación para hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio.

(...) Nosotros hemos visto en más de una ocasión comunicados dirigidos al Ministerio de Educación por parte de directoras de escuela que dicen: “señor juez, en cuanto me sea posible cumpliré. En este momento el salón de clases tiene 40 pupitres y yo tengo inscritos a 60. Ahora no puedo”. Entonces, esa disposición de sostener el acceso a la educación del niño ya no será (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, 14 de julio de 2022.).

La falta de sensibilidad de los operadores de justicia y las pocas capacidades estatales para atender a los NNA muestran la distancia que existe entre las intenciones declaradas en las normas y los recursos que efectivamente se asignan al sistema público para atender a estas víctimas. En otras palabras, “¿cómo logramos una real reparación integral cuando el Estado habla de bonitas leyes, pero no asigna ningún presupuesto?” (entrevista a funcionaria del Consejo de Protección de Derechos, 20 de julio de 2022).

Respecto a la indemnización, este mecanismo (junto con la pena privativa de libertad y la pena de multa) es el más utilizado por los jueces y las juezas. De hecho, encontramos que estaba contemplado en el 93 % de todas las sentencias analizadas

y que en 57 % de los casos era la única medida dispuesta. No obstante, pese a su frecuencia en los dictámenes judiciales, los datos muestran que no existen criterios consensuados entre jueces (al menos en el 63 % de las sentencias) para determinar el monto de dinero que necesita un niño o una niña que no cuenta con protección parental y que enfrenta una vulnerabilidad agravada producto de la violencia de género (Álvarez, Espín y Corella 2023).

La determinación de los montos generalmente obedece a criterios discrecionales más que a argumentos objetivos sobre las condiciones materiales de vida de las víctimas. En el 37 % de las sentencias el monto de la indemnización se calculó en función de la productividad que habrían tenido las mujeres asesinadas. Dada la condición de vulnerabilidad socioeconómica de la mayoría de víctimas (Álvarez, Espín y Corella 2023), la indemnización se calculó sobre el supuesto de que la mujer ganaba el salario mínimo vital multiplicado por los meses y años de vida productiva que legalmente le habría correspondido cumplir hasta su jubilación.

Si bien esta lógica de cálculo es razonable, desconoce que la mayoría de las mujeres asesinadas, al igual que sus hijos o hijas, se encontraban en condiciones de pobreza antes del feminicidio y que el monto de la sentencia permitiría la reproducción de las condiciones materiales existentes previas al delito. Desde otro punto de vista, sería más razonable calcular las indemnizaciones en función del costo de la canasta básica multiplicada por cada uno de los niños y niñas en situación de orfandad, por cada mes y por cada año de vida hasta cumplir la mayoría de edad. De esta manera los valores asignados podrían cubrir de mejor manera sus necesidades.

Finalmente, aunque el COIP dispone el pago de la indemnización de manera inmediata, esto generalmente no se cumple. “No se cumple al 100 %, pero el juez legalmente emite la sentencia y ordena el cumplimiento. Pero en muchos casos hay que seguir la ejecución porque ni el Estado ni el agresor tienen los recursos para hacer cumplir esta sentencia. Entonces hay que impulsarla desde el lado judicial” (entrevista a jueza de Violencia Intrafamiliar de Pichincha, 1 de agosto de 2022). Esto implica que si las víctimas quieren hacer efectiva su indemnización en caso de no pago, deberán iniciar una nueva acción judicial, esta vez ya no por la vía penal sino por la civil. Además, “el hecho de pagar o no la reparación integral a favor de la víctima no repercute sobre su salida [del victimario] o no de la cárcel” (Morla 2021, 49).

En definitiva, el sistema judicial no cuenta con patrones claros que orienten la determinación de los montos de la indemnización, incluyendo las particularidades propias de las víctimas y del caso. Tampoco se ha hecho una evaluación de la posibilidad real de pago de la indemnización por parte del victimario, considerando que en la mayoría de los casos esta no se cumple porque no hay mecanismos claros para efectivizar el pago porque el victimario se encuentra privado de libertad o porque los montos establecidos superan con creces sus posibilidades económicas.

El bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad

El bono para los NNA en situación de orfandad constituye un mecanismo complementario implementado por el Estado ecuatoriano para contribuir “a la reparación y reconstrucción de su vida en el ámbito familiar y social, garantizando el ejercicio de sus derechos” (Decreto Ejecutivo 646/2019, 1). Son beneficiarios de este bono los NNA desde su nacimiento hasta los 18 años de edad y que vivan en condiciones de pobreza según el registro oficial que lleva el Estado. Además, el MIES es responsable de entregar y registrar las asignaciones.

Este bono se ha ido modificando progresivamente para mejorar su cobertura. Esto ha permitido que en la actualidad los hijos y las hijas de la víctima de feminicidio puedan acceder al beneficio desde el momento en que se inicia la investigación para determinar la responsabilidad del feminicidio. Aunque esto es positivo, el bono se rige por una escala que se reduce mientras mayor es el número de hijos o hijas en situación de necesidad. De este modo, el valor que se entrega a la persona que es responsable del cuidado del NNA puede ser de unos 125,33 dólares mensuales cuando se trata de una sola víctima, de 183,30 dólares cuando son dos, mientras que cuando son tres hijos o hijas o más el monto llega a unos 230,48 dólares mensuales (Manrique 2023), es decir, apenas 76,82 dólares por NNA o menos.

Pese a que el bono debe entregarse desde el inicio de la investigación criminal, en ninguna de las sentencias analizadas se contempló esta ayuda. No obstante, se conoce que desde su emisión en 2019 hasta 2022 se contabilizaron a nivel nacional 591 hijos e hijas de víctimas de feminicidio (Fundación Aldea 2022), de los cuales, según el MIES, se habrían beneficiado 194, solo un 33 % (Manrique 2023). Este dato llama la atención, sobre todo porque los presupuestos asignados para el bono son muy superiores a los valores devengados (tabla 1).

En la tabla 1 se observa que los presupuestos para el bono tienen una baja ejecución pese a ser montos muy moderados. Desde su creación en 2019 hasta el año 2022 esta ayuda social ha pasado de casi 300 000 dólares a 230 000.

Tabla 1. Presupuesto para el bono de feminicidio

Decreto	Año fiscal	Presupuesto asignado	Presupuesto devengado	Porcentaje de presupuesto devengado
Decretos Ejecutivos 696 y 1186	2019	294 032,16	11 199,96	4 %
	2020	2 940 112,00	38 621,98	1 %
	2021	181 417,92	111 327,68	61 %
Decreto Ejecutivo 370	2022	230 730,00	116 526,28	51 %

Fuente: Manrique (2023).

No obstante, el porcentaje de ejecución ha crecido, pasando del 3 % en 2019 al 50 % en 2022. De manera paralela, el número de NNA en situación de orfandad también ha aumentado desde 2019 en 58 víctimas durante cada año. En parte la lentitud con la que se ejecuta esta ayuda social tiene relación con la burocracia del proceso y con la falta de conocimiento entre funcionarios y funcionarias del sector público, lo que innegablemente se traduce en barreras al acceso para las víctimas (*Primicias* 2022). En definitiva, la dificultad de cumplir con la entrega de los montos asignados para el bono constituye una forma de violencia institucional que es igual de dañina que la violencia de género.

Mecanismos colectivos

En relación con las medidas simbólicas, en las causas estudiadas se encontró que las familias de las víctimas o los y las fiscales las solicitaron solamente en 19 casos (15 %). Solo en un caso el tribunal dictaminó la aplicación de una medida de este tipo, solicitando la difusión a través de los medios de comunicación de la sentencia judicial correspondiente para honrar a la víctima y exaltar su dignidad. Con respecto a la garantía de no repetición, este es el mecanismo menos encontrado de manera explícita en las sentencias judiciales revisadas. Si bien el Estado ecuatoriano ha ido perfeccionando su marco jurídico e institucional para prevenir que el feminicidio y la orfandad se repitan, en términos operativos queda todavía mucho por hacer. Por una parte, las instituciones encargadas de proteger a los hijos y a las hijas de las víctimas de feminicidio enfrentan dificultades para cumplir su misión, por otra, existe poco trabajo de prevención y erradicación de la violencia de género en la sociedad, tareas que permitirían un cambio de comportamiento social y que podrían generar una reducción de los impactos humanos, sociales y económicos del feminicidio (Chun Lee 2023).

4. ¿Es posible cortar el ciclo de la violencia?

En esta sección se plantea que la correcta aplicación de los mecanismos de reparación integral para los hijos y las hijas de víctimas de feminicidio puede contribuir a la reducción de la violencia de género por su capacidad de romper los ciclos de violencia. En este argumento subyace la lógica de que los ciclos de violencia no se cierran de manera apropiada ante la falta de justicia. En los casos donde convergen el feminicidio y la orfandad, la mala aplicación de la justicia retributiva (castigo para el victimario)⁶ y la violencia institucional, materializada en la casi nula aplicación de la justicia restaurativa, repercuten sobre toda la estructura social normalizando la violencia y permitiendo su perpetuación.

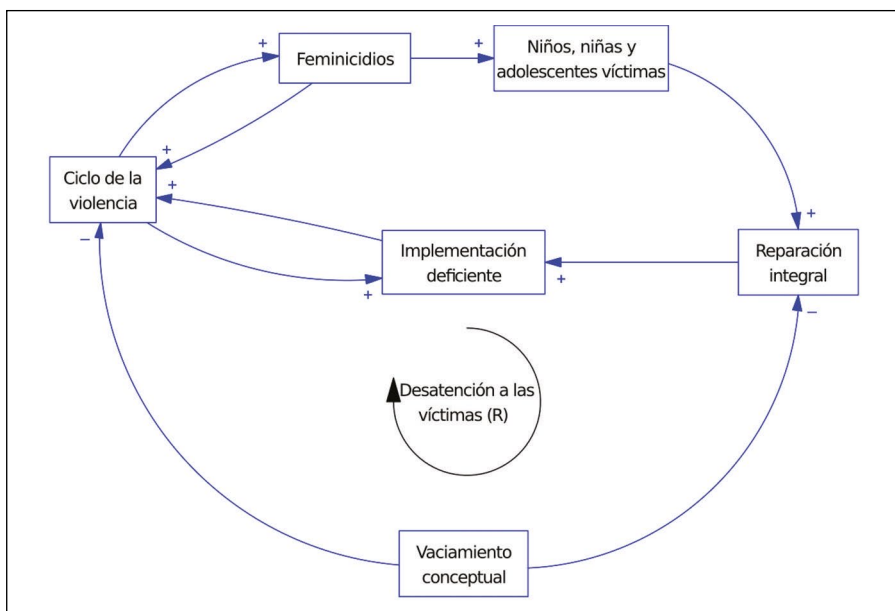
6 “Los datos del Consejo de la Judicatura de Ecuador reflejan 405 muertes violentas de mujeres en 2022, también la cifra más alta desde 2014. Sin embargo, solo 78 fueron procesados o tipificados judicialmente como femicidios, 292 como asesinatos, 25 como homicidio, 5 como vicariato, 3 como robo con muerte y 2 como violación con muerte” (*Primicias* 2022, párrs. 17-18).

Para articular esta discusión se recurrió al uso de un modelo causal que se presenta en las figuras 1 y 2, las cuales visibilizan la interacción entre la violencia institucional y la reparación integral. La lectura del primer diagrama puede iniciarse en la variable feminicidios. A partir de ahí se exponen las múltiples causalidades donde el aumento del número de mujeres asesinadas genera un incremento en la cantidad de NNA en situación de orfandad.

La aplicación de la reparación integral constituye el camino legal de actuación en estos casos, sin embargo, su deficiente implementación (lo que equivale a la desatención y a la desprotección de los NNA) y el vaciamiento conceptual de la reparación (que equipara la indemnización y el castigo con los cinco mecanismos que dispone la ley), generan las condiciones propicias para que en la adolescencia o en la adultez los hijos y las hijas de víctimas de feminicidio tiendan a producir y a reproducir los mismos ciclos de violencia de género que vivieron, ya sea en el papel de víctimas o de victimarios.

A su vez, los ciclos de violencia que tienen lugar en un contexto de violencia institucional tienden a aumentar el número de feminicidios, es decir, que inicia nuevos ciclos de violencia. De hecho, el bucle que se muestra en la figura 1, que se refiere a la desatención de las víctimas, indica que hay una dinámica de refuerzo de la violencia que podría crecer descontroladamente. Entonces, el incumplimiento del Estado al no asegurar la reparación para las víctimas, termina siendo igual de dañino que el acto violento porque permite su reproducción.

Figura 1. Implementación deficiente de la reparación integral



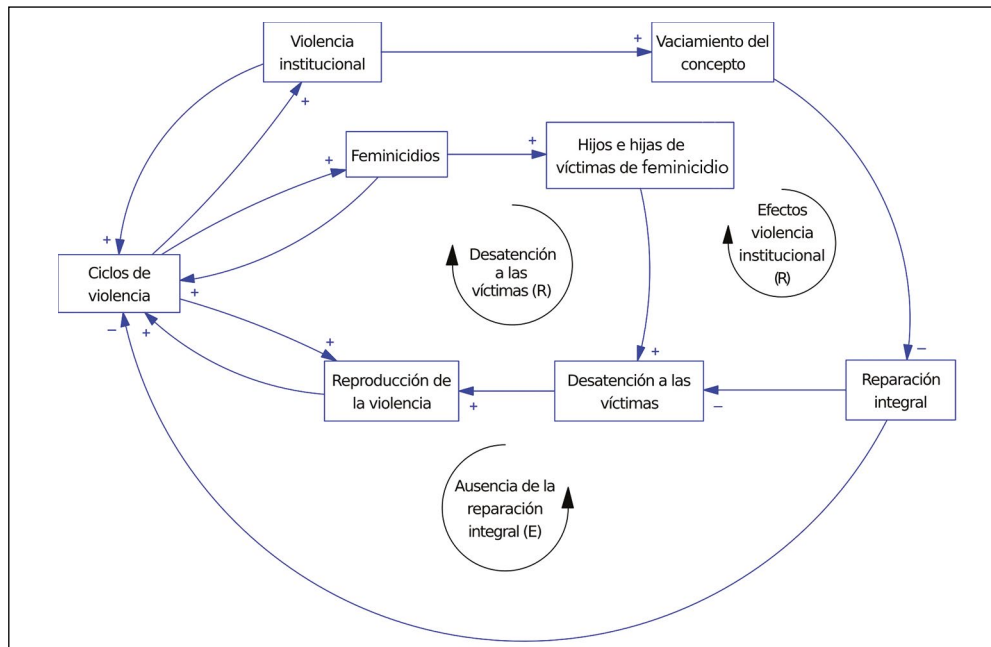
Elaborada por Carla Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella.

En la figura 2 se incorpora la variable violencia institucional. Con esto se demuestra que la violencia que procede de las instituciones estatales anula los supuestos beneficios de la reparación integral. Esto ocurre cuando las instituciones responsables de impartir justicia no entienden la utilidad y la importancia de la justicia restaurativa para romper los ciclos de la violencia, específicamente cuando la reparación se traduce en indemnización y cuando la implementación es negligente.

El juez en la sentencia tiene que ordenar quién es la entidad que se va a hacer cargo. (...) Es así como debería ordenarse el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, pero no ordenan a nadie. En muy pocas ocasiones ordenan en realidad que se haga un seguimiento total una vez que ha terminado el caso. Si es que la víctima está viva, ha sufrido violencia, ha ganado el proceso, ella es la que tiene que seguir una ejecución de la sentencia si es que no se ha cumplido directamente. Pero ¿qué pasa cuando ella muere? Los menores no van a hacerlo, no están en condiciones de hacerlo. Es ahí donde debe el Estado ordenar que lo haga la Secretaría de Derechos Humanos, pero no lo hace (entrevista a jueza de Violencia Intrafamiliar de Pichincha, 1 de agosto de 2022).

Esta dinámica de la violencia institucional repercute en la reproducción de los ciclos de violencia contra la mujer, en el aumento de los feminicidios y con ello en el incremento del número de NNA en situación de orfandad. Se trata de un ciclo que no tiene fin.

Figura 2. Violencia institucional vs reparación integral



Elaborada por Carla Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella.

La violencia de género no es un problema individual, se encuentra arraigada en la estructura social, política e institucional de nuestra sociedad (Garibi González 2009). Desconocer la violencia institucional puede incentivar la reproducción de los ciclos de violencia de género y la pérdida de perspectiva respecto a cómo plantear soluciones a largo plazo.

En Ecuador, a pesar de los avances normativos, los familiares de las víctimas de feminicidio y de otras muertes violentas no han recibido una forma de justicia que repare el daño recibido. Además, el Estado anualmente pierde cerca de 4608 millones de dólares –4,28 % del producto interno bruto (PIB)– debido a la violencia de género (Vara-Horna 2020). En este artículo se plantea que, si el Estado se ocupara más de reparación integral, incluida la implementación de medidas que garanticen la no repetición, se podría reducir la carga económica y humana que pesa sobre los servicios de salud, de bienestar social, de policía y de justicia, pero, sobre todo, sería posible pensar en una sociedad menos violenta hacia las mujeres y los NNA.

5. Conclusiones

La violencia de género y la violencia institucional tienen un impacto contundente y de largo plazo sobre la vida de los NNA cuyas madres son víctimas del feminicidio. Para enfrentar este impacto el Estado ecuatoriano ha venido construyendo un marco normativo e institucional que le permita proteger a estas víctimas y castigar a los victimarios. Además, ha buscado mutar desde un modelo de justicia retributiva a otro de justicia restaurativa que constituye una manera humana y eficiente de reparar los daños causados a las víctimas.

La reparación integral, aunque no logre restituir plenamente los derechos vulnerados, es un principio que permite ayudar a los hijos y a las hijas cuyas madres fueron víctimas de feminicidio a superar el trauma de la violencia y a reconstruir sus proyectos de vida. No obstante, su deficiente aplicación, ya sea por falta de comprensión (vaciamiento conceptual) o por negligencia burocrática (deficiente implementación), implica la revictimización, la desatención y el abandono. A pesar de las disposiciones normativas poco se ha hecho por conocer a estas víctimas, quiénes son, dónde, con quién y en qué condiciones viven, qué afectaciones a su salud física y mental mantienen después del feminicidio, si lograron o no romper el ciclo de violencia.

Pese a este vacío de información, los datos aquí presentados muestran que la mayoría de estas víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se agrava cuando no reciben ningún apoyo estatal que les permita la satisfacción de sus derechos (salud física y mental, educación, alimentación, vivienda, entre otros), y algunos podrían llegar a reproducir la violencia a futuro, convirtiéndose en agentes activos del

ciclo de la violencia. En este sentido, la violencia institucional cometida por inacción o por omisión por parte del Estado al momento de reparar a las víctimas de feminicidio es igual de pernicioso que el feminicidio porque agrava y permite su reproducción.

Apoyos

Este artículo constituye uno de los resultados del proyecto de investigación titulado “Aplicación del principio de reparación integral a víctimas de violencia de género en Ecuador 2014-2022” (IAEN-PI-ESD-004). Si bien la investigación de este proyecto se realizó con un grupo más amplio de académicas, el análisis que se presenta en este artículo corresponde exclusivamente a la autora y al autor.

Referencias

- Alcántara López, María Vicenta. 2012. “Las víctimas invisibles: afectación psicológica en menores expuestos a violencia de género”. Tesis doctoral, Universidad de Murcia.
<https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/27220>
- Álvarez, Carla, Johanna Espín y Silvia Corella. 2023. “¿Qué repara la reparación integral? Femicidio y orfandad en Ecuador”. *Ius et Praxis* 29 (2): 126-144.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122023000200126>
- Bodelón, Encarna. 2014. “Violencia institucional y violencia de género”. *Revista de Filosofía Jurídica y Política* 48: 131-155. <https://doi.org/10.30827/acfs.v48i0.2783>
- Burman, Sondra, y Paula Allen-Meares. 1994. “Neglected Victims of Murder: Children’s Witness to Parental Homicide”. *Social Work* 39 (1): 28-34. <https://doi.org/10.1093/sw/39.1.28>
- Carcedo, Ana, y Montserrat Sagot. 2000. *La violencia de género: una perspectiva crítica*. Madrid: Editorial ABC.
- Carrillo Meraz, Rosalía, y Graciela Jiménez Bernal. 2018. “¿Víctimas pasivas? Hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género”. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje* 4 (2): 62-79.
<https://doi.org/10.22370/ieya.2018.4.2.656>
- Chun Lee, Po. 2023. “Prevenir antes que seguir lamentando: políticas para la inversión en prevención de la violencia contra la mujer”. En *Las políticas públicas del feminicidio*, editado por Bolívar Lucio, 53-59. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales.
- Cockburn, Cynthia. 2004. “The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace”. En *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones*, editado por Wenona Giles, 24-44. Berkeley: University of California Press.
- COIP (Código Orgánico Integral Penal). 2014. Registro Oficial 180, 10 de febrero.
<https://www.lexis.com.ec>
- Consejo de la Judicatura. 2018. Resolución 109A. Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y feminicidios que ingresen a la función judicial. Registro Oficial 396, 18 de diciembre. <https://lc.cx/tmoYuj>

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

- Da Fonte, Miguel, Viviane Monteiro y José Andrés Charry. 2022. "Las penas perdidas: los nudos críticos del sistema carcelario en el Ecuador". *Foro: Revista de Derecho* 37: 159-180. <https://doi.org/10.32719/26312484.2022.37.8>
- Decreto Ejecutivo 646/2019. Designar al General Inspector (S.P.) Doctor Milton Gustavo Zárate Barreiros como director general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Salamanca, 25 de enero. <https://lc.cx/TVUQNU>
- Decreto Ejecutivo 696/2019. Créese el Bono para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Femicidio. Quito, 10 de abril. <https://lc.cx/GSupOZ>
- Decreto Ejecutivo 1186/2020. Refórmese el Decreto Ejecutivo 696, de 8 de marzo de 2019, publicado en el Registro Oficial Suplemento 465 de 10 de abril 2019. Quito, 4 de mayo. <https://lc.cx/QXz4fO>
- Decreto Ejecutivo 370/2022. Créase el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de su madre o progenitora. Registro Oficial, Segundo Suplemento 27, 23 de marzo. <https://lc.cx/0m9ZDy>
- Escudero Soliz, Jhoel. 2013. "Reconocimiento constitucional del derecho a la reparación integral y su complicado desarrollo en Ecuador". En *Manual de justicia constitucional ecuatoriana*, coordinado por Jorge Benavides Ordóñez y Jhoel Escudero Soliz, 273-293. Quito: Corte Constitucional del Ecuador.
- Espinar-Ruiz, Eva, y Begoña López-Monsalve. 2015. "Infancia y violencia de género: cuantificación y percepciones". *Estudios Feministas* 23 (2): 451-470. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/38868/29347>
- Ferrara, Pietro, Olga Caporale, Constanza Cutrona, Annamaria Sbordone, Maria Amato, Giulia Spina, Francesca Ianniello, Giovanna Carmela Fabrizio, Chiara Guadagno, Maria Cristina Basile, Francesco Miconi, Giacomo Perrone, Riccardo Riccardi, Alberto Verrotti, Massimo Pettoello-Mantovani, Alberto Villani, Giovanni Corsello y Giovanni Scambia. 2015. "Femicide and Murdered Women's Children: Which Future for These Children Orphans of a Living Parent?". *Italian Journal of Pediatrics* 41 (1): 1-6. <https://doi.org/10.1186/s13052-015-0173-z>
- Fundación Aldea. 2022. *Femicidios en Ecuador: realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados*. Quito: El Chasqui Ediciones.
- Galvis Doménech, María José, y Vicente Garrido Genovés. 2016. "Menores víctimas directas de la violencia de género". *Boletín Criminológico* 22: 1-10. <https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2016.v22i2016.7518>
- Garibi González, Cecilia. 2009. "Sexualidad, salud y sociedad: la compleja relación violencia de género-SIDA. Un acercamiento a la violencia institucional como factor de vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH". *Sexualidad, Salud y Sociedad Revista Latinoamericana* 3: 82-105. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/SexualidadSaludySociedad/article/view/27>
- Guarderas, Paz, y Cinthia Carófilis. 2020. "Contrasentidos en las políticas contra la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos en Ecuador: una mirada situada". En *Ecuador: debates, balances y desafíos postprogresistas*, editado por Stalin Herrera, Camilo Mongua y Víctor Hugo Torres Dávila, 209-234. Buenos Aires: CLACSO. <https://doi.org/10.23071/j.ctv1gm02bg.10>
- Guerra, Gonzalo, y Nicolás Marinelli. 2023. *Políticas públicas para la prevención, justicia y reparación integral de los femicidios en Ecuador*. Quito: Fundación ALDEA.

- Herrera-Velarde, Camila, y Ena Obando-Peralta. 2020. "Importancia de las garantías de no repetición como parte de reparación en favor de la víctima". *Dominio de las Ciencias* 6 (3): 952-966. <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2104>
- Kapardis, Andreas, Anna Constanza Baldry y Maria Konstantinou. 2017. "A Qualitative Study of Intimate Partner Femicide and Orphans in Cyprus". *Qualitative Sociology Review* 13 (3): 80-100. <https://doi.org/10.18778/1733-8077.13.3.06>
- Laclau, Ernesto. 1996. *Emancipación y diferencia*. Buenos Aires: Ariel.
- Lagarde, Marcela. 2005. "¿A qué llamamos feminicidio?". Acceso el 26 de agosto de 2024. https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf
- Landaburo, Liosday. 2015. "El Estado tiene poder para evitar el femicidio. Entrevista a Ana Carcedo Cabañas". *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad* 17: 125-131. <https://doi.org/10.17141/urvio.17.2015.2012>
- Larraín, Soledad, y Teresa Rodríguez. 1993. "Los orígenes y el control de la violencia doméstica en contra de la mujer". En *Género, mujer y salud en las Américas*, editado por Elsa Gómez, 202-212. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud.
- Lewandowski, Linda, Judith McFarlane, Jacquelyn Campbell, Faye Gary y Cathleen Barenski. 2004. "'He Killed My Mommy!' Murder or Attempted Murder of a Child's Mother". *Journal of Family Violence* 19 (4): 211-220. <https://doi.org/10.1023/B:JOFV.0000032631.36582.23>
- Ley 0/2018. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento 175, 31 de enero. <https://lc.cx/bE54t7>
- Manrique, Alina. 2023. "Impunidad y burocracia bloquean el bono del femicidio". *Indómita*, 23 de febrero. <https://indomita.media/bono-femicidio-bloqueado-ecuador/>
- Monteiro, Viviane. 2019. "Misoginia en el espacio público, femicidio no íntimo y prueba criminal". *Estado & Comunidades* 8: 21-43. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n8.2019.96
- Morla, Valentina. 2021. "Incongruencia de la pena de multa frente a la reparación económica a la víctima en el Código Orgánico Integral Penal". Tesis de grado, Universidad San Francisco de Quito. <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9141>
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2013. "Comprender y abordar la violencia contra las mujeres". Acceso el 28 de julio de 2024. <https://iris.who.int/handle/10665/98821>
- OPS (Organización Panamericana de la Salud). 2023. "Prevención de la violencia". Acceso el 28 de julio de 2024. <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>
- Pareja, Walleska. 2023. "El derecho a reparaciones para hijas e hijos de víctimas de femicidio". En *Las políticas públicas del femicidio*, editado por Bolívar Lucio, 61-73. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales.
- Partners El Salvador-FICA. 2017. "El continuum de la violencia contra las mujeres en la región centroamericana". Acceso el 26 de agosto de 2024 <https://lc.cx/3xelzk>
- Primicias. 2022. "Ecuador cerró 2022 como el año con más femicidios desde 2014", 17 de enero. <https://lc.cx/iBaSKw>
- Radford, Jill, y Diana Russell. 2006. *Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sagot, Montserrat. 1995. "Socialización de género, violencia y femicidio". *Reflexiones* 41 (1): 4-10. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10882>

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

- Vara-Horna, Arístides. 2020. *Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador*. Quito: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
- Yugueros García, Antonio Jesús. 2016. “La protección de los menores víctimas de violencia de género en España”. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales* 70: 38-52.
<https://investiga.upo.es/documentos/61bae42707af99486a785522>

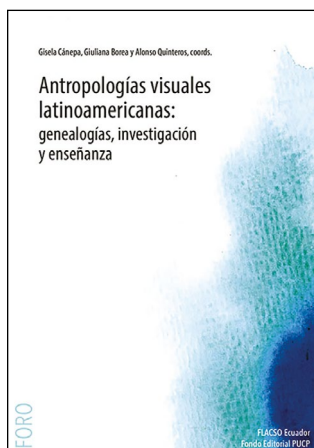
Entrevistas

- Entrevista a funcionaria del Consejo de Protección de Derechos, Quito, 20 de julio de 2022.
- Entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, Quito, 14 de julio de 2022.
- Entrevista a jueza de Violencia Intrafamiliar de Pichincha, Quito, 1 de agosto de 2022.

Cómo citar este artículo:

Álvarez-Velasco, Carla M., y Alejandro Laufer-Corella. 2025. “Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 135-155. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6127>

Libros de FLACSO Ecuador



Serie Foro

Antropologías visuales latinoamericanas: genealogías, investigación y enseñanza

Gisela Cánepa, Giuliana Borea y
Alonso Quinteros, coordinadores

Editorial FLACSO Ecuador / Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

253 páginas

Antropologías visuales latinoamericanas traza las genealogías, investigaciones y formas de enseñanza de este campo en Latinoamérica. El libro abandona el enunciado en singular –la antropología visual en Latinoamérica– para reconocer su condición plural y diversa, e identificar vectores que cruzan las prácticas y alimentan las reflexiones.

En los capítulos que lo componen se discuten las interrelaciones de la antropología con las artes, los museos y archivos, la producción audiovisual, los medios de comunicación, así como las metodologías antropológicas experimentales. Los textos se basan en una estrategia de escritura colectiva entre colegas de distintos países de la región, lo cual vuelve más diversos y yuxtapuestos los recorridos y debates propuestos.


Este libro contribuye a la urgente tarea de explorar la conformación local y mutua, regional y múltiple, de las antropologías latinoamericanas, así como sus aportes y su relación con la disciplina antropológica en general.

Disponible en www.flacso.edu.ec

Movimiento antiminero y oportunidades políticas en el sur del Ecuador

Anti-mining movement and political opportunities in the south of Ecuador



 Mgtr. Nelson Cajamarca. Investigador independiente (Ecuador).
(nelson.cajamarca@uasb.edu.ec) (<https://orcid.org/0009-0009-3852-441X>)

Recibido: 04/05/2024 • Revisado: 08/08/2024
Aceptado: 01/10/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En junio de 2018 y en marzo de 2019 organizaciones ecologistas de la provincia del Azuay alcanzaron dos objetivos en contra de los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga, logrando que se dictara la suspensión de las actividades extractivas por medio de una acción de protección y una consulta popular, respectivamente. ¿Qué factores influyeron en el hecho de que los actores antimineros de la provincia del Azuay alcanzaran los resultados anteriormente descritos, considerando que los mecanismos para efectivizarlos se llevaron a cabo por la vía institucional? Este artículo responde a tal interrogante a partir de una investigación cualitativa; los datos han sido recopilados mediante una revisión documental de medios de comunicación escrita y digital, portales digitales de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales. El argumento que se sostiene es que el resultado ha sido producto de una variación en las oportunidades políticas –cambios en las coaliciones de la élite gobernante y presencia de aliados coyunturales– en dos momentos de la historia reciente de Ecuador (2007-2008 y 2017-2018), lo que favoreció a las acciones institucionales de las organizaciones antimineras. Se ha encontrado que las transformaciones en las coaliciones de la élite gobernante, expresadas en los cambios de las autoridades de los entes estatales nacionales, significaron también la presencia de aliados políticos coyunturales para las organizaciones sociales.

Descriptores: acción de protección; consulta popular; Ecuador; élites gobernantes; minería; oportunidades políticas.

Abstract

In June 2018 and March 2019, environmental organizations in the province of Azuay achieved two objectives against the Río Blanco and Loma Larga mining projects, obtaining the suspension of extractive activities by means of a protective action and a popular referendum, respectively. What factors influenced the fact that the anti-mining actors in the province of Azuay achieved the results described above, considering that the mechanisms to make them effective were carried out through institutional channels? This article answers this question based on qualitative research. The data have been collected through the review of written and digital media and of digital portals of social organizations and governmental entities. The argument is that this result has been the product of a variation in political opportunities – changes in the coalitions of the ruling elite and presence of conjunctural allies – in two moments of Ecuador's recent history (2007-2008 and 2017-2018), which favored the institutional actions of anti-mining organizations. It has been found that the transformations in the coalitions of the ruling elite, expressed in changes in the authorities of national state entities, also shaped the presence of conjunctural political allies for social organizations.

Keywords: protective action; popular referendum; Ecuador; elite governors; mining; political opportunities.

1. Introducción y estado de la cuestión

El 1 de junio de 2018, en una sala de lo civil de la Corte de Justicia del Azuay, un juez de primera instancia acogió la acción de protección presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en contra del Ministerio de Minas y del Ministerio del Ambiente. Se ordenó la suspensión inmediata de las actividades del proyecto minero Río Blanco que venía desarrollando la empresa Ecuagoldmining en las parroquias rurales Molleturo y Chaucha del cantón Cuenca, provincia del Azuay, ubicada en la parte sur del Ecuador, y la desmilitarización progresiva de la zona. El 3 de agosto del mismo año la sentencia fue ratificada en segunda instancia por la Corte Provincial de Justicia, negando la apelación presentada por el Estado ecuatoriano –representado por el Ministerio de Minas– en conjunto con la empresa Ecuagoldmining, solicitando la reactivación de las actividades mineras.

Nueve meses después, el 24 de marzo de 2019, en el cantón Girón de la provincia del Azuay, mediante una consulta popular promovida por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón (UNAGUA), organización filial de la FOA, la ECUARUNARI y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la población de esta localidad decidió rechazar, con una votación del 86,79 %, las actividades mineras del proyecto Loma Larga en el páramo de Quimsacocha,¹ en ese entonces a cargo de la empresa INV Metals.

Estas fueron dos victorias significativas en la provincia contra dos proyectos de minería a mediana y gran escala considerados estratégicos por el Gobierno ecuatoriano. Lo logrado por los actores antiminereros se ha constituido en un referente importante para que a futuro nuevas victorias sean alcanzadas en el ámbito de la lucha antiextractivista en el Ecuador. En función de esta relevancia, en el presente artículo se plantea una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los factores que pudieron influir para que las organizaciones antimineras de la provincia del Azuay llegaran a alcanzar los resultados favorables anteriormente descritos, considerando que los mecanismos para efectivizarlos se llevaron a cabo por la vía institucional –consulta popular y sentencia judicial en primera y segunda instancia favorable a una acción de protección–?

El argumento que sostengo es que ha sido una variación en las oportunidades políticas –cambios en las coaliciones de la élite gobernante y presencia de aliados coyunturales dentro de la élite política– en dos momentos de la historia reciente del

1 El proyecto Loma Larga se encuentra ubicado en tres cantones de la provincia del Azuay: Cuenca (parroquia Victoria del Portete), San Fernando (parroquia Chumblin) y Girón (parroquia San Gerardo). La consulta determinó la suspensión de las actividades mineras únicamente en el cantón Girón.

Ecuador, los periodos 2007-2008 y 2017-2018, lo que facilitó la acción colectiva de los actores antiminereros de la provincia del Azuay para alcanzar resultados favorables. La primera variación fue aprovechada por los movimientos sociales para lograr y ratificar un conjunto de mecanismos institucionales –derechos de participación, derechos de los pueblos y nacionalidades y derechos de la naturaleza– que fueron consagrados en la Constitución de 2008 y en ciertos mandatos constituyentes. Algunos de estos mecanismos institucionales –acción de protección y consulta popular– fueron activados, reactivados o continuados durante la segunda variación de las oportunidades políticas para luchar contra los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco. Entre la primera y la segunda apertura de oportunidades políticas transcurrió un periodo de casi nueve años en los cuales las ventanas de oportunidades para los sectores sociales, ecologistas y antiminereros permanecieron cerradas.

La investigación en la que se basa este artículo es de tipo cualitativo y los datos empíricos han sido recopilados de fuentes secundarias. En la segunda sección se presenta el sustento teórico desde el enfoque del proceso político. En la tercera y en la cuarta se expone la trayectoria de la apertura y el cierre de las oportunidades políticas en el periodo 2006-2019, para estas secciones se ha recurrido a la revisión bibliográfica de libros, artículos académicos y reportajes periodísticos. La variable del cambio en las coaliciones de la élite política se sustenta en las variaciones en las preferencias electorales de los votantes para las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo y en las modificaciones en las conformaciones partidistas del Legislativo, para ello se recurre a gráficos y tablas.

Para sustentar el argumento de la presencia de aliados políticos coyunturales se ha tenido presente la conformación de los órganos estatales de control: el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura (CJ) y su relación con el Ejecutivo. En la quinta sección se establecen, a grandes rasgos, las trayectorias de la movilización en contra de los proyectos Loma Larga y Río Blanco, para lo cual se han revisado tesis, artículos académicos y notas periodísticas de medios de comunicación locales y nacionales, portales digitales, páginas web y redes sociales de las organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, Yasunidos, el Bloque Proletario, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (FMDP) y entidades gubernamentales. La conclusión principal de este artículo es que el cambio de las autoridades de los entes estatales –variación en las coaliciones de la élite gobernante– ocurrida desde mayo de 2017, favoreció a las acciones institucionales –consulta popular y acción de protección– emprendidas por los actores antiminereros. Además, si bien se ha considerado la variable de la presencia de aliados políticos coyunturales, se debe resaltar que algunos de ellos también actuaron en función de intereses electorales particulares.

2. Oportunidades políticas: coaliciones entre la élite gobernante y los aliados políticos

El modelo del proceso político relaciona la acción colectiva de los movimientos sociales con la política institucionalizada (McAdam, McCarthy y Zald 1996, 2), donde los primeros son fenómenos políticos que siguen un proceso continuo de interacción con el Gobierno o con alguno de sus agentes (McAdam 1985). Una premisa de este modelo es que, si bien existe disparidad entre el poder de las élites que dominan la arena política frente a sus retadores, estas no son inmutables ni impermeables, sino cambiantes y flexibles (McAdam 1985). De ahí que ciertos acontecimientos generan cambios en la estructura de poder y posibilitan que grupos externos al sistema político busquen influir en el mismo, haciendo uso de la acción colectiva y entrando en un proceso de contienda política. Por lo tanto, se entiende por oportunidades políticas al conjunto de variaciones o cambios en las relaciones formales e informales de poder que, al ser percibidos por un grupo de retadores, facilitan la acción colectiva, condicionan la trayectoria de un episodio contencioso y pueden determinar el resultado del mismo (McAdam 1996; Tarrow 2012).

Entre las dimensiones que alteran las relaciones de poder se encuentran la relativa apertura o cierre del sistema político institucionalizado, la estabilidad e inestabilidad en las coaliciones de la élite política, la presencia o ausencia de aliados en la élite política y la capacidad o propensión del Estado a la represión. La primera de estas corresponde a la estructura formal, institucional o legal de un Estado, mientras que las otras tres se relacionan con las estructuras o con las relaciones de poder informales (McAdam 1996). En este artículo nos centraremos en las dimensiones correspondientes a los cambios en las coaliciones de la élite gobernante y a la presencia de aliados políticos.

Bull (2014) señala que el concepto de élite gobernante difiere de otros como clase alta, clase capitalista, oligarquía o burguesía. También menciona que no existe un solo tipo de élite sino varios y que los enfoques para su estudio son variados. Desde la concepción marxista la élite es un grupo cuya influencia en la política y la sociedad sería el resultado de su posesión o de su relación con el capital y, este sería su recurso fundamental. Para la “escuela italiana” o enfoque basado en recursos, la élite es un grupo distinto dentro de una sociedad que, en función de los recursos que posee –económicos, naturales, organizacionales, políticos, simbólicos, personales, coercitivos–, disfruta de un estatus privilegiado para influir o para ejercer control de manera formal o informal en organizaciones y en prácticas institucionales de la sociedad. Por lo tanto, existen diferentes tipos de élite dependiendo de los recursos que tenga un grupo social. Finalmente, el enfoque institucional determina que las élites son grupos que pueblan el “esqueleto superior” de importantes instituciones sociales y políticas y cuyas decisiones tienen consecuencias importantes para la sociedad (Bull 2014, 2020).

Las élites políticas son las “personas que pueden, en virtud de sus posiciones estratégicas en organizaciones y movimientos poderosos, afectar los resultados políticos de manera regular y sustancial”² (Higley y Burton 2006). En lo que respecta a las posiciones estratégicas, no necesariamente se hace referencia a que las élites ocupen un lugar visible dentro del Gobierno, desde esta perspectiva el poder de una élite se mide en función de los beneficios que logra por medio de la influencia directa o indirecta en las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por el Gobierno. Cabe mencionar que empíricamente es imposible disociar las élites políticas de las económicas. Sin caer en el extremo de manifestar que las élites económicas tienen capturado el Estado (Durand 2019), es posible afirmar que estas ejercen influencia sobre el poder político y sobre las decisiones políticas, ya sea directa o indirectamente.

De manera directa por medio de la circulación de los sujetos que forman parte de las élites económicas y políticas entre las altas esferas de uno a otro campo y viceversa, fenómeno conocido como la “puerta giratoria” (Chardavoine 2023). También a través de la participación en procesos electorales con partidos de derecha y de extrema derecha. Por ejemplo, los CEO de las grandes empresas nacionales y transnacionales, las entidades financieras y los ejecutivos de las cámaras empresariales pasan a formar parte de las carteras del Estado, de los parlamentos y hasta de la presidencia de la República, y viceversa. Indirectamente, debido a que las élites políticas y económicas tejen relaciones formales e informales que tienen entre sus objetivos el intercambio de información, la asesoría, el cabildeo, la presión mediática y la financiación de campañas electorales. Para estos fines las élites económicas cuentan con gremios y con asociaciones de representación e incluso con centros de producción de conocimiento y establecen alianzas con medios de comunicación que utilizan de voceros, de consultores y de diseñadores de políticas públicas (Morales-Martín, Videla-Rocha e Ibacache-Monasterio 2023; Stoessel 2021).

Con estos antecedentes matizamos algunos conceptos iniciales. En lugar de hablar de aliados de la élite política, nos referiremos a aliados políticos coyunturales que son actores que ocupan algún lugar relevante dentro del sistema político nacional o local y que directa o indirectamente apoyan la causa antiminerera, ya sea por intereses individuales o corporativos, mediáticos, económicos o políticos y electorales. Por coaliciones de la élite gobernante nos referimos al grupo conformado por el presidente y su círculo cercano –buró político–, a los ministros y a los integrantes de los otros poderes del Estado –legislativo, judicial, control social y electoral– y de otros organismos de control –Defensoría Pública, CJ, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General del Estado–, a los políticos profesionales y a algunos Gobiernos locales que tienen la capacidad de influir en las localidades. A decir de Sánchez (2022), todos ellos pertenecen a grupos con capacidad de influencia sobre las actividades del Estado, participando de

2 Una definición parecida entiende a la élite “por medio de su influencia en la sociedad y el ejercicio del poder sobre los resultados políticos” (Bull 2014, 15).

forma activa o pasiva en la administración del poder político y tomando decisiones que adquieren carácter obligatorio para el conjunto de la sociedad o para gran parte de ella (Sánchez 2022).

Finalmente, es importante resaltar que las élites políticas o gobernantes no son círculos perfectamente delimitados, sino que gran parte de ellas están condicionadas directa o indirectamente y en mayor o menor grado por diferentes facciones de las élites económicas locales y transnacionales y por los ciclos económicos mundiales. Las élites económicas tampoco son homogéneas, sino que compiten entre sí, buscan ocupar espacios en el Estado, alcanzan el poder en determinados Gobiernos y son reemplazadas en otros (Stoessel 2021).

3. Apertura y cierre de las oportunidades políticas durante el gobierno de Rafael Correa

Entre 2006 y 2008 se reconocen las siguientes oportunidades políticas para las organizaciones sociales que luchaban contra los proyectos mineros: inestabilidad en las élites políticas gobernantes y el acelerado ascenso de una nueva élite política que llevaba consigo la presencia temporal de algunos aliados coyunturales favorables a las agendas de organizaciones sociales antineoliberales y ecologistas. La inestabilidad en la élite política gobernante tenía entre sus características la crisis de los partidos tradicionales, que se expresaba en la falta de credibilidad de los ciudadanos y en el cambio de las preferencias electorales de los votantes, quienes desde los últimos cinco años del siglo pasado habían optado por candidatos *outsiders* que presentaban discursos antisistema. Abdalá Bucaram en 1996 y Lucio Gutiérrez en 2002 llegaron al poder en estas condiciones, mientras que Álvaro Noboa alcanzó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1998 (Basabe, Pachano y Mejía Acosta 2010, 76).

Un cambio importante que se evidenció en la sociedad ecuatoriana tuvo que ver con la conformación partidista del órgano legislativo a partir de la década de los 90 y de la primera década del siglo XXI (tabla 1). En este periodo, aunque fue notoria la persistencia de partidos políticos de larga data, entre ellos la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC), emergieron nuevas organizaciones políticas a nivel nacional que comenzaron a ocupar espacios en el Legislativo: Pachakutik en 1996 y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en el año 2002. Lo anterior significó también el fin de partidos políticos que habían sido tradicionales durante las últimas tres décadas del siglo pasado: Concentración de Fuerza Populares (CFP), Frente Radical Alfarista (FRA), Democracia Popular (DP), Movimiento Popular Democrático (MPD).

Otro factor de la inestabilidad de la élite política gobernante fue la intensa lucha de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuya evidencia más notoria fue el derrocamiento de tres presidentes del Ecuador entre 1996 y 2005. Abdalá Bucaram inició

Movimiento antiminerero y oportunidades políticas en el sur del Ecuador

su mandato el 10 de agosto de 1996 y fue destituido por el Congreso Nacional el 7 de febrero de 1997, Jamil Mahuad tomó posesión del cargo el 10 de agosto de 1998 y tuvo que abandonarlo el 21 de enero del 2000, mientras que Lucio Gutiérrez asumió el poder el 15 de enero de 2003 y fue removido de sus funciones el 20 de abril de 2005. Las causas de esta crisis pueden remontarse a las deficiencias institucionales del sistema electoral y de partidos que se había gestado en 1979, la cual se agudizó durante la década de los 80 y tuvo su máxima expresión en los años 90 y en la primera década del siglo XXI (Pachano y Freidenberg 2016).

Tabla 1. Composición partidista del poder Legislativo 1979-2017

Organizaciones políticas	Años de elecciones legislativas													
	1979	1984	1986	1988	1990	1992	1994	1996	1998	2002	2006	2009	2013	2017
CFP	32	7	8	6	3	1	2	1	1					
ID	14	24	17	30	14	7	7	4	17	16	2	3		4
PCE	9	2	1	1	3	5	7	2	3					
PLRE	4	4	3	1	3	2	1							
PSC	2	9	14	8	16	21	26	27	28	24	8	11	7	15
MPD	1	3	4	2	1	3	8	2	2	3	3	5		
FADI	1	2	3	2	2									
FRA		6	3	2	2	1	1	2	2					
DP		4	5	7	7	6	6	12	35	4				
PRE		3	4	8	13	15	11	19	22	15	6	3	1	
PSE		1	6	4	8	3	1		1	3				
ID-RED											9			
MUPP								8	7	10	6	4		4
APRE							2	2						
PRIAN										10	27	7		
PSP										7	15	19	5	2
AP												59	100	74
MMIN												5		
CREO													10	
MUPP-MPD													5	
AVANZA													5	
SUMA													1	
CREO-SUMA														34
Otros/independientes	6	6	2					3	3	8	13	8	3	4
Total de legisladores	69	71	70	71	64	64	72	82	121	100	89	124	137	137
Total de organizaciones políticas	8	12	12	11	10	10	11	11	11	10	9	10	9	7

Fuente: Observatorio del Poder Legislativo en América Latina (2024).

La crisis de los partidos políticos tradicionales fue aprovechada por Alianza País (AP) en 2006 para llegar al poder haciendo uso de una narrativa de campaña antisistema, donde la postura antineoliberal de un líder nuevo y carismático jugó un papel fundamental³ (Sánchez 2022). El primer éxito electoral de AP también ha sido atribuido a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar una nueva Constitución y a las alianzas momentáneas que había establecido con organizaciones sociales de izquierda y antineoliberales, entre otros factores (De la Torre 2010).

Una vez que el nuevo movimiento llegó al poder empezó a consolidarse el ascenso de una nueva élite política gobernante (Andrade y Hopp 2014; Diamint y Tedesco 2011). Las elecciones ganadas por AP entre 2006 y 2008 constituyen un referente de este hecho. La elección de los representantes a la ANC en septiembre de 2007 favoreció al movimiento oficialista, pues se hizo con 80 de los 130 asambleístas y evidenció el cambio en las coaliciones de la élite política en el órgano legislativo.

En la Asamblea Constituyente de 2007 el 75,5 % de los asambleístas nunca había ejercido un cargo de representación popular, el 79,6 % nunca había tenido un cargo partidario y el 85,7 % nunca había ejercido como diputado. Esos datos demuestran la renovación que existió en la elección para la Constituyente, pero asimismo indican la escasa experiencia política de los elegidos para sancionar una nueva Constitución (Diamint y Tedesco 2011, párr. 8).

Las organizaciones sociales aprovecharon el ascenso del nuevo Gobierno y la convocatoria a la ANC para canalizar sus demandas por medio de una amplia participación en el proceso de creación de la Constitución, al tiempo que fueron respaldadas por constantes movilizaciones en las calles.⁴ Durante una parte del proceso constituyente los actores sociales contaron con una relativa apertura en el sistema político institucionalizado y con aliados coyunturales en la élite política, entre ellos el entonces presidente de la ANC y un grupo de representantes afines a sus intereses (Andrade y Hopp 2014, 95; De la Torre 2010). El resultado de esta participación y de la presión social se vio reflejado en la conquista o ratificación de amplios derechos de participación que se consagraron en la parte dogmática de la nueva Constitución, en la sanción de algunos mandatos constituyentes, entre ellos el minero en abril de 2008,⁵ y en la amnistía para luchadores sociales.

Sin embargo, a mitad del proceso de redacción de la Constitución empezó a limitarse la participación de las organizaciones sociales, pues las directrices empezaron a llegar directamente desde Carondelet. Esta etapa coincide con el cambio del presidente de la Asamblea Nacional y con una mayor presencia de delegados del

3 Rafael Correa alcanzó notoriedad durante su corta etapa al frente del Ministerio de Economía en el mandato de Alfredo Palacios por sus enfrentamientos verbales con los organismos financieros internacionales y por oponerse a las políticas neoliberales. Además, en su discurso de campaña confrontó a los partidos políticos tradicionales a los que calificó de practicar la “partidocracia”.

4 Las diez mesas constituyentes recibieron alrededor de 1500 delegaciones de distintos sectores sociales y 1000 propuestas de partidos, organizaciones de la sociedad civil y de individuos (De la Torre 2010, 160).

5 Otro de los mandatos constituyentes alcanzados fue el Decreto Legislativo 8 (2008) en el que se eliminaba y prohibía la tercerización, la intermediación laboral y la contratación laboral por horas.

Ejecutivo en las mesas constituyentes⁶ (Andrade 2012; De la Torre 2010). La parte orgánica de la Constitución, que refleja la nueva estructura estatal y los procesos de conformación de los entes estatales, es un indicador de la influencia del Ejecutivo sobre el proceso constituyente. Una vez aprobada la Constitución en septiembre de 2008, la época primaveral para las organizaciones sociales fue sucedida por un periodo de autoaislamiento del partido gobernante donde las ventanas de oportunidades para las organizaciones sociales fueron cerrándose de forma acelerada.

La temprana ruptura entre las organizaciones sociales, indígenas y campesinas con el Gobierno marcaron el rumbo de la contienda social y política futura. De la Torre (2010) y Lalander y Ospina (2012) mencionan algunas razones para este distanciamiento. Una de ellas es la mirada anticorporativista y de dessectorización del Estado patrocinada por AP, que implicó abolir las diferencias sociales relacionadas con lo étnico, lo religioso, lo gremial y con el género para valorarlos a todos como ciudadanos. También señalan la visión que el Gobierno tenía sobre el desarrollo, que difería de la propuesta de las organizaciones sociales, indígenas y ecologistas, estas diferencias se manifestaban sobre todo en los sectores agrario, petrolero y minero. Otro motivo lo encontramos en la estrategia populista del Gobierno de movilización desde el poder, quien acaparaba organizaciones sociales pequeñas o creaba nuevas con el fin de dividir a los movimientos sociales. Finalmente, se encuentran las discrepancias en torno a la concepción de la movilización social entre el Gobierno y las organizaciones sociales, ya que el primero apostaba por una democracia plebiscitaria, mientras que las organizaciones sociales buscaban mayor apertura a la participación en la toma de decisiones para el diseño y la ejecución de las políticas públicas y los cambios institucionales.

Tabla 2. Elecciones ganadas por Alianza País entre 2006 y 2017

Elección	Fecha	Resultado (%)
Presidencial (segunda vuelta)	26/11/06	56,67 % a favor de Rafael Correa. No presenta candidatos a diputados
Consulta popular sobre convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente	15/4/07	81,72 % a favor de la convocatoria
Asamblea Nacional Constituyente	30/9/07	61,53 % de los escaños para Alianza País
Plebiscito constituyente	28/9/08	63,93 % a favor de la nueva Constitución.
Presidencial y parlamentaria	26/4/09	52 % por Rafael Correa, electo en primera vuelta y 47,58 % de los escaños en la Asamblea Nacional para Alianza País
Referéndum Constitucional y Consulta Popular	7/5/11	53,1% de apoyo a la consulta popular y al referéndum. En todas las preguntas ganó el Sí
Presidencial y parlamentaria	17/2/13	57,2 % por Rafael Correa, electo en primera vuelta y 72,99% de los escaños en la Asamblea Nacional para Alianza País
Presidencial y parlamentaria	2/4/17	51,2 % por Lenín Moreno, electo en segunda vuelta

Fuente: CNE (2017).

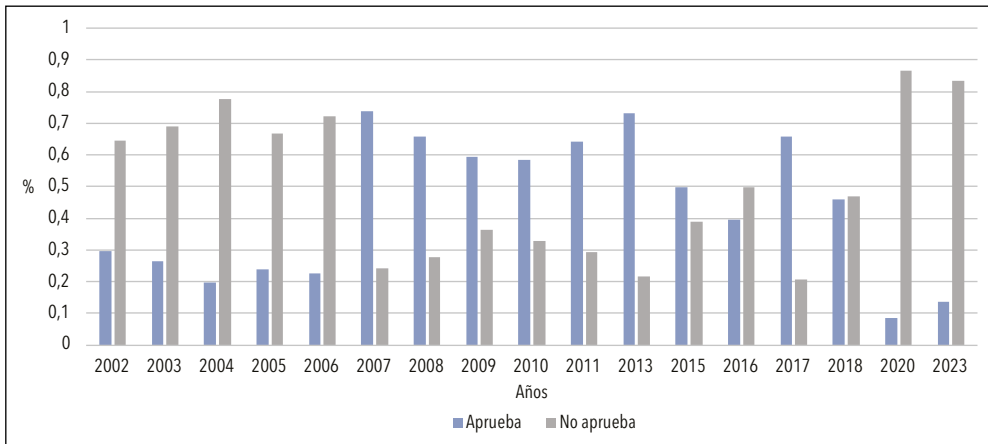
⁶ La Asamblea Nacional inició sus funciones el 29 de noviembre de 2007 y terminó el 25 de octubre de 2008. Alberto Acosta fue reemplazado por Fernando Cordero el 27 de junio de 2008.

A pesar de este fraccionamiento, AP no dejó de consolidar su poder a lo largo del tiempo, ganando las elecciones y manteniendo elevados índices de aprobación en la gestión del gobierno (ver tabla 2 y figura 1). Estos datos favorables al régimen dieron soporte al posicionamiento de un discurso y de una concepción plebiscitaria de la democracia, que significa que las decisiones adoptadas tenían el respaldo de la población porque las elecciones ganadas así lo demostraron (De la Torre 2010). Desde la concepción del gobernante, la participación ciudadana y la democracia se reducían a la asistencia a las urnas. Esto facilitó el control de las instituciones del Estado y la canalización de una agenda favorable al Gobierno, al tiempo que el margen de representación y de acción de los partidos políticos tradicionales en los entes estatales con capacidad para tomar decisiones se reducía constantemente.

La mayoría legislativa del partido oficialista facilitó la canalización de una agenda en la cual los derechos de participación y de las comunidades, pueblos y nacionalidades fueron regulados y limitados en instrumentos legales entre los que destacan la Ley de Minería (2009), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) y el Código Orgánico del Ambiente (2017) (Poveda 2021, 36). En el caso de la consulta prelegislativa, su reglamento fue emitido por la Asamblea Nacional en el año 2012.

En cuanto a la consulta popular, esta fue modificada en el año 2015 como parte de las enmiendas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, contó con la venia de la Corte Constitucional y con el apoyo de la mayoría legislativa. En el artículo 104 de la Constitución se limitó la facultad de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y de la ciudadanía para convocar a consultas populares. “Solo para temas de interés para su jurisdicción que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno” en el caso de los GAD y al suprimir la frase “sobre cualquier asunto” para los ciudadanos (Acosta et al. 2020, 100).

Figura 1. Aprobación de la gestión del Gobierno entre 2002 y 2023

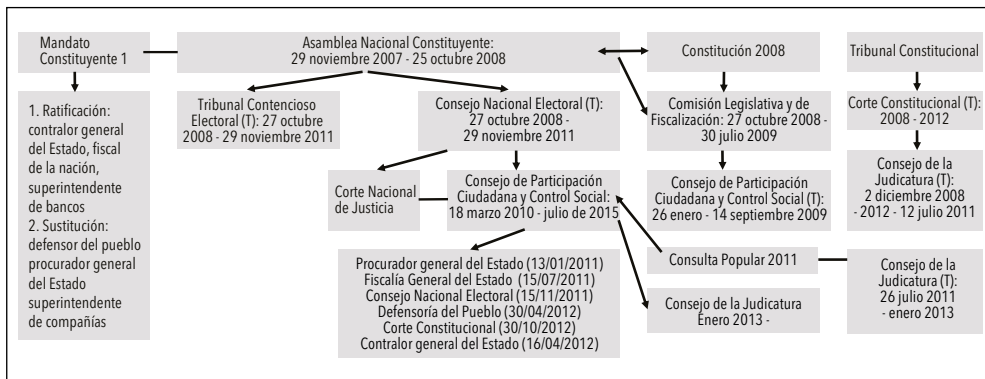


Fuente: Latinobarómetro (2023).

Sin embargo, la propia Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de este dictamen el 1 de agosto de 2018 mientras se encontraba en proceso de evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, retornando el artículo 104 de la Constitución a su texto original (Acosta et al. 2020, 100).

Por otro lado, la nueva coalición gobernante extendió su influencia sobre la mayoría de las instituciones estratégicas: el CNE, el CPCCS, la Corte Constitucional, el CJ, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado. El régimen de transición de la Constitución de 2008 establecía los procesos para la designación de las autoridades que conformarían estos y otros organismos. De ahí que la mayoría oficialista de la ANC designó a los integrantes que conformaron el CNE transitorio (Montúfar Mancheno 2010, 23). Este organismo estuvo a cargo de llevar a cabo el concurso para la designación del CPCCS, órgano que a su vez tenía entre su mandato constitucional designar a las autoridades de control.⁷ La influencia del partido oficialista en la ANC hizo posible el control paulatino de varias instituciones que forman parte de la estructura estatal (figura 2).

Figura 2. Proceso de designación de las autoridades del Estado entre 2007 y 2012



Fuente: Montúfar Mancheno (2010).

El control del CNE, por ejemplo, puede evidenciarse en las trayectorias y en las decisiones de algunos de sus representantes más notorios. El presidente del CNE entre 2008 y 2011, Omar Simon, estuvo a cargo de la consulta popular de 2011, posteriormente, en 2014, una vez concluida sus funciones en este organismo pasó a ser secretario jurídico de la Presidencia. En la presidencia de Domingo Paredes (2011-2015) se negó la consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos y en 2016 Paredes

7 Según la Constitución, el CPCCS tiene la facultad de designar, entre otras, a las siguientes autoridades: el procurador, el contralor y el fiscal general del Estado. Además, puede nombrar a superintendentes, a consejeros del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral y a miembros del CJ.

se afilió a AP. Finalmente, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE entre 2015 y 2017, fue condecorado por el presidente de la República en 2017.

En el caso del sistema de justicia, lo recopilado por Human Rights Watch (2018) brinda indicios de una injerencia del Ejecutivo sobre el poder judicial. Luego de que en 2011 el oficialismo ganó un referéndum constitucional que introducía cambios significativos en la estructura judicial, 145 jueces fueron sancionados por el CJ y separados de sus funciones entre 2013 y 2017 acusados de cometer “errores inexcusables”, mientras que otros jueces manifestaron haber recibido amenazas de funcionarios del CJ y del Gobierno (Human Rights Watch 2018). El denominador común en estos jueces es que habían fallado en contra de los intereses del Gobierno. Por su parte, el estudio de Chávez (2021) sugiere una relación entre las declaraciones públicas del presidente de la República o de sus funcionarios de alto nivel y las sentencias judiciales en diez casos de relevancia mediática y nacional, concluyendo que existen claros indicios de violación a la independencia judicial por parte del Ejecutivo.

La Corte Constitucional también había presentado indicios de una subordinación con respecto al Ejecutivo. En los casos más polémicos que involucraban al Gobierno, o fallaba a favor de sus intereses o no se pronunciaban. La Corte Constitucional transitoria resolvió en 2010 el carácter no vinculante de las consultas prelegislativas entorno a la aprobación de la Ley de Minería y de Recursos Hídricos y en 2011 dio paso a la consulta popular que reformó la estructura del sistema judicial. La Corte que inició sus funciones en noviembre de 2012 dio paso a 16 de 17 de las enmiendas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en marzo de 2014 para que fueran tratadas en la Asamblea Nacional y no por medio de una consulta popular.

Aunque estos datos presentan la imagen de una élite gobernante cohesionada, fortalecida por la presencia del líder único, vale resaltar también que AP era una amalgama de actores dispares y que no estaba exenta de conflictos internos. Ospina (2018) hace hincapié en algunas etapas de disputas al interior del movimiento gobernante. Entre su llegada a Carondelet y la aprobación de la Constitución se vislumbra una presencia mayoritaria de los sectores de izquierda y de tecnócratas estatistas. Sin embargo, desde esta fecha hasta la rebelión policial de septiembre de 2010 se presume de una disputa interna en la que adquirieron protagonismo los sectores empresariales y los grupos favorables al acaparamiento del poder y a la autoridad del líder. Finalmente, no fue hasta la consulta popular de mayo de 2011 que se asumió que la derecha derrotó a la izquierda dentro de AP (Ospina 2018).

En el ámbito extractivo minero existió una alianza explícita entre la élite del Gobierno y las empresas mineras transnacionales. Esta relación debe entenderse en un contexto histórico y global de larga duración en la cual Ecuador, al igual que otros países con economías extractivistas, cumplen el rol de proveedores de materias primas (Svampa 2011; Harvey 2004), de ahí que la economía nacional permaneciera condicionada por los ciclos económicos mundiales de alzas y declives de los precios de las

materias primas (Acosta et al. 2020; Iturralde Ruiz y Jarrín Hidalgo 2015). Por ende, resultaba bastante normal que las élites políticas nacionales y las élites económicas nacionales y transnacionales relacionadas con las actividades mineras establecieran relaciones de cooperación.

Lo anterior no impedía la existencia de disputas, por ejemplo, por las rentas mineras. Las reformas institucionales emprendidas por el Gobierno entre 2013 y 2017 a favor de las empresas mineras dan cuenta de esta hipótesis. Sacher (2017) sugiere que estas reformas podían deberse al cambio de propietarios de los proyectos mineros a mediana y gran escala durante el periodo 2010-2013 (tabla 3), ya que algunas empresas que abandonaron los proyectos argumentaron la falta de claridad en la legislación ecuatoriana, la excesiva carga tributaria –impuesto del 70 % a las ganancias extraordinarias–, la fuerte conflictividad social y los riesgos políticos y económicos (Sacher 2017, 186-193). Muy a pesar de lo mencionado, no puede aseverarse que esta variable haya tenido relevancia en cuanto a considerarse una oportunidad política para el movimiento antiminero.

Tabla 3. Cambios de propietarios de proyectos mineros en 2012 y 2013

Proyecto minero	Vende	Compra	Fecha
Mirador-Mirador del Norte Panantza-San Carlos	Corriente Resources vende sus acciones	Tongling y CRCC	Mediados de 2010
Quimsacocho (Loma Larga)	Iamgold	INV Metals	Finales de 2012
Río Blanco	International Minerals Corporation (IMC) (subsidiaria ecuatoriana: San Luis Minerales S.A)	Junefield Resources Ecuador (subsidiaria nacional: Ecuagoldmining South América S.A)	Finales de 2012 y principios de 2013
Fruta del Norte	Kinros Gold	Lundin Gold	Junio 2013

Fuente: Sacher (2017).

4. Apertura de las oportunidades políticas en el gobierno de Lenín Moreno

Entre mediados de 2017 y finales de 2018 se puso de manifiesto una nueva división en la élite gobernante, cambios en las coaliciones en el poder y la presencia de aliados coyunturales en la nueva élite política. Es decir, nuevas oportunidades políticas no solo para el movimiento antiminero o ambientalista, sino para todos los actores políticos y sociales que se opusieron al gobierno de Rafael Correa.

El 2 de abril de 2017 Lenín Moreno ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un apretado margen de votación. Sin embargo, el nuevo mandatario no contaba con mucha popularidad. La evidencia de ello lo encontramos en que el país se encontraba dividido, AP había descendido entre las preferencias

del electorado, no existían elementos cohesionadores dentro del del movimiento político, los índices económicos tampoco estaban en su mejor momento –los precios del petróleo no superaron la época de bonanza que se experimentó hasta el 2013– y no poseía el liderazgo de Rafael Correa (Hogenboom 2014; Burbano de Lara 2016). El camino que se vaticinaba era la apertura a la conciliación con los diversos sectores políticos para legitimar el Gobierno y así alcanzar la gobernabilidad (Basabe 2017). Debido a ello, se apeló a un discurso pacificador y se puso en práctica una nueva “gestión de la conflictividad social” que incluía un diálogo entre el Gobierno y la mayoría de los sectores políticos y sociales.

Si bien durante la época anterior al gobierno de Moreno AP había sufrido cierto número de cismas internos y la expulsión o autoexilio de algunos de sus altos mandos, no fue sino hasta el periodo comprendido entre mayo de 2017 y febrero de 2018 que se dio la gran división de la élite política gobernante. Los hechos que la corroboran se resumen en la ruptura de las relaciones entre Rafael Correa y Lenín Moreno y en la fragmentación del bloque legislativo de AP, inicialmente conformado por 74 asambleístas. Luego de la división, 27 asambleístas se separaron del oficialismo y conformaron un bloque afín al correísmo. Esta división se debió, entre otros factores, al rumbo que tomó la agenda política del nuevo Gobierno, quien convocó a una consulta popular con la finalidad de cambiar a las autoridades de control –que se suponía eran afines a su predecesor– además de que, ante la complicada situación judicial del entonces vicepresidente Jorge Glas, tomó la decisión de cesarlo de sus funciones.

La división de la élite política estuvo acompañada de cambios en las coaliciones de la élite. Con la escisión de AP retornó la fragmentación partidista a la AN y el oficialismo se quedó sin una mayoría parlamentaria, lo que obligó al Gobierno a usar viejas prácticas clientelares para conformar mayorías móviles que le permitieran alcanzar sus objetivos políticos. El apartarse del proyecto político que le llevó al poder y de Rafael Correa, le significó sacrificar el apoyo de la base correísta para ganarse el de una dubitativa derecha. Lo que para el proyecto de la entonces Revolución Ciudadana constituyó la traición al proyecto político, a su líder histórico y una amenaza para los intereses de sus integrantes, para los sectores excluidos durante gran parte del Gobierno neoextractivista significó una oportunidad para acceder a la toma de decisiones y para participar dentro del sistema político, lo cual no necesariamente significaba una consecuencia positiva en el manejo del Estado.

Los cambios en la coalición gobernante se notaron en las posturas que tomaron los actores políticos ante la convocatoria a la consulta popular y que fueron ratificados con la victoria de la misma el 4 de mayo de 2018. Hecho que también abrió paso a una nueva oportunidad: la presencia de aliados coyunturales en la élite política.

El cambio constitucional que más impactó en la institucionalidad del Estado devino de la victoria de la pregunta 3 del referéndum⁸ sobre la reestructuración del CPCCS, sus facultades evaluadoras y la posibilidad de cesar en funciones a las autoridades de control. De allí que se procediera con la destitución del CPCCS vigente, sustituyéndose por uno transitorio que entró en funciones el 28 de febrero de 2018. Luego de una evaluación que el CPCCS transitorio hiciera de los diferentes organismos de control, destituyó o reemplazó a la mayoría de sus autoridades. Estos entes estatales pasaron a estar conformados por integrantes provenientes de diferentes sectores sociales y políticos en su época transitoria y también en la definitiva (tabla 4). El cambio de autoridades llevó implícita una menor dependencia o subordinación del poder judicial y electoral en relación con el Ejecutivo.

Tabla 4. Transición de autoridades de control 2018–2019

Organismo	Cesación de funciones	Periodo transitorio	Autoridades definitivas
Consejo Nacional Electoral	17/6/2018 Presidenta: Nubia Villacís Carreño	02/08/2018 - 16/11/2018 Presidente: Gustavo Vega Delgado	16/11/2018 - Presente Presidenta: Diana Atamaint
Corte Constitucional	23/8/2018 Presidente: Alfredo Ruiz Guzmán	Vacancia	28/01/2019 – 10/02/2022 Presidente: Hernán Salgado
Consejo de la Judicatura	14/6/2018 Presidente: Gustavo Jalkh Röben	19/06/2018 - 28/01/ 2019 Presidente: Marcelo Merlo Jaramillo	29/1/2019 Presidenta: María del Carmen Maldonado Sánchez
Fiscalía General del Estado	Carlos Baca Mancheno 26/04/2018 (destituido mediante juicio político por la Asamblea Nacional)	Paúl Pérez: 02/05/2018 - 16/11/2018 Ruth Palacios Brito: 20/11/2018 – 08/04/2019	Diana Salazar: 08/04/2019 – Presente

Fuente: CPCCS (2023).

5. Impacto de las oportunidades políticas

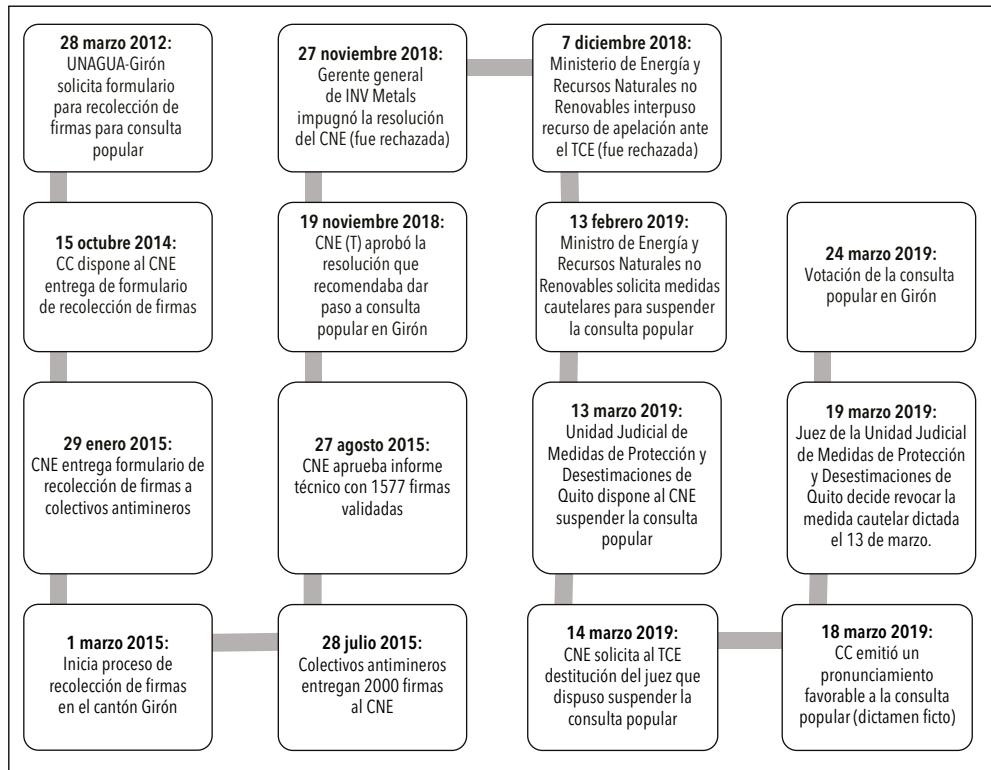
Las oportunidades políticas no se activan independientemente de la acción colectiva de los retadores. En esta sección se relacionan las oportunidades políticas con la movilización social emprendida por actores antimineros de la provincia del Azuay.

⁸ “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al CPCCS, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo con el Anexo 3?”.

Los vaivenes de la consulta popular de Quimsacocha

El proceso de la consulta popular en Girón inició en marzo de 2012 y logró efectivizarse en marzo de 2019. Avanzó lentamente entre 2012 y 2015, trayecto en el cual tuvo que enfrentar un proceso paralelo de consulta popular a favor de las actividades mineras en Quimsacocha, un órgano electoral no independiente,⁹ la ausencia de aliados políticos en casi todos los sectores estatales, la arremetida mediática de un Gobierno neoextractivista, entre otras situaciones adversas. Mientras que, entre mediados de 2018 y marzo de 2019 el proceso de consulta avanzó rápidamente, a pesar de que también tuvo que sortear ciertas trabas legales interpuestas por agentes estatales –Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables– y por la empresa INV Metals (ver figura 3).

Figura 3. Proceso de consulta popular en el cantón Girón



Fuente: Cajamarca (2024).

9 La subordinación del CNE a la postura prominera del Ejecutivo puede verse en el proceso de consulta popular presentado por el colectivo Unidos por el Desarrollo el 3 de marzo de 2015 con la siguiente pregunta planteada a los habitantes de los cantones Girón y San Fernando: “¿Está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha) se beneficie del 60 % de las regalías que genere la explotación minera responsable?”. Esta consulta recibió la aprobación para la entrega de formularios de recolección de firmas por parte de CNE seis días después de haberse iniciado el trámite, a diferencia de la consulta presentada por UNAGUA donde tardaron más de dos años para la entrega de los formularios de recolección de firmas.

Gran parte del último tramo del conflicto se dio con entidades transitorias en el CNE, el CC y el CPCCS. El CNE tuvo un rol fundamental en el avance de la consulta popular. En este caso, una de las oportunidades políticas fue contar con aliados coyunturales en la élite política. Fue de considerable relevancia la trayectoria política de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien también fue vicepresidenta del CNE transitorio. En su trayectoria política ha sido electa en dos ocasiones como legisladora por el movimiento Pachakutik, que es una organización que expresó su rechazo a las intenciones extractivas del entonces presidente Rafael Correa.

Por otro lado, también es de notar una menor presión ejercida por parte del Ejecutivo sobre el sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo y la CC. Por ejemplo, la nueva CC aprobó en junio de 2019 el matrimonio igualitario y en abril de 2021 la despenalización del aborto en casos de violación. En el ámbito ambiental dictó la Sentencia 273/2022 en el caso referente a la consulta previa en la comunidad A'I Cofán de Sinangoe en contra de las actividades mineras. A diferencia de las cortes anteriores, que por lo general emitían fallos y resoluciones a favor del Ejecutivo, con el cambio de Gobierno y de las autoridades de control, se puede evidenciar que estos organismos se habían vuelto menos dependientes del poder Ejecutivo.

Una acción de protección logra detener las actividades mineras del proyecto Río Blanco

173

El 17 de mayo de 2018 la FOA, ECUARUNARI y la CAOI solicitaron medidas cautelares contra los ministerios de Minería y Ambiente, demandando la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco debido a que no se había aplicado una consulta previa, libre e informada a las comunidades de la parroquia Molleturo. El 5 de junio la Unidad Judicial de lo Civil y Mercantil de Cuenca aceptó la acción de protección, declarando la vulneración de derechos fundamentales y ordenó la suspensión inmediata del proyecto hasta que se realizara la consulta previa. Finalmente, dictaminó la desmilitarización gradual de la zona. Más adelante, la Procuraduría General de Estado y el Ministerio de Minería interpusieron un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia del Azuay el cual fue denegado, confirmando la sentencia de primera instancia a excepción del punto referente a la consulta previa, argumentando que las comunidades tuvieron la opción de decidir al respecto con la pregunta 5 de la consulta popular y del referéndum del 4 de febrero de 2018.¹⁰ Para el 14 de septiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y la Procuraduría General del Estado presentaron ante la CC una acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias de primera y segunda instancia. Hasta la publicación de este artículo no ha existido respuesta.

10 La pregunta de la consulta decía lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?”.

Es importante notar que el proceso judicial seguido en este caso fue relativamente rápido, a diferencia del progreso de la consulta popular realizada en Girón. En el caso de Río Blanco trascurrieron cuatro meses entre la solicitud de medidas cautelares, el fallo en primera instancia y el dictamen de la Corte Provincial de Justicia que ratificaba la sentencia a favor de los actores antimineros. Sin embargo, los argumentos utilizados en el tribunal para conseguir la victoria fueron obtenidos de procesos judiciales anteriores: entre 2011 y 2012 el FMDP interpuso demandas contra el proyecto Río Blanco argumentando que no se había cumplido con la consulta previa, libre e informada. A pesar de que los pedidos fueron rechazados en ese entonces, estos sirvieron de evidencia para alcanzar la victoria en 2018.

En cuanto a las oportunidades políticas que favorecieron al movimiento antiminerero en este caso, se puede mencionar que con el cambio de Gobierno y con la reestructuración de los órganos del Estado, entre ellos el Consejo de la Judicatura, se vaticinaba un sistema de justicia menos dependiente del Ejecutivo. De ahí que la oportunidad que se identifica es la presencia de algunos aliados políticos coyunturales que apoyaron los casos Loma Larga y Río Blanco debido a la división de la élite gobernante ocurrida entre mediados de 2017 y 2018, que llevó a un cambio de las autoridades de control del aparato estatal. Otra oportunidad política no mencionada hasta ahora es la presencia de aliados políticos locales: los alcaldes del cantón Cuenca, los prefectos de la provincia del Azuay y algunos actores políticos de la región sur del país. Sin embargo, estos han sido aliados con intereses político-electorales.

6. Conclusiones y recomendaciones

En el presente artículo se ha mostrado la existencia de oportunidades políticas en dos momentos de la historia reciente de Ecuador, las cuales se consideran factores que han contribuido para que los actores sociales que se han opuesto a los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga alcancen ciertos objetivos. Sin embargo, con ello no se pretende restar importancia al largo proceso de resistencia que las organizaciones sociales y comunitarias han desarrollado en contra de los proyectos mineros. Vale resaltar que estas oportunidades difícilmente se hubiesen podido aprovechar sin la existencia de un conjunto de actores sociales y ambientalistas que sostuvieron la movilización durante un largo periodo: la resistencia contra el proyecto Río Blanco inició a mediados de la década de los 90 y la del proyecto Loma Larga entre 2003 y 2005. Los trabajos de Latorre (2012), Pérez Guartambel (2012), Bonilla (2013), Solano (2013), Quizhpe (2020) y Velasco (2021) evidencian una constante movilización desde las épocas señaladas, con varios periodos de mayor y menor intensidad.

Han sido estos actores sociales los que han puesto en marcha los mecanismos institucionales que permitieron alcanzar los resultados descritos anteriormente. Estos mismos actores han operado en un constante cambio de escala entre lo local-regional

y nacional y sus estrategias de lucha han variado entre lo transgresivo e institucional. Sin embargo, hay que mencionar un punto negativo, puesto que los objetivos alcanzados por los actores antiminereros no son ni definitivos ni inmutables. En un país con una débil estabilidad institucional se corre el riesgo de que con el cambio en las élites políticas o con las variaciones de los ciclos económicos globales, las medidas tomadas para frenar las actividades extractivas puedan ser revertidas y anuladas.

Por otro lado, si bien en ambas épocas de la historia expuestas en este artículo se presentan cambios en las coaliciones de élite, estas responden a factores ambivalentes. En ambos casos los cambios son precedidos por un desgaste de los partidos políticos que ocupaban el poder. Mientras que en el primer cambio (2007-2008) el poder fue ocupado por un nuevo movimiento que reemplazó a los partidos políticos tradicionales, en el periodo 2017-2018 fue el movimiento oficialista el que se fraccionó desde el interior.

En cuanto a los aliados políticos, se debe mencionar que su influencia ha sido de relevancia para los actores. Por ejemplo, el político Yaku Pérez estuvo al frente del proceso judicial del caso Río Blanco y también fue uno de los rostros visibles que patrocinó la consulta popular de Girón. De igual forma, los alcaldes de Cuenca y algunos concejales del cantón expresaron su apoyo mediático a los procesos antiminereros. Sin embargo, estos actores operaban como “tribunos del pueblo” (Tarrow 2012), ya que claramente tenían intereses electorales (Cajamarca 2024).

En este texto se ha presentado una óptica muy particular de un conflicto complejo e inconcluso; un análisis que se suma a los aportes hechos por investigadoras e investigadores locales, cuya lectura y estudio aportará a una comprensión global de esta problemática. Se espera que los resultados aquí expuestos allanen el camino para futuros trabajos, pues el movimiento antiminerero continúa su senda y demanda una actualización constante por parte de la academia.

Referencias

- Acosta, Alberto, John Cajas Guijarro, Francisco Hurtado y William Sacher. 2020. *El festín minero del siglo XXI: ¿del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?* Quito: Abya-Yala.
- Andrade, Pablo. 2012. “El reino (de lo) imaginario: los intelectuales políticos ecuatorianos en la construcción de la Constitución de 2008”. *Ecuador Debate* 85: 35-47.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3993>
- Andrade, Pablo, y Joaquín Zenteno Hopp. 2014. “Ecuador: Changing biosafety frames and new political forces in Correa’s government”. En *Environmental Politics in Latin America. Elite dynamics, the left tide and sustainable development*, editado por Benedicte Bull y Mariel Aguilar-Stoen, 92-110. Londres: Routledge.
- Basabe, Santiago. 2017. “El fin de la hegemonía de Rafael Correa y el giro a la izquierda en Ecuador: un análisis desde la perspectiva del electorado”. En *Chile y América Latina. Crisis de las izquierdas del siglo XXI*, editado por Claudio Arqueros y Álvaro Iriarte, 313-334. Santiago de Chile: Instituto Res Publica / Universidad del Desarrollo.

- Basabe, Santiago, Simón Pachano y Andrés Mejía Acosta. 2010. “La democracia inconclusa: derechos fundamentales, instituciones políticas y rendimientos gubernamentales en Ecuador (1979-2008)”. *Revista de Ciencia Política* 30 (1): 65-85.
<https://doi.org/10.4067/S0718-090X2010000100005>
- Bonilla, Omar. 2013. “Agua y minería en el Quimsacocha”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5853/2/TFLACSO-2013OABM.pdf>
- Bull, Benedicte. 2020. “Élites y capacidad estatal en América Latina: una perspectiva basada en recursos sobre los cambios recientes en El Salvador”. En *Nuevos enfoques para el estudio de los Estados latinoamericanos*, editado por Pablo Andrade, 139-169. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Bull, Benedicte. 2014. “Elites, classes and environmental governance: conceptual and theoretical challenges”. En *Environmental Politics in Latin America. Elite dynamics, the left tide and sustainable development*, editado por Benedicte Bull y Mariel Aguilar-Stoen, 15-30. Londres: Routledge.
- Burbano de Lara, Felipe. 2016. “En medio de la tormenta perfecta: agonía de la Revolución Ciudadana y retiro del caudillo”. *Ecuador Debate* 97: 7-23.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/12119>
- Cajamarca, Nelson. 2024. “Movimiento antiminerero en la provincia del Azuay. Los casos Loma Larga y Río Blanco, período 2008-2019”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9889>
- Chardavoine, Julia. 2023. “‘Puerta giratoria’ o circulación de altos cargos entre campos de poder económico y político en México”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 77: 13-28.
<https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5876>
- Chávez, Estefanía. 2021. *Discurso público y justicia: la injerencia de Rafael Correa en las decisiones de la función judicial*. Quito: Observatorio de Derechos y Justicia.
- CC (Corte Constitucional del Ecuador). 2022. Sentencia 273-19-JP/22. Quito, 27 de enero.
<https://lc.cx/yG-Mxj>
- CNE (Consejo Nacional Electoral). 2017. *Elecciones presidenciales Ecuador: 1948-2017*. Quito: Instituto de la Democracia.
- CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.) 2023. “Designación de autoridades”. Acceso el 3 de mayo de 2024. <https://lc.cx/eV-k6f>
- Decreto Legislativo 8. 2008. Eliminación y Prohibición de la Tercerización, Intermediación Laboral y Contratación Laboral por Horas. Registro Oficial Suplemento 330, 6 de mayo.
<https://lc.cx/QjvvgY>
- Diamint, Rut, y Laura Tedesco. 2011. “Quién educa a los políticos? Cambios y continuidades en Argentina y Ecuador tras el grito ‘que se vayan todos’”. *Real Instituto Elcano*, 6 de mayo.
<https://lc.cx/3lbvb2>
- Durand, Francisco. 2019. *La captura del Estado en América Latina: reflexiones teóricas*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Harvey, David. 2004. *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- Higley, John, y Michael Burton. 2006. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Hogenboom, Barbara. 2014. “New elites around South America’s strategic resources”. En *Environmental Politics in Latin America. Elite dynamics, the left tide and sustainable development*, editado por Benedicte Bull y Mariel Aguilar-Stoen, 113-130. Londres: Routledge.

- Human Rights Watch. 2018. “Ecuador: injerencia política en el poder judicial”, 20 de abril. <https://lc.cx/nLXXeF>
- Iturralde Ruiz, Pablo José, y Sofía Jarrín Hidalgo. 2015. “Renta extractiva y territorialización de la política pública”. En *Extractivismo al debate. Aportes para los gobiernos autónomos descentralizados*, coordinado por Sara Latorre Tomás, 121-143. Quito: Abya-Yala.
- Lalander, Rickard, y Pablo Ospina. 2012. “Razones de un distanciamiento político: el movimiento indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana”. *OSAL* 32: 117-134. <https://lc.cx/C27U9s>
- Latinobarómetro. 2023. “Aprobación de la gestión del gobierno que encabeza el presidente”. Acceso el 3 de mayo de 2024. <https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Latorre, Sara. 2012. “El movimiento ecologista popular antiminerero en el Ecuador”. *Ecuador Debate* 87: 123-145. <http://hdl.handle.net/10469/5122>
- Observatorio del Poder Legislativo en América Latina. 2024. “Ecuador”. Acceso el 2 de mayo de 2024. <http://americo.usal.es/oir/legislatina/ecuador.htm>
- McAdam, Doug. 1996. “Conceptual origins, current problems, future direction”. En *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, editado por Doug McAdam, John David McCarthy y Mayer Zald, 23-40. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803987.003>
- McAdam, Doug. 1985. *Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- McAdam, Doug, John David McCarthy, y Mayer Nathan Zald. 1996. “Introduction: Opportunities, mobilizing structures, and framing processes - toward a synthetic, comparative perspective on social movements”. En *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, editado por Doug McAdam, John David McCarthy, y Mayer Nathan Zald, 1-20. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803987.002>
- Montúfar Mancheno, César. 2010. *Régimen de transición y excepcionalidad política: aproximación al tránsito político constitucional post 2008*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Morales-Martín, Juan Jesús, Martín Alfonso Videla-Rocha y Roberto Ibacache-Monasterio. 2023. “Grupos económicos, redes corporativas y *think tanks*. El caso del Centro de Estudios Públicos en Chile”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 77: 29-53. <https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5861>
- Ospina, Pablo. 2018. “¿Cuál es el traje del emperador? Bases y significados sociales de la revolución ciudadana. Ecuador, 2007-2017”. En *El gran fraude*, editado por Juan Cuvi, 170-184. Quito: Arcoiris.
- Pachano, Simón, y Flavia Freidenberg. 2016. *El sistema político ecuatoriano*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Pérez Guartambel, Carlos. 2012. *Agua u oro. Kimsakocha, la resistencia por el agua*. Cuenca: Universidad de Cuenca / Grafisun.
- Poveda, Rafael. 2021. *Estudio comparativo de la gobernanza de los conflictos asociados a la minería del cobre en Chile, el Ecuador y el Perú*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Quizhpe, Carlos. 2020. “La commoditización de las subjetividades: la minería en la provincia del Azuay, Ecuador y los casos de los proyectos Río Blanco y Loma Larga”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/16552>

- Sacher, William. 2017. *Ofensiva megaminera china en los Andes. Acumulación por desposesión en el Ecuador de la "Revolución Ciudadana"*. Quito: Abya-Yala.
- Sánchez, Francisco. 2022. "La patria ya es de él: presidencialismo plebiscitario, partido instrumental y élite legislativa en Ecuador". *Perfiles Latinoamericanos* 30 (60): 1-31. <https://doi.org/10.18504/pl3060-010-2022>
- Solano, Lina. 2013. "Impactos sociales de la minería a gran escala en la fase de exploración y el rol de las defensoras de la pachamama en la resistencia a los proyectos río Blanco y Quimsacocha". Tesis de maestría, Universidad de Cuenca. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4701>
- Stoessel, Soledad. 2021. "Los sectores dominantes en el Ecuador posneoliberal". *Perfiles Latinoamericanos* 29 (57): 29-53. <https://doi.org/10.18504/pl2957-002-2021>
- Svampa, Maristella. 2011. "Extractivismo neodesarrollista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina". *Problèmes d'Amérique Latine* 81: 101-127. <https://lc.cx/fYjW49>
- Tarrow, Sidney. 2012. *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics*. Nueva York: Cornell University.
- Torre, Carlos de la. 2010. "El gobierno de Rafael Correa: posneoliberalismo, confrontación con los movimientos sociales y democracia plebiscitaria". *Temas y Debates* 20: 157-172. <https://doi.org/10.35305/tyd.v0i20.53>
- Velasco, Sofía. 2021. "La consulta popular de Quimsacocha: estudio de caso del primer mecanismo de democracia directa activado desde la ciudadanía respecto a minería en Ecuador (2012-2019)". Tesis de maestría, Universidad de Georgetown. <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/1062650>

Cómo citar este artículo:

Cajamarca, Nelson. 2025. "Movimiento antiminerero y oportunidades políticas en el sur del Ecuador". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 157-178. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6216>

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile

Masculinities in transformation: Meanings of the narratives of university students in southern Chile



-  Dra. Loreto Arias-Lagos. Profesora investigadora. Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de La Frontera (Chile) (loreto.arias@ufrontera.cl) (<https://orcid.org/0000-0003-4999-0941>).
-  Dr. Juan Carlos Peña-Axt. Profesor investigador. Universidad Autónoma de Chile sede Temuco (Chile) (juan.pena@uautonoma.cl) (<https://orcid.org/0000-0002-7689-566X>).

Recibido: 25/01/2024 • Revisado: 08/05/2024
Aceptado: 17/09/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En este artículo se exploran los significados de las masculinidades de universitarios en la ciudad de Temuco, región La Araucanía en Chile, considerando que los estudiantes con este nivel de formación constituyen un segmento que cuestiona los valores presentes en su educación, incluyendo las representaciones de las relaciones de género tradicionales. De acuerdo con la revisión de la literatura sobre masculinidades en América Latina, se destaca la presencia de masculinidades hegemónicas y de masculinidades más cercanas a la equidad de género que pueden estar en transformación, especialmente entre los jóvenes. El acercamiento a esta realidad se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa, con un muestreo intencional; se aplicaron 10 entrevistas y dos grupos focales. Para analizar la información recogida se utilizó el análisis de contenido cualitativo. Los resultados obtenidos, en concordancia con la literatura consultada, destacan mandatos como la protección de las mujeres, el éxito profesional y económico y la virilidad asociada al hombre heterosexual activo. Por otro lado, se encuentran relatos de jóvenes universitarios que cuestionan los mandatos tradicionales y que creen en la igualdad de roles de género, redefiniendo lo que significa ser hombres en la actualidad. Esto evidencia la coexistencia de masculinidades tradicionales y en transformación entre los universitarios que participaron en el estudio.

Descriptor: equidad de género; jóvenes universitarios; mandatos; masculinidades en transformación; masculinidades hegemónicas; significados.

Abstract

This article explores the meanings of masculinities among university students in the city of Temuco, Araucanía region, in Chile, considering that students at this level of education constitute a sector that is questioning the values in their education, including representations of traditional gender relations. Hegemonic masculinities and masculinities closer to gender equity, which may be in transformation – especially among young people, stand out in the review of literature on masculinities in Latin America. Our research approach was qualitative, with an intentional sampling; 10 interviews and two focus groups were carried out. Qualitative content analysis was used to analyze the information collected. The results obtained, in agreement with the literature, reflect such mandates as the protection of women; professional and economic success; and virility, associated with the active heterosexual man. By contrast, we also find accounts of young university students who question traditional mandates and who believe in the equality of gender roles, redefining what it means to be men today. This indicates the coexistence of traditional and transforming masculinities among the university students who participated in the study.

Keywords: gender equity; young university students; mandates; masculinities in transformation; hegemonic masculinities; meaning.



1. Introducción

Los jóvenes universitarios se perfilan actualmente como un grupo social que cuenta con un mayor acceso al conocimiento y a la movilidad social (Pareja, Mac-Clure y Pérez 2021). Estas razones les permiten cuestionar los códigos valóricos normativos con los cuales fueron educados, y que en las sociedades latinoamericanas se caracterizan por la presencia de patrones heteronormativos y patriarcales en las instituciones sociales (Aravena y Baeza 2010; León y Choque 2016). Chile no es ajeno a esta realidad, la cultura nacional está marcada por el predominio de lo masculino en los planos políticos y económicos, encontrándose muy vinculada a antecedentes pasados que evocan la época colonial hispano-criolla (Aravena y Baeza 2010). Si bien persiste un componente de asimetría social referido al prestigio, a la jerarquía y a la sujeción de la mujer y de lo femenino en la estructura social (PNUD 2019), en las últimas décadas las transformaciones sociales y culturales cuestionan fuertemente el heteropatriarcado y la heteronormatividad. Estos procesos se han desarrollado a partir de las movilizaciones feministas impulsadas en los últimos años y protagonizadas por las organizaciones universitarias (Lamadrid y Benitt 2019), lo cual ha obligado al sistema político y a las universidades a tomar medidas para mejorar las condiciones de grupos históricamente marginados (Reyes y Roque 2019).

En segmentos sociales como los jóvenes universitarios y en movimientos sociopolíticos entre los que sobresalen las organizaciones estudiantiles, emergen cuestionamientos a las pautas de acción institucionalizadas y a las representaciones construidas respecto a las relaciones de género tradicionales (Lamadrid y Benitt 2019). Este problema constituye un campo investigativo de interés para las ciencias sociales, pues abre posibilidades de analizar empíricamente la realidad de las masculinidades con valores más igualitarios (Branz 2017; León y Choque 2016; Uribe 2020; Viveros 2007).

Las masculinidades son construcciones que se definen en un contexto cultural, económico y social específico, reproduciendo socialmente sus realidades idiosincráticas (Lund, Meriläinen y Tienari 2019; Olavarría 2017). La literatura (Connell 2003; Flecha, Puigvert y Ríos 2013; Olavarría 2017) da cuenta de que los esquemas de masculinidad representan modos de masculinidades hegemónicas y tradicionales que serían parte de un modelo aceptado por los adolescentes hombres, caracterizado por algunas formas de agresividades y dominaciones-sujeciones en las relaciones sociales establecidas (Connell 2003). A la vez, se destaca la existencia de modelos de masculinidades alejados de las formas hegemónicas y tradicionales (Flecha, Puigvert y Ríos 2013).

En la masculinidad tradicional los individuos son normativamente sometidos a disposiciones desde temprana edad, inculcándoles atributos asociados con el ser hombres (Branz 2017; Córdoba e Ibarra 2020; Fuller 2012; Olavarría 2017). Algunos de estos mandatos incluyen ideales del capitalismo moderno (Escobar 2015),

incorporando la consideración de que los hombres deben ser importantes, rectos, exitosos económicamente, protectores, controlados emocionalmente, fuertes, orientados a la calle y al trabajo y también heterosexuales (Fuller 2012; Olavarría 2017). Se añade a esto el ajuste a mandatos coherentes con una estética dominante en las sociedades contemporáneas a partir de ideales de belleza y patrones de lo atractivo y lo deseable: ser delgado, alto y musculoso, representaciones cuya construcción está intensamente influenciada por los medios de comunicación (Enguix 2013; Branz 2017; Ghigi y Sassatelli 2018). Todo esto implica desarrollar la masculinidad en contraste con lo femenino.

Por otro lado, la literatura da cuenta de una especial forma de construcción de significado de los segmentos jóvenes universitarios en países latinoamericanos, caracterizada por la aceptación de relaciones de género más equitativas. Los hallazgos de la encuesta IMAGES en Chile (Aguayo, Correa y Cristi 2011) indican que los hombres de entre 18 y 24 años se sienten más cercanos a la equidad de género (con promedio de 75,3 puntos, donde 100 apunta a la mayor equidad de género posible), asimismo, esta tendencia se observa en una medición realizada por el PNUD (2019) donde se menciona un retroceso de las ideas tradiciones acerca de los roles de género en la población chilena.

Estas representaciones de ser hombres y las relaciones de género subyacentes desafían lo que se entiende por masculinidades hegemónicas, es decir, son otras masculinidades que representan actitudes de hombres alejados de relaciones violentas y no igualitarias (Uribe 2020; Flecha, Puigvert y Ríos 2013). Este foco de análisis ha tenido cabida en las investigaciones empíricas y son varios los estudios que refieren a esta realidad en segmentos sociales de jóvenes universitarios de países latinoamericanos y de habla hispana (Peña, Arias y Sáez 2022; Aravena y Baeza 2010; Mardones y Vizcarra 2017; Poo y Vizcarra 2020; Uribe 2020).

Sin embargo, estos hallazgos también muestran actitudes y opiniones de sujetos que están menos interesados en cuestionar la masculinidad hegemónica, marcando las relaciones y sus predisposiciones sociocognitivas sobre la base de valores más bien tradicionales de género, asimétricos y desiguales respecto de lo femenino (Adams 2011). Estudios realizados en países latinoamericanos muestran que en segmentos de jóvenes existe un proceso en tensión respecto a lo femenino y a las mujeres. Si bien, por un lado, hay una alta afirmación del poder, de la autoridad y del dominio de lo masculino en la vida ciudadana, de los roles familiares y del sistema político reproducido en espacios universitarios (León y Choque 2016), por otro, se reconoce un replanteamiento de las nuevas formas de masculinidad que se van edificando en sociedades emergentes o en un proceso de transición social a un cambio positivo en las relaciones de género (Castillo, Esquivel y Rodríguez 2019). Por tanto, es posible construir formas de masculinidades que conlleven avances hacia relaciones de género más igualitarias, sin excluir del todo ciertos mandatos culturales propios de las masculinidades hegemónicas.

En esta línea, otros estudios exponen hallazgos sobre masculinidades más inclusivas o híbridas, específicamente en contextos universitarios anglosajones. Las investigaciones muestran que los hombres deportistas jóvenes tienden a reproducir actitudes y conductas misóginas y homofóbicas inculcadas por sus referentes, limitadas mayormente al campo de juego y asumiendo comportamientos burlescos fuera de este. Los mandatos culturales coexistirían con la cercanía emocional y física con sus compañeros de equipo y con el interés de prácticas de consumo de productos considerados femeninos (Adams 2011). Esto coincide con estudios realizados en América Latina (Munsch y Grusy 2018; Cubillas et al. 2016; Madolell, Gallardo y Alemany 2020).

Otros hallazgos muestran que amplios segmentos de estudiantes universitarios construyen imágenes colectivas de masculinidad de tipo hegemónico, exigiendo a los hombres ser atléticos, fuertes, altos, heterosexuales y sexualmente activos, reconociendo, sin embargo, los logros académicos de las mujeres y su adhesión de género a ideales anti-homofóbicos (Munsch y Grusy 2018), entre otros aspectos. Investigaciones en poblaciones latinas muestran que los estudiantes universitarios hombres reconocen un mayor arraigo en posturas tradicionales sobre la masculinidad (Cubillas et al. 2016 para el caso de Chile), comprobándose condiciones similares en países europeos que alcanzan actitudes sexistas (Madolell, Gallardo y Alemany 2020 para el caso de España).

La investigación en la que se basa este artículo tenía entre sus objetivos acceder a los significados sobre las masculinidades de hombres universitarios de Temuco, capital de la región La Araucanía. Ubicada en el centro sur de Chile y con más de 300 000 habitantes, posee una fuerte presencia universitaria, llegando en el 2023 a 36 193 estudiantes de pregrado matriculados en las universidades existentes en la capital regional (Consejo Nacional de Educación 2024). Se abordan en este artículo los atributos asociados al ser y al deber ser hombres desde sus relatos, explorando a través de ello creencias y valoraciones construidas por este segmento social a partir de sus experiencias vitales en un espacio regional. Se coloca especial énfasis en las significaciones en tanto configuraciones de masculinidades en un contexto relacional de género (Connell 2003; León y Choque 2016; Viveros 2007).

2. Metodología

La investigación en la que se basa el artículo es de carácter cualitativa, descriptiva y de corte transversal, en la misma línea de los estudios sobre masculinidades contemporáneas (Fuller 2018; Mardones 2023; Poo y Vizcarra 2020). El objetivo es conocer, a través del lenguaje, el proceso constante de establecimiento de significados construidos por los sujetos en el ámbito de las masculinidades a partir de la reconstrucción de sus relatos. El estudio se orienta siguiendo los supuestos del interaccionismo simbólico, poniendo atención en los significados que derivan de la interacción social de los

sujetos de estudio. Se ha empleado un muestreo intencional, propio de los estudios cualitativos (Flick 2007), utilizando la estrategia bola de nieve o encadenamiento, la cual posibilita ir constituyendo una muestra de sujetos pertinentes para la investigación. Los criterios de inclusión de los sujetos para constituir la muestra fueron: que sean jóvenes (18 a 24 años); que cursen carreras universitarias de diferentes disciplinas en alguna universidad pública o privada de La Araucanía; y que se reconozcan como heterosexuales. La elección de diversas carreras de procedencia de los estudiantes que conforman la muestra se realizó siguiendo el criterio de heterogeneidad, base para el desarrollo de un muestreo intencional (Flick 2007). Además, se optó por jóvenes con orientaciones heterosexuales a fin de indagar posibles cuestionamientos a la heteronormatividad, y con esto la apertura a masculinidades no hegemónicas (Connell 2003).

Se constituyó un grupo de 21 informantes de entre 18 y 24 años que se encontraban cursando en calidad de alumnos regulares una carrera universitaria. Se han incluido estudiantes correspondientes a tres áreas de la formación: ciencias de la ingeniería (4 informantes), ciencias sociales (10 informantes) y ciencias de la salud (8 informantes). De este total, 10 informantes siguen sus estudios en una universidad pública (45 % de la muestra) y 12 (55 %) lo hace en una privada. La aplicación de las técnicas se realizó de manera presencial con los estudiantes. Las entrevistas individuales tuvieron una duración aproximada de 60 minutos, mientras que los dos grupos focales, donde participaron cinco y seis estudiantes respectivamente, se extendieron entre 75 y 80 minutos.

Se empleó también el análisis de contenido cualitativo, siguiendo las orientaciones básicas de esta metodología (Coffey y Atkinson 2003). Mediante la codificación abierta se agruparon puntos similares de significado de acuerdo con algunas propiedades definidas por los sujetos. Para este trabajo, la labor implicó “establecer estos vínculos y pensar en ellos, no en el proceso prosaico de codificarlo” (Coffey y Atkinson 2003, 32). El análisis del campo de estudio consistió en formular categorías y subcategorías de significado que definieran códigos específicos dentro de las dimensiones más amplias de análisis para darle densidad y profundidad a los resultados y a los hallazgos. El procesamiento de la información incluyó, dado el método, la utilización del software Atlas.ti.

Los criterios éticos de la investigación consideraron la firma de un consentimiento informado para llevar a cabo la aplicación de las técnicas e instrumentos. En este contexto, se explicitan las condiciones de su participación relacionadas con la voluntariedad en el estudio, el uso de grabadora con aprobación de los entrevistados y el resguardo de sus identidades en todo el proceso investigativo, incluida la custodia privada de los datos y de las grabaciones de las entrevistas realizadas.

3. Masculinidades en transformación: entre lo tradicional y lo emergente

En el presente apartado se desarrollan las categorías de análisis consideradas centrales agrupadas en dos ejes significativos: persistencia de los mandatos tradicionales y cambios en las masculinidades. El análisis revela características y mandatos vinculados a las masculinidades hegemónicas que emergen en los relatos de los jóvenes entrevistados y a otras nociones que apuntan hacia un proceso de transformación, las cuales cuestionan y resignifican elementos de la socialización tradicional de género con implicaciones en la construcción de las masculinidades de los universitarios.

3.1. Persistencia de los mandatos tradicionales

Las formas más comunes de masculinidad están vinculadas a las masculinidades tradicionales y en los estudiantes universitarios no es una excepción (Peña, Arias y Sáez 2022). Para el análisis de las masculinidades propuesto en este artículo, en el primer eje, denominado persistencia de mandatos tradicionales, se han detectado tres categorías que lo componen. La primera es éxito material y miedo al fracaso, la segunda, protección y la tercera virilidad y potencia sexual. Cada uno de estas categorías son fundamental en la concepción de la masculinidad (Connell 2003). A continuación, se analizan y profundizan cada una de estas categorías de acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo.

Éxito material y miedo al fracaso

En un comienzo, para los jóvenes fue difícil definir qué es la masculinidad, sin embargo, son los mandatos de los “hombres” los que de manera incipiente emergen en las entrevistas y en los grupos focales. Uno de estos componentes corresponde al de hombre proveedor, que refiere a la capacidad de sostener económicamente a una futura familia, esto se vivencia en cuanto obligación y deber. Relacionado con este hallazgo, Cubillas et al. (2016) identificaron que el 40,9 % de una muestra de 1912 estudiantes consideraban que la prioridad para los hombres era tener un auto y una casa. Al proyectarse en el rol de proveedor principal del hogar los jóvenes reproducen y reafirman la masculinidad dominante, donde el trabajo es el medio y la fuente de identidad fundamental de los hombres (Bard Wigdor 2016).

Perder esta posición de principal proveedor de la familia significaría una disminución de poder y, por tanto, cuestionamientos a su masculinidad. De esta manera, el éxito profesional y económico sigue siendo un mandato presente con variaciones que incluyen la participación económica de las mujeres en el mantenimiento de un hogar. “Un poquito más el hombre aporta en la casa, pero por un tema de que él tiene que

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile

llevar más carga también, o sea, yo siempre tengo la visión y la familia más que solo” (entrevista a Félix, Temuco, septiembre de 2023).

En los relatos emerge el miedo al fracaso, sobre todo a no poder satisfacer las expectativas sobre sus proyectos de vida, lo cual involucra la capacidad económica para proveer a una familia y a ellos mismos. Hallazgos coincidentes con los reportados por Munsch y Grusy (2018) cuya carga emocional respecto de los mandatos en los jóvenes es vivenciada como una amenaza que atentaría contra sus masculinidades. De esta manera, la aparición de nuevas formas de ser hombres no necesariamente se verían reflejadas en una transformación del rol de proveedor económico. “Siempre ha sido así, porque ahora por mucho que se ha dado esto de las nuevas masculinidades siempre es el hombre quien tiene que llevar la casa, entonces no ha cambiado mucho” (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Protección

La protección canalizada a través de la orientación a la acción, en tanto capacidad de afrontar problemas y solucionarlos es otro de los atributos que pueden asociarse a las masculinidades tradicionales. La confianza en las capacidades y el saber utilizarlas para afrontar dificultades es una enseñanza que ha formado parte de la socialización de género de estos jóvenes. De igual modo, ser padre es considerado un ámbito de despliegue de la capacidad protectora de los hombres.

Yo siento que significa ser hombre un poco es como ser padre, ser protector, incluso tener un poco más un rol activo (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Confianza en sí mismo, a uno se le enseña que debe confiar en sus capacidades como hombre y saber llevar la situación adelante (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

El rol de protector de los hombres estaría relacionado con la noción de fuerza. Se excluye en el relato este atributo del cuerpo en cuanto ideal de belleza. Coincidiendo con lo planteado por Prado y Ramos (2020), la noción de cuerpo y la relación con la belleza física de los hombres no emerge de forma prioritaria. La fuerza sería un medio para ejercer el rol protector. Vale decir que la idea de fuerza se orienta a la capacidad de solucionar situaciones y pasa a ser un atributo físico que permite llevar a cabo la labor de cuidado de la pareja y el mantenimiento del hogar. “Rol de protección en cuanto apoyo, contención emocional, físico porque igual a veces la gente confunde la igualdad y el hombre en ese sentido siempre tiene que hacer pegas más duras que una mujer en una casa” (entrevista a Félix, Temuco, septiembre de 2023).

Se destaca en las entrevistas la noción de protector, de cuidador de la pareja y de las amigas. Este rol se ejercería solo sobre las mujeres y muchas veces se despliega de

forma inconsciente. Para Gilmore (1994) el rol de cuidador es una de las formas encubiertas de poder sobre las mujeres. Bajo la noción de protección y cuidado se encubre de forma sutil la dominación masculina. Este rol incluye la protección, la contención emocional y física. En este aspecto, para uno de los estudiantes el cuidado no debe confundirse con machismo, aludiendo que la protección se relaciona con el cuidado y no con el control sobre la pareja. Las entrevistas dejan entrever lo esperado en términos sociales, o sea, que los hombres puedan ejercer acciones a favor de la equidad de género. Por otra parte, la potencia de la internalización de los roles tradicionales de género se hace patente a partir de la presencia de conductas “inconscientes” para los entrevistados. Por ejemplo, en relación con el mandato de protección un entrevistado señala lo siguiente: “yo inconscientemente trato de cuidar o proteger si ando con mi hermana, polola [pareja], amigas, inconscientemente las ando cuidando para que no les pase algo que las pueda afectar” (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Virilidad y potencia sexual

Ya definidos los roles de proveedor y de protector como elementos fundamentales en la identidad masculina, queda por desarrollar otro de los elementos centrales de las masculinidades tradicionales: la relación con la virilidad y la sexualidad masculina. Las masculinidades incluyen expresiones, movimientos y formas de hablar que son puestas a prueba en las interacciones cotidianas. En ese sentido, ser masculino se asocia con una forma particular de movimiento y de estética que excluye cualquier manifestación que sea considerada delicada o femenina, pues se contraponen a la rudeza que debería caracterizar a los hombres.

La forma de saltar, yo salté una vez medio delicado y empezaron a molestarme, que eres medio *gay*, estaba con mis primos de Santiago (entrevista a Francisco, Temuco, septiembre de 2023).

Yo personalmente no encuentro que sea tan normal andar pintándose el pelo de muchos colores y tal vez esta es una versión machista mía (entrevista a Mauricio, Temuco, septiembre de 2023).

Los movimientos duros o firmes y la exclusión de la delicadeza reafirman la identidad de género de los jóvenes y permiten posicionar una masculinidad, caracterizada por la expulsión de lo femenino y por la heterosexualidad (Connell 2003) en desmedro de la homosexualidad.

Me acordé una vez que mi polola me dijo que yo era más delicado para expresarme que cualquier otra persona que conociera y (ríe) y raro yo siempre he sido así porque piensas que soy femenino o medio delicado para mis cosas, como que me ofendió un poco (entrevista a Paulo, Temuco, octubre de 2023).

Estas características, junto al deber ser activo sexualmente, constituyen mandatos ampliamente reconocidos por investigaciones sobre las masculinidades hegemónicas (Fuller 2012; Olavarría 2017; Ranea-Triviño 2019) que incluyen estudios con jóvenes universitarios (Munsch y Grusy 2018). En el siguiente testimonio se cuestiona la calidad de “hombre” de un joven por no aprovechar la oportunidad de un posible encuentro sexual con una compañera.

Tengo un amigo que no sé si será *gay*, pero nosotros decimos que sí porque es delicado para vestirse, es delicado, le gusta peñarse, vestirse bien, y lo otro: ha habido circunstancias que un hombre en su situación no lo haría. Por ejemplo, él vive en Temuco y siempre hacen carretes [fiestas] en su casa y la niña le gusta a mi amigo y ella dijo que nunca la tocó, que no le hizo nada. Nosotros decimos que otro en la situación de él algo agarraría para aprovechar la circunstancia (entrevista a Paulo, Temuco, octubre de 2023).

Desaprovechar la oportunidad sexual con su compañera pone en duda la virilidad del joven a juicio de sus pares. En ese sentido, la potencia sexual y el rendimiento de la genitalidad masculina son elementos constituyentes de la heteronormatividad y símbolos de la fuerza sexual (Ranea-Triviño 2019), mandatos que están presentes en ciertos relatos de los entrevistados. Cabe recordar el poder de los pares como elemento de pertenencia e identidad en los sectores juveniles (Costa-López et al. 2021) y la socialización de los jóvenes por parte de los medios de comunicación y de las instituciones sociales que promueven la asociación entre violencia y excitación sexual.

3.2. Cambios en las masculinidades

La identificación de elementos relacionados con las masculinidades tradicionales resulta evidente. Sin embargo, la literatura establece que las masculinidades no son estáticas. Hay evidencias de transformaciones en las conductas de los hombres que vinculan los cambios de las sociedades occidentales con las principales demandas de los movimientos feministas (Castillo, Esquivel y Rodríguez 2019; Peña, Arias y Sáez 2022). El eje de cambios en las masculinidades está compuesto de cuatro categorías: redefinición de ser “hombres”; igualdad en los roles de género; derribando atributos tradicionales: control de emociones y liderazgo; y preocupación por la estética. A continuación, se definen cada una de estas categorías que permiten evidenciar las transformaciones en las concepciones masculinas de los jóvenes universitarios.

Redefinición de ser “hombres”

Al indagar sobre lo que significa ser hombres para los jóvenes universitarios, encontramos que existe una imposibilidad de lograr una única definición de masculinidad juvenil en la actualidad. Esto asume relevancia si se piensa que las actuales

definiciones de un cambio de época, para estos segmentos sociales, incluyen críticas a la denominada masculinidad hegemónica (Connell et al. 2021) y valoraciones positivas a las masculinidades más equitativas en las relaciones de género. Así lo indican algunos entrevistados que relacionan los cuestionamientos de la forma tradicional de ser hombres con las movilizaciones feministas que tuvieron especial cabida en las instituciones universitarias chilenas (Lamadrid y Benitt 2019; Stevani y Montero 2020).

No puedo dar una especificación personal de lo que significa ser varón, pero si uno mira hace unos años atrás, dar una respuesta hubiese sido mucho más fácil, más que nada por el cambio de contexto (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Al final nacimos en una sociedad donde nos enseñaban o imponían de una forma y ahora esa forma está siendo criticada por un sector feminista (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Un criterio de distinción que surge a propósito de las masculinidades de los jóvenes universitarios y de la dificultad al definir socialmente dicha condición, se refiere a la temporalidad. La mayoría de los sujetos tensionan sus masculinidades y las de los demás hombres a partir de la distinción con el pasado. En ese sentido, la noción de pasado se encuadra en el predominio de un tipo de masculinidad hegemónica tradicional cuya característica se sustenta en la falta de oportunidades políticas, económicas y sociales, lo cual perjudica notoriamente a las mujeres en comparación con los hombres (Bard Wigdor 2016; Connell 2003; PNUD 2019).

Basados en el pasado y en la masculinidad construida desde la infancia, las entrevistas demuestran una clara conciencia sobre la implicación de la familia y del grupo de pares en la construcción del género. El reconocimiento de la familia en tanto agente socializador, involucra un cuestionamiento de la forma de ser hombres y sobre todo de la socialización de género que los entrevistados entienden que les fue impuesta y cuyos aprendizajes explicitan y reproducen la desigualdad en los roles de género. Particularmente, la figura del padre machista representa un modelo que les ha permitido repensar y que ha abierto otras posibilidades de ser hombres, tomando cierta distancia del modelo tradicional. Este cuestionamiento se extiende a los grupos de amigos, criticando la reproducción en sus crianzas de expectativas de género asociadas a la validez y a la legitimación de la hetero-cis-normatividad (Gallardo y Espinoza 2021). En este ámbito, en concordancia con los resultados de Poo y Vizcarra (2020), los jóvenes cuestionan la categoría hombre, la cual se encontraría en transición, vivenciada a partir de transformaciones en los roles de género y de expectativas que los atañe de diferentes maneras.

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile

¿Qué es ser hombre? Para mí, la forma que me criaron (entrevista a Félix, Temuco, septiembre de 2023).

Yo creo que si no hubiese tenido una figura paterna tan marcadamente machista quizás no hubiese reflexionado tanto sobre eso porque no hubiese sido como un tema (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

A partir de la redefinición de sus masculinidades los universitarios han cuestionado características y atributos asignados tradicionalmente a los hombres, estereotipos de masculinidad presentes en la socialización de sus padres y familiares que siguen siendo parte de las relaciones de género actuales. “Yo creo que aún quedan características de la generación pasada, por ejemplo, el tema de ser rudo, hacer trabajos pesados, pelo corto, nosotros como jóvenes la intentamos quitar” (entrevista a Jesús, Temuco, octubre de 2023).

Igualdad en los roles de género

En la actualidad se ha alcanzado una mayor igualdad para las mujeres, sobre todo si se refiere a transformaciones en los roles asignados tradicionalmente. Para algunos entrevistados esta nueva concepción en relación con las mujeres conlleva que los mandatos asociados a la masculinidad también evolucionen. Se entiende la relevancia de la comprensión relacional del género, siguiendo a Connell (2003), donde la dicotomía hombre-mujer se hace patente en los relatos y es evocada continuamente. De este modo, el cambio en la noción de masculinidades muestra transformaciones en pautas de conductas y en roles esperados de los géneros, considerando mayor libertad, independencia y reconocimiento de las capacidades intelectuales de las mujeres. Resultados acordes con los reportados en estudios con poblaciones jóvenes (Aravena y Baeza 2010; León y Choque 2016; Mardones y Vizcarra 2017; Peña, Arias y Sáez 2022) que apuntan a transformaciones de relaciones de género más igualitarias en universitarios.

Anteriormente el concepto de emprendimiento se atribuía más al hombre y él tenía que dedicarse a su empresa, en cambio la mujer se preocupaba de la casa, pero ahora está más aceptado que la mujer sea emprendedora (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

Este cambio se refleja en función de los roles y apunta a aspectos sobre las desigualdades de género. Además, algunos de los jóvenes mencionan transformaciones en aspectos que se consideran estructurales en el orden de género y que se refieren a la asimetría de poder entre hombres y mujeres. Estos participantes hacen referencia a las desigualdades de poder y de autoridad entre los géneros, enfatizando en la desigualdad en las estructuras de poder patriarcales. Al respecto, de acuerdo con León y Choque (2016), la capacidad crítica de los estudiantes y sus conocimientos se pueden relacionar con el contexto académico en el que se desenvuelven. “Debiera ser en el sentido de la autoridad y el poder igualitario para ambos” (entrevista a Paulo, Temuco, octubre de 2023).

Otro aspecto a rescatar es el cambio en la representación del rol tradicional que asocia a las mujeres con el trabajo reproductivo (tareas domésticas y de cuidados), hallazgo consistente con los resultados del estudio del PNUD (2019) en Chile. En esta investigación se han identificado además cambios comportamentales a favor de masculinidades más equitativas expresadas en sus vidas cotidianas y en relaciones de pareja en los espacios cotidianos. Según advierten los hombres, las rutinas diarias y las tareas domésticas pueden ser compartidas por las parejas y no recaer exclusivamente en las mujeres. Al hablar de ayuda en las tareas del hogar uno de los jóvenes deja entrever mandatos y pautas internalizadas que reflejan la asimetría en los roles reproductivos entre los géneros, donde los hombres descansan a partir del liderazgo y de las orientaciones femeninas (Saldaña 2018). Estos resultados reflejan el panorama general en los estudios sobre masculinidades que indica que los hombres participan en labores de cuidados de forma limitada, considerando variaciones entre contextos de socialización, edades y países (Comas d'Argemir 2016).

Yo vengo de una familia machista y yo antes iba a la casa de mi polola y esperaba que me atendiera y luego de la revolución voy cambiando, yo puedo ayudar, también puedo cocinar y antes no (entrevista a Francisco, Temuco, septiembre de 2023).

190

Derribando atributos tradicionales

La distinción realizada en función de la temporalidad implica que la actualidad estaría marcada por el quiebre de las representaciones asociadas a visiones tradicionales de ser hombre. El control de las emociones y la orientación de los hombres al liderazgo y a la actividad son los mandatos mayormente cuestionados.

Por qué solamente tiene que ser el hombre el líder o el fuerte, por qué no puede ser la mujer también, dicen que los hombres no lloran, pero por qué no puede haber un momento en que el hombre sí tiene que apoyarse en la mujer (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

El cuestionamiento del control de las emociones por parte de los hombres implica derribar los mitos y las barreras sociales que impiden expresar aquellos sentimientos que pueden interpelar su virilidad: el acto de llorar o sentir miedo. Respecto de los cuestionamientos, uno de los jóvenes manifiesta un cambio en relación con su etapa adolescente, pues en la actualidad estaría en un proceso de reconocimiento de sus emociones. En esta línea, otros hallazgos muestran apertura hacia la expresión de las emociones de jóvenes universitarios, algunos de ellos orientados a la cercanía emocional con sus pares (Adams 2011; Cubillas et al. 2016).

Sobre todo, cuando era un niño o cuando era un poco más adolescente de repente a uno le costaba un poco más entregarse a la emoción, a los sentimientos, pero ya hoy

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile en día no, o sea, obviamente intento abrirme a todo eso (entrevista a Martín, Temuco, agosto de 2023).

Preocupación por la estética

La preocupación por la apariencia es otra de las características en la cual se estiman formas de apropiación diversas y que darían cuenta del cuestionamiento de la masculinidad tradicional. Tal inquietud resulta fundamental en los sectores juveniles (Fuller 2018) y en la encarnación de las masculinidades (Santillán 2022). Los jóvenes expresan que se cuidan más y que están pendientes de su imagen, haciendo referencia a la compra de productos asociados a la estética y al vestuario que les permiten verse y sentirse bien. Este hecho no involucra un cuestionamiento a su virilidad. Al respecto, mencionan que la publicidad se enfoca mayoritariamente en las jóvenes, lo que ha implicado que compren más artículos asociados a su apariencia.

En ese aspecto uno puede cuidarse más, ponerse cremas y no por eso dejaría de ser hombre. Comprarme ropa, verme mejor, ir al gimnasio, a la peluquería a veces, pero no es como las mujeres que gastan mucho en maquillaje (entrevista a Jonathan, Temuco, octubre de 2023).

191

El cambio en la apariencia y la apertura a estéticas tradicionalmente asociadas a las mujeres y a lo femenino, por ejemplo, el uso de adornos y prendas de vestir, ha sido una vía para cuestionar las masculinidades tradicionales. Esto, a su vez, ha actuado en cuanto mecanismo de resocialización de los padres y familiares; ello evidencia un cambio generacional y la influencia de los jóvenes en su entorno familiar.

Según yo mi generación está haciendo reflexionar a los papás. Por ejemplo, yo que soy el mayor mis papás aprenden conmigo. Ellos nunca se imaginaron que me podía poner un aro. Mi papá reaccionó mal, quítate esa cuestión. Mi mamá me decía, lo que te van a decir cuando vayamos a la casa de tu abuelo. Y tiene que ver con eso, luego que me miraron todos se acostumbraron (Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023).

4. Conclusiones

Los relatos de los jóvenes universitarios develan los significados de las masculinidades imbricadas en complejas apropiaciones respecto de lo que significa ser hombre en la actualidad. Así, coincidiendo con otros estudios (León y Choque 2016; Poo y Vizcarra 2020; Ranea-Triviño 2019; Uribe 2020) se concluye que la categoría hombre es interpelada. Este cuestionamiento conlleva a una redefinición de las formas de concebir las masculinidades, propias de generaciones anteriores y que persisten en el presente. En este escenario, una mixtura de significados vislumbra orientaciones hacia la

transformación y demandan la presencia de masculinidades con valores igualitarios. Asimismo, subsisten en ciertos testimonios atributos característicos de las masculinidades hegemónicas, las cuales coexisten con otras orientaciones no tradicionales. Estos resultados están en sintonía con otras investigaciones que han reportado rasgos ambivalentes de convivencia de diferentes masculinidades juveniles en estudiantes universitarios (León y Choque 2016; Munsch y Grusy 2018; Peña, Arias y Sáez 2022).

En este contexto, el cuestionamiento de los mandatos y los atributos que reproducen las relaciones de género tradicionales se esgrime como un mecanismo hacia el establecimiento de relaciones más equitativas. El relato de todos los entrevistados está marcado por la denuncia respecto a la inequidad de los roles de género entre hombres y mujeres, orientados a la transformación de esta situación con críticas a expectativas de género presentes en sus crianzas, asociadas a la hetero-cis-normatividad (Gallardo y Espinosa 2021). Para los entrevistados que el control de las emociones, el rol de liderazgo masculino y el cuidado de la apariencia sean exclusivos de las mujeres constituyen mandatos de género interpelados.

El acceso a los conocimientos, en comparación con generaciones anteriores, su capacidad de crítica respecto a los códigos valóricos en los cuales fueron educados (Aravena y Baeza 2010; León y Choque 2016) y las influencias de las movilizaciones feministas en Chile y en las universidades han sido un contexto fructífero para estos cuestionamientos. Es importante destacar la influencia de tales movilizaciones feministas en las universidades en 2018 donde las estudiantes tuvieron una participación protagónica a partir de las protestas contra las violencias de género, demandas que más tarde fueron parte del llamado estallido social del 2019. Este hito está presente en el relato de ciertos universitarios, los cuales lo consideran un referente en la redefinición de la categoría hombre.

Otro ámbito se refiere a la expresión de las masculinidades a través de la gestión de la apariencia, incluyendo actuaciones sociales continuas (Butler 2018). Estas se ponen a prueba y se legitiman en la práctica a partir de una puesta en escena, y en este despliegue la apariencia y el cuerpo son relevantes. Coincidiendo con otras investigaciones (Adams 2011; Peña, Arias y Sáez 2022), la identificación y la validación de prácticas de consumo asociadas a la apariencia en jóvenes participantes de este estudio, atribuidas tradicionalmente a lo femenino, abre otras posibilidades a masculinidades que pueden cuestionar el modelo hegemónico y que constituyen un ámbito de exploración posible en cuanto a masculinidades heterogéneas. Asimismo, el anclaje de las masculinidades en los cuerpos y el cambio de las estéticas juveniles se perfila como un mecanismo de resocialización entre las generaciones, en un ámbito de influencia de los jóvenes a sus padres, madres y demás familiares que trastocan estereotipos tradicionales, entre ellos la virilidad y la masculinidad.

La presencia y la persistencia de atributos relacionados con masculinidades hegemónicas son innegables y preocupantes, pues precisan de alternativas simbólicas

y materiales para ser alcanzados (Bard Wigdor 2016). Por tanto, son y constituyen posibilidades de acción. La potencia sexual y la sexualidad activa heterosexual asociada a la virilidad está presente en las entrevistas con incidencias en los cuerpos, resultados coincidentes con los hallazgos de Mardones (2023) en el sur de Chile. Otro mandado mencionado es la noción de proveedor económico y de protector y que para algunos entrevistados sigue teniendo una fuerte presencia, a pesar de la redefinición de las masculinidades. Si bien el rol de proveedor económico puede ser compartido con las mujeres, la responsabilidad última de proveer a una futura familia se considera un rol masculino.

Lo anterior condice con otros hallazgos que sostienen el mantenimiento en la familia chilena, con variaciones de la visión que considera al hombre proveedor y a la mujer cuidadora (Olavarría 2017; Valdés 2006 citado en Gómez y Jiménez 2015). De igual manera, el rol de protector emocional, físico y de cuidador de mujeres emerge de forma casi natural, constituyendo una forma sutil de dominación (Gilmore 1994), pero sin ser significada así por los jóvenes. En los relatos de los universitarios persiste la necesidad de cuidar a partir de la internalización de los atributos que se manifiestan casi de forma “inconsciente” en el actuar y que no es cuestionada.

Uno de los aspectos que se han redefinido en las masculinidades de los universitarios se relaciona con el rol de las mujeres en el ámbito laboral, pues los jóvenes reconocen la necesidad de la igualdad de derechos y la asimetría de poder entre los géneros. Este reconocimiento se acompaña de un cuestionamiento de la escasa participación del rol masculino en las labores domésticas y de cuidados, y de un cambio comportamental en sus vidas cotidianas. Sin embargo, los relatos no apuntan a un cambio radical aludiendo a la corresponsabilidad entre los géneros en el ámbito de los cuidados y de los roles domésticos, aspecto fundamental para lograr la equidad. Más bien hacen referencia a la participación y a la ayuda en el ámbito reproductivo. Se suma a ello la persistencia del rol de proveedor económico de los hombres, la asociación entre sexualidad activa heterosexual y el rol protector de las mujeres. El cambio de patrones de socialización de género necesita orientarse a la transformación de estos mandatos y estereotipos que legitiman y naturalizan la heteronormatividad y las relaciones de género asimétricas.

Una de las limitaciones de este estudio se relaciona con la participación exclusiva de hombres en la investigación. Es necesario poner en relieve las relaciones de poder y la posición de los otros y de las otras en el contexto histórico, cultural y económico donde se configura la masculinidad. Para Connell (2003), la masculinidad es sobre todo relacional. La atención en el carácter relacional del género implica, como desafío investigativo y apuesta teórica, poner el foco de estudio en las interacciones entre masculinidades, visibilizando tensiones y mecanismos de dominación identificables en la relación en y entre los géneros.

De igual modo, los relatos de mujeres son necesarios si se considera que las masculinidades se construyen en relación con sus prácticas (Connell 2003; Viveros

2007). Integrar las voces de las mujeres en estudios sobre hombres aportaría a entrever y a cuestionar las relaciones basadas en la asimetría de poder, en especial cuando se trata de masculinidades hegemónicas en los espacios universitarios, pues constituyen campos de poder en ámbitos significativos en materia sociofamiliar y laboral.

Un campo investigativo que se abre a partir de este artículo se relaciona con las masculinidades juveniles no universitarias de jóvenes trabajadores, de desocupados y de jóvenes de instituciones educativas no universitarias. Las configuraciones de masculinidades en tanto construcciones relacionales y contextuales ofrece y demanda espacios de investigaciones heterogéneas con aspectos sociales, culturales y económicos disímiles de quienes las vivencian. Dado lo anterior, los enfoques interseccionales pueden ser una alternativa de estudio, considerando las relaciones sociales construcciones simultáneas en distintos órdenes: de clase, de género, de raza, de sexualidad y de múltiples configuraciones históricas. Con ello, este tipo de estudios buscaría develar la operación y la interdependencia de los mecanismos de dominación y el posicionamiento de la resistencia entre los propios jóvenes.

Si se consideran las implicaciones prácticas, los resultados del presente artículo pueden aportar a los lineamientos de la política de género en las diversas instituciones de educación superior que se han dispuesto a materializar, a partir de la normativa, avances en la igualdad de género mediante el diseño y la ejecución de políticas en este ámbito. Particularmente, estos hallazgos pueden aportar a los planes y a los programas asociados a la implementación de acciones que apunten a la prevención de violencias de género, deconstrucción de estereotipos y actitudes sexistas, y con ello contribuir a potenciar masculinidades positivas y relaciones de género más igualitarias.

194

Apoyos

Esta investigación fue financiada por la Universidad de La Frontera, ubicada en Temuco, Chile. Proyecto DI23-0035.

Referencias

- Adams, Adi. 2011. "Josh wears pink cleats': Inclusive masculinity on the soccer field". *Journal of Homosexuality* 58: 579-596. <https://doi.org/10.1080/00918369.2011.563654>
- Aguayo, Francisco, Pablo Correa y Pablo Cristi. 2011. *Encuesta IMAGES Chile. Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género*. Santiago de Chile: Cultura Salud / EME. <https://bit.ly/3vWaPvv>
- Aravena, Andrea, y Manuel Baeza. 2010. "Jóvenes chilenos y construcción socioimaginaria del ser-otro mujer". *Última Década* 18 (32): 159-171. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362010000100009>

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile

- Bard Wigdor, Gabriela. 2016. "Aferrarse o soltar privilegios de género: sobre masculinidades hegemónicas y disidentes". *Península* 11 (2): 101-122.
<https://doi.org/10.1016/j.pnsla.2016.08.003>
- Branz, Juan Bautista. 2017. "Masculinidades y ciencias sociales: una relación (todavía) distante". *Descentrada. Revista Interdisciplinaria de Feminismos y Género* 1 (1): 1-14.
<https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe006/8001>
- Butler, Judith. 2018. *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Castillo, Nemesio, Esteban Esquivel y Rogelio Rodríguez. 2019. "Jóvenes universitarios y nuevas masculinidades". *Clivajes. Revista de Ciencias Sociales* 6 (12): 108-124.
<https://doi.org/10.25009/clivajes-rcs.v0i12.2583>
- Coffey, Amanda, y Paul Atkinson. 2003. *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Comas d'Argemir, Dolors. 2016. "Hombres cuidadores: barreras de género y modelos emergentes". *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad* 15 (3): 10-22.
<https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol15-Issue3-fulltext-750>
- Connell, Raewyn. 2003. *Masculinidades*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Connell, Raewyn, James Messerschmidt, Matías de Stefano Barbero y Santiago Morcillo. 2021. "Masculinidad hegemónica. Repensando el concepto". *Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociobistórico de las Sexualidades* 6: 32-62. <https://doi.org/10.46661/relies.6364>
- Consejo Nacional de Educación. 2024. "Índices de educación superior pregrado institucional". Acceso en enero de 2024. <https://bit.ly/3UaP995>
- Córdoba, María, y Darío Ibarra. 2020. "¿Varones construyendo espacios de igualdad? Desafíos en contexto de confinamiento (covid-19)". *Revista Punto Género* 13: 50-65.
<https://doi.org/10.5354/0719-0417.2020.58191>
- Costa-López, Borja, María Terol-Cantero, Maite Martín-Aragón, María Navarro-Ríos y Pablo Domínguez-Vaquero. 2021. "Creencias sobre prostitución y violencia sexual en adolescentes". *OBETS. Revista de Ciencias Sociales* 16 (1): 87-100. <https://lc.cx/AVH4fp>
- Cubillas, María, Elba Valdez, Sandra Domínguez, Rosario Román, Alicia Hernández y Joel Zapata. 2016. "Creencias sobre estereotipos de género de jóvenes universitarios del norte de México". *Diversitas: Perspectivas en Psicología* 12 (2): 217-230.
<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/3245>
- Enguix, Begoña. 2013. "Cuerpos desbordados. La construcción corporal de la masculinidad". *Argos* 30 (59): 61-86.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-16372013000200005
- Escobar, Manuel. 2015. "Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo". *Nómadas* 43: 185-199. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n43a11>
- Flecha, Ramón, Lidia Puigvert y Oriol Ríos. 2013. "The New Alternative Masculinities and the Overcoming of Gender Violence". *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences* 2 (1): 88-113. <http://dx.doi.org/10.4471/rimcis.2013.14>
- Flick, Uwe. 2007. *El diseño de investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Fuller, Norma. 2018. *Difícil ser hombre. Nuevas masculinidades latinoamericanas*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Fuller, Norma. 2012. "Repensando el machismo latinoamericano". *Masculinities & Social Change* 1 (2): 114-133. <https://doi.org/10.4471/mcs.2012.08>
- Gallardo, Elena, y María Espinosa. 2021. "Sobre la imposición del sistema de género y la transfobia: historias de niñxs creativxs con el género y jóvenes trans". *OBETS. Revista de Ciencias Sociales* 16 (1): 115-134. <https://lc.cx/TSm4kS>
- Ghigi, Rossella, y Roberta Sassatelli. 2018. *Corpo, genere e società*. Bolonia: Il Mulino.
- Gilmore, David. 1994. *Hacerse hombres. Concepciones culturales de la masculinidad*. Barcelona: Paidós.
- Gómez, Verónica, y Andrés Jiménez. 2015. "Corresponsabilidad familiar y el equilibrio trabajo-familia: medios para mejorar la equidad de género". *Polis* 14 (40): 377-396. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000100018>
- Lamadrid, Silvia, y Alexandra Benitt. 2019. "Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016". *Estudios Feministas* 27 (3): 1-15. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n354709>
- León, Pricila, y Alejandro Choque. 2016. "Masculinidades y relaciones de género en universitarios". *Investigaciones Sociales* 20 (37): 249-258. <https://doi.org/10.15381/is.v20i37.13477>
- Lund, Rebecca, Susan Meriläinen y Janne Tienari. 2019. "New masculinities in universities? Discourses, ambivalence and potential change". *Gender, Work & Organization* 26 (10): 1376-1397. <https://doi.org/10.1111/gwao.12383>
- Madolell, Rocío, Miguel Gallardo e Inmaculada Alemany. 2020. "Los estereotipos de género y las actitudes sexistas de los estudiantes universitarios en un contexto multicultural". *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado* 24 (1): 284-303. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8148>
- Mardones, Karen. 2023. "Enfoque de masculinidades en la educación superior. Propuestas de estudiantes de pregrado". *Revista Austral de Ciencias Sociales* 45: 263-283. <http://dx.doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2023.n45-14>
- Mardones, Karen, y María Vizcarra. 2017. "Creencias de universitarios del sur de Chile sobre mandatos de género masculinos". *Revista de Psicología* 26 (2): 1-15. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26454662001>
- Munsch, Christin, y Kjerstin Gruys. 2018. "What Threatens, defines: Tracing the Symbolic Boundaries of Contemporary Masculinity". *Sex Roles* 79: 375-392. <https://doi.org/10.1007/s11199-017-0878-0>
- Olavarría, José. 2017. *Sobre hombres y masculinidades: "ponerse los pantalones"*. Santiago de Chile: Universidad Humanismo Cristiano.
- Pareja, Claudio, Oscar Mac-Clure y Cristina Pérez. 2021. "Acceso a la educación universitaria y gratuidad: movilidad educacional y movilidad territorial en una región no metropolitana de Chile". *Revista Calidad en la Educación* 55: 41-81. <https://dx.doi.org/10.31619/caledu.n55.1021>
- Peña, Juan, Loreto Arias y Felipe Sáez. 2022. "Masculinidades tradicionales en las universidades chilenas. Manifestaciones y afirmaciones en contextos y espacios académicos". *Géneros* 11 (2): 172-199. <https://doi.org/10.17583/generos.8569>
- Poo, Ana, y María Vizcarra. 2020. "Cambios en los significados de la masculinidad en hombres del sur de Chile". *Interdisciplinaria* 37 (2): 195-209. <http://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.12>

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile

- Prado, Víctor, y Beatriz Ramos. 2020. "Narrativas sobre masculinidad, cuerpo y violencia en un grupo de líderes sociales colombianos". *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales* 36 (92): 939-967. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32718>
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2019. "Una década de cambios hacia la igualdad de género (2009-2018): avances y desafíos". Acceso en diciembre de 2023 <https://bit.ly/3Hw3chV>
- Ranea-Triviño, Beatriz. 2019. "Masculinidad (hegemónica) resquebrajada y reconstrucción subjetiva en los espacios de prostitución". *Oñati Socio-Legal Series* 9 (1): 61-81. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1005>
- Reyes, Catherine, y Beatriz Roque. 2019. "Chile 2018: desafíos al poder de género desde la calle hasta La Moneda". *Revista de Ciencia Política* 39 (2): 191-215. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200191>
- Saldaña, Lucía. 2018. "Relaciones de género y arreglos domésticos: masculinidades cambiantes en Concepción, Chile". *Polis* 50: 183-204. <https://journals.openedition.org/polis/15742?lang=en>
- Santillán, Sofía Luciana. 2022. "¿Hacia una ciudad incluyente? Efectos de los cambios estético-corporales de varones transmasculinos". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 74: 119-138. <https://doi.org/10.17141/iconos.74.2022.5219>
- Stevani, María, y Claudia Montero. 2020. "El octubre chileno: voces y luchas feministas". *Descen-trada* 4 (4): 1-7. <https://doi.org/10.24215/25457284e111>
- Uribe, Pedro. 2020. "Masculinidades alternativas: varones que se narran al margen del modelo hegemónico y generan cambios a través de la educación". *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva* 14 (2): 115-129. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000200115>
- Viveros, Mara. 2007. "Teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades. Dilemas y desafíos recientes". *La Manzana de la Discordia* 2 (2): 25-36. <http://dx.doi.org/10.25100/lmd.v2i2.1399>

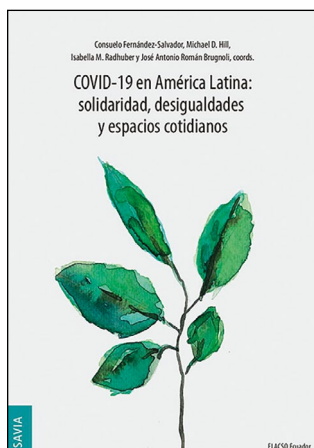
Entrevistas

- Entrevista a Félix, Temuco, septiembre de 2023.
- Entrevista a Francisco, Temuco, septiembre de 2023.
- Entrevista a Jesús, Temuco, octubre de 2023.
- Entrevista a Jonathan, Temuco, octubre de 2023.
- Entrevista a Martín, Temuco, agosto de 2023.
- Entrevista a Mauricio, Temuco, septiembre de 2023.
- Entrevista a Paulo, Temuco, octubre de 2023.
- Grupo focal, Temuco, septiembre de 2023.

Cómo citar este artículo:

Arias-Lagos, Loreto, y Juan Carlos Peña-Axt. 2025. "Masculinidades en transformación. Significados de los relatos de universitarios del sur de Chile". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 179-197. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6151>

Libros de FLACSO Ecuador



Serie Savia

COVID-19 en América Latina: solidaridad, desigualdades y espacios cotidianos

Consuelo Fernández-Salvador, Michael D. Hill,
Isabella M. Radhuber y José Antonio
Román Brugnoli, coordinadores

Editorial FLACSO Ecuador

328 páginas

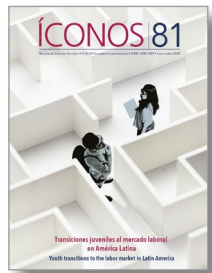
El eje de esta compilación gira alrededor de la solidaridad: cómo la gente la cosechó, practicó o simplemente la desterró durante la pandemia en América Latina. El libro es uno de los resultados de un proyecto de investigación diseñado por un equipo de trabajo internacional y conformado por académicos y académicas de universidades latinoamericanas y europeas. Casos de estudio basados en ocho países latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Cuba, México, Brasil, Argentina, Ecuador y Chile) permiten mostrar si las expresiones solidarias –individuales, grupales y estatales– han sido suficientes o sostenibles frente a los muchos desafíos pandémicos. Se trata de análisis anclados en la vida cotidiana, en los que predominan enfoques multidisciplinares.


Autores y autoras abordan las desigualdades sociales, las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, las múltiples formas de solidaridad social, o su ausencia, y la responsabilidad colectiva durante la pandemia. A su vez, proponen metodologías para construir conocimientos mediante relaciones horizontales entre los equipos de investigación y las personas que participan en los estudios. Este libro es una invitación a la comunidad académica a reflexionar no solo sobre los impactos de la COVID-19, sino también sobre cómo se está investigando solidariamente en nuestra región.

Disponible en www.flacso.edu.ec

Outsider-insider: una experiencia identitaria de los feminismos latinoamericanos

Outsider-insider: An identity experience of Latin American feminisms



 Dra. Sandra Villanueva-Gallardo. Investigadora posdoctoral. Pontificia Universidad Católica de Chile y Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Chile). (svillanuevagallardo@gmail.com) (<https://orcid.org/0000-0001-5594-7216>)

Recibido: 19/04/2024 • Revisado: 27/06/2024
Aceptado: 24/09/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen

En el presente artículo se aborda cuál es el lugar de enunciación de las feministas mestizas que no pertenecen a los movimientos identitarios actuales. Esta interrogante se expresa en la noción de *outsider-insider*, la cual es el reflejo de sujetas que están simultáneamente dentro y fuera de las luchas feministas, controversia que se manifiesta en una discusión pendiente en los feminismos latinoamericanos. Bajo esta interpelación, se ha colocado en perspectivas de diálogo dos voces feministas mexicanas, la escritora Dahlia De La Cerda y la antropóloga Mariana Mora, quienes exponen líneas de pensamiento que conforman modos particulares y complementarios de comprender las relaciones identitarias del sujeto feminista. La metodología de análisis considera la interpretación hermenéutica del discurso en conjunto con las herramientas teóricas de los feminismos interseccionales, y se aplican a dos textos de las autoras mencionadas. Los resultados de esta interpretación discursiva muestran al territorio y al ser mestiza como dos categorías imbricadas en los feminismos periféricos. Además, se demuestra que los afectos y la capacidad de escucha constituyen dos elementos claves que concluyen en un posicionamiento político indispensable para lograr subvertir las valoraciones epistémicas que el feminismo otorga a los privilegios de raza y clase, y para cuestionar las definiciones actuales sobre el mestizaje en América Latina.

Descriptores: feminismos; identidad; Latinoamérica; lugar de enunciación; mestizaje; territorio.

Abstract

This article addresses the place of enunciation of mestizo feminists who do not belong to current identity movements. This question is expressed in the notion of *outsider-insider*, which is the reflection of subjects who are simultaneously inside and outside feminist struggles, a tension that manifests itself in a pending debate in Latin American feminisms. Under this interpellation, two Mexican feminist voices, the writer Dahlia De La Cerda and the anthropologist Mariana Mora, have been placed in dialogue, exposing lines of thought that conform particular and complementary ways of understanding the identity relations of the feminist subject. The methodology of analysis considers the hermeneutic interpretation of discourse, in conjunction with the theoretical tools of intersectional feminisms, and is applied to two texts by the aforementioned authors. The results of this discursive interpretation show territory and mestizanness as two categories imbricated in peripheral feminisms. In addition, it is shown that affects and the capacity to listen constitute two key elements that conclude in an indispensable political positioning to subvert the epistemic valuations that feminism grants to the privileges of race and class and to question the current definitions of mestizaje in Latin America.

Keywords: feminisms; identity; Latin America; place of enunciation; *mestizaje*; territory.



1. Introducción

Patricia Hill Collins establece el término *outsider-insider* para describir la condición de estar y de sentirse atrapada entre diversos grupos desiguales de poder, haciendo referencia a su propia identidad de mujer negra y a la intersección que se produce entre el racismo y las relaciones patriarcales (Hill Collins 1999). Por tanto, ser *outsider-insider* corresponde a un lugar de enunciación, a una forma de sentirse fuera y dentro de las luchas feministas que se proponen dismantelar los sistemas de opresiones y de poder; además, constituye también un lugar de intersticio que se encuentra latente en las experiencias feministas latinoamericanas.

Siguiendo la línea que propongo en el presente artículo en torno a la importancia de entender y develar el locus enunciativo del sujeto, quisiera transparentar el lugar de enunciación desde el cual se van a desarrollar los argumentos. La posición del análisis parte desde una postura feminista, interseccional y transincluyente. Hago esta aclaración porque el feminismo, en su natural diversidad y complejidad, ha derivado en múltiples apellidos: poscolonial, descolonial, marxista, comunitario, entre otras formas activas del conocimiento y de la movilización política que –algunas veces– terminan distanciándose fuertemente entre sí.

Ante ello, es preciso añadir que la perspectiva de interpretación que empleo se basa en el cuestionamiento de los sistemas coloniales y heteropatriarcales, donde se encuentran las categorías de género y sexo, las cuales se entienden –al igual que la raza– en cuanto dispositivos arbitrarios no naturales (Segato 2014) para jerarquizar y beneficiar a unos seres humanos sobre otros. En este sentido, la utilización del feminismo será más bien una herramienta de análisis y no de activismo político. Asimismo, es pertinente aclarar que el feminismo no identitario, el cual menciono en el artículo, se refiere a las personas que no conocen las diversas especificidades que conforman los feminismos o que no se sienten parte de las definiciones teóricas o identitarias que componen a sus diferentes ramas, ya sea lésbico, trans, de color, negro, indígena, radical, institucional, poscolonial, islámico, etc.

La pregunta central que aquí discuto es desde qué lugar enunciativo se pueden ubicar quienes comparten las ideas centrales del feminismo,¹ pero que al mismo tiempo no pertenecen a las ramificaciones teóricas-identitarias de los movimientos actuales. Abordo la interrogante desde un marco interpretativo feminista-interseccional, valiéndome de la hermenéutica para el análisis (Ricoeur 2001) de los textos de las autoras mexicanas Dahlia De La Cerda y Mariana Mora.

1 Una de las ideas centrales del feminismo se puede sintetizar en bell hooks cuando afirmaba que “el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión” (hooks 2017, 21).

2. Marco teórico-metodológico

Con este telón de fondo es indiscutible admitir que las identidades son y han sido un tema complejo de abordar para las ciencias sociales, pues se trata de un tópico nunca acabado y siempre en disputa. A pesar de ello, desde las epistemologías feministas se puede llegar a cierto consenso de que las identidades no son estáticas, sino que están en constante conformación y movimiento (Anzaldúa 2021; Espinosa 2022).

Han pasado décadas desde que los estudios de la subalternidad, la teoría decolonial y los feminismos de color advirtieron acerca de la dificultad de encontrar identidades puras, cien por ciento definidas por las imposiciones neoliberales, pues estas no calzan con las trayectorias identitarias que se han experimentado en América Latina, en el Caribe, en la India y en otros espacios geopolíticos colonizados. Esto debido principalmente a que el colonialismo es una fractura material y simbólica en los sujetos que propicia eventos identitarios complejos, llenos de dolores históricos, de resistencias culturales, de contradicciones emocionales, lo que trae consigo nuevas formas de ser y de estar en el mundo. Por ello, se reconoce que a partir de la cuestión colonial era muy difícil encontrar identidades que congeniaran perfectamente con las nociones de raza, clase, género y sexo, en las que estos componentes estén armonizados en factores de pertenencia identitaria o territorial.

Pues bien, mucho antes de que la academia y las ciencias sociales en su conjunto dieran cuenta de la imposibilidad de encapsular las identidades en cajones aislados, existían voces de mujeres racializadas, entre ellas Sojourner Truth, quien expuso en 1851 la multiplicidad de opresiones que vivía una mujer negra, pobre y esclavizada, contraponiendo su realidad a la de otras mujeres blancas de la época. Del mismo modo, el Combahee River Collective (1977) teorizó en torno a la necesidad de incorporar una mirada conjunta que interconectara los distintos elementos que operan en la matriz de poder colonial (Hill Collins 1998), surgiendo así por primera vez el concepto de simultaneidad de opresiones, expresión que abrió los caminos a la noción de interseccionalidad, término acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989.

Bajo este escenario, es justo afirmar que los feminismos negros y de color han producido estructuras analíticas mucho más complejas y asertivas sobre los sistemas de dominación que las problematizaciones y las teorías provenientes del feminismo blanco. Generalmente a través de los estallidos feministas y del incesante trabajo de muchas autoras y pensadoras entre las que se encuentran Angela Davis, Patricia Hill Collins, bell hooks, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, por nombrar solo algunas. Por consiguiente, son estos feminismos de color –llamados así porque incluyen una variedad de marcas identitarias oprimidas: lo negro, lo latino, lo lésbico, lo chicano– (Moraga y Castillo 1988) quienes cuestionan las argumentaciones del feminismo blanco, el cual, mayoritariamente sesgado por sus privilegios, no incorpora en sus análisis las distintas aristas que tiene el ejercicio del poder y las inherentes resistencias que este conlleva (Espinosa 2009).

Lo anterior se puede ejemplificar en la reflexión de Audre Lorde cuando señala que “quienes somos pobres, quienes somos lesbianas, quienes somos negras, quienes somos viejas, sabemos que la supervivencia no es una asignatura académica” (Lorde 2003, 118), haciendo referencia a la manera en que el feminismo no puede olvidar que la opresión no se vive teóricamente y que por ende hay una necesaria puesta en valor de la acción del cuerpo y de la movilización política de oprimidos y oprimidas. Este hecho no niega el aporte del feminismo blanco, pues la historia de este tiene una línea narrativa en diversas autoras: Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Shulamith Firestone, por señalar las más importantes.

No obstante, la idea de fondo expresada y expandida por medio de los feminismos periféricos (Rodríguez 2011) es que el feminismo blanco ha detentado los espacios de producción discursiva y de conocimiento (Mohanty 1988), donde ciertas voces, generalmente blancas de clase media alta y ciertas problemáticas, –la domesticidad obligatoria o el aborto– han sido consideradas más relevantes que otras, entre las que destacan las opresiones raciales que se experimentan en espacios constituidos por mujeres o las discriminaciones que viven las disidencias sexuales, las cuales indudablemente no han tomado la misma fuerza.

Sara Ahmed (2021) plantea que el conflicto con las máximas feministas blancas es que no consideran que su liberación dependa del trabajo de otras personas, habitualmente mujeres pobres y racializadas. Por su parte, Sonia Álvarez (1998) problematiza el feminismo colocando el acento en el movimiento social, más que en el sujeto político que lo integra, proponiendo pensar el feminismo como un campo heterogéneo constituido por correlaciones de fuerzas en constante disputa. Así, las articulaciones, desarticulaciones, tensiones y controversias que se han vivido a lo largo de la historia del feminismo en América Latina serían la dimensión constitutiva del campo feminista, aquello que lo alimenta y lo sostiene (Cadahia 2020).

Esta forma de entender las tensiones feministas se conecta implícitamente con las diferencias comunes, concepto desarrollado por la teórica Chandra Mohanty (2003). El planteamiento de la autora es que para que estas diferencias comunes emerjan es preciso el análisis de los intersticios, de las conexiones y desconexiones, de las semejanzas y diferencias entre sujetos diversos, de manera que permitan entender y teorizar en un sentido amplio los aspectos transfronterizos donde se sitúan múltiples identidades (Eskalera Karakola 2004).

Este razonamiento recursivo (Morin 1996), es decir, que el feminismo no es una cosa o la otra, sino ambas al mismo tiempo, es el que se pondrá en práctica en la interpretación de los textos de las autoras seleccionadas. Esta lógica, a su vez, está estrechamente vinculada con la categoría mujer en su constitución compleja, formada por experiencias diversas que incluyen una heterogeneidad de exclusiones (Facio 1993), representando diferentes procesos de vida y de desarrollo. De esta manera, parece pertinente ubicar el análisis de los feminismos en condiciones situadas territorialmente (Curiel 2008), ya

que no es lo mismo analizar discursos feministas provenientes de Estados Unidos que de África. Tampoco son semejantes las experiencias y los discursos de mujeres islámicas en relación con mujeres chicanas, con mujeres bolivianas o con mujeres provenientes de la India. Por tanto, es crucial para esta interpretación indagar en las características discursivas que se implementan desde la visión de las autoras Dahlia De La Cerda y Mariana Mora, ambas exponentes del feminismo latinoamericano, pues se supone que en ellas hay una construcción identitaria particular que se relaciona con este territorio geopolítico.

Actualmente, desde los feminismos latinoamericanos surgen una heterogeneidad de pensadoras que analizan en profundidad las diversas aristas que tienen el colonialismo, las relaciones patriarcales, la heteronormatividad y el capitalismo en los cuerpos marcados por la tradición multicultural. Desde ese lugar se interpretarán dos miradas distintas y complementarias acerca del feminismo latinoamericano y del rol que pueden cumplir las mujeres blancas y mestizas que se identifican con este posicionamiento político. Me refiero a Dahlia de La Cerda y a Mariana Mora, ambas feministas mexicanas poseedoras de formas de teorizar y enunciar muy diferentes, pero que se complementan al punto de convertirse en cuestionamientos imprescindibles para todas aquellas personas interesadas en contribuir desde las epistemologías feministas.

El análisis comienza con una interpretación segmentada de los textos seleccionados de ambas teóricas. El primero de ellos, perteneciente a Dahlia De La Cerda, se emplea como examen basal gatillante de los cuestionamientos en torno a los privilegios de raza y clase de las mujeres feministas blancas. Luego, el artículo de Mariana Mora es el mecanismo de respuestas a las interrogantes que deja el texto de Dahlia De La Cerda, sumando nuevas preguntas sobre la subjetividad mestiza que acontece en el feminismo. Finalmente, se identifican entre ambas autoras “diferencias comunes” o búsqueda de puntos de encuentro en las divergencias (Mohanty 2003), con respecto a la pregunta formulada en el presente artículo.

3. Las autoras y sus textos

Dahlia De La Cerda es una escritora feminista mexicana reconocida por su discurso contestatario y crítico hacia los feminismos blancos. Es cofundadora de la colectiva feminista *Morras Help Morras* donde trabaja temas relacionados con la justicia reproductiva, la crítica al sistema penitenciario, los fundamentalismos y la reducción de daños. Por su parte, Mariana Mora, también mexicana, es una antropóloga feminista que ha desarrollado importantes reflexiones críticas a partir del espacio político zapatista en México, planteando una postura crítica en torno al lugar de enunciación de un sector del feminismo antirracista y descolonial.

3.1. Dahlia De La Cerda: el zulo como proyecto de una narrativa transformadora

El texto de Dahlia De La Cerda escogido para el análisis se titula “Feminismo sin cuarto propio” y se trata de un ensayo que aparece en la antología *Tsunami 2* (Jauregui 2020). En él la autora indaga acerca de las características que componen el feminismo marginal, proveniente de los zulos. El zulo es “un agujero, un escondite, un recinto clandestino” (De La Cerda 2020, 64). Este sería el espacio político desde el cual se posiciona para contraponer la idea expuesta por Virginia Woolf (2004) y ampliamente adoptada por el feminismo blanco, de que toda mujer debería ser poseedora de un cuarto propio para convertirse en escritora. En primera instancia, siguiendo a Woolf, el cuarto propio es un lugar físico donde una mujer puede desarrollar la escritura, respondiendo a niveles de independencia material y simbólica. Además, es el reflejo de una alegoría del feminismo para representar la necesaria autonomía económica y emocional que cada mujer debería aspirar a tener.

Dahlia De La Cerda –retomando la crítica de Gloria Anzaldúa (1988)–, quien planteaba que no importaban el lugar ni los recursos, que las mujeres debían escribir donde encontraran la inspiración profundiza en la invisibilización que realiza esta metáfora con mujeres precarizadas que sencillamente no pueden optar a tener un cuarto propio, ya sea porque son madres de varios hijos e hijas, porque el marido no las deja, porque la jornada laboral es demasiado extensa o porque no tienen la opción de elegir. Continuando con esta línea argumental, ninguna de las mujeres, en su mayoría pertenecientes al Sur Global, podría aspirar a convertirse en escritoras ya que no contaban con un espacio propio únicamente destinado a este propósito.

Pues bien, De La Cerda cuestiona esta realidad dicotómica a través de su propia historia de vida. Ella instala varios de los hitos de precarización que la han marcado cuando era niña, adolescente y ahora mujer, no obstante, da a entender que estos acontecimientos no han sido un impedimento para convertirse en la escritora que es, todo lo contrario, son una especie de huella identitaria en su particular cosmovisión. Es preciso señalar que la autora recalca, en más de una oportunidad, que su relato no es anecdótico, sino político, parafraseando la famosa sentencia del feminismo radical “lo personal es político”, lo cual quiere decir que la ausencia de recursos económicos y los procesos que ello conlleva no se narran para generar empatía ni para establecer datos de contexto, sino que se presentan en razón de su profundo significado político y epistemológico.

Una analogía que se emplea para explicar la imbricación entre la vivencia personal y la reflexión crítica acerca de los sistemas de dominación es a través de la preparación de una sopa de fideos. De La Cerda señala que es posible describir y entender la desigualdad que se vive en México por medio de los diferentes ingredientes y por las formas de preparar esta comida. El análisis se sostiene en función de que un

mismo plato de fideos es consumido desigualmente de acuerdo con los recursos que las mujeres tienen en sus hogares, enfatizando que la precariedad obliga a inventar diversas maneras de darle contenido y sabor, situación que la autora experimentó presencialmente en distintas casas de familiares y amigas. Esta narración, que podría ser examinada desde un punto de vista referencial, Dahlia De La Cerda la carga de sentido para generar un marco de traducción que permite ir desvelando las jerarquías que operan en las matrices de opresión y de dominación.

Otro de los recursos desplegados por la autora es la crítica directa a quienes niegan la importancia de los movimientos identitarios dentro del feminismo. Esto se hace mediante la descripción de la tercera ola feminista, época en la que estallan una multiplicidad de cuerpos invisibilizados y oprimidos –lesbianas, *queer*, indígenas, chicanas– reivindicando lo considerado abyecto y la poderosa estrategia de reapropiación del insulto (Preciado 2011). Esto último consiste en quitarle el estigma a lo que ha sido utilizado con el objetivo de humillar, surgiendo así las reivindicaciones del feminismo en tanto actos de valoración hacia todo aquello que el discurso heteropatriarcal ha dicho que es motivo de vergüenza y de denostación, por ejemplo, hablar abiertamente de menstruación, de derechos reproductivos, de aborto, de estrías, de cuerpos no perfectos.

La reflexión acerca de la manera en que se lee y se vive el mundo con base en los privilegios de raza y clase tendrían una marca diferenciadora en el feminismo, la que la autora sintetiza en la siguiente pregunta: “¿quién barre los trozos de cristal de los techos que rompen las mujeres blancas?” (De La Cerda 2020, 84). Esta interrogante se complementa directamente con los análisis que han desarrollado feministas descoloniales afrocaribeñas entre las que se encuentran Ochy Curiel (2007) y Yuderlys Espinosa (2022), quienes han teorizado la crítica al feminismo blanco a partir de la praxis de habitar cuerpos racializados. La principal interpelación que se hace desde estas fronteras es en torno a la relación colonial que ejercen mujeres blancas de clase media y alta hacia mujeres pobres y racializadas.

Un punto controversial expuesto por Dahlia De La Cerda es cuando establece que la pulcritud de pensamiento y la claridad mental en sus teorías corresponderían al resultado de habitar y conocer la calle. Ella dice “me sobra barrio” (2020, 68) para responder a quienes le preguntan la forma en que llega a sus conclusiones. Lo problemático de esta aseveración es que esboza una cierta imposibilidad de teorizar con asertividad si se tiene una posición de privilegio. Así, afirma que si eres una mujer con opciones puedes vivir cierta discriminación sexista y machista, pero no opresión (hooks 2017). En consecuencia, se infiere que las feministas blancas viven en una situación de privilegio, hecho que sería el detonante para producir teoría éticamente sesgada, ya que invisibiliza las realidades de otras mujeres pertenecientes a grupos menos favorecidos.

Este análisis no es nuevo, puesto que sigue la importante tradición expuesta por los feminismos negros, lésbicos y chicanos con autoras que en la década de

los 80 ya exhibían las debilidades teóricas, éticas y cognitivas de los feminismos blancos (Moraga y Castillo 1988). Sin embargo, De La Cerda va más allá al señalar que

Las que emergemos de los zulos, las que sabemos que la desigualdad se puede analogar con una sopa de fideos tenemos la claridad mental que no dan los libros. Tenemos la claridad mental que da rifártela en la vida loca. Jamás será lo mismo aprender de desigualdad social leyendo a Marx mientras comes tres veces al día, que trabajando doce horas para comer dos (De La Cerda 2020, 68).

Lo problemático aquí es que se va hilando una cierta romantización de la pobreza, donde mientras más precaria y desigual sea la vivencia mejor va a resultar tu visión del mundo. De cierta forma, el sufrimiento y la experiencia orgánica de vivir en la fragilidad laboral, económica y social serían indispensables para lograr la agudeza teórica. De hecho, la misma noción del zulo viene a revestir de sentimentalismo la inequidad social, pues pareciera ser deseable provenir de uno.

La interpretación sobre este punto es que, en América Latina, continente en el cual se experimenta una de las economías con mayor inequidad (Lissardy 2020), igualmente hay movimientos colectivos y posiciones individuales de personas que probablemente tienen privilegios raciales, pero que al mismo tiempo son sujetos que comprenden, luchan y resisten dentro de todo este flagelo. Las expresiones artísticas son un espejo de esto. Por ejemplo, el colectivo Lastesis, en ocasiones tildado de ser un grupo de feministas blanco-mestizas con acceso a ciertos privilegios, es capaz de crear una performance mundialmente reproducida a partir de las violaciones ejercidas en tanto dispositivos de dominación hacia los cuerpos feminizados e identificados como mujeres.

Bajo esta perspectiva, el punto de inflexión está en la posibilidad de articular con otras afectividades por medio de la empatía y de la capacidad de escucha. Esto significa ser capaces de aprender de las experiencias de los otros y de las otras y de actuar desde el lugar que cada cual habita. Esta una de las claves que utilizan feministas blancas para producir teoría y textos académicos de gran valor para el conocimiento latinoamericano, entre ellas Diana Maffía, María Luisa Femenías, Alia Trabucco, Karina Bidaseca o Kemy Oyarzún, por señalar algunos nombres de pensadoras feministas que pueden responder a un fenotipo blanco-mestizo, pero que a la par son capaces de gestionar sus privilegios de raza y de clase, identificando sus propias marcas de discriminación y construyendo una narrativa contrahegemónica situada e interseccional.

Dicho con otras palabras, el punto de vista feminista (Harding 1987; Haraway 1995) es una teoría extremadamente certera y lúcida sobre la potencia analítica del sujeto subalternizado, la cual evidencia la importancia de tomar conciencia sobre el

lugar enunciativo, puesto que no todas las mujeres racializadas utilizan su lugar de enunciación dentro del sistema moderno-colonial de género (Lugones 2008) para hacer sus interpretaciones del mundo y tampoco todas las mujeres blancas están sesgadas por sus privilegios.

Se hace esta distinción, ya que Dahlia De La Cerda propone inferir como posición de privilegio una realidad que no es tal, porque ser discriminada y no ser oprimida es una diferencia en el lugar de enunciación (Bairros 1995) que marca sin duda las distancias y las controversias en las luchas antirracistas y descoloniales, pero no creo que se trate de un privilegio sin más. De hecho, la sola ecuación matemática que propone para categorizar a alguien si vive opresión o discriminación es un tanto deshumanizante. Ella señala que “si eres blanca y mujer y de clase media, vives discriminación y sexismo. Si eres negra y empobrecida, vives opresión” (De La Cerda 2020, 93).

El cuestionamiento aquí es con base en uno de los planteamientos del feminismo chicano que señala que la academia y la teoría cumplen su función, pero que el machismo, el racismo y la discriminación no se viven teóricamente. En consecuencia, la teoría y las diferenciaciones conceptuales no son la explicación para todo fenómeno emocional y transgeneracional que se despliega en los cuerpos racializados y discriminados. Frente a este cuestionamiento De La Cerda tendría una respuesta, citando una célebre frase de Celia Amorós, “si conceptualizamos mal, politizamos mal” (Amorós en De La Cerda 2020, 85). Por tanto, habría una intrínseca responsabilidad de la teoría y de la academia para un efectivo ejercicio político y transformador del feminismo. Me parece que el desafío entre estos dos planteamientos estaría en visibilizar, en traducir y en traer a presencia lo que está entre ambas posturas situadas y lo que hace Dahlia De La Cerda con su ensayo es contribuir a este ejercicio, cuestionando las imágenes preconcebidas e interpelando desde el feminismo a la clase, al género y a la raza.

“Feminismo sin cuarto propio” es una declaración de principios, es un posicionamiento político que marca transversalmente la trayectoria narrativa de su autora y su lugar dentro del feminismo latinoamericano. La principal discrepancia que se instala en el texto corresponde a las diferencias entre el feminismo blanco y el de los zulos. Este último es el lugar de enunciación de Dahlia De La Cerda, un escondite revestido de barrio, de conocimientos callejeros, de precariedad y de resistencia. Asimismo, la autora identifica el espacio discursivo de los feminismos blancos criticando cómo estos sectores no reconocen ni cuestionan la manera en que se les beneficia de facto por su blanquitud. En consecuencia, proyecta la necesidad de “reconocer los privilegios, asumirlos, entender cómo nos beneficiamos y cómo nos beneficia el sistema, esto para gestionar ese privilegio de la forma más ética posible” (De La Cerda 2020, 71).

Compartiendo la necesidad de dar respuestas a esta interrogante, la discusión que me interesa profundizar es la siguiente: ¿qué más pueden hacer quienes no pertenecen a los movimientos identitarios dentro del feminismo? Además de reconocer los

privilegios y gestionarlos de la manera más ética posible, de escuchar y aprender de las voces marginalizadas, de los textos fronterizos y de los feminismos periféricos, ¿qué otras opciones tienen?

3.2. Mariana Mora: cuestionamientos para una ética feminista

Una respuesta a esta pregunta se encuentra en la antropóloga feminista mexicana Mariana Mora, especialmente en su artículo “Agendas feministas antirracistas y descoloniales, la búsqueda del locus de enunciación del ser mestiza” (2022). En el texto la autora problematiza la marca del mestizaje en un ejercicio identitario que acontece en el cuerpo y en el territorio. Mora sigue la línea reivindicativa de la condición mestiza propuesta por los feminismos chicanos, sin desconocer, a su vez, la connotación negativa que recibe desde los feminismos indígenas (Guzmán 2021).

La autora plantea que las feministas mestizas y blanco-mestizas, es decir, quienes podrían ser definidas preliminarmente como todas aquellas mujeres que no responden al fenotipo negro ni al de los movimientos identitarios de color, tendrían una labor inconclusa. Esta sería la de encontrar el lugar de enunciación que les correspondería desde los feminismos descoloniales, ya que no es posible que la misión de dichas feministas privilegiadas sea exclusivamente escuchar a las feministas de color sin propiciar una agenda colectiva que contribuya a desbaratar los sistemas de dominación colonial.

Mora hace una mención directa a la noción de privilegio, asumiendo que hay un indiscutible consenso teórico-práctico de que estos acontecen en los cuerpos mestizos que no responden a las características de mujeres afrodescendientes y de pueblos originarios de Abya Yala. En este sentido, existiría una responsabilidad ética-política por cuestionar y propiciar luchas amplias que hagan explícitos los sitios desde los cuales las feministas mestizas y blanco-mestizas hablan, escuchan y teorizan.

El zapatismo es el espacio político desde el cual Mariana Mora ha desarrollado gran parte de su producción académica, por ello recoge una crítica que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al concepto de solidaridad para diseñar un camino hacia la conformación del locus enunciativo del ser mestiza. Ella señala que no es conveniente ni esperable la solidaridad de otros actores políticos implicados para generar cambios profundos en las estructuras de dominación, sino que la invitación es a actuar desde las trincheras propias de cada individuo. Esta reflexión zapatista es refrendada por Mora para cuestionar la labor de las feministas blancas, pues recalca que la mera solidaridad permite enajenarse del compromiso real con las luchas anticoloniales, impidiendo sentir las y hacerlas propias.

La superposición entre los cuerpos y el territorio surge a través del proceso de escucha que la autora realiza a distintos tipos de discursos de mujeres. La escucha es una estrategia metodológica que pone en continua práctica en su trabajo de antropóloga,

acción que reveló la estrecha relación que efectúan las mujeres activas en las luchas anti-coloniales entre feminicidios y despojos territoriales. El compromiso que se adquiere en este punto es mediante el genuino esfuerzo por exponer las interdependencias mutuas entre la violación a la corporalidad de las mujeres y la violación al territorio, lo cual forma parte del continuo proceso colonial.

Una práctica anticolonial que se expone de manera implícita en el texto es hacer efectivo el actuar desde la propia trinchera, ya que Mariana Mora mediante la metodología de la escucha no se solidariza con las mujeres mexicanas, sino que se implica desde el feminismo descolonial, utilizando su plataforma de análisis para describir las complejas relaciones existentes entre la impunidad de la práctica feminicida en contra de los cuerpos de las mujeres y la impunidad de la muerte de los territorios por medio del descontrolado extractivismo capitalista. Este asunto, que podría ser comprendido desde una visión occidental como una metáfora, Mora le otorga la veracidad cosmológica que tiene para las mujeres que han dilucidado esta injusta y dolorosa realidad.

Una parte fundamental del texto son las ideas en torno al mestizaje en tanto expresión identitaria. Aquí se realiza una revisión teórica sobre las interacciones que ha tenido la identidad mestiza (Anzaldúa 1987), destacando las diversas maneras en que se ha ido expresando en los cuerpos y en las trayectorias de sus integrantes, delineando preguntas hacia el rol de esta categoría en actos de borramiento, en el reemplazo y en la apropiación cultural de los pueblos originarios (Rivera Cusicanqui 2015). La autora deja en evidencia que la carencia de una definición política y enunciativa del ser mestiza tiene consecuencias en las relaciones coloniales, mencionando algunas de las características del mestizaje, entre ellas la pigmentocracia, el racismo y el clasismo que prevalecerían en estos espacios identitarios (Fregoso 2021).

Además, subraya los relevantes aportes de los estudios latinoamericanos que han indagado en estas realidades desde las propias experiencias territoriales: la vivencia latina en Estados Unidos y en Europa. La idea principal que señala la autora en torno al mestizaje es su comprensión como un dispositivo en continuo proceso de construcción, el cual no está únicamente anclado al pasado, sino que tiene importantes ribetes direccionales en el presente y en las proyecciones de futuro (Catelli 2020). Por esta razón, Mora propone inspeccionar esta categoría para desprenderla de las estructuras coloniales, alejándola del blanqueamiento y de otras expresiones racistas, pues afirma que el mestizaje siempre mantendría de referente a lo blanco.

Mariana Mora perfila un camino de trabajo colectivo para una articulación feminista descolonial que aglutine a quienes no han encontrado su locus de enunciación o su lugar particular de posicionarse en el mundo. Lo interesante de ello es que la autora hace su invitación en primera persona, ubicándose dentro de la categoría social de mestiza-blanca para realizar las interrogaciones. Esta estrategia discursiva es parte del valor de la ética de la investigación que Mora ha puesto en práctica durante toda su

carrera, donde el otro o la otra nunca es realmente una alteridad ajena, sino un sujeto integrado y validado en todos sus marcos de referencia.

Además, en el texto se critica a las mujeres mestizas por su actuar poco comprometido con las resistencias indígenas y afrodescendientes, no obstante, en este punto la categoría mestiza acentúa su ambigüedad, ya que parece ser el reflejo de una condición decodificada desde afuera y no de una identidad autorreconocida por las aludidas. En esta reflexión Mora asume las contradicciones del ser mestiza, argumentando que esto se debe justamente a la falta de apropiación colectiva de esta identidad. Ello guarda relación con que el mestizaje no ha sido parte de una reivindicación preponderante dentro de las luchas sociales y feministas debido a las dificultades que se ha tenido para reconocer el racismo que habita en los sujetos políticos que son parte de la búsqueda de la emancipación.

Estos lineamientos se conectan con las discusiones desarrolladas por Silvia Rivera Cusicanqui (2010) en torno a lo abigarrado de las culturas americanas, y a las complejidades que tienen las identidades latinas para reconocer los rasgos indígenas a causa del blanqueamiento que predomina y al peso colonial que cargan. Así también, se puede afirmar que las mujeres mestizas son una identidad en construcción y en contradicción, y aunque ha habido reflexiones críticas al respecto, aún es un nombre borroso que extrañamente –asevera Mora– no se ha posicionado con un discurso propio y con un despliegue claro acerca de las responsabilidades que les competen como sujetas afectadas dentro de las matrices de dominación.

4. Diferencias comunes

Los privilegios de raza y de clase, retomados críticamente por Dahlia De La Cerda y el cuestionamiento al ser mestiza de Mariana Mora, indudablemente marcan diferencias en distintos ámbitos dentro del feminismo, por ejemplo, en las inequidades en la producción discursiva y en la valoración epistémica de estos discursos. A pesar de ello, una tesis que mantengo en este artículo es que estos privilegios no son siempre un obstáculo para comprender y vivir en carne propia la desigualdad porque la modernidad y el sistema colonial-patriarcal tampoco ha funcionado para todas las mujeres con privilegios de raza y de clase.

Esto se debe a que la pertenencia a una norma blanco-mestiza de clase media o acomodada no salva del abuso y de la discriminación que se vive en gran parte de las sociedades modernas. Sin embargo, es imposible desatender que la blanquitud (Cardoso 2010) ha sido una piedra de toque para una comprensión no monolítica de algunos feminismos blanco-mestizos, pues ha hegemonizado la palabra y ha decidido las pautas de qué luchas políticas deberían ser universales, con lo cual ha borrado voces y discursos que son parte de la construcción colectiva del conocimiento (Espinosa 2007).

Desde el surgimiento de la teoría interseccional, Kimberlé Crenshaw (1989) ha señalado la importancia de crear marcos teóricos interrelacionados para comprender que la raza, la clase, el género, el sexo, la edad o la religión no actúan de forma separada en los sistemas de dominación. A su vez, la misma autora propicia la idea de que no se trata de crear una olimpiada de opresiones para descubrir quién es la más oprimida de todas, ya que este fue uno de los riesgos que quedó en evidencia con la adopción del enfoque interseccional en el mundo. A pesar de estas advertencias, igualmente desde sectores feministas se problematizan jerarquías para determinar cuán oprimida o privilegiada eres.

Un argumento relevante sobre este punto es que no se puede obviar la existencia de diversas formas de violencia en espacios de interacción entre mujeres (Bidaseca 2011), por ejemplo, las discriminaciones raciales, el eurocentrismo o el paternalismo (Tennina 2020), por lo que el hastío de parte de los feminismos periféricos con sujetas privilegiadas es absolutamente comprensible. Así y todo, esta interpretación apunta a que no podemos deshumanizar el debate. Estar en una permanente diferenciación de clase y raza, si bien ayuda a dismantelar una cruda realidad que acontece dentro del sistema capitalista, no resulta una estrategia del todo útil para comprenderse desde las afectividades que acontecen en los cuerpos, más allá del color de la piel y del dinero que haya en los bolsillos.

Gabriela Jauregui, escritora feminista mexicana, reflexiona sobre la importancia de la acción feminista situada en cada territorio para responder a la pregunta de qué más pueden hacer las mujeres mestizas para impulsar procesos de transformación social.

Para mí tiene que ver con mi práctica personal de ese territorio, del feminismo con sus particularidades y de que creo que las grandes maestras de eso han sido las mujeres zapatistas que siempre han dicho: háganlo en sus formas, en sus tiempos, en sus lugares. Nosotras aquí lo hacemos así, ustedes, donde sea que vayan, háganlo en sus formas y en sus tiempos (entrevista a Gabriela Jauregui, 21 de octubre de 2022).

El sentido de este planteamiento es que no existen recetas universales para contrarrestar el racismo e identificar lugares comunes entre los feminismos. La única posibilidad es dejándose afectar por otros y por otras, escuchándose mutuamente y posibilitando un diálogo situado territorialmente. Itziar Gandarias Goikoetxea reconoce también esta controversia y propone una posible respuesta al señalar que “el desafío es generar una política interseccional de luchas amplias, pero lo suficientemente situada para reconocer las diversas formas de ser mujer” (Gandarias Goikoetxea 2017, 83). Por tanto, no se trata de reiterar los errores pasados invisibilizando la importancia que tienen las diferencias entre las mujeres, sino de descolonizar la valoración jerárquica que hacen los sistemas de opresión sobre cada individuo y proponer una nueva lectura feminista, antirracista, descolonial y comunitaria.

En estos sentidos, Dahlia De La Cerda y Mariana Mora apelan a la construcción de un espacio feminista, antirracista e identitario. De La Cerda lo hace desde los zulos y Mora desde el locus de enunciación de ser mestiza. A su vez, ambas autoras despliegan una estrategia de honestidad discursiva, exponiendo claramente desde qué lugar están teorizando y dando a conocer el posicionamiento político del cual forman parte.

Mora se considera una feminista mestiza descolonial y De La Cerda una proveniente desde los zulos. Las dos posiciones ostentan un potencial ontológico porque revisten una cosmovisión, una manera particular de ubicarse y de exponer sus discursos. Sin embargo, ambas también tienen interrogantes profundas por resolver. Si bien la narrativa de los zulos activa un pensamiento transformador de la política que habita en la precariedad (Ziga 2009), corre el riesgo de producir un lugar de resistencia que no sea capaz de mirar más allá de su propia creación.

Conectar los zulos principalmente con espacios que se viven desde la pobreza material o simbólica es un riesgo, ya que se naturaliza la resistencia al punto de pensarla como un ejercicio unilateral, sin posibilidad de diálogo con los otros y las otras, eternizando las luchas y pasando por alto los momentos de cambio estructural. De este modo, los zulos podrían convertirse en lugares precarios que no aspiran a dejar de serlo, ya sea porque no se cree que una verdadera transformación social sea posible o porque hay una intrínseca comodidad identitaria quedándose allí.

Por su parte, Mariana Mora desarrolla un reconocimiento político en torno al ser mestiza; materializa una apuesta teórico-programática acerca de los desafíos de un sector del feminismo descolonial-blanco-mestizo. El punto abierto queda en la falta de apropiación colectiva sobre una identidad que resulta distante y ajena. Por tanto, el texto de Mora se convierte en una invitación a reescribir la agenda feminista que emerge a partir de esta problemática.

Finalmente, los planteamientos de Dahlia De La Cerda tienen espacios de proyección pues colocan el foco en el territorio, creando un lugar auténtico y crítico de los aspectos de clase y de raza que requieren ser desmantelados. En este sentido, se podría decir que los zulos son la reconfiguración identitaria dignificada por Dahlia De La Cerda.

5. Conclusiones

En este camino de construcción de intersubjetividades, la problematización del ser mestiza expuesto por Mariana Mora y la territorialización del feminismo de Dahlia De La Cerda son posiciones que se reconocen en periferias que todavía están en estado de latencia, a la espera de la confluencia de sentidos comunes para ser transmutadas. Por ello, la respuesta a la pregunta de este artículo sobre cuál es el lugar de enunciación de las feministas que no pertenecen a los movimientos identitarios actuales corresponde a un proyecto abierto aún no materializado empíricamente.

Sin embargo, con este análisis se proponen tres sugerencias teórico-prácticas. La primera consiste en la aplicación de la escucha activa entre sujetos diversos ubicados en diferentes categorías dentro de los sistemas de dominación y de poder. La segunda es la necesaria subversión en la lectura de los privilegios de raza y de clase que se ostentan en distintos niveles de las relaciones feministas. Con la tercera se identifica una búsqueda identitaria amplia que trasciende a la epistemología y a la organización político-feminista, conectándose con el debate mestizo latinoamericano. Este último punto revela la importancia de atender las trayectorias territoriales e historiográficas que han permeado el concepto y la idea del ser mestiza en los distintos países de América Latina para comprender los silencios y las afirmaciones que se han ido generando. Para ello, se sigue lo planteado por Sonia Montecino en su libro *Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno*, en el cual recorre y analiza los esquemas culturales que han rodeado a esta noción.

Desde aquí es posible mapear algunos conceptos claves que la cultura chilena ha asociado históricamente al mestizaje: lo bastardo, lo monstruoso, lo huacho, lo pobre, lo roto, entre otros adjetivos empleados para robustecer la idea de lo abyecto (Montecino 1991). Por consiguiente, asumirse mestiza o blanca-mestiza requiere de una descolonización de índole territorial, pues no es lo mismo ser feminista mestiza en México, lugar que interrelaciona lo mestizo con el legado proveniente desde la cultura chicana, que asumirse feminista mestiza en Chile, donde los componentes de clase y de raza no han sido subvertidos por lecturas que permitan reapropiarse del insulto. Por ende, es parte del desafío buscar, nombrar y redefinir colectivamente todo aquello ubicado entre el afuera y el adentro de los feminismos latinoamericanos con el fin de posibilitar espacios de encuentro para quienes han quedado invisibles y deslegitimadas o deslegitimados de los marcos identitarios actuales.

Apoyos

Este artículo es parte de los resultados de la investigación “Territorios discursivos de la academia feminista latinoamericana de comienzos del siglo XXI”, perteneciente al programa Fondecyt Postdoctorado Nro. 3220006, el cual fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.

Referencias

- Ahmed, Sara. 2021. *Vivir una vida feminista*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Álvarez, Sonia. 1998. "Feminismos latinoamericanos". *Estudios Feministas* 6 (2): 265-284.
<http://www.jstor.org/stable/43904051>
- Anzaldúa, Gloria. 2021. *Luz en lo oscuro. Re-escribir identidad, espiritualidad, realidad*. Buenos Aires: Heknt.
- Anzaldúa, Gloria. 1988. "Hablar en lenguas. Una carta a escritoras tercermundistas". En *Esta puente, mi espalda: voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, editado por Cherrie Moraga y Ana Castillo, 219-228. San Francisco: Ism Press.
- Anzaldúa, Gloria. 1987. *Borderlands La Frontera: The New Mestiza*. San Francisco: Spinster / Aunt Lute.
- Bairros, Luiza. 1995. "Nossos feminismos revisitados". *Estudios Feministas* 3 (2): 458-463.
<https://lc.cx/cSQ2cU>
- Bidaseca, Karina. 2011. "Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café: desigualdad, colonialismo jurídico y feminismo postcolonial". *Andamios* 8 (17): 61-89.
<https://doi.org/10.29092/uacm.v8i17.445>
- Cadahia, Luciana. 2020. "Feminismos, deseo y emancipación en Latinoamérica". Video de YouTube, 20 de julio. <https://lc.cx/N10Q-P>
- Cardoso, Lourenço. 2010. "Branquitude acrítica e crítica: a supremacia racial e o branco antirracista". *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 8 (1): 607-630.
<https://lc.cx/tBvKhF>
- Catelli, Laura. 2020. *Arqueología del mestizaje. Colonialismo y racialización*. Temuco: UFRO / CLACSO.
- Combahee River Collective. 1977. *A Black feminist statement*. Nueva York: Routledge.
- Crenshaw, Kimberlé. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics". *University of Chicago Legal Forum* 8: 139-167.
<http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- Curiel, Ochy. 2008. "Superando la interseccionalidad de categorías por la construcción de un proyecto política feminista radical. Reflexiones en torno a las estrategias políticas de las mujeres afrodescendientes". En *Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*, editado por Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros, 461-484. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75233>
- Curiel, Ochy. 2007. "Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista". *Nómadas* 26: 92-101. <https://lc.cx/2ugmd0>
- De La Cerda, Dahlia. 2020. "Feminismo sin cuarto propio". En *Tsunami 2*, editado por Gabriela Jauregui, 59-98. Ciudad de México: Sexto Piso.
- Eskalera Karakola. 2004. "Diferentes diferencias y ciudadanías excluyentes: una revisión feminista". En *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*, editado por bell hooks, Avtar Brah, Chela Sandoval y Gloria Anzaldúa, 9-32. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Espinosa, Yuderlys. 2022. *De por qué es necesario un feminismo descolonial*. Barcelona: Icaria.

- Espinosa, Yuderkys. 2009. "Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional". *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* 14 (33): 37-54. <https://lc.cx/txir3u>
- Espinosa, Yuderkys. 2007. *Escritos de una lesbiana oscura: reflexiones críticas sobre feminismos y políticas de identidad en América Latina*. Buenos Aires: En la Frontera.
- Facio, Alda. 1993. "El derecho como producto del patriarcado". En *Sobre patriarcas, jerarcas, patronos y otros varones*, editado por Rosalía Camacho y Alda Facio, 7-29. San José: Programa Mujer, Justicia y Género.
- Fregoso, Gisela Carlos. 2021. *Racismo antindígena y "privilegio" en una universidad convencional*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Gandarias Goikoetxea, Itziar. 2017. "¿Un neologismo a la moda?: repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista". *Revista de Investigaciones Feministas* 8 (1): 73-93. <https://doi.org/10.5209/INFE.54498>
- Guzmán, Adriana. 2021. "Feminismos, memoria, resistencia". Conferencia presentada en el Seminario sobre Feminismos. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 12 de mayo.
- Haraway, Donna. 1995. *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Madrid: Cátedra Feminismos.
- Harding, Sandra. 1987. "¿Is there a Feminist Method?". En *Feminism and Methodology*, editado por Sandra Harding, 1-14. Indianápolis: Indiana University Press.
- Hill Collins, Patricia. 1999. "Reflections on the outsider within". *Journal of Career Development* 26 (1): 85-88. <https://doi.org/10.1177/089484539902600107>
- Hill Collins, Patricia. 1998. "La política del pensamiento feminista negro". En *¿Qué son los estudios de mujeres?*, compilado por Marysa Navarro y Catharine Stimpson, 253-312. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- hooks, bell. 2017. *El feminismo es para todo el mundo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Jauregui, Gabriela. 2020. *Tsunami 2*. Ciudad de México: Sexto Piso.
- Lissardy, Gerardo. 2020. "Por qué América Latina es 'la región más desigual del planeta'". *BBC News*, 6 de febrero. <https://lc.cx/mo7Fh4>
- Lorde, Audre. 2003. *La hermana, la extranjera*. Madrid: Horas y Horas.
- Lugones, María. 2008. "Colonialidad y género". *Tabula Rasa* 9: 73-101. <https://doi.org/10.25058/20112742.340>
- Mohanty, Chandra. 2003. "'Under western eyes' Revisited: Feminist solidarity through anticapitalist struggles". *Journal of Women in Culture and Society* 28 (2): 499-535. <https://doi.org/10.1086/342914>
- Mohanty, Chandra. 1988. "Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses". *Feminist Review* 30 (1): 61-88. <https://doi.org/10.1057/fr.1988.42>
- Montecino, Sonia. 1991. *Madres y huachos. Alegoría del mestizaje chileno*. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
- Mora, Mariana. 2022. "Agendas feministas antirracistas y descoloniales, la búsqueda del locus de enunciación del ser mestiza". *Estudios Sociológicos de El Colegio de México* 40: 179-210. <https://doi.org/10.24201/es.2022v40.2082>
- Moraga, Cherrie, y Ana Castillo. 1988. *Esta puente, mi espalda: voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press.
- Morin, Edgar. 1996. *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.

Sandra Villanueva-Gallardo

- Preciado, Beatriz. 2011. *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama.
- Ricoeur, Paul. 2001. *Ideología y utopía*. Barcelona: Gedisa.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2015. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. *Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rodríguez, Pilar. 2011. "Feminismos periféricos". *Revista Sociedad y Equidad* 2: 23-45.
<https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/14426>
- Segato, Rita. 2014. "El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad". *Estudios Feministas* 22 (2): 593-616. <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000200012>
- Tennina, Lucía. 2020. "Tatiana Nascimento: 'pensar dissidências sexuais e de gênero como parte intrínseca da cultura da diáspora negra no Brasil, pra mim, tem a ver com esse exercício de pensar felicidade coletiva e exercício de liberdade'". *Amazonas*, 11 de marzo.
<https://lc.cx/Dx4oX4>
- Woolf, Virginia. 2004. *A room of one's own*. Londres: Penguin Books.
- Ziga, Itziar. 2009. *Un zulo propio*. Barcelona: Editorial Melusina.

Entrevistas

216

Entrevista a escritora feminista mexicana Gabriela Jauregui, 21 de octubre de 2022.

Cómo citar este artículo:

Villanueva-Gallardo, Sandra. 2025. "Outsider-insider: una experiencia identitaria de los feminismos latinoamericanos". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 81: 199-216.
<https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6189>

Íconos agradece a los siguientes académicos y académicas por colaborar con la evaluación de los artículos recibidos en la revista:

1. Agustina Corica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina.
2. Alba Varón. Universidad Católica de Colombia. Colombia.
3. Ana Vázquez. Universidad Santiago de Compostela. España.
4. Anabel Rieiro. Universidad de la República. Uruguay.
5. Andrea Bautista. Universidad La Salle. México.
6. Andrea Cuenca. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Colombia.
7. Andrea Díaz Mattei. Universidad de Sevilla. España.
8. Bairon Otálvaro. Universidad del Valle. Colombia.
9. Carina Elizabeth Gómez. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina.
10. Cynthia Ferrari. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina.
11. Darío Ibarra. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Argentina.
12. Darío Rossignolo. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
13. David Rocha. Universidad Autónoma de Baja California. México.
14. David Sánchez. Universidad de Guadalajara. México.
15. Denise Maduro. Universidad Federal de Minas Gerais. Brasil.
16. Eduardo Langer. Universidad Nacional de San Martín. Argentina.
17. Elsa Santamaría. Universitat Oberta de Catalunya. España.
18. Eva Zafra Aparici. Universitat Rovira i Virgili. España.
19. Gabriel Errandonea. Universidad de la República. Uruguay.
20. Héctor Cavieres. Universidad Católica Silva Henríquez. Chile.
21. Jeanny Posso Quiceno. Universidad del Valle. Colombia.
22. Jessica Nathalie Corpas. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.
23. John Macías. Universidad EAFIT. Colombia.
24. Juliane Borchers. Universidad Estatal de Maringá. Brasil.
25. Julio Becerra. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México.
26. Klaudio Duarte. Universidad de Chile. Chile.
27. Luis Mata. Universidad Iberoamericana. México.
28. Magalí Marega. El Colegio de México. México.
29. Margarita Estrada. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.
30. María Eugenia Vicente. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina.
31. María Gabriela Córdoba. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.
32. María Verónica Murguía. Universidad Autónoma del Estado de México. México.
33. María Victoria Martínez. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.
34. Mariana Busso. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
35. Mercedes Krause. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
36. Miguel Alfredo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina.
37. Milena Arancibia. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina.
38. Mónica Peregrino. Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Brasil.
39. Pablo Guerra. Universidad de la República. Uruguay.
40. Raquel Drovetta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina.
41. Salvador Aquino. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.
42. Sergio Uribe. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.
43. Tabaré Fernández. Universidad de la República. Uruguay.
44. Verónica Hendel. Universidad Nacional de Luján. Argentina.
45. Yanina Maturo. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
46. Yuliana Román. Universidad Autónoma del Estado de México. México.

Política editorial

Íconos. Revista de Ciencias Sociales recibe artículos durante todo el año siempre que estos se ajusten a la política editorial y a las normas de presentación de originales. Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados sean preferentemente resultados o avances de investigación en cualquier área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos sobre temas históricos o contemporáneos que se apoyen sólidamente en bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de interés para el campo de las ciencias sociales.

Secciones

Dossier. Esta sección compila un conjunto de artículos arbitrados que giran en torno a un tema central, el que es tratado con profundidad y desde distintos enfoques. Las convocatorias a presentación de artículos para esta sección tienen fechas de cierre, por lo que se sugiere consultar las distintas convocatorias.

Temas. Esta sección incluye artículos arbitrados dedicados a diversos temas de investigación. Recoge análisis con temática libre, artículos sobre temas de confrontación teórica, así como textos de análisis de coyuntura nacional e internacional enfocados desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Los artículos para esta sección se reciben a lo largo de todo el año.

Selección de artículos

Los artículos enviados a la revista serán sometidos a un proceso de revisión que se realizará en varias etapas:

- 1) Los artículos que cumplan con los requerimientos formales especificados en las normas editoriales de la revista serán dados por recibidos.
- 2) Los artículos recibidos serán sometidos a una evaluación inicial que valorará la pertinencia temática, originalidad y calidad del texto. Esta evaluación previa estará a cargo de los editores del *dossier* en el caso de los artículos enviados a dicha sección, o de un miembro del consejo editorial en el caso de la sección temas.
- 3) Si el artículo ha sido valorado positivamente, entrará en un proceso de arbitraje bajo el sistema de revisión por pares. Este proceso consiste en someter cada artículo al criterio de por lo menos dos revisores académicos y anónimos.

Para cada artículo se seleccionará lectores con título doctoral cuyas publicaciones demuestren un amplio conocimiento de los temas abordados por el texto enviado a revisión. En ocasiones, se seleccionará también a investigadores que, sin título doctoral, posean una trayectoria de investigación reconocida sobre el tema.

Los revisores tendrán en cuenta, para su recomendación, la calidad del trabajo en relación con su originalidad, aporte al tema investigado, solvencia teórica, aparato crítico o argumentativo, metodología y manejo de la información, resultados, conclusiones, bibliografía y claridad de expresión.

Con base en lo señalado, los revisores determinarán si el artículo es: a) publicable sin modificaciones; b) un fuerte candidato para publicación si se realizan ciertas revisiones al manuscrito; c) publicable solo si se realizan revisiones de fondo; d) no publicable.

- 4) En caso de discrepancias con los resultados, el artículo será enviado a un tercer revisor cuyo criterio definirá la publicación del artículo.

- 5) Los resultados del proceso de arbitraje serán inapelables en todos los casos.
- 6) El proceso de selección de artículos llevará entre tres y cuatro meses.

Directrices para autoras y autores

Las personas interesadas en publicar artículos en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* deben leer y cumplir los requisitos para el envío de artículos enunciados en las **políticas editoriales** en esta plataforma; deben estar de acuerdo con los procedimientos para la selección de artículos adoptados por la revista y sus textos deben ajustarse a los siguientes lineamientos.

El consejo editorial de *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* se reserva el derecho último a decidir sobre la publicación de los artículos, así como el número y la sección en la que aparecerán. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones.

Envío de artículos

El envío de artículos debe realizarse dentro de las fechas establecidas por la revista en el caso de convocatorias abiertas para la sección Dossier. Las contribuciones para las secciones restantes pueden ser enviadas durante todo el año.

Los envíos deben realizarse en línea, a través de la plataforma de la revista *Íconos*, para lo que se requiere seguir los pasos indicados y cargar los metadatos o la información solicitada.

Lineamientos para la recepción de artículos

Recepción: los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados “recibidos” y serán notificados de su recepción al autor o autora. Los que no, serán devueltos.

Idiomas: *Íconos* se publica en idioma español, no obstante se reciben artículos en español, inglés y portugués. En caso de que un artículo en idioma inglés o portugués sea aceptado para publicación, la traducción al español corre por parte del autor/a.

Formato del documento: deben estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado de 1,5, paginados, en tamaño de papel A4 y con márgenes de 2,5 cm. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 11 y a espacio sencillo.

Extensión de los artículos: varía de acuerdo con las secciones de la revista y se mide con el contador de palabras de Word. La extensión debe considerar tanto el cuerpo del artículo como sus notas a pie de página y bibliografía, de modo que el número total de palabras sea el siguiente:

Secciones	Extensión máxima
Dossier	6000 a 7500 palabras
Temas	6000 a 7500 palabras

Resumen y descriptores: los artículos destinados a las secciones Dossier y Temas deben estar precedidos de un resumen de hasta 220 palabras y deben proporcionar seis descriptores que reflejen el contenido del artículo. Para los descriptores, se recomienda revisar los términos establecidos en los listados bibliográficos (Thesaurus) y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y descriptores.

Reglas generales de edición

Siglas: la primera vez que aparezcan siglas debe escribirse su significado completo, luego las siglas. Por ejemplo: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Citas: las citas textuales que sobrepasen los cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga: a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y margen reducido a ambos lados.

Imágenes, cuadros, gráficos, tablas

- a) Cada uno debe contar con un título y un número de secuencia.
- b) Las imágenes deben incorporarse en el texto en el lugar que correspondan. Además, deben enviarse de forma separada en un tamaño de 15 cm de ancho, a 300 dpi de resolución.
- c) Los gráficos, cuadros o tablas deben incluirse en el texto y además enviarse en formato Excel.
- d) Cada imagen, tabla, cuadro o gráfico debe contener fuentes de referencia completa y es responsabilidad del autor o la autora gestionar los permisos correspondientes para la publicación de las imágenes que lo requieran y hacer llegar dichos permisos a la revista.

Referencias bibliográficas

- a) Las citas en el texto deben ir entre paréntesis indicando el apellido del autor o autora únicamente con mayúscula inicial, año de publicación y número de página. Ejemplo: (Habermas 1990, 15). En ningún caso utilizar *op. cit.*, *ibid.*, *ibidem*.
- b) En el caso de varias obras del mismo autor o autora publicadas el mismo año, identificarlas como a, b, c, etc. Ejemplo: (Romero 1999a), (Romero 1999b).

Romero, Marco. 1999a. "Crisis profunda e inoperancia gubernamental". *Ecuador Debate* 46: 56-78.

Romero, Marco. 1999b. "Se profundiza la recesión y la incertidumbre en Ecuador". *Ecuador Debate* 47: 45-63.

- c) La bibliografía de un autor o autora se enlistará en orden descendente según el año de publicación, es decir, del texto más reciente al más antiguo. Ejemplo:

Pzeworski, Adam. 2003. *States and Markets: A Primer in Political Economy*. Nueva York: Cambridge University Press.

Pzeworski, Adam. 2000. *Democracy and Development: Political Regimes and Material Well-Being in the World, 1950-1990*. Nueva York: Cambridge University Press.

Pzeworski, Adam. 1993. *Economic Reforms in New Democracies: A Social-Democratic Approach*. Nueva York: Cambridge University Press.

- d) La bibliografía consta al final de cada artículo y debe contener todas las referencias citadas en el texto, las cuales se enlistan siguiendo un orden alfabético por apellido de los autores. El nombre de la autora o autor y no solo el apellido debe ser escrito de manera completa, no simplemente con la inicial del nombre. La bibliografía debe realizarse de acuerdo con el *Manual de Estilo Chicago-Deusto*. Para ejemplos de las formas de documentación más comunes, se sugiere visitar nuestra página web www.revistaiconos.ec.



Revista Ecuador Debate:

www.caapecuador.org/revista-ecuador-debate

Información, suscripciones y ventas:

revistaed@caapecuador.org | (593-2) 2522-763

Publicaciones anteriores

Tendencias en la
sociedad rural ecuatoriana

Abril 2024

121

Desafíos
contemporáneos globales

Diciembre 2023

120

COYUNTURA

Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural
¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda?

Fernando Bustamante

La derecha al poder en la Argentina (1983-2023):
los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA)

Santiago C. Leiras

Conflictividad socio-política: Marzo – Junio 2024

David Anchaluisa

TEMA CENTRAL

Presentación del Tema Central: Élite y derechas en América Latina

Miguel Ruiz Acosta

La derecha peruana y su deriva neogolpista

Anahí Durand Guevara

Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador

Franklin Ramírez Gallegos

Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010

Alexander Gamba Trimiño

La derecha en México: entre el Yunque y Vox

Hugo Sánchez Gudiño

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes
argentinas

Andrés Tzeiman

La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina

Ariel Goldstein

DEBATE AGRARIO

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos

Luis Alberto Tuaza Castro y Rudi Colloredo-Mansfeld

ANÁLISIS

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales.
El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo

Xavier León-Vega, María Fernanda Solíz, Claudia Rodríguez y Alía Yépez

RESEÑAS

La (des)regulación de la riqueza en América Latina.

Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia

Daniilo Rosero

Pensamiento agrario: derribando mitos.

Una antología de la obra de Fausto Jordán

Pablo Ospina Peralta

Revista 90

de Estudios Sociales

Bogotá - Colombia

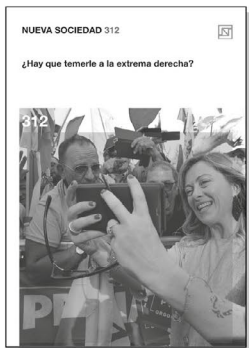
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

octubre-diciembre 2024

<https://res.uniandes.edu.co>

ISSN 0123-885X e-ISSN 1900-5180

La ira: una aproximación multidisciplinar



¿Hay que temerle a la extrema derecha?

312
JULIO-AGOSTO 2024

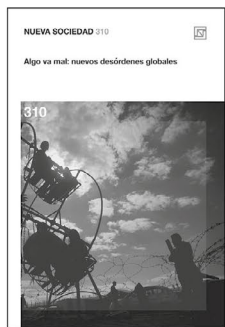
COYUNTURA: **Fernando Molina**. Bolivia: un golpe en medio de la tormenta.

TRIBUNA GLOBAL: **Mats Engström**. La socialdemocracia sueca en busca de una nueva épica.

TEMA CENTRAL: **Joseph Confavreux / Ellen Salvi**. Extremas derechas: 50 tonos de pardo y un deseo de transgresión. **Giuliano da Empoli**. Waldo a la conquista del planeta. Rabia, política y algoritmos. **Cristóbal Rovira Kaltwasser**. La ultraderecha en América Latina.

Particularidades locales y conexiones globales. **Eva Illouz**. Israel: emprendedores del asco y radicalización. **Lily Lynch**. La insurgencia antiliberal de Orbán y los «valores europeos». **Guillermo Fernández-Vázquez**. Una desdemonización que (por ahora) no alcanza. Marine Le Pen y la extrema derecha francesa. **Victor Albert-Blanco**. La religión de la extrema derecha española. **Francesca De Benedetti**. Las dos caras del gobierno de Giorgia Meloni. **Rodrigo Nunes**. Las declinaciones del «emprendedorismo» y las nuevas derechas.

ENSAYO: **Edgar Straehle**. 1848, una revolución europea. Sobre *Primavera revolucionaria*, de Christopher Clark.



310
MARZO-ABRIL 2024

**Algo va mal:
nuevos desórdenes
mundiales**



311
MAYO-JUNIO 2024

**Ollas en ebullición:
comida, política
y cultura**

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago a <info@nuso.org> o <distribucion@nuso.org>.

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO
Cambio de época

EL TRIMESTRE ECONÓMICO



Vol. XCI (4) Octubre-diciembre de 2024 Núm. 364

ARTÍCULOS

Chris Tilly

- El trabajo informal en los Estados Unidos: informalización, inmigración y emprendimiento en el trabajo

Santiago Poy

- Informalidad y trabajadores pobres en Argentina (2003-2023)

Pedro Henrique Evangelista Duarte

- Relaciones laborales e informalidad en Brasil: un análisis del periodo posgolpe (2016-2023)

Carlos Salas, Luis Quintana y Alberto Villagra

- Microunidades, ejército industrial de reserva y producción mercantil simple

**Raymundo M. Campos-Vazquez, Camilo A. Cepeda-Francesc,
Alice Krozer y Aurora A. Ramírez-Álvarez**

- Determinantes del apoyo social a aumentar e introducir nuevos impuestos para grupos de altos ingresos en México

Bernardo Bátiz Lazo e Ignacio González Correa

- Del telégrafo a la *app*: la evolución y el estado actual de los prestadores de remesas desde los Estados Unidos hasta México, ca. 1980-2020

CLÁSICOS DE LA ECONOMÍA

W. Arthur Lewis

- Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra

NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Orlando Delgado Selley

- *El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017*, de Saúl Escobar Toledo

Jorge Ibarra Consejo

- Carlos Tello Macías

Esta publicación aparece en los meses de enero, abril, julio y octubre.
La suscripción en México cuesta \$500. Un ejemplar, \$60.

www.eltrimestreeconomico.com.mx



Contenido

Artículos

- 01** Desplazamiento climático en México y justicia ambiental crítica: hacia una nueva línea de investigación
Armelle Gouritin

- 02** Grupos de interés y cambios en la normativa hídrica chilena, 2014-2022
Octavio Avendaño · Valentina Barahona · Cecilia Osorio

- 03** Organismos operadores de agua y saneamiento: un análisis del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia
Héctor David Camacho González · Juana Amalia Salgado López · Mario Óscar Buenfil Rodríguez · Roberto Galván Benítez · Fidel Celis Rodríguez

- 04** Las respuestas de las comunidades indígenas frente a la explotación del litio en la Puna argentina
Deborah Pragier

- 05** La Amazonía desde fuera, entre jardín edénico e infierno verde. Una aproximación desde la semiótica a las construcciones discursivas de la identidad geocultural amazónica
Juan Manuel Montoro · Sebastián Moreno Barreneche

- 06** Una educación con justicia social: aulas comunitarias dialógicas en Chile
Donatila Ferrada · Miguel Del Pino · Blanca Astorga · Gianina Dávila · Cecilia Bastías

- 07** Oportunidades políticas y marcos de contienda en el conflicto Conacyt-Siintracatedras: La disputa por la defensa de derechos laborales en el sector de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación
Erick Galán Castro · Edgar Guerra

- 08** Dinámicas de desarrollo, violencia criminal y participación electoral: un análisis en Ciudad de México y Chiapas
José Carlos Hernández-Gutiérrez · Julia Duro

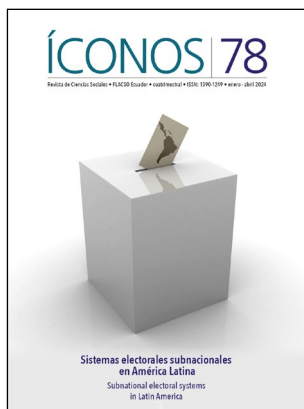
- 09** Racionalidades, clausuras y dilemas. Problemas éticos y metodológicos en el trabajo de campo con varones perpetradores de violencia hacia sus parejas mujeres
Martín Hernán Di Marco · María Florencia Santi

- 10** Alter-hegemonía por delegación y diplomacia infraestructural: configuraciones institucionales entre China y Colombia
César Niño · Jessika Hernández · Cristian Yepes-Lugo

Reseña

- 11** Corazonar las justicias: Los saberes de las mujeres tseltales sobre violencias, justicias y derechos humanos, de Laura E. Saavedra Hernández
Por Yessica Ivet Cienfuegos-Martínez





Íconos 78
enero-abril
2024

Sistemas electorales subnacionales en América Latina

DOSSIER DE INVESTIGACIÓN

Presentación del dossier

Sistemas electorales subnacionales en América Latina

Tomás Dosek, Antonio Cardarello y Flavia Freidenberg

01. No tan distintos: reformas y tensiones multinivel en la selección de candidaturas subnacionales en Argentina y Brasil

Jayane dos Santos Maia y Jimena Pesquero-Bordón

02. Pueblo chico, alcalde grande. Abstencionismo en las elecciones municipales de Uruguay, 2010-2020

Daniel Buquet, Antonio Cardarello y Nicolás Schmidt

03. Paridad y alternancia en las elecciones subnacionales: desafíos ante la participación política de las mujeres en Perú

Juan Manuel Ponte

04. Voto inmigrante en la provincia de Buenos Aires: la política subnacional de empadronamiento bajo la lupa

Ana Paula Penchaszadeh y Julieta Nicolao

05. De la reforma electoral plurinacional a la democracia intercultural en Bolivia: el caso del pueblo mosetén

Augusto Díaz-Villanueva

TEMAS

06. ¿Hacia una “nueva” cuestión campesina en Argentina?

Julia L. Colla y Sebastián Valverde

07. Neoliberalismo autoritario, élites económicas y reforma educativa en México, 2013

Jesús Bojórquez-Luque

08. Estado, turismo y covid-19 en Argentina: implicaciones de las políticas durante la pandemia

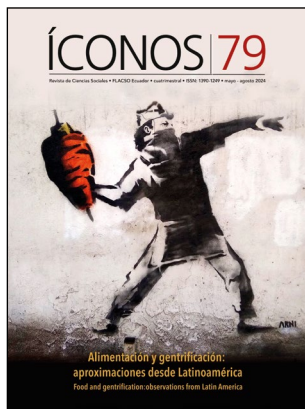
Erica Schenkel

09. Feminismos antiespecistas en Ecuador y Colombia: prácticas queer y veganismos decoloniales

Juan José Ponce-León

10. El excedente de fuerza de trabajo en Argentina: un análisis desde la economía feminista

Virginia Noemí Alonso y Corina Rodríguez-Enríquez



Íconos 79
mayo-agosto
2024

Alimentación y gentrificación: aproximaciones desde Latinoamérica

DOSSIER DE INVESTIGACIÓN

Presentación del dossier

Alimentación y gentrificación en América Latina

Adrián Hernández-Cordero y José Antonio Vázquez-Medina

01. Gourmetización y gentrificación: paisajes alimentarios desde la ciudad hasta el campo

María Mercedes Di Virgilio, María Agustina Frisch, Sara González, Sebastián Grenoville, Candela Hernández, Beatriz Nussbaumer y José Manuel Vega-Barbero

02. “Comiéndose” el barrio: gastronomía y cambio urbano en Santa Cruz, Lima

Denise Claux

03. Desafiando fronteras: gastronomía *gourmet* en barrios populares de Buenos Aires

Mercedes González-Bracco

04. Mercados de producción agroecológica y artesanal: sustentabilidad y gentrificación en la Ciudad de México

Ayari G. Pasquier-Merino y Simone Buratti

05. Entre la informalidad y la inseguridad: nuevas dinámicas alimentarias y comerciales en el mercado San Roque de Quito

Mariuxi Paola Rojas-Galindo, Mauricio Javier Unda-Padilla y Andrea Pacheco

TEMAS

06. Desajuste educativo y ajuste económico: ¿cómo respondió el mercado de trabajo mexicano ante la pandemia?

Ana Ruth Escoto-Castillo y Emma Liliana Navarrete-López

07. “Nadie dice nada”. Percepción de estudiantes sobre el acoso sexual universitario en Ecuador

Ana D. Verdú-Delgado y Paz Guarderas-Albuja

08. Acordemos que estamos en desacuerdo.

Estrategias partidarias en las elecciones primarias argentinas

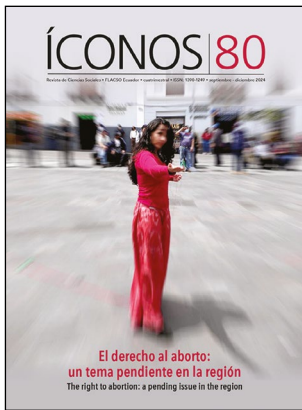
Ignacio Santoro

09. Acciones climáticas frente a la sequía severa: el caso de comunidades rurales costeras del Chile central

Pedro Reyes-García y David Jofré

10. Racialización económica del trabajo en la frontera dominico-haitiana: el caso de CODEVI

Edwin Oscar Mendoza-Vargas y Claudio Garibay-Orozco



Íconos 80
septiembre-diciembre
2024

El derecho al aborto: un tema pendiente en la región

DOSSIER DE INVESTIGACIÓN

Presentación del dossier

El derecho al aborto: un tema pendiente en la región

María Rosa Cevallos-Castells, Soledad Varea-Viteri y Sonia Ariza-Navarrete

01. Disputas por la gobernanza de la autonomía reproductiva en América Latina y el Caribe

Martina Ferretto

02. “Yo también soy feminista”. Neoconservadurismo de género desde el activismo antiaborto en Chile

María Angélica Cruz, Félix Aguirre-Díaz y Paula Eguren-Álvarez

03. “Poner el cuerpo”: primeras experiencias de abortos ambulatorios con misoprostol en Argentina

Natacha Mateo

04. Líderesas indígenas y acceso al aborto en Ecuador: una mirada desde el ciberfeminismo y la ética del cuidado

María Rosa Cevallos-Castells y Soledad Varea-Viteri

05. Aborto por violación en redes sociales de Brasil: entre narrativas exitosas y dicotomías morales

Mariana Prandini Assis y Nara Menezes Santos

TEMAS

06. La reproducción del estigma territorial. Dinámicas socioespaciales de una colonia popular en México

Miguel Ángel Monteverde-Ávalos

07. Violencia sexual como violencia política en las dictaduras de Argentina y Chile

Nadia Poblete-Hernández

08. Familia, género y violencia económica: incumplimiento de las pensiones de alimentos en Chile

Martina Yopo-Díaz y Javiera Fuentes-Landaeta

09. Nuevos residentes, nuevos paladares: transformaciones espaciales y comerciales en Ciudad de México

Raul Anthony Olmedo-Neri

10. Organización del trabajo y protección social en cooperativas argentinas

Maricel Massera

DOSSIER

Presentación del dossier

Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina
Ana Miranda y Rafael Merino

Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo
en Argentina, Brasil, Colombia y México
Nelson Florez-Vaquiroy Lia Alejandra Hincapié-Aldana

Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas
en sectores populares de Argentina
Débora Gerbaudo-Suárez

Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile:
experiencias en la educación técnica secundaria
Leandro Sepúlveda-Valenzuela y María José Valdebenito-Infante

Tecnicatura Universitaria en Agroecología:
una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina
Susana Shoaié-Baker

Cambio en la política pública para jóvenes
y acceso al empleo en Colombia
Jorge Enrique Martínez-Carvajal

TEMAS

Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina:
entre el derecho y la clandestinidad institucional
Romina Accossatto y Lucas Marucci

Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral
y violencia institucional en Ecuador
Carla M. Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella

Movimiento antiminero y oportunidades políticas
en el sur del Ecuador
Nelson Cajamarca

Masculinidades en transformación. Significados de los relatos
de universitarios del sur de Chile
Loreto Arias-Lagos y Juan Carlos Peña-Axt

Outsider-insider: una experiencia identitaria
de los feminismos latinoamericanos
Sandra Villanueva-Gallardo



FLACSO
ECUADOR



9 771390 124003